

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

Las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales : la convención de Viena de 14 de marzo de 1975 sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Pedro Burgos Ródenas

DIRECTOR:

Manuel, dir Díez de Velasco Vallejo

Madrid, 2015

Rd. 54.468

TE
1835

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

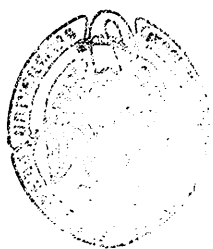
LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. LA CONVENCION DE VIENA DE 14 DE MARZO DE 1975 SOBRE LA REPRESENTACION DE LOS ESTADOS EN SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE CARACTER UNIVERSAL.

Tesis doctoral presentada por

Pedro Burgos Ródenas.

Director: Dr. Don Manuel Díez de Velasco y Vallejo.

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.



BIBLIOTECA
DE DERECHO

Madrid, abril de 1978.

INDICE

	<u>Págs.</u>
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO PRIMERO. LAS FUENTES JURIDICAS.....	14
I. El régimen jurídico actual.....	15
1. Los tratados : consideraciones generales.....	17
A) Los tratados multilaterales.....	20
a) Los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales.....	21
b) Las tres Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades.....	35
B) Los Acuerdos de sede.....	41
2. El Derecho interno de las Organizaciones internacionales....	46
3. La costumbre.....	48
4. Las normas de Derecho interno.....	58
5. La jurisprudencia.....	60
II. La Codificación del Derecho diplomático. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975.....	61
1. Contenido y Estructura de la Convención.....	63
2. Terminología.....	64
3. Ambito de aplicación de la Convención.....	67
A) Organizaciones a las que se aplica la Convención.....	67
B) Estados a los que se aplica la Convención.....	71
C) Sedes a las que se aplica la Convención.....	72

4. Relación de la Convención con las Reglas pertinentes de - las Organizaciones internacionales.....	73
5. Relaciones de la Convención con otros acuerdos internacio nales.....	74
A) Relaciones de la Convención con los acuerdos existentes.....	75
B) Relaciones de la Convención con los acuerdos futuros.....	79
6. El proceso de ratificación de la Convención.....	79
A) La ratificación de la Convención por parte de los Estados....	80
B) La ratificación de la Convención por parte de las Organizacio nes internacionales.....	88
7. El procedimiento de solución de controversias.....	91
CAPITULO SEGUNDO : EL CONCEPTO DE RELACIONES-	
DIPLOMATICAS.....	98
I. Las relaciones diplomáticas entre Estados.....	98
1. Los presupuestos de las relaciones diplomáticas.....	99
A) La personalidad internacional.....	100
B) El reconocimiento de Estado y de gobierno.....	104
C) La necesidad de un acuerdo previo.....	116
2. El estatuto jurídico de la relación diplomática.....	119
A) Fundamentos del estatuto jurídico de la relación diplomática....	119
B) La relación diplomática como relación jurídica bilateral.....	124
C) Derechos y deberes mutuos del Estado acreditante y del Estado receptor.....	125

	<u>Págs.</u>
II. Las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones- internacionales.....	126
1. Los presupuestos de las relaciones diplomáticas.....	130
A) La personalidad internacional.....	131
a) La personalidad internacional de los Estados.....	131
b) La personalidad internacional de las Organizaciones interna- cionales.....	133
B) El reconocimiento.....	159
a) El reconocimiento de las Organizaciones internacionales por parte de los Estados.....	160
b) El reconocimiento de los Estados por parte de las Organi- zaciones internacionales.....	165
C) La necesidad de un acuerdo previo.....	176
a) El consentimiento de la Organización internacional.....	177
b) El consentimiento del Estado huésped.....	181
2. El estatuto jurídico de la relación diplomática.....	186
A) Los fundamentos jurídicos de la relación diplomática.....	186
B) La relación diplomática como relación jurídica entre tres suje- tos.....	191
C) Derechos y deberes mutuos del Estado acreditante, del Esta- do huésped y de la Organización internacional.....	192
III. Las relaciones diplomáticas entre las Organizaciones interna- cionales y otros sujetos de Derecho internacional distintos de- los Estados.....	196

	<u>Págs.</u>
1. Las relaciones entre Organizaciones internacionales.....	196
2. Las relaciones entre las Organizaciones internacionales y las Comunidades europeas.....	199
3. Las relaciones entre las Organizaciones internacionales y los Movimientos de Liberación Nacional.....	201
IV. La representación de las Organizaciones internacionales ante los Estados.....	205
CAPITULO TERCERO: LAS MISIONES PERMANENTES -	
Y LAS MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACION...	209
I. La creación de una misión.....	210
II. El nombramiento del personal de la misión.....	215
1. El nombramiento del jefe de misión.....	215
A) Los límites al nombramiento del jefe de misión.....	216
B) Las credenciales del jefe de misión.....	218
C) Los poderes del jefe de misión para concluir tratados.....	221
D) La acreditación múltiple pasiva del jefe de misión.....	224
E) La acreditación múltiple activa del jefe de misión.....	229
2. El nombramiento del personal diplomático.....	231
A) La posibilidad del Estado huésped de oponerse a los nombramientos.....	231
B) Los límites del nombramiento.....	257
3. El nombramiento del personal administrativo y técnico, - del personal de servicio y del personal al servicio priva <u>d</u> do.....	265

	<u>Págs.</u>
4. La familia de los miembros de la misión.....	267
III. El fin de las actividades del personal de la misión.....	268
1. Causas dependientes del Estado que envía.....	269
2. Causas que dependen del Estado huésped.....	269
3. Causas que dependen de la Organización internacional....	280
IV. Las funciones de la misión.....	283
1. Las funciones de las misiones permanentes.....	284
2. Las funciones de las misiones permanentes de observación.	286
V. La transformación, suspensión y extinción de las misiones per	
manentes.....	288
1. La transformación de la misión.....	288
2. La suspensión de la misión.....	289
3. La extinción de la misión.....	290
CAPITULO CUARTO: EL ESTATUTO PRIVILEGIADO DE-	
LAS MISIONES PERMANENTES.....	298
I. La inviolabilidad de la misión permanente.....	300
1. La inmunidad de coerción de la misión permanente.....	301
A) La inmunidad de coerción de los locales.....	302
B) La inmunidad de coerción de los bienes muebles al servicio -	
de la misión.....	319
C) La inmunidad de coerción de las comunicaciones.....	321
2. El deber de protección del Estado huésped.....	331
A) El aspecto material del deber de protección.....	331
B) El aspecto jurídico del deber de protección.....	336

II. La inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución de-	
la misión permanente.....	341
1. La inmunidad de jurisdicción.....	341
2. La inmunidad de ejecución.....	348
III. La inmunidad fiscal y la franquicia arancelaria de la misión -	
permanente.....	349
1. La inmunidad fiscal.....	350
2. La franquicia arancelaria.....	352
IV. El derecho de la misión permanente a enarbolar la bandera y	
el escudo del Estado acreditante.....	353
CAPITULO QUINTO : EL ESTATUTO PRIVILEGIADO DEL-	
PERSONAL DE LAS MISIONES PERMANENTES.....	356
I. El estatuto privilegiado del personal diplomático.....	356
1. La inviolabilidad del personal diplomático.....	358
A) La inmunidad de coerción del personal diplomático.....	358
a) La inmunidad de coerción de la persona.....	359
b) La inmunidad de coerción de la residencia.....	362
c) La inmunidad de coerción de los documentos, la correspon	
dencia y los bienes.....	364
B) El deber de protección del Estado huésped.....	367
a) El aspecto material del deber de protección.....	367
b) El aspecto jurídico del deber de protección.....	370
2. La inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución del	
personal diplomático.....	372

	<u>Págs.</u>
A) La inmunidad de jurisdicción.....	372
B) La inmunidad de ejecución.....	381
3. La inmunidad fiscal y la franquicia arancelaria del personal diplomático.....	383
A) La inmunidad fiscal.....	384
B) La franquicia arancelaria.....	389
4. Otros privilegios del personal diplomático.....	392
A) Las facilidades de entrada y salida en el Estado huésped.....	392
B) Las facilidades de residencia.....	395
C) La exención de prestaciones personales.....	396
D) La exención de la aplicación de la legislación sobre seguridad- social.....	398
E) La exención de la aplicación de la legislación relativa a la ad- quisición de la nacionalidad.....	400
F) La libertad de circulación.....	404
G) Las inmunidades y privilegios durante el tránsito por el territo- rio de un tercer Estado.....	408
II. El estatuto privilegiado del resto del personal de la misión.....	409
1. El estatuto del personal administrativo y técnico.....	410
2. El estatuto del personal de servicio.....	413
3. El estatuto del personal al servicio privado.....	415
III. El estatuto de los miembros de la misión que sean nacionales - del Estado huésped o tengan en él su residencia permanente...	417

IV. El estatuto de los miembros de la familia del personal de - la misión.....	420
V. Los medios para evitar las consecuencias excesivas del estatu to diplomático.....	422
1. La reclamación por vía diplomática.....	424
2. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción.....	425
3. El recurso ante los tribunales del Estado que envía.....	429
4. El recurso ante los tribunales del Estado huésped.....	431
5. La expulsión del país huésped.....	432
CAPITULO SEXTO : CONCLUSIONES.....	434
I. Conclusiones generales.....	434
1. La necesidad de la Convención de Viena de 14 de marzo - de 1975.....	435
2. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 como codi ficación y como desarrollo progresivo del Derecho internacio nal.....	439
II. Conclusiones específicas.....	442
ANEXO : Convención de Viena sobre la representación de los Es tados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales de - carácter universal.....	448
INDICE DE ABREVIATURAS.....	490
BIBLIOGRAFIA.....	492

INTRODUCCION

El origen de las Organizaciones internacionales actuales hay que buscarlo en una serie de elementos aportados por diversas instituciones que fueron creandose durante el siglo XIX.

Las conferencias diplomáticas anteriores al siglo XIX tenían normalmente por objeto solucionar los problemas planteados por algún conflicto bélico y concluir en tratado de paz que pusiera fin a dicho conflicto. Sin embargo el Congreso de Viena de 1815 aportó un elemento nuevo. Como dice EL-ERIAN, Relator especial de la CDI para el estudio de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales:

"Las conferencias anteriores respondían al propósito de establecer la paz, pero la conferencia de Viena aspiraba además a mantener esa paz dentro del nuevo sistema por ella creado... Este sistema sólo funcionó durante el periodo comprendido entre 1815 y 1822, en el curso del cual se celebraron cuatro conferencias, las cuales revelaron entre las políticas de las grandes potencias diferencias suficientes para que tal sistema no pudiese funcionar. Pero el método de recurrir a la diplomacia, no sólo en los raros casos de elaboración de tratados de paz, sino cada vez que el orden europeo se encontraba en peligro, pasó a ser un rasgo fundamental del siglo transcurrido entre 1815 y 1914" (1).

(1) Naciones Unidas. Comisión de Derecho Internacional, "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales. Primer informe del Sr. ABDULLAH EL-ERIAN, Relator Especial", Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. II, - p. 188. (en adelante: "Primer informe, EL-ERIAN", ACDI...)

La idea derivada del Congreso de Viena, de convocar conferencias internacionales para tratar de mantener la paz, se reforzó con la convocatoria de las dos conferencias de la Haya. Convocada por iniciativa personal del Emperador Nicolas II de Rusia la primera Conferencia de La Haya, celebrada en 1899, dió lugar a la conclusión de tres convenciones de excepcional importancia: la Convención sobre el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, la Convención sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y una tercera que adaptaba a la guerra marítima la Convención de Ginebra de 1864 para la protección de heridos de guerra. A estas tres Convenciones hay que añadir otras tres Declaraciones sobre el Derecho de la guerra.

La conclusión de las tres Convenciones anteriores fué un evento de importancia incalculable para la formación del Derecho internacional. Como dice LAUTERPACHT en la séptima edición del libro de OPPENHEIM:

"La primera Conferencia de La Haya marcó época en la historia del Derecho internacional" (2).

La segunda Conferencia de La Haya se celebró en 1907. El resultado de esta Conferencia fué la modificación de las tres Convenciones concluidas en la primera, así como la conclusión de otra serie de convenciones sobre la guerra, la neutralidad, el uso de la fuerza y otra serie de temas del Derecho internacional (3).

En las Conferencias de La Haya concurren varios elementos que podemos considerar como antecedentes de las Organizaciones internacionales actuales. El primer elemento sería la universalidad. A este -
.../...

(2) OPPENHEIM-LAUTERPACHT, International Law, A treatise, - Londres, Longmans, Green and Co., séptima edición, 1953, dos volúmenes, Vol I, p. 56.

(3) Oppenheim-Lauterpacht, ibid, Vol. I, ps. 56 y 57 y Vol. II, ps. - 227 a 230.

.../...

respecto El-Erian ha afirmado:

"mientras que en la primera Conferencia tan solo asistieron 26-Estados, en su mayoría europeos, en la segunda participaron 44 Es-tados, entre ellos la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas, además de algunas potencias asiáticas" (4).

El segundo elemento que aportan las Conferencias de La Haya es el de la idea de la solución pacífica de los conflictos. En el siste-ma del Congreso de Viena la idea fundamental era la del manteni-miento del statu quo. Por el contrario, la idea fundamental de las -Conferencias de la Haya era la de solucionar pacíficamente las con-troversias entre Estados. Por último, las Conferencias de La Haya-tratan de establecer una periodicidad en la reunión de las Conferen-cias, periodicidad que fué truncada por el estallido de la primera gue-rra mundial.

Si la idea de la reunión periódica de las conferencias diplomáti-cas puede ser considerada como antecedente de las Organizaciones -internacionales permanentes, el elemento institucional inherente a éstas, que en las Conferencias de La Haya no pasa del estado embrionario,- podemos encontrarlo en las Comisiones fluviales, las Uniones adminis-trativas y las Oficinas internacionales creadas durante el siglo XIX y -los primeros años del siglo actual.

La Comisión Central del Rhin, creada en 1815; la Comisión Euro-pea del Danubio, creada en 1874; la Unión de Pesos y Medidas, crea-da en 1875 y la Oficina Internacional de la Salud, creada en 1907, por-no citar más que unos cuantos ejemplos, aportan el elemento institucio-

.../...

(4) Primer informe, EL-ERIAN", ACDI, 1963, Vol. II, p. 189.

.../...

nal que falta en las Conferencias de La Haya.

Por otra parte a la idea de la solución pacífica de los conflictos, idea central de las Conferencias de La Haya, se unieron otros intentos pacificadores. Como dice NUSSBAUM:

"Aparte de los esfuerzos de las Conferencias de La Haya, que dominaron los trabajos en pro de la paz durante este período, se emprendió un intento casi desesperado, por lograr la pacificación, poco antes de estallar la primera guerra mundial, por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Bryan, mediante la celebración de Convenios bilaterales a favor de "la paz general", que, a veces, se designan impropriamente como Tratados de Arbitraje Bryan. En los Convenios de este tipo, los Estados Unidos y otro Estado contratante convenían y se obligaban a entregar cualquiera discusión posterior que se entablara entre ellos a una Comisión Internacional Permanente para que investigara el caso, y a no acudir a las armas hasta que la Comisión hubiera emitido su informe dentro de un plazo definido y concretado; en otras palabras, tales acuerdos estaban destinados a crear un período de tiempo de calma y desapasionamiento. Algunos de estos Tratados se firmaron antes de estallar la guerra, y unos veinte fueron ratificados después, principalmente con los países ibero-americanos, pero también con Inglaterra, Italia, Rusia, y otros países no americanos. El plan fracasó por completo, pero fué sintomático de aquella época" (5).

El origen de la primera guerra mundial acabó con el movimiento pacificador de las Conferencias de La Haya y los Tratados de arbitraje. La explosión de la guerra acabó también con ciertas concepciones-

.../...

(5) NUSSBAUM, Historia del Derecho Internacional, traducción de F.J. Osset con adiciones de L. García Arias. Madrid, Editorial-Revista de Derecho Privado, s/f, p. 269.

.../...

optimistas que afirmaban que la civilización había llegado a un estado tal de desarrollo que impedía que se produjeran conflictos generalizados. Pronto surgió la idea de que la Sociedad internacional era muy-imperfecta y que era necesaria una gran transformación para que sucesos como la guerra que comenzó en 1914 no pudieran producirse.

Las ideas de transformación de la Sociedad internacional cristalizaron con la creación de la Sociedad de Naciones. Los Tratados de arbitraje podían ser un medio adecuado para solucionar las controversias "menores" que no afectaban al honor de los Estados. Sin embargo para la solución de las controversias "verdaderamente importantes" era necesaria la intervención de órganos políticos como eran los de la Sociedad de Naciones. El Pacto de la Sociedad de Naciones aceptaba implícitamente la distinción entre controversias "mayores" y "menores" cuando se refiere a un "desacuerdo capaz de ocasionar una ruptura" (artículos 12 y 15) y a "cualquier controversia susceptible de ser resuelta por arbitraje" (artículo 13).

El Pacto no llegaba a prohibir la utilización de la fuerza por parte de los Estados, aunque obligaba a los Miembros de la Sociedad de Naciones a aplazar el comienzo de las hostilidades hasta que hubieran transcurrido tres meses desde que el Consejo de la Sociedad emitiera el informe sobre la controversia que se le hubiere sometido. La sumisión de las controversias al Consejo de la Sociedad de Naciones era obligatoria para los Estados miembros de la Sociedad, salvo que se hubiere acordado otro medio de arreglo judicial o arbitral (artículo 15).

La prohibición de la utilización de la fuerza, que el Pacto no preveía, no se produjo hasta la conclusión del Pacto Briand-Kellog. Con la conclusión de éste último el 27 de marzo de 1928 y del Acta general de arbitraje de 26 de septiembre de 1928 se inaugura en la Sociedad de Naciones un sistema de seguridad colectiva que no daría excesivos resultados.

Durante la segunda guerra mundial se impuso aún con más vigor que durante la primera la idea de que la guerra se había producido por la falta de mecanismo de seguridad adecuado en la Sociedad internacional. Del mismo modo que los catorce puntos del Presidente Wilson, las declaraciones de las Potencias aliadas formulaban, aún antes de acabarse las hostilidades, una serie de principios que debían regir el sistema internacional para que el fenómeno de la guerra no volviera a producirse.

La Declaración conjunta de asistencia mutua y de resistencia a la agresión de 12 de junio de 1941, la Carta del Atlántico de 14 de agosto de 1941, la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942 y los Acuerdos de Yalta de 11 de febrero de 1945 contenían un programa completo de paz, elaborado por las Potencias aliadas, para los años posteriores al final de la segunda guerra mundial.

El programa de paz de las Potencias aliadas cristalizó, una vez finalizada la guerra, en la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945. Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas se pretendió inaugurar un sistema de seguridad colectiva más eficaz que el instituido por el Pacto Briand-Kellog. Al mismo tiempo se creó todo un sistema de cooperación internacional en los campos económico, social y técnico mediante la creación de la figura de los Organismos especializados que incluían tanto a Organizaciones internacionales de nueva creación como a Organizaciones internacionales ya existentes y que se incorporaban de este modo al sistema de las Naciones Unidas.

Con la creación de la ONU y de los Organismos especializados, la Sociedad internacional sufrió una transformación radical que tuvo enormes consecuencias políticas y jurídicas. Precisamente una de estas consecuencias jurídicas fué la creación de las nuevas Organizaciones para mantener la paz mundial y de medios permanentes de comu-

nicación entre éstas y los Estados. El estudio de éstos últimos y en especial las misiones permanentes es precisamente el objeto de esta tesis doctoral. Su estudio se justifica por tanto como el de uno de los medios jurídicos utilizados en la Sociedad internacional para facilitar y asegurar la comunicación entre los sujetos del "nuevo orden internacional".

La idea de crear misiones permanentes semejantes a las misiones diplomáticas, acreditadas ante una Organización internacional surgió entre los redactores del Pacto de la Sociedad de Naciones. Los proyectos norteamericanos preveían que la participación de los Estados en los órganos de la Sociedad de Naciones se realizará a través de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado huésped de la Sociedad de Naciones (6). Por el contrario los proyectos ingleses preveían ya la posibilidad de establecer misiones cuyo único fin fuera la participación en los trabajos de la Sociedad de Naciones. Así el artículo 1 del "proyecto Cecil-Miller" de 27 de enero de 1919 decía:

"Las Altas partes contratantes pueden nombrar representantes en la sede de la Sociedad....." (7).

La versión final del Pacto no recoge la propuesta inglesa. El Pacto se limita a afirmar, en su artículo 7 párrafo 4º, que:

"Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán en el ejercicio de sus funciones de los privilegios e inmunidades diplomáticas".

(6) Ver el artículo 6 del "Draft of Colonel House" (16-7-1918) en MILLER, The drafting of the Covenant, Nueva York, 1928, - J.P. PUTMAN SONS, dos volúmenes, Vol. II, p. 7.

(7) "Cecil-Miller Draft" (1-1-1919) en Miller, op. cit., Vol II, p.131.

El hecho de que la sede de la Sociedad de Naciones no estuviera situada en la capital de un Estado, lugar donde están situadas las misiones diplomáticas, forzó la creación de misiones situadas en Ginebra - cuyo único fin era el de asegurar la participación del Estado que enviaba la misión en los trabajos de la Sociedad de Naciones. La comunicación entre los Estados miembros y la Sociedad de Naciones a través - de las misiones diplomáticas acreditadas en Berna o a través de los - consulados en Ginebra presentaba grandes dificultades de orden jurídico y de orden práctico por lo que una gran parte de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones optaron por crear misiones en Ginebra(8).

Las misiones acreditadas ante la Sociedad de Naciones no gozaban en un principio de ningún estatuto oficial. La redacción del párrafo cuarto del artículo 7 del Pacto parecía dar a entender que dicho artículo era aplicable únicamente a los delegados enviados por los Estados a título temporal a las reuniones de los órganos de la Sociedad de Naciones. Los Acuerdos de sede, llamados "modus vivendi" concluidos entre el Consejo federal suizo y la Sociedad de Naciones no preveían tampoco el estatuto de los representantes permanentes. El estatuto de éstos se derivaba únicamente de una decisión unilateral del Consejo federal suizo que les concedía el beneficio del párrafo cuarto del artículo 7 del Pacto y que admitía la interpretación extensiva de este artículo según la cual los representantes permanentes gozaban de los privilegios e inmunidades diplomáticas (9).

La Carta de las Naciones Unidas, de la misma forma que el Pacto de la Sociedad de Naciones, no preveía la existencia de las misiones .../...

(8) En total se crearon en Ginebra 53 misiones permanentes acreditadas ante la Sociedad de Naciones. Ver Ghéballi, "Les délégations permanentes auprès de la Société des Nations" en Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Les missions permanentes auprès des Organisations internationales. Bruselas, Bruylant, 1971, 1973, 1975- y 1976, cuatro volúmenes, Vol.1, ps. 53-56.

(9) Ibid., Vol. 1, p. 66.

.../...

acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas. El artículo 105, párrafo segundo de la Carta se limita a conceder a los representantes de los Miembros de la Organización "los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización".

A pesar de que la Carta no prevé la existencia de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas, la necesidad de comunicación constante entre los Estados miembros y la Organización va a provocar la creación de misiones, que serán denominadas misiones permanentes, acreditadas ante las Naciones Unidas. Con la creación de los Organismos especializados de las Naciones Unidas se producirá un fenómeno semejante proliferando las misiones permanentes en las distintas sedes de los Organismos especializados.

El estatuto de las misiones permanentes no va a depender como en los tiempos de la Sociedad de Naciones de un acto unilateral del Estado huésped correspondiente. Los Acuerdos de sede entre las Naciones Unidas y los Organismos especializados y sus respectivos Estados huéspedes regulan ya el estatuto de los representantes permanentes de los Estados miembros de la Organización internacional correspondiente. En lo que se refiere a las relaciones entre las misiones permanentes y las Organizaciones internacionales, el estatuto de las misiones se va ir fijando por la práctica misma y por algunas resoluciones de las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre las misiones permanentes.

La creación de las Naciones Unidas impulsa decisivamente el proceso de codificación y desarrollo progresivo del Derecho internacional iniciado por las Conferencias de La Haya y por un Comité creado a este efecto en la Sociedad de Naciones. El artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas incluye entre las funciones de la Asamblea General la de:

"impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación".

Para cumplir la función de codificar y desarrollar el Derecho internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó mediante su resolución 174(II) la Comisión de Derecho internacional. El artículo primero del Estatuto de la Comisión de Derecho internacional señala que :

"1. La Comisión de Derecho internacional tendrá por objeto impulsar el desarrollo progresivo del Derecho internacional y su codificación".

Desde el comienzo de las actividades de la CDI se consideró que el Derecho diplomático era una de las partes del Derecho internacional cuyas normas se prestaban mejor a la codificación. Los trabajos de la CDI en este campo dieron lugar a la conclusión de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961 y la Convención sobre las misiones especiales abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre de 1969.

Una vez codificadas las normas que rigen la diplomacia entre los Estados, la Comisión de Derecho internacional preparó un proyecto de normas sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales de caracter universal. Dicho proyecto sirvió de base de trabajo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales. En dicha Conferencia se concluyó la Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales de caracter universal.

La Convención de Viena de 1975 regula el estatuto jurídico de las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales de caracter universal. También regula dicha Convención el estatuto de las misiones enviadas a las sesiones de los órganos de dichas Organizaciones y a las conferencias por ellas convocadas. El estudio de la parte de dicha Convención que regula el estatuto de las misiones permanentes será el objeto de esta tesis doctoral.

Quizá hubiera parecido más lógico integrar en un mismo trabajo todas las instituciones reguladas por la Convención de Viena de 1975. Sin embargo hemos creído que era más oportuno circunscribir nuestro trabajo al estudio de la diplomacia permanente ante las Organizaciones internacionales dada la dificultad de unificar el tratamiento científico de la diplomacia permanente y la diplomacia no permanente.

El intento de sistematización de la diplomacia permanente de los Estados ante las Organizaciones internacionales nos ha llevado al estudio de dicha clase de diplomacia entre los Estados al objeto de poder hacer las comparaciones necesarias entre la diplomacia permanente entre Estados y la diplomacia permanente entre Estados y Organizaciones internacionales. De este estudio comparativo intentaremos deducir las conclusiones necesarias para poder determinar en qué medida las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales pueden ser caracterizadas como "relaciones diplomáticas" en el sentido técnico de esta expresión.

El plan que hemos seguido para la realización de este trabajo ha sido comenzar por el estudio de las fuentes jurídicas de la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales, estudio que realizaremos en el capítulo I. Este capítulo está dividido en dos secciones, una de ellas dedicada al estudio de las fuentes actualmente aplicables y la otra al estudio del proceso codificador.

En el capítulo segundo intentaremos realizar una sistematización de las relaciones diplomáticas entre Estados para, con el mismo esquema, sistematizar después las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales.

Invirtiendo el orden de los capítulos 1 y 2 se habría conseguido, quizá, una exposición más brillante. Sin embargo no ha parecido conveniente ya que colocar la sistematización de las relaciones entre Estados y Organizaciones antes del estudio de las fuentes hubiera hecho nuestro trabajo difícilmente inteligible.

Después de haber estudiado las relaciones diplomáticas entre Estados y entre Estados y Organizaciones internacionales pasaremos a estudiar, en el capítulo tercero, el estatuto de las misiones permanentes que comprenderá el establecimiento, las funciones y la extinción de las misiones permanentes así como el nombramiento y el cese del personal que sirve dichas misiones.

En el capítulo cuarto estudiaremos el estatuto privilegiado de las misiones permanentes y en el capítulo quinto el del personal de las misiones. Tanto en estos capítulos como en el capítulo tercero estudiaremos el estatuto de la misión y el de su personal con referencia al estatuto de las misiones diplomáticas y al del personal de éstas.

Dado que el objeto de este trabajo es el estudio de un proceso codificador realizado por la CDI nos parece necesario realizar al final de este trabajo un estudio de conjunto para poder determinar en qué medida la Convención de Viena de 1975 supone una codificación del Derecho diplomático existente y en qué medida supone un desarrollo progresivo de éste. Una vez terminado este capítulo solo nos quedará el establecer las conclusiones que se deriven del presente trabajo.

Por último debemos precisar que en el presente trabajo nos limitaremos al estudio de las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales de carácter universal. Esta limitación del objeto de nuestro trabajo deriva del hecho de que la CDI ha circunscrito su obra codificadora a las misiones acreditadas ante las Organizaciones de carácter universal entendiendo por Organizaciones de

caracter universal no solamente las Organizaciones internacionales - del sistema de las Naciones Unidas sino también " cualquier Organización similar cuya composición y atribuciones son de alcance mundial ".
..

CAPITULO PRIMERO. LAS FUENTES JURIDICAS.

No podemos comenzar el estudio de las relaciones diplomáticas entre las Organizaciones internacionales y los Estados sin efectuar - antes un recorrido general sobre las bases jurídicas en que se apoyan dichas relaciones. La dificultad de dicho recorrido se encuentra en el hecho de la multiplicidad y la diversidad de las fuentes del Derecho de la diplomacia conexas a las Organizaciones internacionales. Dichas multiplicidad y diversidad nos han llevado al establecimiento de un plan muy sistemático, aunque ello lleve consigo un sinnúmero de - divisiones y subdivisiones enojosas al lector.

Hemos hecho caso omiso de la división tradicional entre fuentes del Derecho internacional y fuentes del Derecho interno en la medida en que el Derecho interno no ha tenido excesiva importancia en nuestra materia. Ello no quiere decir que no vayamos a tratarlo debidamente en nuestro estudio, pues su consideración puede ser necesaria para el establecimiento de conclusiones generales.

Una última consideración sobre las fuentes nos lleva a la distinción entre el régimen jurídico actual y el nuevo régimen instituido por la Convención de Viena de 14 de marzo de 1975. Hubieramos querido utilizar la división entre lege lata y lege ferenda pues tenemos muy en cuenta que el olvido de dicha distinción ha sido origen de muchas confusiones en Derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que la Convención de 1975 haya sido firmada por muchos Estados, pero - sin que se hayan producido las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, hace que sea difícil de introducir la Convención en una de las dos categorías arriba mencionadas. Por tanto, la división clásica entre lege lata y lege ferenda será sustituida por la división entre - regimen jurídico actual y proceso codificador, entendido éste en su sentido amplio como veremos en el Capítulo sexto.

I. El Régimen Jurídico Actual.

La importancia del estudio del régimen jurídico actual es doble. Por una parte, es el antecedente inmediato de la Convención objeto de nuestro estudio. Por otra, la vigencia del régimen actual puede prolongarse en la medida en que las ratificaciones de la Convención no se produzcan. Una vez que la Convención entre en vigor, el régimen jurídico instituido por ésta y el régimen jurídico actual podrán estar vigentes de manera alternativa.

Realmente es difícil establecer generalizaciones sobre el proceso de ratificación de los tratados multilaterales. El estudio somero de la cuestión no da lugar a la constatación de actitudes absolutamente coherentes por parte de los Estados. Quizá un estudio en profundidad pudiera ser más rico en conclusiones generales sobre la actitud de los Estados a este respecto.

La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961 entró en vigor tan sólo tres años después de la fecha de su firma. A 18 de abril de 1971, es decir diez años después de su conclusión, noventa y ocho Estados la habían ratificado y el número de ratificaciones y adhesiones a 31 de diciembre de 1976 se eleva a ciento diecisiete (1). Una aceptación tan general de la Convención de Viena de 1961 podría hacer suponer que la Convención sobre las misiones especiales de 1969 sería ratificada con la misma rapidez. Ambas Convenciones fueron preparadas por la Comisión de Derecho Internacional y responden a unas mismas bases y a unos mismos fundamentos. Sin embargo, la Convención sobre las Misiones especiales no

.../...

(1) Nations Unies, Traités Multilatéraux pour lesquels le Secrétaire - Général exerce les fonctions de dépositaire. Etat, au 31 décembre 1976, des signatures, ratifications, adhésions, etc. p. 51 y ss (En adelante: Nations Unies, Traités Multilatéraux).

.../...

ha recibido hasta el 31 de diciembre de 1976 más que trece firmas - y diez ratificaciones y adhesiones (2), sin que exista una razón que explique esa falta de aceptación.

Quizá las Convenciones para las cuales el proceso de ratificación puede ser más parecido al de la Convención de Viena de 1975- sean las Convenciones Generales sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y los Organismos especializados y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Organismo Internacional de la - Energía Atómica (3).

Podría decirse de forma general que las citadas Convenciones han sido aceptadas de forma bastante extendida. En la actualidad - ciento doce Estados se han adherido a la Convención de las Naciones Unidas (4). Respecto de las Convenciones relativas a los Organismos especializados y al OIEA la adhesión es menor pero mayoritaria. De todas formas, como veremos más adelante, la falta - de ratificación de dichas Convenciones por parte de los Estados - huéspedes es bastante frecuente, lo que nos lleva a pensar que aun que la Convención de 1975 fuera ratificada rápidamente el régimen - jurídico actual seguirá vigente en parte. Además la Convención de - 1975, como tendremos ocasión de ver, no acaba con la vigencia del régimen jurídico actual. Así podemos constatar que diversas razones hacen inexcusable el estudio del régimen jurídico actual de las Misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales.

(2) ibid., p. 72.

(3) Para la Convención General sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas ver: RTNU, Vol. 1, p. 17 y ss; para la Convención General sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados ver: RTNU, Vol. 33, p. 329 y ss; para el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del OIEA ver: RTNU, Vol. 374, p. 173 y ss.

(4) Nations Unies, Traités Multilatéraux, p. 35.

1. Los Tratados: consideraciones generales.

Los tratados tienen en la actualidad una importancia excepcional dentro del Derecho internacional que es aún más acentuada respecto a la parte del Derecho internacional que regula las Organizaciones internacionales. En efecto el nacimiento, las funciones, la estructura y el estatuto jurídico de las Organizaciones internacionales vienen regulados en su mayor parte mediante tratados. Sin embargo, la importancia de los tratados no excluye la existencia de otras fuentes. MICHAELS dice a este respecto que:

" la base legal de los privilegios e inmunidades internacionales se encuentra fundamentalmente en los tratados, los cuales pueden ser suplidos por otras fuentes como el precedente judicial o la práctica consuetudinaria. Las leyes internas y demás actos unilaterales también pueden tener alguna influencia en el desarrollo general de la materia" - (5).

Podemos dividir los tratados relativos a las Organizaciones internacionales en multilaterales y bilaterales. Los primeros son concluidos por la generalidad de los Estados miembros de una Organización internacional (6). Los segundos, entre los que destacan los llamados comúnmente Acuerdos de sede, son concluidos entre la Organización internacional y su Estado huésped.

La división entre tratados bilaterales y multilaterales no es meramente una cuestión académica. La idoneidad de una u otra clase de tratados ha sido discutida por la doctrina. Para JENKS:

.../...

(5) MICHAELS, International Privileges and Immunities. La Haya, - Martinus Nijhoff, 1971, p. 30.

(6) La cuestión de la posible participación de las Organizaciones internacionales en los tratados multilaterales será tratada más adelante.

.../...

" la independencia necesaria a las Organizaciones internacionales no puede depender de acuerdos contractuales que estén sujetos a la denuncia de las partes (7). KUNZ en la misma dirección afirma que :

" un acuerdo entre la Organización y el Estado huésped no es un método adecuado. La naturaleza legal de tal acuerdo es dudosa; no es un tratado internacional; ambas partes pueden denunciarlo en cualquier momento en todo o en parte. Por ser un acuerdo con un miembro solamente, no puede proporcionar un sólido fundamento legal para la independencia permanente de la Organización internacional. El único método adecuado es conceder las inmunidades en el tratado internacional básico, creando así obligaciones irrenunciables e idénticas para todos los Estados miembros" (8).

La argumentación de JENKS y KUNZ carece de solidez. Debe notarse en primer lugar que los dos trabajos citados están escritos poco después del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, y es posible que en ese momento la doctrina no enfocase debidamente estos problemas que de alguna manera eran nuevos. Hoy en día nadie dudaría que un Acuerdo de sede es un verdadero tratado. Los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional para la codificación del Derecho de los tratados concluidos por las Organizaciones internacionales prueban que existe consenso a este respecto. Los Acuerdos de sede no son una clase especial de tratados que puedan ser denunciados libremente por el Estado huésped como dicen JENKS y KUNZ. La mayoría de ellos contienen una cláusula de denuncia que sólo produce -

.../...

(7) JENKS, The Headquarters of International Institutions, Londres, - The Royal Institute of International Affairs, 1945, p. 46.

(8) KUNZ, " Privileges and Immunities of International Organizations", AJIL, Vol. XLI, 1947, p. 848.

de la vigencia conjunta de ambos sistemas. La coexistencia de ambos sistemas apenas ha planteado problemas dado que en los Acuerdos de sede suelen existir cláusulas para la solución de conflictos que examinaremos debidamente en la segunda parte de este capítulo.

Antes de finalizar este apartado debemos hacer notar que la base jurídica bilateral o multilateral no prejuzga el carácter bilateral o triangular de las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales. Los Acuerdos de sede prevén derechos y deberes no sólo para las partes que los concluyen sino también para los Estados miembros, e incluso prevén la relación de éstos con el Estado huésped. La cuestión será de todas formas examinada con detalle en el capítulo segundo.

A) Los Tratados multilaterales.

En este contexto debemos hacer la distinción entre dos clases distintas de tratados multilaterales. Por una parte, tenemos los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales; por otro, las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades ya citadas.

En el estudio de los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales dejaremos de lado la cuestión de la naturaleza de dichos tratados. Dicha cuestión no es, en modo alguno, relevante para el objeto de nuestro estudio. Por el contrario analizaremos a fondo el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas. Este artículo sirvió de modelo para los artículos respectivos del resto de los instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas (9).

(9) Utilizamos la expresión " Organización internacional del sistema de las Naciones Unidas" porque con esta expresión general puede ser englobado el OIEA, lo que no sucedería si utilizáramos la expresión Organismos especializados de Naciones Unidas.

Respecto del artículo 105 de la Carta, estudiaremos la historia de su redacción, su equivalencia con los artículos respectivos de los instrumentos constitutivos de las otras Organizaciones y haremos un análisis de su contenido para terminar con el estudio del valor jurídico actual que puede tener el citado artículo. Una vez tratados los instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales, pasaremos al estudio de las Convenciones generales sobre los privilegios e inmunidades de las NU, los Organismos especializados y el OIEA para cerrar este apartado sobre tratados multilaterales.

a) Los Tratados Constitutivos de las Organizaciones internacionales.

Las proposiciones de DUMBARTON OAKS no contenían ninguna referencia al problema de las inmunidades y privilegios de que habían de gozar la Organización de Naciones Unidas y sus funcionarios así como los representantes de los Estados miembros. La razón de ello fué explicada en la Conferencia de San Francisco por el delegado de Egipto ABDEL HAMID PASHA BADAWI:

" la Conferencia de DUMBARTON OAKS se dedicó sobre todo a la solución de las cuestiones políticas, sin abordar el estudio de los problemas jurídicos que tenían un carácter menos inmediato". (10)

Sea como fuere, las propuestas modificativas de las de DUMBARTON OAKS presentadas por el Gobierno mejicano, contenían un párrafo relativo a las inmunidades de los delegados de los estados miembros que era bastante semejante al párrafo 4 del artículo 7 del Pacto de la Sociedad de Naciones (11). Las propuestas del Gobierno belga iban en el mismo sentido que las mejicanas, es decir tratando de conceder a -

.../...

(10) Documents of the United Nations Conference on International Organization, Vol 13, p. 28 (En adelante: UNCIO).

(11) UNCIO, Vol. 3, p. 96.

.../...

los representantes de los Estados miembros el estatuto diplomático - limitado a los actos realizados " en el ejercicio de sus funciones" (12). La propuesta del Gobierno belga fue generalmente aceptada. El Reino Unido formuló una propuesta que desarrollaba la belga aunque modificándola, pues no preveía ya el otorgamiento de los privilegios e - inmunidades diplomáticos en el ejercicio de las funciones oficiales, sino que se basaba en un criterio más funcional concediendo los privilegios y las inmunidades " necesarios al ejercicio de las funciones" (13). La propuesta inglesa después de algunos retoques se convirtió en el artículo 105 de la Carta que dice así:

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

Este artículo podemos encontrarlo, con alguna modificación de poca importancia en casi todos los instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas (14).-

(12) UNCIO, Vol. 4, ps. 483-4.

(13) UNCIO, Vol. 13, p. 772.

(14) Ver art. 40 OIT; art. 12 UNESCO; art. 60 OACI; arts. 67- y 68 OMS; art. 15 OIEA; arts. 8 y 16 FAO y arts. 50 y 51 - OCMI.

Esto nos lleva a que el análisis del artículo 105 podemos hacerlo - extensivo al resto de las Organizaciones del sistema de Naciones - Unidas.

Como puede verse fácilmente, el artículo 105 evita calificar a las inmunidades y privilegios de diplomáticos. La razón de ello fué - que el Comité que redactó este artículo consideró que el problema - de las inmunidades y privilegios internacionales era un problema dis - tinto al de las inmunidades y privilegios diplomáticos. En el informe - del Relator del Comité citado, se dice:

" para determinar la naturaleza de los privilegios e inmunida - des, el Comité ha estimado que debía evitar el termino diplomático - y ha preferido sustituirlo por un criterio más apropiado basado, pa - ra la Organización, en la necesidad de poder realizar sus fines y, para los representantes de sus miembros como para sus agentes, - en la necesidad de poder ejercer sus funciones de manera indepen - diente" (15).

El Comité renunció también expresamente a una enumeración - de privilegios e inmunidades. En el informe citado el Relator dice:

" tal enumeración ha sido estimada como superflua. Los térmi - nos privilegios e inmunidades designan de una forma general todo - aquello que pueda resultar necesario para la realización de los fines de la Organización, el funcionamiento libre de sus órganos, el ejer - cicio independiente de las funciones y poderes de sus funcionarios: - exenciones fiscales; inmunidad de jurisdicción; facilidades en materia de comunicaciones; inviolabilidad de los locales, terrenos y archivos; etc.....

(15) UNCIO, Vol. 13, p. 714.

Por otra parte, hubiera sido imposible hacer una enumeración válida para todos los Estados miembros, teniendo en cuenta la situación especial en que podrán encontrarse los Estados sobre cuyo territorio funcione la Organización o sus órganos. Pero es un principio cierto que ningún Estado miembro podrá entorpecer de ninguna manera el funcionamiento de la Organización o tomar medidas que tengan por efecto incrementar sus cargas ya sean financieras o de otra clase (16).

El propósito de los redactores de la Carta es claro. El artículo 105 prescinde del modelo diplomático tomando partido por el funcional pero ello no quiere decir que las inmunidades y privilegios "funcionales" sean más restringidas, sino que atienden a necesidades distintas. De la misma opinión es KUNZ cuando dice :

" la impresión de que la nueva formula (se refiere a la elección del principio funcional) significa una restricción no puede ser mantenida" (17).

El hecho de la renuncia del "modelo diplomático" supone la aceptación de uno nuevo basado en el principio funcional. Los redactores de la Carta, como hemos visto más arriba, renunciaron a una enumeración exhaustiva por considerarla contraproducente. Para llegar a concretar las inmunidades y privilegios funcionales, previeron dos posibles sistemas contenidos en el párrafo tercero del artículo 105 de la Carta. Este tercer párrafo dice así:

" 3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto".

(16) UNCIO, Vol. 13, p. 715.

(17) KUNZ, op. cit., p. 840.

Como vemos se prevén dos posibles sistemas: el de la recomendación y el de la convención. Según la redacción del artículo - podría entenderse que la Asamblea General podrá determinar "unilateralmente" los pormenores de la aplicación del artículo 105 mediante una recomendación. Sin embargo, los Estados miembros no lo han entendido así e incluso los redactores de la Carta no pensaban en dicha posibilidad. En efecto, en el informe del Relator del comité que redactó este artículo se dice:

" el párrafo segundo (que posteriormente se convertiría en - el tercero) confiere a la Asamblea General la facultad de formular, si lo juzga útil, recomendaciones para la determinación de los detalles de la aplicación de las disposiciones del párrafo primero - (que se convertiría en primero y segundo). Tales recomendaciones podrán dirigirse solamente a ciertos Miembros en razón, por ejemplo, de las obligaciones más pesadas que resulten del hecho - de que la Organización o sus órganos estén establecidos sobre su territorio. Estas recomendaciones podrán, si el método se considerará oportuno, revestir la forma de una convención (acuerdo, *modus vivendi*, etc) propuesta por la Asamblea General a un Estado miembro para ser concluida entre ambos" (18).

Una vez conocido el contenido y las posibilidades ofrecidas por el artículo 105 se plantea la cuestión del valor jurídico de dicho artículo. La cuestión ha sido debatida, pues la redacción de este artículo invita a la duda ya que dos interpretaciones distintas parecen - posibles: de un lado, puede considerarse que el artículo 105 es obligatorio por sí mismo; por el contrario, puede interpretarse que el artículo 105 no hace más que enunciar un principio que debe ser concretado mediante las convenciones, bilaterales o multilaterales, previstas en el párrafo tercero de dicho artículo.

(18) UNCIO, Vol. 13, p. 714.

Para los redactores de la Carta, la aplicabilidad directa del artículo 105 no admitía dudas y así lo expresaron:

" la Comisión Preparatoria pone en conocimiento de la Asamblea General que ha encargado al Secretario ejecutivo llamar la atención de los Miembros de la Organización sobre el hecho de que según los términos del artículo 105 de la Carta, la obligación para todos los Miembros de conceder a la Organización, a sus funcionarios y a los representantes de sus Miembros, los privilegios e inmunidades que les son necesarios para el cumplimiento de sus funciones, surte efecto desde la fecha de entrada en vigor de la Carta y, por consiguiente, incluso antes de que la Asamblea General haya formulado las recomendaciones previstas en el párrafo tres de dicho artículo "(19).

La interpretación de los redactores de la Carta ha sido seguida por la Secretaría de las Naciones Unidas. Ciertamente no ha habido muchas ocasiones de alegar la vigencia del artículo 105, pues las actividades de las Naciones Unidas suelen estar bien cubiertas por la Convención general de privilegios e inmunidades de Naciones Unidas o por el Acuerdo de sede correspondiente. Sin embargo, cuando ello no ha sido así, la Secretaría ha invocado el artículo 105 como fuente productora de efectos jurídicos inmediatos.

En 1972 el Consejero jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas se expresa en los siguientes términos, en un dictamen dado con ocasión de la intención manifestada por el gobierno de un Estado miembro de establecer un impuesto sobre la renta respecto de los sueldos que reciben de las Naciones Unidas los empleados contratados localmente en un Centro de Información situado en el territorio de dicho Estado miembro:

(19) Nations Unies, Rapport de la Commission Preparatoire des Nations Unies, p. 60.

" El Gobierno, de conformidad con el artículo 105 de la Carta, tiene la obligación de conceder a los funcionarios de las Naciones Unidas, sean contratados internacional o localmente, los privilegios e inmunidades necesarios para que desempeñen con independencia sus funciones. Por consiguiente, toda reserva acerca de una inmunidad o privilegio funcional generalmente reconocido, debe hacerse en forma explícita, aunque sólo sea para permitir a la Organización que decida si la reserva es o no compatible con lo dispuesto en el artículo 105 de la Carta" (20).

La aplicabilidad directa del artículo 105 también ha sido invocada con éxito por las Naciones Unidas en diversas ocasiones para exigir la inmunidad fiscal de la Organización, tanto de los impuestos directos como de los impuestos indirectos, en ciertos casos en que dicha inmunidad no estaba prevista en la Convención general o en el acuerdo de sede correspondiente. Sin embargo, hay que notar que el referido problema de la inmunidad fiscal no ha podido ser resuelto de forma satisfactoria en lo que se refiere a la situación de las Naciones Unidas en los EEUU hasta que éstos han ratificado la Convención general (21).

La interpretación dada por la Secretaría de las Naciones Unidas al artículo 105 respecto de los privilegios e inmunidades de la Organización y de sus funcionarios son relevantes para nuestro estudio, en la medida en que sirven para determinar el valor jurídico de dicho artículo. Sin embargo, hemos de dar más atención a las opiniones expresadas por dicha Secretaría respecto de la relación entre el artículo 105 y el estatuto de las misiones y de los representantes permanentes - .../...

(20) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972, p. 194.

(21) Sobre la inmunidad fiscal y la aplicación del artículo 105 de la Carta, ver: Naciones Unidas, "Práctica seguida por las Naciones Unidas, los Organismos especializados y el OIEA en relación con su condición jurídica, privilegios e inmunidades: estudio preparado por la Secretaría", Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, Vol. II, ps. 249-260 y 263-269. (En adelante: "Práctica seguida por las NU sobre privilegios e inmunidades", ACDI ...).

.../...

objeto de nuestro estudio.

En 1963, en un dictamen sobre posibles medidas por parte de los EE.UU. para congelar las cuentas bancarias poseídas por un gobierno para las necesidades de su misión, el Asesor jurídico del Secretario General de las NU dice:

" A nuestro juicio el gobierno invitante no debe intervenir en las actividades legítimas de las misiones permanentes de las Naciones Unidas impidiendo que esas misiones o el personal de las mismas utilice fondos depositados en el país. Desde el punto de vista jurídico, esta cuestión está comprendida en las disposiciones del párrafo 2 del artículo 105 de la Carta, en el que se prevé que los representantes de los Estados Miembros gozarán en el territorio de cada Estado miembro de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización. Cabe señalar también que en la resolución 257 (III), la Asamblea General reconoció que la presencia de tales misiones permanentes contribuye a la realización de los propósitos y principios de las Naciones Unidas" - (22).

El mismo Asesor jurídico del Secretario General ha dicho también en el seno de la Sexta Comisión:

" el propio artículo 105 concede los privilegios e inmunidades necesarios . Esta es una obligación que incumbe a todos los Miembros de las Naciones Unidas, independientemente de que se hayan adherido

.../...

(22) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963, ps. 179 y 180.

.../...

o no a la Convención cuyo objeto fué determinar los pormenores de aplicación" (23).

La Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas ha mantenido una postura que se aleja de la Secretaría de la misma Organización. En 1969 el Relator Especial, El-ERIAN, decía a propósito de la obligatoriedad para los terceros Estados de permitir el paso a los agentes diplomáticos acreditados ante una Organización internacional/

" quizá el derecho internacional positivo, en virtud de los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, proporcione fundamento para imponer a los terceros Estados la obligación de permitir el tránsito" (24).

Esta forma de ver el problema ha sido admitida por la Comisión, pues en el comentario al artículo 78 del proyecto de artículos sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales se dice:

" se prestó atención especial a la situación en que se encontraría un miembro de una misión o una delegación que, por ser nacional de un país sin litoral, se viera obligado a pasar a través del territorio de tercer Estado. Esta situación tan excepcional constituye tal vez un argumento para afirmar la existencia de una obligación del tercer Estado, al menos cuando es miembro de la Organización interesada, en virtud-

.../...

(23) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, Vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos, Vol.III, Tema-98 del programa, Documento A/C. 6/385, p. 6.

(24) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, Vol.I, 997ª sesión, p. 38, párr. 15.

.../...

de los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas y de disposiciones análogas de instrumentos constitutivos de Organismos-especializados y de Organizaciones regionales" (25).

De la cita de la CDI no podemos extraer una conclusión segura sobre la validez del artículo 105, aunque es preciso reconocer - que los terminos dubitativos de la CDI son lejanos de las afirmaciones rotundas de la Secretaría de las Naciones Unidas.

¿Cuál ha sido la postura mantenida por la jurisprudencia de los Estados miembros?

Debe notarse que solamente es relevante para nuestro propósito la jurisprudencia sobre cuestiones no previstas en las Convenciones generales o en los Acuerdos de sede correspondientes, que se firman cuando no se ha producido la ratificación de la Convención general. Esta forma de abordar el problema coincide con la práctica de la Secretaría de Naciones Unidas que solamente invoca el artículo 105 cuando no tiene otro título mejor que repose sobre un Acuerdo de sede o sobre la Convención general. La precisión-anterior implica que el número de casos que podamos examinar sea reducido.

La jurisprudencia de los EE.UU. ha considerado la Carta de las Naciones Unidas como un tratado self executing y ha reconocido que la Carta forma parte de the supreme law of land según se expresa en los casos "United States v. Melekh et Al" y "Curran v. - City of New York et Al" (26). En otros casos aunque el tribunal no hable expresamente de la calidad de self executing de la Carta, ésta

.../...

(25) Naciones Unidas. Comisión de Derecho Internacional, "Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 23 periodo de sesiones", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 356.

(26) "United States v. Melekh et Al" en ILR, Vol. 32, 1966, p. 320. "Curran v. City of New York et Al" en ADPIL, Vol. 14, 1947, p. 155.

.../...

puede darse por supuesta en la medida en que el tribunal se dedica a la interpretación del artículo 105 para decidir si una inmunidad concreta puede considerarse o no incluida en el (27).

El hecho de que la jurisprudencia de los EE.UU. haya considerado la Carta como un tratado self-executing no implica que haya mantenido una concepción amplia en la materia. Los tribunales de dicho país han considerado que el modelo funcional supone una disminución respecto del modelo diplomático. Para demostrar que los redactores de la Carta no consideraron el modelo diplomático sino el funcional, el Tribunal Supremo de "Queens County" no duda en citar el trabajo de KUNZ antes reseñado, sin hacer notar que en el mismo trabajo dicho autor afirma que la elección del modelo funcional no significa que existiera un deseo de limitar el modelo diplomático, sino de afrontar un problema diferente con criterios diferentes(28). Además la jurisprudencia norteamericana ha interpretado el artículo 105 de forma poco ortodoxa. Así por ejemplo respecto a las actividades de espionaje de un funcionario de las Naciones Unidas, nacional de la Unión Soviética, el Tribunal se plantea si el espionaje es o no es una actividad necesaria para un funcionario (29). Naturalmente que las actividades de espionaje no son necesarias para el libre ejercicio de las funciones de un funcionario, pero lo que el Tribunal debía investigar es si de acuerdo con el artículo 105 dicho funcionario gozaba o no de la inmunidad de jurisdicción. El espionaje no es considerado como función lícita para los agentes diplomáticos y la historia muestra multitud de casos en que la inmunidad de jurisdicción ha sido respetada en asuntos de este tipo.

(27) Ver a este respecto "Westcher County on complaint of Donnelly v. Ranollo" en ADPIL, Vol. 13, 1946, p. 168.

(28) Ver "United States v. Melekh et Al" en ILR, Vol. 32, 1966, p. 321 y KUNZ, op. cit., p. 840.

(29) Ver "United States v. Melekh et Al", ibid., p. 309.

Fuera de los EE.UU. apenas encontramos jurisprudencia sobre el artículo 105. Recordemos que las Organizaciones internacionales, antes de comenzar a ejercer una actividad cualquiera sobre el territorio de un Estado miembro, suelen concertar un Acuerdo de sede caso de que el Estado en cuestión no haya ratificado la Convención general correspondiente o si ésta es considerada insuficiente. Esta práctica de las Secretarías de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas hace que sea difícil encontrar decisiones judiciales de interés para nuestro estudio, pues la mayoría de ellas se refieren a cuestiones laborales entre la Organización y sus funcionarios que suelen ser resueltas mediante la apelación a la incompetencia ratione materiae que estudiaremos en relación con la inmunidad de jurisdicción (30).

La consideración de la jurisprudencia y de los comentarios de la CDI hace que haya que observar con reserva las opiniones del Asesor jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas. En efecto, si se admite que el artículo 105 de la Carta pueden deducirse derechos y obligaciones directamente exigibles, es necesario concretar cuáles son esos derechos y esas obligaciones. KELSEN afirmó a este respecto que :

" Aunque la Convención no exista, los Estados miembros están obligados por el artículo 105 a conceder a la Organización, a sus funcionarios y a los representantes de sus Miembros los privilegios e inmunidades necesarios. Pero si la Convención no existe no hay posibilidad de imponer a un Miembro una interpretación determinada de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 105" (31).

(30) Sobre este tema NGUYEN QUOC DINH, "Les privilèges et immunités des Organismes internationaux d'après les jurisprudences nationales depuis 1945", AFDI, Vol. III, 1957, ps. 262-304.

(31) KELSEN, The Law of United Nations. Londres, The London Institute of World affairs, 1951, p. 342.

El Asesor jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas no piensa que el obstáculo señalado por KELSEN sea infranqueable. En los debates de la Sexta Comisión el Asesor jurídico ha afirmado:

" cabe afirmar que los privilegios e inmunidades definidos en la Convención constituyen los privilegios e inmunidades mínimos que a juicio de la Asamblea General hay que conceder a todos los Estados-Miembros en aplicación del artículo 105 de la Carta" (32).

La interpretación del Asesor jurídico no es compatible con los trabajos preparatorios de la Carta. Cuando se trataba, en la Conferencia de San Francisco, de la redacción del párrafo tercero del artículo 105 el Reino Unido hizo una propuesta que rezaba así:

" los privilegios e inmunidades previstos anteriormente, serán fijados de forma detallada por la Asamblea General y entrarán en vigor respecto a cada uno de los Miembros desde que las propuestas de la Asamblea hayan sido ratificadas por dos tercios de los Miembros de la Organización" (33).

Una fórmula semejante fué aceptada para las modificaciones de la Carta por el artículo 108. Sin embargo en el párrafo 3 del artículo 105 se previó una fórmula distinta que dejaba a los Estados la libertad de adherirse o no adherirse a la Convención, por lo que difícilmente puede afirmarse que ésta no es más que un desarrollo del artículo 105.

El mismo Asesor jurídico ha observado que:

(32) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, Vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos, Vol. III, tema - 98 del programa, Documento A/C.6/385, p. 6.

(33) UNCIO, Vol. 13, p. 772.

" debe señalarse que hasta ahora 96 Estados se han adherido a la Convención. Además, en la mayoría de los restantes Estados - Miembros, así como en muchos Estados no miembros, las disposiciones de la Convención x se han aplicado por acuerdo especial. Aunque tal vez sea cierto que en 1946 muchas de las disposiciones de la Convención tenían el carácter de lege ferenda, en los casi 22 años transcurridos desde la adopción de la Convención por la Asamblea - sus disposiciones se han convertido en norma y patrón por el que se rigen las relaciones entre los Estados y las Naciones Unidas en el mundo entero. No creo que sea pecar de audacia decir que las normas y los principios de la Convención gozan de aceptación tan amplia que se han convertido en parte del Derecho internacional general que rige las relaciones de los Estados y de las Naciones Unidas" (34).

Como vemos el Asesor jurídico reconoce que "en 1946 muchas de las disposiciones de la Convención tenían el carácter de lege ferenda", lo cual supone la negación de la aplicabilidad directa del artículo - 105. La afirmación de que "las normas y los principios de la Convención gozan de aceptación tan amplia que se han convertido en parte del Derecho internacional general" no es sino el reconocimiento de la existencia de una norma consuetudinaria que gran parte de la doctrina admite y que analizaremos más adelante. Que las normas contenidas en un tratado multilateral se conviertan en Derecho internacional consuetudinario es un proceso bien conocido en el Derecho internacional que se recoge en el artículo 38 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.

(34) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, Vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos, Vol. III, tema - 98 del programa, Documento A/C. 6/385, p. 6.

La negación del carácter de directamente aplicable del artículo 105 no nos parece que esté en contradicción con la resolución de la Asamblea General de las NU 2328 (XXII) de 18 de diciembre de 1967 en la que la Asamblea General exhorta a los Estados miembros de la ONU "a que adopten todas las medidas necesarias para hacer que se apliquen los privilegios e inmunidades acordados, de conformidad con el artículo 105 de la Carta, a la Organización, a los representantes de los Estados miembros y a los funcionarios de las Naciones Unidas".

El hecho de que la Asamblea General apele al artículo 105 de la Carta, no creemos que debe tomarse al pie de la letra. Dicho artículo guarda un valor de principio que puede logicamente ser resaltado por la Asamblea General. El artículo 105 de la Carta está en la base del Derecho diplomático de las Organizaciones internacionales, por lo que consideramos lógico que la Asamblea General lo recuerde.

b) Las tres Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades.

Seguendo las prescripciones del artículo 105 de la Carta, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 13 de febrero de 1946, mediante la resolución 22 A (I), la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas (35). Un año después, concretamente el 21 de noviembre de 1947, la misma Asamblea General aprobó la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados (36). Por último, el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del OIEA fué aprobado por la Junta de Gobernadores de dicho Organismos el 1 de julio de 1959 (37).

(35) España se adhirió a la Convención el 31-7-74, BOE del 17-10-74.

(36) España se adhirió a la Convención el 26-9-74, BOE del 25-11-74.

(37) España no se ha adherido a este Acuerdo hasta el momento de redactar esta tesis.

La primera cuestión que se nos plantea respecto de las tres - Convenciones es la de su naturaleza jurídica. Ciertamente en la medida en que la Convención de las Naciones Unidas estaba prevista en la Carta podría considerarse que la Convención no es más que un - desarrollo de la misma. Ello parece deducirse de las opiniones del - Asesor jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas citadas más arriba. La no aceptación de la propuesta inglesa reseñada (38) implica que la Convención general de las Naciones Unidas es un tratado multilateral que desarrolla la Carta, pero que se diferencia de ella. - La Convención fué meramente ofrecida a la adhesión de los Estados - miembros. Por ello es por lo que la sección 32 de la Convención dice:

" la Convención entrará en vigor con respecto a cada Miembro, en la fecha en que se haya depositado el instrumento de adhesión".

La distinción entre la Carta y la Convención plantea el tema de la relación entre dicha Convención y la Organización. El tema será - tratado en profundidad en la parte II de este capítulo con objeto de evitar repeticiones inútiles. Baste decir por el momento que tanto la Secretaría General de las Naciones Unidas (39) como la doctrina (40) - considera que por el hecho de la aprobación de la Convención por la -
.../...

(38) infra., p. 33

(39) CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Mémoires, plaidoiries et documents, 1949, p. 71; Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, Vigésimo segundo - periodo de sesiones, Anexos, Vo. III, tema 98 del programa, Documento A/C. 6/385, p. 6.

(40) CAHIER, "Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers", RCADI, Vol. 143, 1974 (III), p. 702 (En adelante CAHIER, "Le problème des effets des traités...", RCADI...); KASME, La capacité de l' Organisation des Nations Unies de conclure des traités, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960, p. 171; KUNZ, op. cit., p. 848.

Asamblea General la ONU es parte de dicha Convención.

La distinción entre la Convención general de los Organismos especializados y los instrumentos constitutivos de los mismos es aún más neta. La Convención general de los Organismos especializados fué aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entidad independiente desde el punto de vista jurídico. La razón de que ello fuera así fué que en el momento de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas existía el consenso de que debían unificarse los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados y los de las Naciones Unidas. Para ello fué aprobada la resolución de la Asamblea General 22 D(I), que encargaba al Secretario General de las Naciones Unidas que realizara las negociaciones oportunas para conseguir dicha unificación. Fruto de dichas negociaciones fué la Convención de los Organismos especializados aprobada por la resolución de la Asamblea General 179 (II).

Los instrumentos constitutivos de los Organismos especializados preveían una convención general para cada Organismo que debía ser aprobada por el órgano plenario respectivo. Sin embargo el hecho de que fuera la Asamblea General de las Naciones Unidas la que aprobara la Convención no plantea problemas, pues en el preámbulo de dicha Convención se prevé la aceptación de la misma por cada Organismo especializado mediante un procedimiento que se desarrolla en la sección 37.

La tercera Convención general, el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del OIEA, fué aprobada por la Junta de Gobernadores de dicho Organismo. Según el artículo XV párrafo C de la constitución del OIEA es precisamente la Junta de Gobernadores el órgano competente para la aprobación de los acuerdos referentes a las inmunidades y privilegios de dicha Organización, por lo que puede considerarse al-

OIEA como parte de dicho Acuerdo, lo que no es sino la aplicación mutatis mutandis de lo que hemos dicho respecto de las Naciones Unidas.

El artículo 105 de la Carta preveía la existencia de la Convención general para que ésta desarrollara los privilegios e inmunidades necesarios para las actividades de la Organización. Sin embargo la Convención de Naciones Unidas fué más allá de lo previsto, al reglamentar también la personalidad jurídica de la Organización en el territorio de cada uno de los Estados miembros que estaba prevista en el artículo 104 de la Carta. Esta forma de proceder fué seguida por las otras dos Convenciones. Una vez hecho este inciso diremos que la única parte de las Convenciones que vamos a estudiar es la que se refiere a los representantes de los Estados, única que es relevante al objeto de nuestro estudio.

El primer comentario que debemos hacer es que las Convenciones generales no prevén la existencia de las misiones permanentes. Tampoco se refieren a los representantes permanentes sino a:

" los representantes de los miembros en los órganos principales y susidiarios" (Naciones Unidas);

" los representantes de los miembros en las reuniones convocadas por un Organismo especializado" (Organismos especializados);

" los representantes de los Estados miembros en las reuniones convocadas por el Organismo" (OIEA).

Por otra parte, el estatuto que las Convenciones conceden a los representantes de los Estados no parece adecuado para la diplomacia permanente. El hecho de conceder la inviolabilidad personal, limitando al mismo tiempo la inmunidad de jurisdicción a los actos realizados -

" en el ejercicio de las funciones oficiales " da a entender que las Convenciones han previsto las misiones temporales pero no las permanentes. Igualmente se conceden las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias que a los representantes de los gobiernos en misión temporal.

La existencia de las misiones permanentes supone la inviolabilidad de los locales de la misión, que no está prevista. También supondría la extensión del estatuto del representante permanente a su familia próxima. Las Convenciones sólo hablan del cónyuge en lo que se refiere a la exención a las restricciones a la inmigración.

Otra razón que hace problemática la aplicación de las Convenciones generales a los representantes permanentes es el hecho de que los privilegios e inmunidades se concedan " mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión y a su regreso ". En 1961 un Organismo especializado pidió un dictamen al Asesor jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el significado de la frase " mientras ejerzan sus funciones y durante el viaje al lugar de la reunión y a su regreso ", cláusula limitativa de la Convención de los Organismos especializados similar a la que hemos reseñado más arriba que era la de la Convención de Naciones Unidas. El Asesor jurídico respondió que:

" En las Naciones Unidas, nunca hemos tropezado con una cuestión de esta índole, y la labor preparatoria de las dos Convenciones sobre privilegios e inmunidades no arroja ninguna luz sobre la cuestión... Ahora bien, creo sin vacilaciones que la intención de los autores de la Convención era la interpretación en sentido lato. Ello se desprende del hecho de que la expresión " mientras se encuentren desempeñando sus funciones " figura en el párrafo preliminar y condi

cionala todos y cada uno de los privilegios e inmunidades previstos" - (41).

La interpretación del Asesor jurídico parece la correcta. De todas formas, aunque se aplicase razonamiento a los representantes permanentes y se les hicieran aplicables las Convenciones no puede alcanzarse un estatuto jurídico suficiente para los mismos. Como hemos dicho anteriormente, las Convenciones no prevén la inviolabilidad de la misión, la inviolabilidad del representante es personal y es dudoso que se aplique a su domicilio, no existe estatuto para la familia del representante, etc.

La inadecuación de las Convenciones generales no ha sido la única razón de que el estatuto de las misiones permanentes se haya fijado gracias a los Acuerdos de sede que veremos en el próximo apartado. Una segunda razón es que los Estados huéspedes optaron en su inmensa mayoría por no ratificar las Convenciones aplicables a la Organización que tenían sobre su territorio (42). Ello junto al hecho de que algunas sedes fueron situadas sobre el territorio de Estados no miembros obligó a las Organizaciones internacionales a concertar Acuerdos de sede con los Estados huéspedes y es en ellos, como veremos en el próximo apartado, donde se previó el estatuto de los representantes permanentes.

(41) Naciones Unidas, "Practica seguida por las Naciones Unidas, los Organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con su condición jurídica, privilegios e inmunidades: estudio preparado por la Secretaría", ACDI, 1967, Vol. II, p. 181. (En adelante: "Practica seguida por las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI....).

(42) Los EE.UU. no ratificaron la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las NU hasta el 29-4-70 y no ha ratificado la de Organismos especializados como Francia, Italia y Canadá - que tampoco lo ha hecho.

Las Convenciones tienen el mérito, sin embargo, de ser aplicables a todas las sedes, principales o secundarias, de las Organizaciones si las ratificaciones necesarias existen. Además unifican el régimen jurídico de las diversas Organizaciones internacionales. Quizá por ello es por lo que se quiera volver al sistema del tratado multilateral para regular el régimen de las misiones permanentes.

Para terminar diremos que es necesario resaltar el hecho de que las Convenciones generales no contienen ninguna medida que admita la discriminación que es posible en el sistema de algunos Acuerdos de sede.

B) Los Acuerdos de sede (43).

Podríamos definir los Acuerdos de sede como los tratados bilaterales concluidos entre una Organización internacional y el Estado huésped de dicha Organización para regular su estatuto jurídico, el de sus funcionarios y el de los representantes de los Estados miembros sobre el territorio del Estado huésped.

Entre los Acuerdos de sede deben distinguirse, pues suelen tener un contenido muy diferente, los que se concluyen para la instalación de la sede principal de una Organización de los que se concluyen para la instalación de una sede de segundo rango, llámese oficina regional, oficina de asistencia técnica u otros órganos de actividad reducida.

La capacidad de concluir Acuerdos de sede no suele estar prevista en las constituciones de las Organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas. Dicha capacidad puede deducirse del art.105 de la Carta y está prevista expresamente en la constitución del OIEA.

(43) Sobre los Acuerdos de sede en general ver CAHIER, Etude des Accords de siège conclus entre les Organisations internationales et les Etats où elles resident, Milan, Giuffrè, 1959, dos volúmenes.

El resto de los instrumentos constitutivos prevé la convención general pero no el Acuerdo de sede. Sin embargo, la capacidad de una Organización internacional para concluir un acuerdo de sede nunca ha sido puesta en duda. Cuando el TIJ establece en 1949 la teoría de los poderes implícitos, en el dictamen sobre la "reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, las Organizaciones internacionales ya habían concluido diversos Acuerdos de sede sin que se pusiera en duda su capacidad para ello. Probablemente la razón esté en que la Sociedad de Naciones había concluido dos acuerdos de sede, en 1921 y 1926, que no estaban previstos en el Pacto.

Los Acuerdos de sede son, como hemos dicho anteriormente, acuerdos bilaterales. Sin embargo ello no prejuzga, como veremos en el capítulo segundo, la cualidad bilateral o triangular de la relación diplomática entre un Estado y una Organización internacional. Lo que nos importa ahora es que, siendo los Acuerdos de sede tratados bilaterales, tienen sin embargo efectos respecto a terceros, en este caso los Estados miembros.

En principio un tratado bilateral no puede tener efecto jurídico sobre un tercer sujeto que no participa en el tratado más que si éste lo admite expresa o tacitamente. Para solucionar este problema, respecto a los tratados concluidos por las Organizaciones internacionales, han sido ideadas la teoría de la representación y la del "falso tercero". Ambas tesis han sido rechazadas por CAHIER, la primera por inexacta y la segunda porque la noción de falso tercero es inútil(44). La solución la encuentra dicho tratadista en una especie de consentimiento previo. En este sentido afirma CAHIER que:

" cuando una Organización concluye un tratado con uno o varios
.../...

(44) CAHIER, "Le problème des effets des traités...", RCADI, - Vol. 143, 1974 (III), p.721.

.../...

Estados, es ella solamente la que es parte del tratado y no los Estados miembros; pero éstos en razón de su calidad de Estados miembros han aceptado de antemano que los tratados previstos o no previstos en la Carta constitutiva puedan tener efectos respecto a ellos" (45).

Cuál es el estatuto de las misiones permanente según los Acuerdos de sede? En este punto tenemos que distinguir los Acuerdos de sede principal de los Acuerdos de sede secundaria.

Los Acuerdos de sede principal no suelen prever, excepto en algunos casos (46), las misiones permanentes. El estatuto de éstas se deriva del estatuto de los representantes permanentes. Los representantes permanentes suelen ser asimilados a los agentes diplomáticos acreditados ante el Estado huésped. En algunos casos, sin embargo se enumeran expresamente las inmunidades y privilegios de los que gozan los representantes permanentes. Esta enumeración coincide con el contenido del estatuto diplomático. Solamente en un caso, en el Acuerdo entre la OACI y Canadá, el estatuto de los representantes permanentes no coincide con el estatuto diplomático sino con el estatuto de los representantes de los miembros previsto en las Convenciones generales.

El sistema de asimilación a los agentes diplomáticos fué criticado -- porque, al estar éste basado en normas consuetudinarias, era inconcreto y variaba según los países, lo que podía ser causa de inseguridad jurídica. Ello ya no puede afirmarse tras la conclusión de la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas que ha sido ratificada por la casi totalidad de los Estados.

(45) ibid. , p. 722.

(46) Como en el caso de los Acuerdos entre Austria y el OIEA y entre Canadá y la OACI. Ver dichos Acuerdos en RTNU, Vol. 339, p. 110 y Vol. 96, p. 156.

El estatuto de la familia del representante permanente sólo está previsto de forma expresa en contados casos. Ello no ha sido, sin embargo, causa de problemas. Si el estatuto del representante se asimila al del diplomático, éste incluye a la familia y, en los casos en que las inmunidades y los privilegios se enumeran expresamente, el estatuto del representante se ha extendido a la familia por analogía con el modelo diplomático.

Los Acuerdos de sede suelen prever un sistema de arbitraje para la solución de las controversias entre la Organización internacional y el Estado huésped. Ello supone que, si existe un contencioso entre el Estado huésped y el Estado que envía la misión, éste debe pedir asistencia a la Organización. Sin embargo, respecto a los procedimientos de expulsión, la intervención de la Organización internacional suele eliminarse, debiendo realizarse las consultas previas a la expulsión de un representante entre el Estado que lo envía y el Estado huésped. Debe subrayarse que la posibilidad de expulsión no está prevista en todos los Acuerdos de sede, y aún en los casos en que si está prevista, la normativa no es clara. Ello ha dado lugar en ocasiones a graves problemas jurídicos y de rechazo políticos que serán examinados en el capítulo tercero.

Algunos Acuerdos de sede, como los concluidos entre las NU y los EE.UU. y entre Italia y la FAO (47), prevén posibles restricciones al estatuto de los representantes de Estados miembros cuyo gobierno no sea reconocido por él del Estado huésped. Debemos poner de relieve que los dos casos reseñados son la excepción y no la regla. La discriminación está prohibida expresamente en algún caso, pero el hecho de que no esté prohibida expresamente nunca ha .../...

(47) Ver RTNU, Vol. II, p. II y Naciones Unidas, United Nations legislative series, Legislative texts and treaty provisions concerning the legal status, privileges and immunities of International Organizations, Volumen II, p. 187.

.../...

sido interpretado como que las medidas discriminatorias puedan ser consideradas legales.

En general puede decirse que los Acuerdos de sede principal equiparan las misiones permanentes de los Estados miembros a las misiones diplomáticas tradicionales. La única excepción es el caso reseñado de las misiones acreditadas ante la OACI, caso que no se justifica en modo alguno.

Los Acuerdos concluidos para regular el estatuto de las sedes secundarias apenas tienen interés para nuestro estudio. Con las excepciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra y de las Comisiones Económicas Regionales de Naciones Unidas, las sedes secundarias no reciben misiones permanentes. De todas formas muchos de estos Acuerdos prevén para los representantes de los Estados un estatuto similar al de las Convenciones generales. Este estatuto rige también cuando el Estado huésped ha ratificado la Convención general correspondiente. Existen, sin embargo algunos casos de acuerdos de este tipo que otorgan a los representantes de los Estados miembros el estatuto diplomático, lo que no implica que se establezcan misiones permanentes.

Qué juicio merece el sistema de Acuerdos de sede? El sistema en cuanto tal ha sido a menudo criticado. Aparte de las críticas reseñadas de JENHS y KUNZ (48) podemos citar las palabras del representante de Francia en los debates de la Sexta comisión:

" el desarrollo de las Organizaciones plantea un cierto número de problemas jurídicos que las convenciones bilaterales especiales, por las que se rigen la mayoría de ellas, no resuelven más que en parte" (49).

(48) infra., ps 17 y 18 .

(49) Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée Générale, - treizième session, Sixième Commission, Questions juridiques, - Comptes rendus analytiques des séances, 16 septembre-8 décembre 1958, 569^e séance, p. 99 (la traducción es propia).

Curiosa afirmación la anterior, teniendo en cuenta que procede del representante de un Estado que se ha negado hasta el momento a ratificar la Convención general aplicable a la UNESCO que tiene su sede sobre su territorio.

Por nuestra parte, creemos que las críticas dirigidas al sistema de Acuerdos de sede tienen muy poca base. La experiencia muestra que los Acuerdos de sede han permitido el desarrollo independiente de la actividad de las Organizaciones internacionales de forma satisfactoria. Los problemas que en ocasiones se han planteado han tenido como origen la mayoría de las veces la defectuosa redacción de algunos Acuerdos, lo que se explica por la fecha en que fueron redactados, circunstancia que ha influido igualmente sobre las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades.

El hecho de que afirmemos que los Acuerdos de sede han cumplido bien su cometido no impide que consideremos positivo el perfeccionamiento del sistema en la medida de lo posible. Por ello estimamos adecuado la conclusión de convenciones como la de Viena de 1975 que traten de codificar y desarrollar el derecho existente. La convención multilateral tiene además la ventaja de unificar la práctica de las distintas Organizaciones.

2. El Derecho Interno de las Organizaciones Internacionales.

Como hemos visto más arriba, los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales no preveían la existencia de las misiones permanentes ante las Organizaciones internacionales. Sin embargo la existencia práctica de dichas misiones comenzó casi desde la puesta en marcha de la mayoría de las Organizaciones. En abril de 1948, 45 de los 57 Estados miembros de las Naciones Unidas habían esta-

blecido una misión permanente en Nueva York.

El hecho de que los tratados constitutivos no hubieran previsto nada sobre las misiones, no significa que las Organizaciones no pudieran dictar normas al respecto. Normas que además eran absolutamente necesarias por el vacío legislativo sobre la materia. Este conjunto de normas emanadas de las Organizaciones internacionales por vía de práctica y por vía de resoluciones de los órganos competentes no es sino lo que se ha dado en llamar por la doctrina "el Derecho interno de las Organizaciones internacionales".

La capacidad de las Organizaciones internacionales para establecer un sistema normativo propio ha sido justificada según VIRALLY por el poder de auto-organización de que gozan dichas Organizaciones(50). - CAHIER, desde una perspectiva más jurídica ha escrito:

"es posible afirmar que existe en Derecho internacional una regla consuetudinaria que otorga a las Organizaciones internacionales un poder general de establecer las reglas necesarias a su funcionamiento interno" (51).

El "Derecho interno de las Organizaciones internacionales" ha sido reconocido como fuente del Derecho diplomático por la Convención de Viena de 1975. El artículo cinco de esta Convención se refiere a las "reglas de la Organización" y el artículo 3 a las "reglas pertinentes de la Organización". Este concepto de "reglas de las Organizaciones internacionales" es algo más amplio que el concepto de "Derecho interno" de las mismas. El artículo 1 de la Convención de Viena, artículo dedicado a las definiciones, dice en su párrafo 34:

(50) VIRALLY, L'Organisation Mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p. 189.

(51) CAHIER, "Le droit interne des Organisations internationales", Extrait de la RGDIP, juillet-septembre 1963, No. 3, p. 21.

" se entiende por reglas de la Organización en particular los instrumentos constitutivos de la Organización, sus decisiones y resoluciones pertinentes y su práctica establecida".

Las "reglas de la Organización" han tenido bastante importancia - en la reglamentación de las misiones permanentes. Con exclusión de las inmunidades y privilegios, previstos por los distintos tratados que hemos estudiado, el resto de la normativa sobre la diplomacia, conexas con las organizaciones ha nacido por vía de práctica y por vía de resolución.

La importancia de las "reglas de la Organización" se verá aumentada si la Convención de Viena llega a entrar en vigor por la dependencia que establece dicha Convención entre las "reglas de la Organización" y la capacidad de establecer misiones permanentes como veremos en el capítulo tercero.

3. La Costumbre.

El artículo 38 del estatuto del TIJ cita, entre las fuentes del derecho que deberá aplicar dicho tribunal, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Dicho artículo tiene su antecedente en el del mismo número del estatuto del TPJI.

Según la definición anterior la costumbre estaría compuesta de dos elementos: uno material, la práctica general, y otro psicológico que ha sido llamado por la doctrina la opinio iuris sive necessitatis. La doctrina suele añadir un tercero que es el elemento de "larga duración" de la práctica general.

La pertinencia de la opinio iuris ha sido a menudo criticada por una parte de la doctrina tanto en el campo internacional como en el del derecho civil dando lugar a una gran polémica en la que no entraremos. Digamos solamente que hoy día la doctrina partidaria de la necesidad de la opinio iuris parece mayoritaria. Los estatutos del TPJI y del TIJ, éste último aceptado por la casi totalidad de los Estados, han ejercido una gran influencia a este respecto.

El argumento definitivo sobre la necesidad de la opinio iuris ha sido el de la necesidad de distinguir entre los actos que realizan los Estados para cumplir con una obligación internacional, de los que realizan por pura cortesía. Respecto de las abstenciones de actuación también es necesario distinguir la abstención obligatoria para un Estado, de la que resulta de una mera tolerancia o incluso indiferencia respecto de ciertos hechos o conductas. Ambos argumentos han sido desarrollados tanto por el TPJI como por el TIJ.

En los casos de "la plataforma continental del mar del Norte" el TIJ ha afirmado:

" los Estados interesados deben tener el sentimiento de conformarse al equivalente de una obligación jurídica. Ni la frecuencia, ni incluso el carácter habitual de los actos, son suficientes. Existen numerosos actos internacionales, en el ámbito del protocolo, por ejemplo, que se realizan casi invariablemente pero que están motivados por simples consideraciones de cortesía, de oportunidad o de tradición y no por el sentimiento de una obligación jurídica.

A este respecto el Tribunal hace suya la opinión del TPJI en el asunto " Lotus " tal como ha sido enunciada en el pasaje siguiente, que es aplicable por analogía a los presentes casos:

Incluso si la escasez de decisiones judiciales que puedan encontrarse... sería una prueba suficiente del hecho invocado, no resultaría de ello más que los Estados se han abstenido de hecho, de ejercer acciones penales, y no que se reconocen obligados a hacerlo; solamente en el caso de que la abstención esté motivada por la conciencia de un deber de abstenerse puede hablarse de una costumbre internacional" (52).

(52) Plateau Continental de la Mer du Nord, arrêt. CIJ. Recueil 1969, p. 45.

Historicamente la costumbre ha sido creada por los Estados. Estos eran practicamente los únicos sujetos del orden internacional. La generalización de las Organizaciones internacionales ha introducido sin embargo un cambio importante en la cuestión de los sujetos del orden internacional. DIEZ DE VELASCO ha afirmado a este respecto:

" a pesar de que tradicionalmente se ha venido manteniendo que los únicos creadores de la costumbre eran los Estados, hoy podemos manifestar que las Organizaciones internacionales en su conjunto, y no solo sus Miembros individualmente, estan dando vida a nuevas costumbres internacionales (53).

El hecho de que las Organizaciones internacionales puedan colaborar a la creación de normas de derecho consuetudinario es hoy casi generalmente admitido. Problema diferente es el de si en la actualidad puede afirmarse la existencia de normas consuetudinarias reguladoras del estatuto jurídico de las organizaciones internacionales, sus funcionarios y misiones permanentes.

La doctrina se ha planteado a menudo el problema. Ya en 1931, PREUSS afirmaba:

" una norma consuetudinaria parece estar en vías de formación en virtud de que ciertas Organizaciones dotadas de personalidad internacional pueden exigir el status diplomático para sus funcionarios" (54).

La existencia de una regla consuetudinaria es también admitida por HAMMARSKJOLD que extiende la aplicación de dicha regla consuetudinaria a " los representantes de los Estados en un organismo internacio-

.../...

(53) DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional público, Madrid, Tecnos, 3ª edición, 1976, Tomo I, p. 81.

(54) PREUSS, "Diplomatic privileges and immunities of agents invested with fonctions of an international interest", AJIL, Vol. XXV, 1931, p. 696,

.../...

nal permanente, periódico o reunido ad hoc " (55).

En cambio SECRETAN, autor de uno de los estudios más completos sobre la materia en el periodo de entre-guerras, no se pronuncia ni a favor ni en contra de la existencia de la regla consuetudinaria (56).

En nuestros días la existencia de la regla consuetudinaria ha sido admitida por muchos autores. Para GUGGENHEIN :

" está en vías de creación una regla consuetudinaria que asegura a las Organizaciones internacionales y a sus funcionarios superiores los mismos privilegios e inmunidades que al personal diplomático " (57).

Para LALIVE :

" es posible demostrar la existencia de una costumbre o, en todo caso, de un comienzo de costumbre con la ayuda de los elementos siguientes: el carácter uniforme de las disposiciones relativas al estatuto y a las inmunidades de las Organizaciones internacionales; la repetición de un sentido unilinear que se manifiesta por una práctica concordante de los Estados. Es interesante constatar que en general incluso en los países en los que la cuestión no está regulada por un texto la práctica es general, excepto una o dos excepciones deplorables.

Es vano objetar que se trata de una simple tolerancia y que una costumbre no puede formarse tan rápidamente. El elemento de larga duración no es pertinente aquí dada la rapidez de la evolución y la orientación uniforme Ciertas inmunidades son indispensables, en las-

.../...

(55) HAMMARSKJOLD, " Les immunités des personnes investies de - fonctions internationales ", RCADI, Vol. 56, 1936(II), p. 182.

(56) SECRETAN, " The independence granted to agents of the international community in their relations with national public authorities ", - BYBIL, Vol. XVI, 1935, ps. 56 y ss.

(57) GUGGENHEIN, " Traité de Droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université, Georgéie S.A., 1953, Tomo I, p. 51.

.../...

condiciones actuales, para el funcionamiento eficaz e independiente de las Organizaciones. Este punto es generalmente admitido por los Estados, de manera que nos encontraremos ante una fuerte presunción de la existencia de este célebre elemento psicológico" (58).

La existencia de una regla consuetudinaria es también defendida - por CAHIER(59), MICHAELS(60), SORENSEN(61) y WEISSBERG(62). Por el contrario BRONWLIE(63), SCHWARZENBERGER(64) y LAUTERPACHT(65) niegan la existencia de la regla pues para ellos los privilegios y las inmunidades internacionales se basan exclusivamente en los tratados.

La CDI parece incluirse también por la existencia de la regla consuetudinaria. En los comentarios al proyecto de Convención sobre la representación de los Estados, la CDI afirma:

" determinadas disposiciones del proyecto de artículos son o probablemente llegarán a ser derecho internacional consuetudinario (66).

-
- (58) LALIVE, J.F., "L'immunité de juridiction des Etats et des Organisations internationales", RCADI, Vol. 84, 1953(III), ps. 304-6.
- (59) CAHIER, Derecho diplomático contemporáneo, traducción española de J.V. Torrente, M. Oreja y J.D. Gonzalez Campos, Madrid, Rialp, 1965, ps. 72-5. (En adelante: CAHIER, Derecho diplomático.....).
- (60) MICHAELS, op. cit., p. 30.
- (61) SORENSEN, "Principes de Droit international", RCADI, Vol. 101, 1960 (III), p. 174.
- (62) WEISSBERG, The international status of the United Nations, Nueva York, Londres, Oceana publications, Stevens & Sons, 1961, ps. 144-6.
- (63) BRONWLIE, Principles of public international law, Oxford, Clarendon Press, 1973, segunda edición, p. 661.
- (64) SCHWARZENBERGER, Manual of international law, Londres, Stevens & Sons, 1967, p. 84.
- (65) OPPENHEIM-LAUTERPACHT, op. cit., Vol. 1, p. 734.
- (66) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con Organizaciones internacionales", Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, Vol. II, primera parte, p. 310. (En adelante: "Proyecto de artículos ACDI..").

Más abajo, en el comentario del artículo 78 del mismo proyecto se dice:

" en lo que concierne a los terceros Estados que no sean partes en la futura convención la materia objeto de este artículo se regirá por las convenciones particulares, cuando sean aplicables, o por el Derecho internacional consuetudinario "(67).

Existen dos Acuerdos de sede que han sido citados como prueba de la existencia de la regla consuetudinaria que venimos estudiando. El primero de ellos es el Acuerdo provisional sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas concluido entre esta Organización y el Consejo Federal Suizo en cuyo artículo primero se dice:

" El Consejo Federal Suizo reconoce la personalidad internacional y la capacidad jurídica de la Organización de Naciones Unidas. Esta Organización no puede, en consecuencia, según las reglas del Derecho internacional, ser citada ante los tribunales suizos sin su consentimiento expreso "(68).

Podría discutirse si " las reglas del Derecho internacional " se refieren al derecho consuetudinario o al derecho convencional. La existencia de una regla consuetudinaria le parece prematura a LALIVE, - teniendo en cuenta que el Acuerdo data de 1946. Dicho autor se plantea, aún reconociendo los problemas que ello implicaría por no ser Suiza miembro de las NU, si las " reglas se refieren al derecho convencional", para concluir de la forma siguiente:

" parece imprudente el querer a toda costa atribuir a la referencia a " las reglas del Derecho internacional " un sentido jurídico preciso.

(67) ibid., p. 357.

(68) RTNU, Vol. 1, p. 165.

Quizá nos encontremos aquí ante un fenómeno conocido por los juristas : en presencia de una situación nueva, los redactores de un texto legislativo o convencional afirmarán, mediante una afirmación a menudo imprecisa, que la reglamentación adoptada es conforme al Derecho positivo " (69).

El otro Acuerdo de sede citado como prueba de la existencia de una regla consuetudinaria es el que fué concluído, en 1951, entre la OMS y el gobierno de Egipto. La sección 3 de dicho acuerdo dice así :

" La Organización así como sus órganos principales o subsidiarios, gozan en Egipto de la independencia y libertad de acción que corresponden a una Organización internacional conforme a los usos internacionales " (70).

La argumentación de LALIVE respecto del Acuerdo entre Suiza y las Naciones Unidas quizá pudiera trasladarse aquí. En cualquier caso, este precepto no puede significar más que el reconocimiento de la existencia de una regla consuetudinaria por parte del Gobierno egipcio.

También ha sido citada como prueba de la existencia de la regla consuetudinaria la declaración del Consejo Federal suizo a la Asamblea Federal de 28-7-55. El Consejo Federal afirma :

"... una Organización internacional fundada en virtud de un tratado entre Estados goza según el Derecho internacional de un cierto número de privilegios en el Estado en que haya establecido su sede....".

(69) LALIVE, op. cit., p. 330.

(70) RTNU, Vol. 223, p. 89.

Más adelante se añade:

"... nos encontramos pues ante un derecho consuetudinario al-
que nuestro país no podía sustraerse..." (71).

La afirmación nos parece válida si lo que se trata de demos-
trar es la existencia de una regla consuetudinaria relativa a los pri-
vilegios e inmunidades de las Organizaciones internacionales. Sin -
embargo no parece que dicha afirmación pueda hacerse extensiva a -
una regla sobre el estatuto de las misiones permanentes. Respecto -
a una posible regla consuetudinaria que regule el estatuto de las mi-
siones permanentes, el Gobierno suizo se ha expresado de la manera
siguiente:

"El Gobierno suizo también puede aceptar al igual que la Comi
sión de Derecho Internacional el principio general en que ésta se ha
inspirado para redactar su proyecto: la asimilación de las misiones-
permanentes a las misiones diplomáticas. Este principio no descansa
en una analogía superficial, sino que está fundado solidamente en la-
práctica de los Estados. En un campo en que las normas consuetu-
dinarias son raras, por no decir inexistentes, es muy importante -
guiarse para la codificación por la experiencia fundada en las normas
convencionales vigentes y en la práctica seguida en los países hués-
pedes" (72).

(71) Citada en CAHIER, Derecho diplomático, p. 74.

(72) Naciones Unidas, "Observaciones de los Estados miembros, -
Suiza y las Secretarías de las NU, los Organismos especiali-
zados y el OIEA acerca del proyecto de artículos sobre los -
representantes de los Estados ante las Organizaciones interna-
cionales, aprobado por la CDI en sus 20º, 21º y 22º periodos
de sesiones", Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, Vol. II, primera parte, p. 431. (en adelante: Naciones -
Unidas, "Observaciones de los Estados miembros", ACDI...).

Otro precedente citado a menudo en apoyo de la existencia de la regla consuetudinaria (73) es una sentencia del Tribunal Supremo de Méjico en la que se afirma que:

" las comisiones internacionales (se refiere a la CEPAL) deben gozar como en el caso en cuestión, de las inmunidades reconocidas en el derecho internacional" (74).

No cabe duda que la afirmación del Tribunal Supremo mejicano es terminante, máxime si se tiene en cuenta que Méjico no había ratificado la Convención General de Naciones Unidas en la fecha de la sentencia. Sin embargo también hay que señalar que se trataba de un caso relativo a una reclamación de tipo laboral que no cae propiamente dentro del campo de las inmunidades y privilegios, sino en el de la incompetencia ratione materiae que reposa sobre fundamentos diferentes.

La existencia de una norma consuetudinaria ha sido sin embargo afirmada de una forma tajante por el Gobierno español. Poco antes de la reunión de la primera Asamblea de la OMT, el Gobierno español promulgó un decreto para regular el estatuto de los representantes de los Estados miembros. En el preámbulo de dicho decreto se dice:

" Habiendose adherido ya nuestro país al Convenio sobre privilegios e inmunidades de las Organizaciones Especializadas de las Naciones Unidas, el procedimiento más sencillo para regular los privilegios e inmunidades de los delegados asistentes a la Organización -
.../...

(73) Ver NGUYEN QUOC DINH, op. cit., p. 287 y CAHIER, Derecho diplomático, p. 75.

(74) Naciones Unidas, Memoria anual del Secretario General sobre la labor de la Organización, 1º de julio de 1953-30 de junio de 1954. Asamblea General, Documentos oficiales, Noveno periodo de sesiones, Suplemento nº 1, p. 124.

.../...

Mundial de Turismo sería el de aplicarles el régimen establecido por los artículos 5 y 7 de dicho Convenio, en virtud de una disposición española, de rango suficiente, con lo cuál se evita tener que especificar el contenido de normas consuetudinarias de derecho internacional" (75).

La afirmación española no se refiere a las misiones permanentes, sino a las delegaciones enviadas a la sesión de un órgano de una Organización internacional. Sin embargo la extensión de dicha afirmación a las misiones permanentes nos parecería legítima.

De todo lo anterior podría deducirse que somos contrarios a la existencia de una norma consuetudinaria reguladora del estatuto de las misiones permanentes de los Estados ante las Organizaciones internacionales. Sin embargo, ello no es así. Si hemos citado los precedentes anteriores, ha sido para poner de manifiesto que la existencia de una regla consuetudinaria no puede deducirse de unos pocos precedentes de muy dudoso alcance. La base de la regla consuetudinaria está en los Acuerdos de sede mismos. La repetición de un mismo estatuto en todos los Acuerdos significa para nosotros que los Estados consideran otro estatuto como impensable.

Si se leen atentamente las observaciones de los Estados miembros al proyecto de Convención de Viena, se verá que, salvo alguna excepción menor, ningún Estado duda que las misiones permanentes deban ser equiparadas a las misiones diplomáticas. Veintiseis Estados se pronunciaron al respecto y el resto de los Estados tuvieron la ocasión de hacerlo (76).

(75) Decreto 919/75. BOE del 6-5-75.

(76) Naciones Unidas, " Observaciones de los Estados miembros ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, ps. 384 a 481.

Parece por tanto que puede afirmarse que para la generalidad - de los Estados el estatuto diplomático de las misiones permanentes es una consecuencia obligada del establecimiento de una Organización - internacional sobre el territorio de uno de ellos. El hecho de que las Organizaciones internacionales hayan preferido siempre concluir un - acuerdo al respecto no puede en absoluto ser considerado como una negación de la existencia de esta norma consuetudinaria.

4. Las normas de Derecho interno.

Antes de la conclusión y entrada en vigor de la Convención de - Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas existían en muchos - Estados leyes reguladoras de los privilegios e inmunidades diplomáti - cas. Dichas leyes tenían mucha importancia en la medida en que pu - dieran servir de concreción del derecho consuetudinario que regía las relaciones diplomáticas. Con la conclusión y entrada en vigor de la - Convención de Viena de 1961 dichas leyes han visto disminuida, logi - camente, su importancia y función (77).

Con posterioridad a la creación de las Naciones Unidas, mu - chos Estados han promulgado leyes sobre los privilegios e inmunida - des de las Organizaciones internacionales (78). Dichas leyes tienen contenidos diferentes. Algunas se limitan a declarar en vigor alguna o todas las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades. Otras sin embargo contienen una regulación detallada de los privile - gios e inmunidades.

(77) Dichas leyes se encuentran recopiladas en Naciones Unidas, - United Nations legislative series, Laws and regulations regar - ding diplomatic and consular privileges and immunities.

(78) Dichas leyes se encuentran recopiladas en Naciones Unidas, - United Nations legislative series, Legislative texts and treaty - provisions concerning the legal status, privileges and immuni - ties of International Organizations. (En adelante: Naciones Uni - das, Legislative texts and treaty provisions...).

Podría argüirse que la existencia en la mayoría de los países - de leyes sobre privilegios e inmunidades, es un factor que ha contribuido a la creación de las normas consuetudinarias estudiadas en el apartado anterior. No creemos que ello sea así. Si la ley interna se limita a "poner en vigor" una Convención general o un Acuerdo de sede debidamente ratificado, dicha ley no tiene importancia alguna desde el punto de vista del Derecho internacional. Por el contrario, cuando la ley contiene una reglamentación detallada de los privilegios e inmunidades, su entrada en vigor depende de la decisión unilateral del gobierno correspondiente. Además la mayoría de dichas leyes prevén la posibilidad de la aplicación discriminatoria respecto de los representantes de los Estados e incluso respecto de los funcionarios de las Organizaciones.

Las leyes internas sin embargo pueden ser indicio de la actitud de un Estado respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por esta razón el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido repetidas veces al gobierno de los EE.UU. la promulgación de una ley que garantizase la protección de las misiones permanentes y los representantes de los Estados. Naturalmente que los EE.UU. tienen la obligación de proteger a los representantes de los Miembros y a las misiones permanentes, aunque no exista ninguna ley al respecto. Sin embargo, la promulgación de la ley 92-539 de 24 de octubre de 1972 (79) para ampliar la protección de los funcionarios extranjeros, ha significado un cambio en la actitud de los EE.UU.. Por ello la Asamblea General de las NU, en su resolución 3033 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972

(79) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972, p. 3.

" Acoge con beneplácito la aprobación, el 24 de octubre de 1972, de la Ley para la protección de los funcionarios extranjeros y huéspedes oficiales."

Dentro de este apartado sobre las normas de derecho interno, es necesario hacer una mención especial de la "Decisión del Consejo Federal suizo" respecto a las delegaciones permanentes ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y las demás Organizaciones internacionales que tengan su sede en Suiza (80). Mediante dicha decisión el Consejo Federal suizo equipara a las misiones permanentes con las misiones diplomáticas acreditadas en Berna. La razón de dicha decisión es que el Acuerdo de sede concluido entre Suiza y las Naciones Unidas no preveía la existencia de misiones permanentes y, sobre todo, no otorgaba el estatuto diplomático a los representantes de los Estados miembros.

La decisión del Consejo Federal suizo es importante en cuanto demuestra una opinio iuris de que los representantes de los Estados permanentes deben gozar del estatuto diplomático en el territorio del país de sede.

No parece que pueda tomarse la decisión suiza como una disposición suplementaria del Acuerdo de sede entre Suiza y las Naciones Unidas, aunque el título de éste, arreglo provisional, parezca invitar a ello. Sin embargo, la decisión del Gobierno suizo es a nuestro juicio un elemento de prueba importante del derecho consuetudinario.

5. La jurisprudencia.

La jurisprudencia internacional no ha decidido ningún caso relativo a las misiones permanentes. Por otra parte exceptuando el caso-
.../...

(80) Naciones Unidas, Legislative texts and treaty provisions, Vol.I, - p. 92.

.../...

del "derecho de asilo" nunca ha sido sometido ante el TIJ una disputa de derecho diplomático. Sin embargo la jurisprudencia del TIJ nos será útil cuando estudiemos la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales.

En el pasado, la jurisprudencia interna ha sido un elemento muy importante para la creación de las inmunidades y privilegios diplomáticos. Sin embargo, después de la conclusión de la Convención de Viena de 1961, la jurisprudencia interna apenas tiene interés.

En lo que respecta a las misiones permanentes, la jurisprudencia es fuente de escaso valor, por estar el estatuto jurídico de éstas prácticamente siempre previsto en los Acuerdos de sede respectivos. Hay que tener en cuenta que las Organizaciones internacionales han nacido en una época en que las inmunidades y privilegios diplomáticos, a cuya creación ha contribuido ampliamente la jurisprudencia, estaban bien determinados. Esta es la razón del escaso valor de la jurisprudencia como fuente del derecho diplomático en el momento actual.

II. La Codificación del Derecho diplomático. La Convención de Viena de 14 marzo de 1975.

Cuando la Comisión de Derecho Internacional presentó a la Asamblea General de las NU el proyecto de Convención sobre relaciones diplomáticas, la Asamblea General pidió a la CDI que incluyera en su programa el estudio de las relaciones de los Estados con las Organizaciones internacionales. La CDI decidió posteriormente comenzar a trabajar sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados ante las Organizaciones internacionales, dejando para posteriores estudios el resto de las cuestiones que pueden englobarse dentro de la rúbrica "relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales".

La CDI incluyó el tema en su programa de trabajo de 1962. Se nombró Relator Especial al jurista egipcio EL-ERIAM que actuaría - luego también como Consultor Técnico en la Conferencia de Viena de 1975.

El Relator Especial presentó su primer informe en 1963. La Comisión sin embargo no se ocupó verdaderamente de la cuestión hasta 1968. En 1971 la Comisión presentó a la Asamblea General el proyecto definitivo de artículos. Después de invitar a los Estados y a las Organizaciones internacionales del sistema de las NU a que hicieran observaciones sobre el proyecto, la Asamblea General convocó una conferencia de plenipotenciarios que se celebró en Viena entre el 4 de febrero y el 14 de marzo de 1975.

En la Conferencia de Viena estuvieron representados 81 Estados. Dos Estados más, diez Organizaciones internacionales y siete movimientos de liberación nacional estuvieron representados por observadores. La Conferencia aprobó el texto de la Convención por 57 votos contra uno, habiendo además quince abstenciones. La Conferencia aprobó además dos resoluciones. La primera sobre la condición de observador de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y/o la Liga de los Estados árabes. La segunda sobre la aplicación de la Convención en las actividades futuras de las Organizaciones internacionales.

¿Que posibilidades de vigencia tiene la Convención de Viena que comentamos? Al comienzo de este capítulo vimos que es muy difícil extraer conclusiones generales del estudio del proceso de ratificación de diversos tratados sobre cuestiones diplomáticas. Sin embargo creemos que se impone una reflexión sobre este punto.

¿Qué factores pueden actuar en pro y en contra de que se produzcan las ratificaciones necesarias? En general puede decirse que la-

Convención no ha satisfecho a los Estados que son huéspedes de las principales Organizaciones. Entre las quince abstenciones a la Convención se cuentan las de EE.UU., Suiza, Austria, Canadá, Francia y el Reino Unido.

Los Estados huéspedes pueden, como vemos, encontrar poco ventajosa la ratificación de una Convención que, según ellos, les supone una carga muy pesada de obligaciones y no defiende debidamente sus intereses. Sin embargo, existen otros factores que quizá puedan servir de contrapeso. En primer lugar la Convención de Viena no ha desatendido, según nuestra opinión, los intereses de los Estados huéspedes y éstos incluso pueden considerar ventajoso el establecimiento de un régimen jurídico coherente, que no sufra de las inconcreciones e inseguridades del régimen actual de las misiones permanentes. Además hay que tener en cuenta que la Convención regula las misiones enviadas a las sesiones de órganos de una Organización y a las conferencias convocadas por éstas. Podría suceder que las Organizaciones internacionales pusieran como condición la ratificación de la Convención a los Estados que fueran candidatos para albergar las conferencias convocadas por dichas Organizaciones. Por último, hay que tener en cuenta que las Organizaciones internacionales gozan hoy de una gran capacidad de hacer presión sobre los Estados huéspedes. Va haciéndose cada vez más evidente, y más aún en tiempos de crisis, que el hecho de albergar a una Organización produce muchos beneficios tanto de índole política como económica para los países huéspedes. En base a dichos beneficios es probable que los órganos competentes de las Organizaciones internacionales pidan reiteradamente a los Estados huéspedes que ratifiquen la Convención.

1. Contenido y Estructura de la Convención.

La Convención consta de 92 artículos. Dichos artículos están repartidos en cinco partes que llevan los siguientes títulos: introducción,

misiones ante Organizaciones internacionales, delegaciones en órganos y conferencias, delegaciones de observación en órganos y conferencias y disposiciones generales. Las partes primera y quinta contienen disposiciones aplicables tanto a las misiones permanentes como a las delegaciones. La razón de ello fue evitar que la Convención fuera tan extensa como era el primitivo proyecto que contenía ciento dieciseis artículos.

De la enumeración de los títulos de las distintas partes de la Convención podemos deducir que regula únicamente las misiones permanentes acreditadas ante una Organización y las delegaciones enviadas a las sesiones de un órgano de una Organización y a las conferencias convocadas por éstas. Antes de terminar este apartado debemos decir, aunque ya lo indicamos en la introducción, que nuestro estudio se limita a la parte de la Convención que regula las misiones permanentes.

2. Terminología.

Siguiendo el ejemplo de otras convenciones preparadas por la CDI, la Convención de Viena de 1975 dedica su artículo primero a la definición de los términos de la Convención.

En general puede decirse que no han existido problemas terminológicos en la conclusión de la Convención de Viena de 1975 ya que la CDI, primero, y la Conferencia de Viena, después, han podido beneficiarse de la experiencia acumulada en la codificación de las normas aplicables a las misiones diplomáticas y a las misiones especiales. Por esta razón en el presente apartado nos limitaremos únicamente a poner de relieve aquellos términos cuya idoneidad ha podido ser discutida.

La Convención de Viena de 1975 parece que ha fijado definitivamente la expresión "misión permanente" para denominar a las misiones -

acreditadas ante las Organizaciones internacionales. Antes de la conclusión de esta Convención se utilizaban de manera indistinta las expresiones "misiones permanentes", "delegaciones permanentes" o "representación permanente". La Convención de Viena distingue entre "misión permanente", que es la misión creada para representar de forma continua al Estado que la envía, de la "delegación", termino que se utiliza para denominar a las misiones enviadas por un Estado a la reunión de un órgano de una Organización internacional o a una conferencia convocada por una Organización. Es probable que después de la conclusión de la Convención de Viena de 1975 esta terminología sea utilizada de forma uniforme.

La expresión "misión permanente" ha sido reservada por la Convención de Viena para denominar únicamente a las misiones acreditadas ante una Organización internacional por un Estado miembro de dicha Organización. Esto ha llevado a la necesidad de acuñar un nuevo término para denominar a las misiones acreditadas por los Estados que no son miembros de la Organización internacional correspondiente. El término acuñado por la CDI para la denominación de estas misiones es el de "misiones permanentes de observación".

Otro término que ha dado lugar a cierta confusión es el de "credenciales" utilizado por los artículos 10 y 11 de la Convención de 1975. La Convención de Viena de 1961 utiliza la expresión "cartas credenciales" para denominar el documento que da fé del nombramiento del jefe de la misión diplomática. La CDI se separó en este punto de la experiencia anterior utilizando el termino "credencial" para designar el documento que da fé del nombramiento del jefe de una misión permanente.

La utilización del término "credencial" en el proyecto elaborado por la CDI se correspondía con la utilización del termino "pouvoirs" en la versión francesa del mismo proyecto. La CDI evitaba claramente

la utilización del termino "lettres de créance" que hubiera contado con la oposición del Gobierno francés.

En la Conferencia de Viena, el Asesor jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas pidió que se sustituyera en la versión francesa el termino "pouvoirs" por el de "lettres de créance" lo que - fué aceptado por el Comité de redacción (81) pasando la expresión - "lettres de créance" a la versión definitiva de la Convención. Este cambio de redacción no se realizó en la versión española que conservó el término "credenciales".

Existe por tanto entre la terminología francesa e inglesa que utilizan el mismo término para denominar al documento que acredita el nombramiento del jefe de misión diplomática y del jefe de la misión permanente y la terminología española que hace la distinción entre "credenciales" y "cartas credenciales".

Otra expresión que ha dado lugar a discusiones es la utilizada para denominar al jefe de misión que ejerce la función de tal cuando el verdadero jefe de misión no puede desempeñar sus funciones por ausencia o por cualquier otro motivo.

El proyecto de la CDI utilizaba el termino de "encargado de negocios ad interim" para denominar al jefe de misión que lo es accidentalmente. Este término es el mismo que fué utilizado por la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. En la Conferencia de Viena una enmienda inglesa (82) que fué aceptada por la Conferencia -
.../...

(81) Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales, Viena, 4 de febrero a 14 de marzo de 1975, - Documentos oficiales, Volumen I: Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión plenaria, p.113, (En adelante: Conferencia, Vol 1...).

(82) Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales, Viena 4 de febrero a 14 de marzo de 1975, Documentos oficiales, Volumen II: Documentos de la Conferencia, p.95(A/CONF 67/C. 1/L.II). (En adelante: Conferencia, Vol. 2...).

.../...

hizo sustituir el término de " encargado de negocios ad interim " por el de " jefe de misión interino ". La utilización de uno u otro término no parece que pueda dar lugar a grandes problemas jurídicos. Sin embargo no vemos cual es la razón de cambiar la terminología generalmente utilizada cuando no existe razón para ello.

Por último diremos que las definiciones contenidas en el artículo I de la Convención pecan muchas veces de inconcreción y de inexactitud. Así por ejemplo decir que:

" se entiende por miembros del personal administrativo y técnico los miembros del personal empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión " (art. I, 1, 28)

no parece muy correcto. Por otra parte las definiciones incumplen con frecuencia la regla lógica que prohíbe incluir el concepto que trata de definirse en el texto mismo de la definición. Este problema, que también se presenta en otras convenciones, deriva de la dificultad de establecer definiciones de conceptos que tengan validez en todos los casos en que deban ser aplicadas. De todas formas creemos que a pesar de las dificultades reseñadas, la CDI debería haber intentado redactar con mayor precisión.

3. Ámbito de aplicación de la Convención.

El ámbito de aplicación de la Convención lo estudiaremos desde tres puntos de vista diferentes, según el tipo de Organización, los Estados y las sedes de las Organizaciones a las que se aplica la Convención.

A) Organizaciones a las que se aplica la Convención.

Desde el punto de vista de las Organizaciones, puede plantearse si la obra codificadora de la CDI debe extenderse a las Organizaciones regionales o limitarse a las Organizaciones universales. También cabe-

la duda sobre si dentro de las Organizaciones universales la codificación debe referirse a todas ellas o solamente a las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Todas estas cuestiones han sido discutidas ampliamente en la CDI, Veamos pues un resumen de los debates en la misma, realizado por el mismo Relator especial:

" Hubo diversidad de pareceres entre los miembros de la Comisión acerca de si la labor de la Comisión a este respecto debería abarcar o no a las Organizaciones regionales. En el párrafo 179 de su primer informe, el Relator especial había sugerido que la Comisión concentrase su labor sobre esta cuestión primeramente en las Organizaciones internacionales de caracter universal, y que preparara su proyecto de artículos refiriendose solamente a estas Organizaciones, para examinar más adelante si podría aplicarse sin modificación a las Organizaciones regionales o si habría que modificarlo. Al explicar su sugerencia, el Relator especial declaró que el estudio de las Organizaciones regionales planteaba cierto número de problemas que exigirían la formulación de normas particulares para esas Organizaciones. Algunos miembros de la Comisión no estuvieron conformes con esa sugerencia. Estimaron que las Organizaciones regionales se deberían incluir en el estudio y señalaron que las relaciones entre los Estados y las Organizaciones de caracter universal podrían no diferir apreciablemente de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones regionales análogas. Estos miembros consideraban, en efecto, que las diferencias entre algunas Organizaciones universales por ejemplo, entre la Unión Postal Universal, la Organización internacional del Trabajo y las Naciones Unidas -eran por lo menos tan grandes como las que existían entre las Naciones Unidas y las principales Organizaciones regionales. Indicaron además que si la Comisión se concretara a examinar la cuestión de las relaciones de las Organizaciones de caracter universal con los Estados dejaría una laguna importante en el proyecto de artículos. Otros miembros-

de la Comisión, en cambio, se manifestaron partidarios, conforme a la sugestión hecha por el Relator Especial, de excluir a las Organizaciones regionales, al menos de la fase inicial del estudio. Señalaron que en cualquier proyecto de convención que se preparara acerca de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales debería tratarse de las Organizaciones de carácter universal y no de las regionales, si bien la experiencia de estas últimas podría tenerse en cuenta en el estudio. Adujeron que las Organizaciones regionales eran tan diversas que difícilmente podrían formularse normas uniformes aplicables a todas ellas. En consecuencia, estimaron que probablemente sería preferible dejar una gran libertad a esas Organizaciones regionales para regular sus propias relaciones con los gobiernos. Se indicó asimismo que algunas Organizaciones regionales tenían sus propios órganos codificadores y que, por lo tanto, debían quedar en libertad de elaborar sus propias normas" (83).

Una vez decidido que la Convención se referiría únicamente a las Organizaciones de carácter universal, restaba el problema de la definición de dichas Organizaciones. La enumeración de dichas Organizaciones, sistema utilizado por la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados, solamente era posible si se estimaba que la Convención debía aplicarse únicamente a las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Comisión consideró que no debía eliminarse la posibilidad de hacer aplicable la Convención a Organizaciones tales como el Banco Internacional de Pagos, la Oficina central de transportes ferroviarios internacionales o los distintos acuerdos internacionales sobre productos.

(83) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 20º período de sesiones, 27 de mayo-2 de agosto de 1968", ACDI, 1968, Vol. II, p. 189.

Por esta razón el proyecto de la Comisión definía las Organizaciones universales como las Organizaciones universales cuya composición y atribuciones son de alcance mundial. Una propuesta inglesa modificó en la Conferencia el texto del proyecto, eligiendo un criterio de delimitación intermedio entre el de la definición general y el de la enumeración taxativa. El artículo 1 párrafo 2 de la Convención dice así:

" se entiende por Organización internacional de carácter universal, las Naciones Unidas, sus Organismos especializados, el Organismo internacional de Energía Atómica y cualquier otra Organización similar cuya composición y atribuciones son de alcance mundial".

Esta definición de Organización sirve para determinar las Organizaciones internacionales a las que será aplicable la Convención según se determina en el párrafo primero del artículo 2. Así cuando un Estado ratifique la Convención ésta será aplicable a cualquier Organización de alcance mundial que tenga la sede sobre su territorio, siempre que la Organización haya aceptado la Convención según el procedimiento del artículo 90 como veremos más adelante.

Sin embargo la ratificación de un Estado no implica que una Organización regional que tenga su sede en el territorio de dicho Estado pueda prevalerse de la Convención. Según el artículo 2 párrafo cuarto, un nuevo acuerdo es necesario para poner en vigor la Convención en todo o en parte.

La única duda que resta es el significado de la frase "Organización cuya composición y atribuciones sean de carácter mundial". La cuestión tiene efectos prácticos muy importantes, como hemos visto en el párrafo anterior. Debe notarse además que para que la Convención sea aplicable, no es suficiente que la composición de la Organización sea de carácter mundial, sino que también tienen que serlo sus atribuciones.

La composición de carácter mundial no nos parece difícil de definir. Una Organización tiene composición de carácter mundial si existe la posibilidad teórica y práctica de formar parte de la Organización para todos los Estados, cualquiera que sea su situación geográfica y su régimen político. Además de la posibilidad de entrada sin obstáculos, parece que la Organización internacional debe contar efectivamente con una composición suficientemente amplia para que pueda decirse de ella que es de carácter mundial. Debe entenderse, sin embargo, - que una Organización internacional no pierde su carácter mundial por negar a un Estado su pertenencia a la misma, cuando dicha negación suponga una sanción contra dicho Estado por su incumplimiento reiterado de los principios y propósitos de la Organización de que se trata.

Más problemática parece la cuestión de las "atribuciones de carácter mundial". Si se examinan las atribuciones de las Organizaciones internacionales que componen el sistema de las Naciones Unidas, Organizaciones universales por excelencia, difícilmente pueden establecerse generalizaciones sobre el carácter "mundial" de sus atribuciones. Los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional - tampoco nos aclaran nada sobre el término. Parece por tanto que - es necesario adoptar un criterio amplio. Por Organización cuyas - atribuciones sean de carácter mundial entenderemos una Organización que tenga cualesquiera atribuciones referentes a una materia sobre la que sea posible la colaboración internacional en general.

B) Estados a los que se aplica la Convención.

Una de las grandes innovaciones de la Convención es la regulación del estatuto de las misiones acreditadas ante una Organización internacional por los Estados que no son miembros de la Organización. La práctica de que los Estados no miembros acrediten misiones

o representaciones ante las Organizaciones universales más importantes existe de forma ininterrumpida desde finales de los años cuarenta. Sin embargo, ni las constituciones de las Organizaciones internacionales, ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni ningún Acuerdo de sede prevén la existencia de los representantes de los Estados no miembros, por lo que éstos no gozan de ningún estatuto privilegiado (84). Una vez que la Convención esté en vigor, los representantes de los países no miembros gozarán de un estatuto prácticamente idéntico al de los representantes de los países miembros.

C) Sedes a las que se aplica la Convención.

Las Organizaciones internacionales suelen tener además de la sede principal varias sedes subsidiarias. Estas pueden suponer una mera descentralización de la sede principal, como la Oficina Europea de las Naciones Unidas, o por el contrario pueden tener únicamente competencia local o regional.

En general, sólo suelen establecerse misiones permanentes en las sedes principales de las Organizaciones, pero puede suceder que el establecimiento de misiones sea necesario o conveniente también cerca de las sedes regionales.. El artículo 5 de la Convención, que regula el establecimiento de misiones, condiciona el derecho a establecerlas a que las reglas de la Organización lo permitan. Recordemos que por "reglas de la Organización" hay que entender: los instrumentos constitutivos de dicha Organización, sus decisiones y resoluciones pertinentes y su práctica establecida. Los tratados constitutivos tienen poca relevancia a este respecto, pues no suelen prever -
.../...

(84) Por el contrario el artículo 17 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas obliga al Estado huésped de las Comunidades a conceder el estatuto diplomático a las misiones de terceros Estados.

.../...

nada sobre las misiones. En general puede decirse que ha sido la práctica la que ha prevalecido, aunque siempre existe la posibilidad de que la práctica sea modificada por una decisión de un órgano competente de la Organización.

4. Relación de la Convención con las Reglas pertinentes de las Organizaciones internacionales.

En el apartado 2. de la primera parte de este capítulo ya vimos la importancia que había tenido el llamado "Derecho interno de las Organizaciones internacionales" en la reglamentación de las misiones permanentes y cómo su papel había sido realzado en el sistema de la Convención de Viena.

Al tratar de codificar el derecho relativo a las misiones permanentes, la Comisión de Derecho Internacional ha tenido muy en cuenta que la existencia de un sistema único para las Organizaciones de ámbito universal solamente sería posible si se dejaba abierta la posibilidad de una aplicación flexible de la futura Convención. A esta necesidad responde el artículo 3 de la Convención que textualmente dice así:

" Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de las reglas pertinentes de la Organización o de las disposiciones pertinentes del reglamento de la conferencia".

La necesidad de este artículo ha sido justificada por diversas razones de las que retendremos las siguientes:

" dada la diversidad de las Organizaciones internacionales y su caracter heterogéneo por contraposición con el de los Estados, el presente proyecto de artículos tiende a establecer un denominador común y proporcionar normas generales destinadas a regir el Derecho diplomático de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones-

internacionales cuando una Organización internacional determinada no haya establecido reglas que rijan un estatuto concreto.

En segundo lugar el artículo tres trata de salvaguardar las normas particulares que pueda aplicar una Organización internacional determinada.....

" La Comisión, a fin de no tener que insertar una reserva concreta en cada uno de los artículos respecto de los cuáles sea necesario salvaguardar las normas particulares que rijan en una Organización o una conferencia, decidió formular una reserva general en la parte I del proyecto de artículos" (85).

Debe notarse que las "reglas de la Organización" sólo pueden regir las cuestiones que sean competencia de la Organización. En general puede decirse que serán de su competencia la regulación de la existencia de misiones permanentes y ciertos aspectos de la composición de estas misiones. Sin embargo, las "reglas de la Organización" no pueden regir las cuestiones referentes a los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes, pues éstos deben apoyarse necesariamente en un tratado bilateral o multilateral, o en una norma consuetudinaria, pero nunca en una disposición unilateral de la Organización.

5. Relaciones de la Convención con otros acuerdos internacionales,

En este apartado estudiaremos en primer lugar las relaciones de la Convención con los acuerdos que actualmente están en vigor, para pasar después al estudio de las relaciones entre la Convención y los acuerdos futuros.

(85) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con Organizaciones internacionales", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 311. (En adelante: "Proyecto de artículos", ACDI.....).

A) Relaciones de la Convención con los acuerdos existentes.

La codificación de las normas referentes a las misiones permanentes ante las Organizaciones internacionales, tuvo que plantearse el problema de si existía o no la homogeneidad suficiente entre las necesidades de las distintas Organizaciones como para que un régimen único fuera no solamente viable sino también necesario o al menos conveniente. A este respecto, el representante sueco ha dicho en los debates de la Sexta Comisión:

" Dado el gran número de Organizaciones intergubernamentales, parece dudoso que una sola Convención pueda prever todas las posibilidades adecuadamente y, por ello, su delegación sigue creyendo que sería mejor elaborar un código que sirviera de patrón o modelo y no una convención general, que probablemente tendría que ser completada mediante acuerdos específicos en cada caso particular " (86).

De una forma paralela a la del representante sueco, la Secretaría del BIRF ha afirmado:

" A cada Organización a que ha de aplicarse el instrumento debería permitírsele que redactara un anexo al mismo, en el cual precisara cualquier modificación, peculiar a ella, de los términos del instrumento principal " (87).

La CDI sin embargo ha preferido seguir una vía diferente. En efecto, la Comisión ha considerado que entre las Organizaciones universales existía la homogeneidad suficiente para hacer posible la redacción de una convención aplicable a todas las Organizaciones, pero que para ello era necesario que la Convención fuera flexible y que permitiera por tanto la existencia de casos particulares. A este deseo de res-
petar los casos particulares responde el artículo tercero de la Conven-
.../...

(86) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, - Vigésimo quinto período de sesiones, Sexta Comisión, Actas resumidas de las sesiones, p. 63.

(87) Naciones Unidas, "Observaciones de los Estados miembros", AC-DI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 453.

.../...

ción, ya examinado, y el artículo cuarto cuyo párrafo primero transcribimos a continuación:

"Las disposiciones de la presente Convención

a) se entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y Organizaciones internacionales de carácter universal".

La redacción de este artículo no deja lugar a dudas sobre la superioridad de los Acuerdos de sede sobre la Convención cuando exista contradicción entre ellos. Esta es la opinión de CAHIER cuando afirma:

" Los acuerdos existentes quedan salvados. En caso de contradicción se aplicará el artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados" (88).

Debe notarse que la referencia al artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados es inútil pues dicha Convención, además de no estar en vigor, solamente es aplicable a los tratados entre Estados según dice su artículo 1. La superioridad de los Acuerdos de sede sobre la Convención de Viena se desprende del texto mismo de la Convención.

Con la redacción de este artículo, la Convención no ha hecho más que seguir la pauta de los Acuerdos de sede. La mayoría de éstos contienen una norma de conflicto previendo su aplicación sobre las Convenciones generales de privilegios e inmunidades, caso de que exista contradicción entre éstas y los acuerdos de sede (89).

(88) CAHIER, " La Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations internationales de caractère universel ", Symbolae Garcia Arias, Temis, Vols. 33-36, 1973-74, p. 473.

(89) Ver por ejemplo la sección 34,b del Acuerdo entre la FAO e Italia, la sección 17 del Acuerdo entre la ONU y Etiopía y la sección 49 del Acuerdo entre Austria y el OIEA.

Qué juicio ha merecido este artículo ? En los debates de la Sexta Comisión la mayoría de los Estados que se han pronunciado al respecto lo han hecho en forma positiva. Más interesantes que los debates en la Sexta Comisión suelen ser las observaciones a los proyectos de la CDI que mandan los Estados. El carácter escrito de dichas observaciones junto con el plazo de tiempo en que pueden prepararse son factores que ayudan a que los Estados afinen en sus observaciones. De todos los Estados que enviaron sus observaciones muy pocos se refirieron al artículo cuatro e incluso algunos de éstos solamente mencionaban cuestiones de detalle.

El Gobierno de Bélgica se expresó en los siguientes términos:

" El mantenimiento de los acuerdos existentes y la posibilidad de adoptar disposiciones diferentes hacen ilusorio todo carácter obligatorio de los artículos del proyecto. Una convención sobre las misiones permanentes sólo tendría a lo sumo un carácter indicativo o supletorio, lo que incita más bien a propugnar la formulación de un modelo de estatuto o de un código que sirva de guía de las Organizaciones internacionales "(90).

Contrariamente al Gobierno de Bélgica, el Gobierno de Ecuador dice:

" El artículo tres fija la forma en que se han de aplicar las disposiciones del proyecto; su norma es a todas luces necesaria y lo mismo puede decirse del artículo cuatro que deja a salvo las normas en vigor - provenientes de otros acuerdos internacionales entre Estados y Organizaciones " (91).

(90) Naciones Unidas , " Observaciones de los Estados miembros ", - ACDI , 1971, Vol. II, primera parte, p. 388.

(91) ibid. , p. 394.

En el mismo sentido el Gobierno de los EE.UU afirma:

"Los artículos tres, cuatro y cinco contienen disposiciones razonables y necesarias. Reconocen que la diversidad de las Organizaciones internacionales, la variedad del caracter de los acuerdos concertados con los Estados huéspedes y las variaciones imprevisibles en los acuerdos relativos a las sedes que puedan ser necesarios para reajustar las relaciones futuras de las Organizaciones internacionales y los Estados huéspedes, obligan a mantener una cierta flexibilidad y a preservar un amplio grado de tolerancia"(92).

En la Conferencia de Viena, el artículo 4 de la Convención fué apoyado por la inmensa mayoría de las delegaciones siendo aprobado sin ningún voto en contra. Sin embargo creemos que las observaciones del Gobierno de Belgica eran acertadas. La CDI goza de posibilidades bastante limitadas de tiempo como para emplear éste en realizar convenciones que tengan un mero caracter supletorio. La Convención solamente tendría sentido si codifica el derecho existente, aprovechando la experiencia adquirida hasta ahora. Esto no quiere decir que los casos especiales no puedan existir, pero éstos debían haberse previsto de otra forma: aplicación de las "reglas de la Organización", reservas en la ratificación de la Convención por parte de la Organización de que se trate, posibilidad de redacción de anexos como en la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados o cualquier otra posibilidad prevista al efecto.

Hay que tener en cuenta además que en lo que se refiere a las misiones permanentes, solamente los Acuerdos de sede primarán sobre la Convención, pues las Convenciones generales no regulan propiamente las misiones permanentes. Sin embargo en lo que se refiere a .../...

(92) ibid. , p.400.

.../...

las delegaciones enviadas a las sesiones de un órgano de una Organización, la Convención puede ser derecho de tercer grado detrás de los Acuerdos de sede y de las Convenciones generales.

La Convención parece por tanto una Convención redactada para el futuro. Sin embargo hoy en día la creación de Organizaciones de carácter universal no parece probable ni incluso deseable. De todas formas no hay que minimizar tampoco el papel que jugará la Convención. Existen muchas cuestiones que los Acuerdos de sede no regulan y que serán regidas por las reglas de la Convención. Además ésta influirá ciertamente en la actitud de los Estados, de forma que pueda servir de base de interpretación en las disputas sobre el estatuto de las misiones permanentes.

B) Relaciones de la Convención con los acuerdos futuros.

El artículo cuatro párrafo b) de la Convención dice así:

"Las disposiciones de la presente Convención

b) no excluirán la celebración de otros acuerdos internacionales concernientes a la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones de carácter universal o a su representación en conferencias convocadas por esas Organizaciones o bajo sus auspicios".

Esta disposición es lógica, pues pueden surgir casos especiales en los que se considere que la normativa actual no es adecuada. De todas formas esta disposición nos parece inútil en la medida en que la Convención no puede negar la capacidad de las Organizaciones y de los Estados de concluir acuerdos futuros sobre la materia.

6. El proceso de ratificación de la Convención.

El establecimiento de misiones permanentes ante una Organización internacional da lugar a relaciones jurídicas que afectan al mismo tiempo
.../...

.../...

a los Estados que envían las misiones, a la Organización internacional ante la que las misiones están acreditadas y, en tercer lugar, al Estado huésped sobre cuyo territorio están situadas las misiones. Esta es la razón por la que en el proceso de ratificación de la Convención de Viena de 1975 puede distinguirse entre la ratificación de los Estados que envían, la ratificación del Estado huésped y la ratificación o la "aceptación" de la Convención por parte de las Organizaciones internacionales.

A) La ratificación de la Convención por parte de los Estados.

La Convención quedó abierta a la firma hasta el 30 de marzo de 1976. Solamente catorce Estados llegaron a firmar la Convención (93) lo que puede ser tomado como índice de la falta de aceptación de la misma. El artículo 87 dispone que la Convención "está sujeta a ratificación" y el artículo 88 dice que la Convención "quedará abierta a la adhesión de cualquier Estado".

... El artículo 89 prevé que la Convención entrará en vigor cuando haya sido ratificada, o se hayan adherido a ella, treinta y cinco Estados. Sin embargo para que la Convención sea aplicable no basta con la ratificación, o la adhesión, de treinta y cinco Estados, sino que se requiere también que el Estado huésped haya ratificado la Convención, o se haya adherido a ella, y que la Convención haya sido también aceptada por la Organización internacional correspondiente.

El hecho de que la ratificación, o la adhesión, del Estado huésped sea necesaria para que la Convención sea aplicable a las misiones permanentes acreditadas ante una Organización que tenga su sede sobre el territorio de dicho Estado parece un requisito que difícilmente

.../...

(93) Nations Unies, Traité Multilatéraux,..., p. 77.

.../...

puede ponerse en duda. Sin embargo en la Conferencia de Viena algunas delegaciones consideraron que la Convención podría ponerse en vigor, al menos en parte, aunque la ratificación del Estado huésped no se hubiera producido (94). Esto llevó a la delegación del Reino Unido a proponer una enmienda al párrafo primero del artículo segundo, en la que se especificase claramente que la Convención no entraría en vigor en el territorio de un Estado huésped sin el consentimiento de éste. El texto de la enmienda inglesa era el siguiente:

" La presente Convención se aplica a la representación de los Estados en sus relaciones con cualquier Organización internacional de carácter universal y a su representación en conferencias convocadas por tal Organización o bajo sus auspicios, cuando la presente Convención haya sido aceptada por la Organización y por el Estado huésped con respecto a esa Organización" (95).

La enmienda del Reino Unido fué aprobada por la Conferencia (96). Sin embargo, con posterioridad a esta aprobación la Conferencia volvió sobre el tema, modificando de nuevo el párrafo primero del artículo 2 (97) cuyo texto definitivo es el siguiente:

" 1. La presente Convención se aplica a la representación de los Estados en sus relaciones con cualquier Organización internacional de carácter universal y a su representación en conferencias convocadas por tal Organización o bajo sus auspicios, cuando la Convención haya sido aceptada por el Estado huésped y la Organización haya com

.../...

(94) Ver la intervención de la delegación argentina en Conferencia, - Vol. I, p. 53.

(95) Conferencia, Vol. II, p. 83 (A/CONF. 67/C.1/L.15).

(96) Conferencia, Vol. I, p. 84.

(97) Conferencia, Vol. I, p. 50.

.../...

pletado el procedimiento previsto en el artículo 90".

De la interpretación conjunta del artículo 89 (98) y el artículo dos, párrafo primero, cabe deducir que para que la Convención sea aplicable es necesario, en primer lugar, que treinta y cinco Estados ratifiquen, o se adhieran a la Convención y en segundo lugar que la Convención sea aceptada por el Estado huésped y por la Organización según el procedimiento previsto en el artículo 90.

El problema de la aceptación de la Convención por las Organizaciones internacionales será tratado en el apartado siguiente. El problema que debemos plantearnos ahora es el de los efectos de la ratificación, o de la adhesión a la Convención de un Estado huésped de una Organización internacional universal. En efecto, una vez que treinta y cinco Estados hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención, siendo uno de ellos el Estado huésped, y que la Convención haya sido aceptada por la Organización correspondiente ¿la Convención es aplicable a todas las misiones permanentes acreditadas ante dicha Organización internacional, o solamente a las misiones permanentes enviadas por los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención?

Si nos fijamos en el texto del artículo 89 de la Convención, parece que la Convención solamente sería aplicable a las misiones permanentes enviadas por los Estados que han ratificado o se han adherido -

.../...

(98) El texto del artículo 89 es el siguiente:"

"1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto-instrumento de ratificación o adhesión.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

.../...

a la Convención. Sin embargo, del texto del artículo dos, párrafo primero, parece deducirse lo contrario, es decir que la Convención una vez ratificada por 35 Estados, y entre ellos el Estado huésped, y aceptada por la Organización internacional correspondiente, sería aplicable a todas las misiones acreditadas ante dicha Organización y no solamente a las misiones permanentes enviadas por los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención.

La elección de una de estas dos alternativas no parece fácil. Los trabajos de la CDI no pueden ilustrarnos en este punto, ya que el texto del artículo segundo propuesto por la CDI era completamente diferente del texto definitivo aprobado por la Conferencia. Hay que tener en cuenta además que la CDI, siguiendo la pauta seguida en anteriores trabajos codificadores, no incluyó en su proyecto los artículos relativos a la ratificación, adhesión y entrada en vigor de la Convención, por lo que la documentación de la CDI tampoco puede ayudarnos a interpretar el artículo 89.

En los documentos de la Conferencia de Viena relativos a la discusión y aprobación del artículo 2 no encontramos tampoco ningún dato que pueda ayudarnos a resolver este problema. En cuanto al artículo 89, hay que señalar que fué aprobado en el Comité de Redacción nombrado por la Conferencia, no siendo accesible la documentación relativa a dicho Comité. En cuanto a las explicaciones dadas por el Presidente del Comité de Redacción en la Comisión plenaria de la Conferencia respecto al artículo 89, se refieren únicamente a la discusión sobre el número de ratificaciones y adhesiones necesario para que la Convención entrase en vigor (99).

(99) Conferencia, Vol. I, p. 50.

Como vemos los "trabajos preparatorios" de la Convención de Viena de 1975 no pueden ayudarnos a elegir una de las dos interpretaciones posibles del artículo 2 y del artículo 89 de la Convención. Parece, por tanto, que debemos investigar cuál ha sido la solución dada en casos similares, es decir como han sido interpretados y aplicados hasta ahora los Acuerdos de sede y las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados.

Cuando estudiamos los Acuerdos de sede vimos como éstos eran acuerdos bilaterales concluidos entre una Organización internacional y su Estado huésped que sin embargo concedían derechos y obligaciones a los Estados miembros de la Organización que había concluido el Acuerdo de sede. Vimos también como el caso de los Acuerdos de sede era una de las excepciones a la regla de Derecho internacional que prohíbe que los tratados tengan efectos respecto a terceros sin el consentimiento de éstos. En cualquier caso, dada la naturaleza bilateral de los Acuerdos de sede, no parece que las reglas que han regido la eficacia de éstos puedan sernos de utilidad para determinar la eficacia de un tratado multilateral como es la Convención de Viena de 1975.

Respecto a las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las NU y los Organismos especializados, el problema se plantea de distinta manera. Tanto una como otra Convención están concebidas como los tratados que deben regir el trato que los Estados miembros de estas Organizaciones deben concederlas. Por esta razón, ambas Convenciones son aplicables sobre el territorio de un Estado miembro desde que dicho Estado se haya adherido a ellas, sin que sea necesario que un cierto número de Estados se haya adherido a ellas para que entren en vigor. Ello quiere decir que las Convenciones generales son aplicables a los representantes de los Estados miembros solamente en la medida en que el Estado huésped se haya adherido a la

Convención, pero sin tener en cuenta si el Estado que envía se ha adherido o no a la Convención general.

Como vemos, la práctica seguida respecto a las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las NU y de los Organismos especializados no nos es de grán utilidad, por ser Convenciones que parten de supuestos distintos que la Convención de Viena de 1975. Parece, por tanto, que hemos de plantearnos el problema de la compatibilidad de los artículos 2 y 89 de la Convención de Viena sin que podamos servirnos de los "trabajos preparatorios de la Convención" y sin que la práctica anterior respecto de los instrumentos internacionales que han regulado el mismo problema pueda ilustrarnos al respecto.

Antes de tratar de dar una solución definitiva al problema que nos planteamos, parece que deberíamos indicar que según el artículo 4 de la Convención ésta no deroga los Acuerdos de sede anteriores que seguirán estando vigentes. Esto podría llevarnos a afirmar que quizá el problema que tratamos de resolver es un problema académico sin grandes consecuencias prácticas. En efecto, aún en el caso de que la Convención llegue a estar en vigor, el estatuto de las misiones permanentes seguirá estando regido por los Acuerdos de sede incluso respecto a las misiones representativas de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención. El hecho de que la Convención tenga un carácter de derecho supletorio simplifica nuestro problema al menos en sus consecuencias prácticas. Sin embargo, el problema teórico subsiste y creemos que no debemos evitar el pronunciarnos sobre él.

Pensamos que la solución correcta sería la de considerar que la Convención sólo estará vigente cuando se hayan producido las ratificaciones o las adhesiones de treinta y cinco Estados, tal como indica -

el artículo 89. Sin embargo creemos que una vez que se hayan producido las treinta y cinco ratificaciones, incluida la del Estado huésped, y que la Convención haya sido aceptada por la Organización internacional correspondiente, la Convención debe ser aplicable a todas las misiones permanentes acreditadas ante dicha Organización internacional. Nos parece lógico que esto sea así ya que las misiones permanentes ante las Organizaciones internacionales siempre recibieron el mismo trato y siempre gozaron del mismo estatuto. Nos parece por tanto que tal como es la redacción del artículo 2 de la Convención, esta igualdad de trato a todas las misiones permanentes debe seguir existiendo. No ignoramos sin embargo que en cualquier caso la solución es dudosa y que la interpretación contraria a la nuestra también podría sostenerse. Este tipo de problemas se solucionan en derecho interno por la vía jurisprudencial. Sin embargo en Derecho internacional, la función interpretativa de la jurisprudencia internacional es, por razones obvias, mucho más limitada.

Un último problema que debemos señalar es el de los Estados que pueden ratificar o adherirse a la Convención. En general las convenciones negociadas " en el marco de las Naciones Unidas " suelen abrirse únicamente a la ratificación o la adhesión de todos los Estados miembros de las NU, de alguno de sus Organismos especializados, del OIEA o que sean parte en el Estatuto del TIJ. Otras veces las Convenciones negociadas " en el marco de las Naciones Unidas " añaden a las categorías anteriores la de los "Estados que sean invitados a firmar, ratificar o adherirse a la Convención de que se trate por la Asamblea General de las Naciones Unidas (100).

(100) Ver, por ejemplo, los artículos 74 y 76 de la Convención sobre las relaciones diplomáticas y los artículos 81 y 83 de la Convención sobre el Derecho de los tratados.

La Convención de Viena de 1975 supone una evolución en este aspecto. El artículo 86 dice:

" La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados".

Y el artículo 88 afirma:

" La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier Estado ".

El hecho de abrir la Convención a la ratificación o a la adhesión de todos los Estados deriva de que en la Asamblea General han triunfado las tendencias que se oponen a que se restrinja la participación en los tratados que codifican el Derecho internacional.. Así la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3233 (XXIX).

" Decide invitar a todos los Estados a que lleguen a ser partes en la Convención sobre las Misiones Especiales, su Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados".

Consecuentemente con la resolución anterior, la Asamblea General en su resolución 3247 (XXIX),

" Decide invitar a todos los Estados a que participen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones internacionales..".

Si la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió invitar a la Conferencia de Viena a "todos los Estados" parece lógico que la Convención de Viena, concluída en dicha Conferencia, esté abierta a la firma, a la ratificación y a la adhesión de "todos los Estados".-

Además, si la Convención de Viena trata de regular el estatuto de las misiones permanentes enviadas por los Estados no miembros de una Organización internacional, es lógico que la Convención esté abierta a la ratificación, y a la adhesión de " todos los Estados".

El problema que se plantea es el del significado de la expresión "todos los Estados". En algunos casos, como por ejemplo en el de Rhodesia del Sur, existe acuerdo general sobre la condición jurídica internacional de dicho territorio. Sin embargo en otros casos el acuerdo sería más difícil y daría lugar a problemas de reconocimiento de Estado que no tendrían siempre fácil solución. De todas formas hemos de tener en cuenta que aunque pueda haber distintas opiniones sobre la validez de una ratificación o una adhesión de un Estado, en el caso de que se discuta su condición de tal, esto no daría lugar a problemas prácticos ya que como veremos en el Capítulo tercero, en el momento de la creación de una misión ante una Organización internacional prevalecerá en definitiva la opinión del órgano competente de ésta sobre el reconocimiento del Estado que tenga la intención de crear una misión.

B) La ratificación de la Convención por parte de las Organizaciones internacionales.

La capacidad de las Organizaciones internacionales para concluir tratados es hoy generalmente admitida, discutiéndose únicamente la amplitud de esta capacidad. En el ámbito del Derecho diplomático, las Organizaciones internacionales han concluido. Acuerdos de sede que son verdaderos tratados bilaterales. Sin embargo las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las NU y de los Organismos especializados son en principio tratados multilaterales abiertos únicamente a la adhesión de los Estados.

A pesar de que las Convenciones generales sobre privilegios e

inmunidades de las NU y de los Organismos especializados están abiertas únicamente a la adhesión de los Estados, la doctrina ha considerado que las NU y los Organismos especializados podían ser considerados - " parte " en dichas Convenciones (101). Esta opinión puede apoyarse - sobre el texto mismo de estas Convenciones. Así la sección 35 de la - Convención general de las Naciones Unidas dice:

" La presente Convención continuará en vigor entre las Naciones Unidas y todos los Miembros que hayan depositado.....".

Y la sección 44 de la Convención de los Organismos especializados - dice:

" La presente Convención entrará en vigor, entre todo Estado- parte en ella y un Organismo especializado, cuando".

La doctrina ha considerado además que la aprobación por la - Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención general - relativa a la ONU equivale a la aceptación de la Convención por parte de la ONU. En cuanto a los Organismos especializados en el preámbulo de la Convención general relativa a éstos se dice:

" En consecuencia, por la resolución 179 (II), de 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General ha aprobado la siguiente Convención, que se somete a la aceptación de los Organismos especializados....".

A pesar de estos antecedentes, las Organizaciones internacionales no habían figurado nunca formalmente como partes en las Convenciones multilaterales de ámbito universal (102). La participación de las Or
.../...

(101) infra., p. 36 , nota (40).

(102) Las Organizaciones internacionales han participado en tratados multilaterales abiertos únicamente a la ratificación o a la adhesión de un número limitado de Estados.

.../...

ganizaciones internacionales en una convención multilateral se planteó en la Conferencia de Viena de 1975.

La Convención de Viena concluída en la Conferencia arriba citada, concede derechos y obligaciones a las Organizaciones internacionales. El problema que se planteó en la Conferencia es si la regla de Derecho internacional según la cual los tratados no afectan a ter-ceros sin su consentimiento era aplicable o no a las Organizaciones internacionales. Algunas delegaciones consideraron que dicha regla no era aplicable a las Organizaciones internacionales. Así la delegación de Checoslovaquia afirmó en la Conferencia:

" Si las Organizaciones internacionales de caracter universal son sujetos de Derecho internacional es precisamente por voluntad de los Estados que las han creado, de modo que los Estados pueden establecer normas e imponer obligaciones a las Organizaciones internacionales" (103).

La mayoría de las delegaciones fueron de la opinión contraria, admitiendo que para la Convención fuera aplicable a las Organizaciones internacionales éstas tenían que prestar su consentimiento. A esta opinión de la mayoría responde el artículo 90 de la Convención cuyo texto es el siguiente:

" Después de la entrada en vigor de la presente Convención, el órgano competente de una Organización internacional de caracter universal podrá decidir aplicar las disposiciones pertinentes de la Convención. La Organización notificará la decisión al Estado huésped y al depositario de la Convención".

(103) Conferencia, Vol. I, p. 51.

Como vemos la Convención ha evitado cuidadosamente el término "ratificación" probablemente para evitar las suspicacias de algunos Estados. Sin embargo no cabe duda que de acuerdo con el artículo 90 - las Organizaciones internacionales se convierten en "partes" de pleno derecho de la Convención de Viena de 1975. En adelante este artículo-90, así como el artículo 2 que condiciona la aplicación de la Convención al cumplimiento del requisito del artículo 90, serán citados como el - ejemplo más claro de la afirmación de la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales universales.

7. El procedimiento de solución de controversias.

Las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados preveían la - jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia como medio de solución de las controversias que pudieran surgir respecto a la interpretación y la aplicación de dichas Convenciones. Respecto de los - contenciosos en los que estuviera implicada una Organización internacional, y habida cuenta de que las Organizaciones no pueden, según el - artículo 34 del Estatuto del TIJ, ser partes en procedimientos contenciosos ante el TIJ, las dos Convenciones generales preveían el sistema - del dictamen obligatorio, sistema equivalente al procedimiento contencioso pero que permite salvar las formas.

La jurisdicción obligatoria del TIJ no era mirada con agrado por Estados pertenecientes al bloque socialista. La cuestión de dicha jurisdicción fué planteada de una forma aguda hacia fines de los años cuarenta. Los Estados socialistas deseaban ser parte en los tratados multilaterales que se concluían por aquel entonces, pero no estaban dispuestos a admitir la jurisdicción obligatoria del TIJ. Los Estados del bloque - occidental por su parte, trataban de poner a los países socialistas ante

la disyuntiva de aceptar la jurisdicción del TIJ o por el contrario no - ser partes de los tratados multilaterales que por entonces se concluían.

La cuestión de la jurisdicción obligatoria del TIJ fué discutida - especialmente con ocasión de la Convención para la prevención y la - represión del crimen de genocidio de 9 de diciembre de 1948 (104). - Algunos Estados socialistas ratificaron dicha Convención introduciendo reservas: una, que no aceptaban la no aplicabilidad de la Convención a los territorios coloniales y otra, que no aceptaban la jurisdicción obligatoria del TIJ que establecía dicha Convención para las controversias que pudieran surgir de su interpretación y su aplicación. La cuestión de la validez de las reservas fué discutida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se decidió pedir un dictamen al TIJ sobre dicho problema. La Asamblea General mediante su resolución-478 (V) de 16 de noviembre de 1950 pedía al TIJ que dictaminara sobre tres preguntas. La primera de ellas, única que retendremos, decía así:

" En lo referente a la Convención para la Prevención y la Sancción del Delito de Genocidio, y en el caso de un Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella formulando reservas en el momento de la ratificación o de la adhesión, o en el de la firma seguida de ratificación:

I. ¿Se puede considerar a tal Estado como parte en la Convención aunque mantenga su reserva si una o más partes en la Convención, pero no otras, formulan objeciones a tal reserva"?

El TIJ respondió a esta pregunta de la forma siguiente:

(104) RTNU, v. 78, p. 279.

" que el Estado que ha formulado y mantenido una reserva a la cual una o varias partes en la Convención han formulado objeciones, - no haciéndolo las otras, puede ser considerado como parte en la Convención si la reserva es compatible con el objeto y el fin de ésta; no puede ser parte en la Convención en caso contrario " (105).

La cuestión de las reservas a las Convenciones multilaterales - ha evolucionado posteriormente con ocasión de la codificación del Derecho de los tratados. En el marco de este trabajo no entraremos en - dicha evolución. Baste decir que después de la opinión del TIJ no se ha considerado posible la inclusión de la jurisdicción obligatoria del - TIJ en las Convenciones multilaterales, al ser dicha jurisdicción objetada por numerosos Estados.

Las cuatro Convenciones de 1958 sobre el Derecho del mar, - la Convención de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la Convención de 1963 sobre relaciones consulares y la de 1969 sobre las misiones especiales optaron por un sistema diferente de solución de diferencias. - Dicho sistema consiste en prever la jurisdicción del TIJ, no en la misma convención, sino en un protocolo separado de firma facultativa. Este sistema es muy poco satisfactorio, porque el protocolo suele ser ratificado por pocos Estados. Además los Estados que lo ratifican suelen ser los mismos que han realizado declaraciones generales de jurisdicción obligatoria del TIJ según el artículo 36, párrafo 2 del estatuto del mismo, por lo que la ratificación del protocolo no tiene ningún valor - efectivo.

Con ocasión de la codificación del Derecho de los tratados se - ha intentado una nueva vía. Se trata de un procedimiento de conciliación que puede ser puesto en funcionamiento cada vez que un Estado - .../...

(105) Réserves à la Convention sur le Génocide, Avis consultatif: CIJ, Recueil 1951, p. 29.

.../...

lo desee. El procedimiento tiene la ventaja de ser aceptable para la mayoría de los Estados, ya que las resoluciones de la Comisión de conciliación no tienen fuerza obligatoria.

La Convención de Viena de 1975, Convención objeto de nuestro estudio, prevé dos sistemas posibles para la solución de los problemas relativos a la aplicación de la Convención. Dichos sistemas son respectivamente un sistema de consultas y un sistema de conciliación.

El artículo 84 de la Convención dice así:

Si entre dos o más Estados Partes se plantea una controversia relativa a la aplicación o a la interpretación de la presente Convención, se celebrarán consultas entre tales Partes a instancia de cualquiera de ellas. La Organización o la Conferencia serán invitadas a asociarse a las consultas a instancia de cualquiera de las partes en la controversia".

Como puede verse, este procedimiento de consulta obligatorio es un procedimiento que si se realiza de buena fé puede evitar que algunos problemas de índole menor se conviertan en problemas importantes por falta de comunicación. Si las consultas no dan resultado en el plazo de un mes, cualquiera de los dos Estados pueden darlas por terminadas una vez transcurrido dicho plazo.

El proyecto de la CDI preveía que las consultas fueran tripartitas añadiendo a la participación de los dos Estados la de la Organización de que se tratara. La intervención de la Organización es deseable en cuanto la Organización sea capaz de jugar el papel de amigable componedor. Sin embargo, algunas Organizaciones, y especialmente la OIT, (106), se declararon reacias a admitir este papel. La redac-
.../...

(106) Naciones Unidas, "Observaciones de los Estados miembros", - ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 445.

.../...

ción del artículo 84 es por tanto el fruto de un compromiso. En principio las consultas se realizan entre los dos Estados entre los que exista la diferencia, pero cualquiera de ellos puede pedir que la Organización intervenga.

Si las consultas no dan resultado, cualquiera de los Estados que participen en ellas tiene derecho a comenzar el procedimiento de conciliación regulado en el artículo 85 de la Convención. Este procedimiento consiste en la formación de una comisión de conciliación de tres miembros, uno nombrado por cada parte y un tercero neutral. La Comisión puede funcionar aunque un Estado se niegue a nombrar a su representante. Además, si los dos representantes de cada Estado no se ponen de acuerdo sobre la designación del tercer miembro de la Comisión éste es designado por el más alto funcionario administrativo de la Organización.

La Comisión desde que empieza a funcionar tiene dos meses para tratar de poner de acuerdo a las partes. Si el acuerdo no se consigue, la Comisión pasa a redactar sus conclusiones respecto a los hechos y al derecho aplicable, emitiendo sus recomendaciones que son - trasmitidas a las partes de la controversia. Estas no están obligadas - por el informe y las recomendaciones de la Comisión a menos que hayan prestado su acuerdo de antemano.

El sistema de conciliación tiene el mérito de ser aceptable para todos los Estados y de ser bastante agil, de forma que en el espacio - de varios meses la Comisión de conciliación tiene que emitir su informe y sus conclusiones. El defecto del sistema es la necesidad de la buena voluntad de los Estados para que dé resultados efectivos.

Como vemos, tanto el sistema de consultas como el de conciliación están previstos para las controversias que puedan existir entre dos Estados; uno de ellos será siempre, salvo casos excepcionales, el Es

tado huésped. La Convención no prevé por tanto las posibles diferencias entre el Estado huésped y la Organización internacional.

En el sistema de los Acuerdos de sede la solución de controversia estaba prevista de una forma completamente diferente. Los Acuerdos de sede son tratados bilaterales y por esta razón solamente las partes del acuerdo podían poner en funcionamiento el sistema de solución de diferencias, que consiste normalmente en un sistema de arbitraje obligatorio realizado por un tribunal de tres árbitros, el tercero nombrado por los otros dos o, en caso de desacuerdo, por el presidente del TIJ.

Como vemos, una vez que la Convención esté vigente existirán dos posibles sistemas de solución de diferencias: el propio de la Convención y el de los Acuerdos de sede, (que parece que sigue vigente por aplicación del apartado "a" del artículo 4 de la Convención). El criterio para decidir cual de los dos sistemas es el que debe utilizarse, viene dado por la cualidad de las partes de la diferencia. Si la diferencia se produce entre dos Estados, el procedimiento válido es el de la Convención; por el contrario, si la diferencia se produce entre el Estado huésped y la Organización, el procedimiento aplicable es el del Acuerdo de sede. Sin embargo, puede suceder que aunque la diferencia se plantee entre dos Estados, uno de ellos pretenda poner en funcionamiento el sistema de arbitraje, sobre todo si se trata de dictaminar sobre la aplicación de un precepto contenido en el Acuerdo de sede, lo cual es posible aunque la Convención esté vigente por aplicación del artículo 4 apartado "a". En este caso, parece que debe ser la Organización la que determine si la diferencia entre los dos Estados es una diferencia que afecta al desarrollo de las actividades de la Organización. La cuestión de todas formas es dudosa pues cualquiera que sea la decisión de la Organización, los dos Estados podrán oponerse a su decisión con buenos argumentos para hacerlo. Ello no puede ser de otra forma pues la aplicación del artículo 4 apartado "a" tiene que dar lugar necesariamente a problemas y ambigüedades como hemos señalado más arriba.

Otro punto oscuro es el derecho aplicable por el tribunal arbitral, caso de que llegue a constituirse. El tribunal arbitral ¿tendría que limitarse a estatuir sobre la base jurídica del Acuerdo de sede? ó ¿podría por el contrario basarse también en la Convención? Lo primero parece cierto. Aunque esta interpretación parezca un poco artificiosa no nos parece posible llegar a otra. Si se aplica el artículo 4 apartado "a", hay que admitir que los procedimientos arbitrales previstos en los Acuerdos de sede siguen siendo válidos siempre que la Organización acepte constituirse en parte de la diferencia. Por otra parte, el compromiso arbitral estaba previsto en el Acuerdo de sede y para el Acuerdo de sede, por lo que no nos parece posible extenderlo a la interpretación de las normas de la Convención. Sin embargo parece que las normas de ésta pudieran servir de base al tribunal arbitral en la medida en que recojan normas consuetudinarias.

CAPITULO SEGUNDO:EL CONCEPTO DE RELACIONES DIPLO- MATICAS.

Las relaciones diplomáticas son un tipo especial de relaciones - jurídicas internacionales que se establecen entre dos sujetos de Dere - cho internacional. El contenido de dicha relación supone la creación, - el mantenimiento y, eventualmente, la desaparición de órganos, que - por la generalidad de sus competencias y su situación geográfica, pue - den asegurar la continuidad de la comunicación entre dos sujetos de De - recho internacional.

Las relaciones diplomáticas han surgido históricamente como res - puesta a la necesidad de facilitar las relaciones entre los Estados que - formaban parte de la Comunidad internacional. En nuestros días la exis - tencia de las relaciones diplomáticas se basa en los mismos supuestos y en las mismas razones que en los siglos pasados. Sin embargo, los - cambios profundos que ha sufrido la Comunidad internacional en los úl - timos años no han dejado de tener influencia sobre las relaciones diplo - máticas en tanto que institución jurídica. Tales cambios implican que las relaciones diplomáticas no pueden considerarse ya como un fenómeno - entre Estados, sino entre sujetos de Derecho internacional en general. Esta es la razón que nos ha llevado a pensar que en el marco de es - te trabajo era posible y necesario un intento de síntesis de las relacio - nes diplomáticas desde un punto de vista jurídico. Para ello analizare - mos sucesivamente las relaciones diplomáticas entre las distintas clases de sujetos del orden internacional que forman la Sociedad internacional de nuestros días.

1. Las relaciones diplomáticas entre Estados.

Las relaciones diplomáticas entre Estados, en sentido amplio se realizan a través de los contactos entre los órganos que aseguran su - representación. Según la continuidad y la situación geográfica de dichos

órganos podemos distinguir entre dos tipos posibles de diplomacia: la diplomacia ad hoc y la diplomacia permanente que es la que da lugar a las relaciones diplomáticas en el sentido técnico de la palabra. En el ámbito de este trabajo solamente nos ocuparemos de la diplomacia permanente.

La diplomacia permanente supone la creación, el mantenimiento y, eventualmente, la desaparición de órganos, llamados misiones, que aseguran la representación de un Estado. " Estado que envía " o " Estado acreditante ", sobre el territorio de otro Estado que la recibe, " Estado receptor ".

Las relaciones diplomáticas entre Estados suelen ser recíprocas, es decir suponen la creación simultánea de dos misiones que aseguren la representación de ambos Estados. Sin embargo, ni desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista jurídico es obligatorio que ello sea así, pudiendo existir relaciones diplomáticas permanentes, como de hecho sucede, que den lugar únicamente a la creación de una misión.

Las normas jurídicas que rigen las relaciones diplomáticas entre Estados son casi en su totalidad de origen consuetudinario. Dichas normas consuetudinarias han sido codificadas, dando lugar a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961. La existencia de dicha Convención ha supuesto una gran disminución de la importancia de las normas consuetudinarias, que sólo rigen en defecto de las normas convencionales y para los escasos Estados que no son partes en dicha Convención.

1. Los presupuestos de las relaciones diplomáticas.

Desde el punto de vista jurídico el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados supone la existencia previa de ciertos presupuestos sin los cuales la relación diplomática no puede existir. Dichos presupuestos son la existencia de dos sujetos, dos Estados en nuestro caso, con personalidad jurídica internacional, el reconocimiento de Estado y de gobierno entre dichos Estados y sus gobiernos y un acuerdo es

pecífico sobre el establecimiento de dichas relaciones. Estos tres presupuestos serán examinados separadamente.

A) La personalidad internacional.

La cuestión de la personalidad jurídica de las personas morales ha sido desde antiguo objeto de vastas disputas jurídicas. La doctrina se ha dividido tradicionalmente en dos tendencias. La primera partiría de la llamada "teoría de la ficción" y la segunda de la "teoría realista". En nuestros días la disputa, aunque latente, ha perdido la mayor parte de su intensidad y la mayoría de la doctrina actual tiende a considerar a la "personalidad jurídica" de las personas morales como un expediente técnico que sirve para sistematizar jurídicamente una serie de realidades fácticas.

En lo que se refiere al Derecho internacional, el estudio de la personalidad jurídica de los Estados tiene una importancia más histórica que actual. La existencia de las colonias, de los protectorados, de los distintos tipos de mandatos y de los territorios sometidos a tutela, daba lugar a largas disquisiciones jurídicas sobre los distintos grados de personalidad que poseían dichos Estados o dichos territorios. La desaparición del colonialismo y la afirmación del principio de igualdad soberana de los Estados, ha restado al problema de la personalidad de los Estados gran parte de su interés. La mayoría de la doctrina considera inútil el intento de establecer una lista exhaustiva de los derechos y deberes que componen el contenido de la personalidad jurídica de los Estados. La resolución de la Asamblea General de las NU 2625(XXV) que aprobó la "declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, dice a este respecto:

"Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados".

Como vemos la Asamblea General no ha considerado necesario

el especificar en qué consiste dicha personalidad. Ello es lógico en la medida en que el contenido de la personalidad internacional supone un número indeterminado de derechos y deberes. De esta opinión es CAHIER, que afirma que :

" las personas internacionales (los Estados se incluirían en esta categoría) son entidades titulares de un número indeterminado de derechos y de deberes que gozan de una competencia general "(1).

En lo que se refiere a las cuestiones diplomáticas (las únicas que nos interesan en este momento) una parte de la doctrina ha planteado el problema de la existencia de un " derecho de legación " como uno de los posibles elementos de la personalidad de los Estados. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas ha acabado con la disputa sobre el derecho de legación, negando implícitamente la existencia de dicho derecho. Sin embargo algunos autores como MARESCA y REICHLING parecen partidarios de la continuidad de la existencia de dicho derecho. Así MARESCA afirma a este respecto :

" presupuesto de la existencia de una misión es la titularidad - por parte del Estado que envía del derecho de legación activo y por parte del Estado que recibe del Derecho de legación pasivo "(2).

REICHLING afirma en el mismo sentido :

" Una vez cumplido el requisito previo del reconocimiento y en ausencia de impedimentos particulares, existe para los dos Estados - una obligación de comenzar negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas " (3).

(1) CAHIER, Derecho diplomático, p. 87.

(2) MARESCA, La missione diplomatica, Milan, Giuffrè, 1964, p.46.

(3) REICHLING, Le droit de légation des Communautés Européennes, Heule, Editions UGA, 1964, p. 13.

Las afirmaciones de estos dos autores no pueden ser defendidas en el momento actual. Comentando la afirmación de MARESCA, CAHIER ha afirmado:

" Estos conceptos (se refiere al derecho de legación activo - y pasivo) nacen de la mala interpretación de la noción de personalidad jurídica internacional. Puesto que, salvo prueba en contrario, la persona jurídica internacional posee una competencia ilimitada y un número de derechos y deberes indeterminado, dicha persona posee también el derecho de legación, el cual no es más que una consecuencia inevitable de la personalidad jurídica internacional " (4).

La opinión de CAHIER es totalmente acertada. Hay que recordar que el primitivo proyecto de convención sobre las relaciones diplomáticas presentado por SANDSTRON a la Comisión de Derecho Internacional mencionaba el derecho de legación de los Estados (5). La Comisión consideró sin embargo que el proyecto debía ser modificado. A este respecto el jurista egipcio EL-ERIAN afirmó que :

" El establecimiento de relaciones diplomáticas constituye simplemente el atributo de un sujeto de derecho internacional. No puede ser considerado como un derecho, si se tienen presentes las circunstancias en que puede crearse un nuevo Estado, así como las disposiciones del Derecho internacional en materia de reconocimiento " (6).

Contrariamente a la opinión del EL-ERIAN, el Gobierno checoslovaco observó respecto al proyecto de artículos lo siguiente:

(4) CAHIER, Derecho diplomático, p. 88

(5) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Diplomatic - intercourse and immunities. Rapport présenté par M.A.E.F. SANDSTRON, rapporteur spécial", Yearbook of the International Law Commission, 1955, Vol.II, p. 10.

(6) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, Vol.1, 38 5ª sesión, p. 312.

" Es conveniente que en el título I del proyecto se exprese el principio de que todos los Estados tienen el derecho de legación "(7).

Debe notarse que el Gobierno checoslovaco fué el único que - hizo una observación de este tipo. En la conferencia de Viena, dicho Gobierno mantuvo su postura pidiendo la inclusión del "derecho de legación". El texto de la propuesta checoslovaca decía así :

" Todo Estado posee el derecho de legación que comprende el derecho de enviar y recibir agentes diplomáticos " (8).

La propuesta de Checoslovaquia no fué aceptada por la Conferencia. El artículo I de la Convención de 1961 se limita a decir :

" El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo".

El comentario de la CDI a dicho artículo dice así :

" La doctrina habla a menudo de un "derecho de legación" correspondiente a todo Estado soberano, la interdependencia de las naciones y el interés de fomentar las relaciones amistosas entre ellas, - que constituye uno de los fines de las Naciones Unidas, requieren el establecimiento de relaciones diplomáticas. Pero como el derecho de legación no puede ejercerse sin el acuerdo de las partes, la Comisión
.../...

(7) Naciones Unidas, "Observaciones presentadas por los gobiernos - al proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la CDI en su 9º período de sesiones, - celebrado en 1957", Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, Vol. II, p. 124.

(8) Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, Viena 2 de marzo-14 de abril de 1961, Documentos oficiales, Vol.II, p.9 (A/CONF.20/C.1/L.7). - (En adelante: Conferencia de Viena de 1961, Vol. II.....).

.../...

ha creído que no debía mencionarlo en el texto del proyecto " (9).

B) El reconocimiento de Estado y de gobierno.

El reconocimiento es un acto por el cual un Estado constata una situación de hecho y admite que dicha situación le es oponible (10).

El reconocimiento en tanto que institución puede tener diversas modalidades. Así hoy día puede hablarse de reconocimiento de Estado, reconocimiento de gobierno, reconocimiento de beligerancia, reconocimiento de insurgentes, etc. Por nuestra parte solamente prestaremos atención al reconocimiento de Estado y de gobierno, únicos que tienen relevancia para el estudio de las relaciones diplomáticas entre Estados.

El reconocimiento de Estado puede definirse como el acto por el cual uno o varios Estados constatan la existencia de otro Estado (11).

La naturaleza del reconocimiento de Estado ha dado lugar a extensas controversias entre los teóricos del Derecho internacional. La controversia se centra sobre todo en dos cuestiones, la primera es la de la discrecionalidad u obligatoriedad del acto de reconocimiento. La segunda versa sobre el carácter constitutivo o declarativo que tiene el reconocimiento respecto de la existencia de un Estado.

(9) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, " Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas ", ACDI, - 1958, Vol. II, p. 97.

(10) SALMON, La reconnaissance d'Etat, Paris, Armand Colin, 1971, p. 11.

(11) La definición sobre la que nos hemos apoyado es la del Instituto de Derecho Internacional, dada en su sesión de Bruselas de 1936 y que dice como sigue: "El reconocimiento de un Estado nuevo es el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier Estado existente, capaz de observar las prescripciones del Derecho internacional y manifiestan en consecuencia su voluntad de considerarla como miembro de la Comunidad internacional. Citada en Dictionnaire de la terminologie du Droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 511.

La cuestión de la obligatoriedad o discrecionalidad del reconocimiento va unida o se confunde con la discusión sobre el carácter político o jurídico del reconocimiento. Si el reconocimiento es un acto político, cada Estado es libre de reconocer o no reconocer a otro Estado. Por el contrario, si el reconocimiento es un acto jurídico, el reconocimiento de un Estado es obligatorio respecto de un Estado que cumpla ciertos requisitos.

La obligatoriedad del reconocimiento ha sido mantenida por parte de la doctrina. Así GUGGENHEIM ha afirmado a este respecto que:

" si las condiciones del reconocimiento de Estados se cumplen, - existe obligación de realizarlo " (12).

En el mismo sentido que GUGGENHEIM, LAUTERPACHT sostuvo que los Estados estaban obligados a reconocer a aquellas entidades que reunieran los requisitos fácticos de un Estado, aunque admitía la excepción del Estado creado como resultado de un acto ilícito (13).

Las opiniones de GUGGENHEIM y LAUTERPACHT pueden ser consideradas hoy como minoritarias. En el momento actual, la mayoría de la doctrina considera que el acto de reconocimiento es un acto libre. SALMON afirma a este respecto que:

" El acto de reconocimiento es un acto libre, no tiene ningún carácter obligatorio y no se corresponde con ninguna competencia vinculada " (14).

(12) GUGGENHEIM, op. cit., Tomo I, p. 191, nota 1.

(13) LAUTERPACHT, Recognition in International Law, 1947, p.74.- La cita la hemos tomado de AKEHURST, Introducción al Derecho internacional, traducción española con notas de M. Medina, Madrid, Alianza, 1972, p. 101.

(14) SALMON, op. cit., p. 29.

En el mismo sentido VERHOEVEN afirma :

" El acto (de reconocimiento) es libre porque es producto de una competencia discrecional " (15).

La práctica estatal confirma las opiniones sobre el carácter libre del reconocimiento. Sin embargo la afirmación de la liberalidad del reconocimiento no puede llevarse hasta el extremo de no admitir que el acto de reconocimiento puede tener algunas limitaciones.

Historicamente han existido muchos casos en que se ha tratado de "legislar" sobre el reconocimiento. Dicho intento de someter el reconocimiento a normas jurídicas ha ido a menudo unido a la negativa de reconocer situaciones creadas por la fuerza. Así por ejemplo, por el tratado de alianza firmado en San Petersburgo en abril de 1805, Rusia, Gran Bretaña y Austria se obligaban a no reconocer las conquistas napoleónicas (16). En el mismo sentido puede considerarse que del Protocolo de Aix-la-Chapelle firmado en 1818 por Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia y Austria se deducía una obligación de no reconocer cualquier situación surgida de un ataque contra el régimen monárquico (17). Sin embargo, dicha obligación implícita no fué cumplida respecto de la independencia de las colonias españolas en América, pues Inglaterra reconoció a Méjico y a Colombia a fines de 1824 (18).

Ya en nuestro siglo la cuestión de la obligatoriedad del reconocimiento se planteó en relación al problema de si la admisión de un Estado como miembro de la Sociedad de Naciones implicaba que dicho Es
.../...

(15) VERHOEVEN, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris, A. Pedone, 1975, p. 581.

(16) SHARP, Non recognition as a legal obligation, (Thèse présentée à l'Université de Genève, Lieja, 1934, p. 17.

(17) ibid., p. 23 .

(18) ibid., p. 31.

.../...

tado era reconocido por el resto de los Miembros de la Sociedad de Naciones. La cuestión de la obligatoriedad del reconocimiento se planteaba respecto de la interpretación del artículo 10 del Pacto que decía - como sigue:

" Los miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los miembros de la Sociedad...".

Del texto del artículo 10 podía deducirse que para que un Estado se obligue a "respetar y mantener la integridad territorial y la independencia política de otro Estado", éste debía ser reconocido por aquel. La práctica de los órganos de la Sociedad de Naciones confirmó dicha interpretación. Así en 1920 el Consejo se negó a aceptar la adhesión de Colombia a la S. de N., pues dicho país pretendía introducir una reserva afirmando no reconocer la independencia de la República de Panamá. Por su parte la Asamblea decidió retrasar la admisión de los países bálticos (de 1920 a 1921) por faltarles en aquel entonces el requisito del reconocimiento de las grandes potencias (19). La admisión como miembros de la S. de N. de los Estados que aparecieron en la escena política internacional con posterioridad a 1919 significaba según ROUSSEAU, su reconocimiento por el resto de los miembros (20).

Si de la admisión de un Estado como miembro de la Sociedad de Naciones podía deducirse su reconocimiento por el resto de los miembros de la Sociedad, el artículo 10 del Pacto también podía interpretarse en el sentido de que existía una obligación de no reconocimiento de las situaciones creadas mediante acciones contrarias al Pacto. -

(19) ROUSSEAU, Derecho internacional público, traducción española de F. Gimenez, Barcelona, Ariel, 1966, p. 297.

(20) ibid., p. 297.

Esta interpretación se afianzó con la firma en 1928 del Pacto BRIAND-KELLOGG.

La cuestión de la obligación de no reconocer se planteó concretamente en 1932 respecto de la creación del "Estado" de Mandchoukouo. El 7 de enero de 1932, el Secretario de Estado de los EE.UU. Henri L. Stimson dirigía una nota a los gobiernos de China y Japon en la que decía :

" que el gobierno americano no reconocerá ninguna situación, - tratado o acuerdo que pueda ser conseguido mediante medios contrarios a los acuerdos y obligaciones del Pacto de París de 27 de agosto de - 1928, del que China y Japón así como los EE.UU. son partes" (21).

En el mismo sentido los miembros del Consejo de la Sociedad de Naciones dirigían una nota al Japón el 16 de febrero de 1932, que decía :

" ... ninguna violación a la integridad territorial y ningún cambio en la independencia política de cualquier miembro de la Sociedad - realizado en violación del artículo 10 del Pacto deberán ser reconocidos como válidos y efectivos por los miembros de la Sociedad de Naciones" (22).

La nota norteamericana, que después ha sido conocida como "doctrina Stimson" y la nota de los miembros del Consejo de la S. de N. dió lugar a la resolución de la Asamblea de la Sociedad de Naciones de 12 de marzo de 1932 que fué aprobada por 44 votos a favor y dos abstenciones. En dicha resolución la Asamblea.

"... proclama el caracter obligatorio de los principios mencionados y declara que los miembros de la S. de N. están obligados a-
.../...

(21) Ver el texto en AJIL, Vol. XXVI, 1932, p. 342.

(22) ibid., p. 343.

.../...

no reconocer ninguna situación, ningún tratado ni ningún acuerdo que puedan ser obtenidos por medios contrarios al Pacto de la Sociedad de Naciones o al Pacto de Paris " (23).

La resolución anterior fué aplicada concretamente al caso de Mandchoukouo mediante la aprobación por la Asamblea de la S. de N., el 24 de febrero de 1933, de un informe preparado por un " comité - ad hoc ". En dicho informe puede leerse :

" los miembros de la S. de N. continuarán sin reconocer este regimen ni de iure ni de facto " (24).

" Esta doctrina del no reconocimiento, brillantemente inaugurada, fué rapidamente abandonada por la S. de N.. Aunque fué reafirmada por el Consejo, el 18-3-33, en el " affaire " Leticia que oponia Colombia a Perú, desapareció definitivamente con ocasión del conflicto entre Etiopia e Italia

Después de su declaración " incolora " de 4-7-36, la Asamblea de la S. de N. se mostró impotente para imponer a Italia sanciones efectivas ...

En mayo de 1938 el Consejo juzgó preferible dejar a cada miembro la libertad de decisión " (25).

En el momento de la creación de las Naciones Unidas, algunas delegaciones en la Conferencia de San Francisco expresaron sus deseos de introducir en la Carta una obligación jurídica de no reconocer las situaciones creadas por medios contrarios a la Carta de las Naciones Unidas. La delegación inglesa se opuso a la inclusión de la obligación de no reconocimiento en los siguientes términos:

.../...

(23) Ver SALMON, op.cit., p. 71 y 72

(24) ibid., p. 72

(25) VERHOEVEN, op.cit., p. 288

.../...

" si la comunidad de Estados no cumple la misión de impedir - las adquisiciones ilícitas de territorios por la fuerza, o de hacer res - tituir dichos territorios el simple reconocimiento de su ilegalidad no ha sido de ninguna utilidad sino al contrario ha creado numerosas diferen - cias jurídicas " (26).

La propuesta de introducir en la Carta la regla del no recono - cimiento no prosperó y la Carta unicamente prescribe que :

" Los Miembros de la Organización, en sus relaciones interna - cionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuer - za contra la integridad territorial o la o la independencia política de cual - quier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Uni - das " (27).

La Carta tambien prevé la ruptura de las relaciones diplomáti - cas entre las medidas que puede adoptar el Consejo de Seguridad en - caso de amenazas a la paz, quebrantamientos a la paz o actos de agre - sión (28).

Si la Carta de las Naciones Unidas no preveía ninguna obliga - ción de no reconocimiento, parece que en el momento actual puede ha - blarse de una regla jurídica de no reconocer que ha sido creada en el marco de dicha Organización con ocasión de la descolonización. Así, - con posterioridad a la declaración de independencia de Rhodesia del Sur, el Consejo de Seguridad emitió dos resoluciones, de fechas 12-11-65 y - 20-11-65, en las que se dice:

" EL CONSEJO DE SEGURIDAD decide pedir encarecidamen -

.../...

(26) Citado en VERHOEVEN, op. cit., p. 291.

(27) artículo 2, párrafo 4.

(28) artículo 41.

.../...

te a todos los Estados que no reconozcan este regimen de una minoria racista de Rhodesia del Sur y que se abstengan de prestar asistencia a ese regimen ilegal ".

En la segunda resolución puede leerse :

" EL CONSEJO DE SEGURIDAD encarece a todos los Estados que no reconozcan esa autoridad ilegal ni mantengan relaciones diplomáticas o de otra índole con esa autoridad ilegal ".

La resolución de la Asamblea General de las N.U. 2022(XX) hace un llamamiento a todos los Estados

" para que no reconozcan a ningún gobierno de Rhodesia del Sur que no sea representativo de la mayoría de la población ".

Las relaciones anteriores han sido seguidas de forma mayoritaria. Parece por tanto que en el marco de la descolonización podría hablarse de una regla de no reconocimiento, lo que no implica que las Naciones Unidas puedan imponer en general a sus miembros la obligación de no reconocer una situación concreta.

La cuestión de la obligación de no reconocimiento ha sido planteada también respecto al caso de Namibia. Las diversas resoluciones de los órganos de las N.U. sobre el caso de Namibia han sido interpretadas por VERHOEVEN " como la puesta en vigor de una doctrina de no reconocimiento " (29). Esta obligación de no reconocimiento ha sido afirmada por el TIJ en su dictamen de 21-6-71 sobre el Sudoeste africano. En dicho dictamen el TIJ afirma :

" que los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de reconocer la ilegalidad de la presencia de Africa del Sur

.../...

(29) VERHOEVEN, op. cit., p. 296

.../...

en Namibia y la falta de validez de las medidas tomadas por ella en nombre de Namibia o que puedan afectarla, y de abstenerse de todo acto y de toda relación con el gobierno sud-africano que implique el reconocimiento de la legalidad de esta presencia y de esta administración ..."(30).

De todo lo anterior no podemos sino deducir, a modo de conclusión, que en el estado actual del derecho internacional el reconocimiento es un acto libre pero que sin embargo existen ciertas limitaciones con caracter de norma jurídica que han sido creadas en el marco de las Naciones Unidas.

Respecto del caracter constitutivo o declarativo del reconocimiento diremos que en el momento actual la doctrina se declara mayoritariamente por el caracter declarativo del mismo. Ello es casi consecuencia obligada del caracter libre del mismo que hemos analizado anteriormente.

La teoría del caracter constitutivo del reconocimiento, válida en un cierto estado de evolución de la sociedad internacional, no puede ser admitida hoy. Además la división este-oeste y norte-sur que sufre la sociedad internacional en la actualidad hace que cualquier Estado que cuente con las tres condiciones de territorio, población y gobierno efectivo pueda conseguir que un cierto número de Estados le reconozcan. Sin embargo el reconocimiento puede en algunos casos tener efectos constitutivos. Recordemos el caso de Rhodesia del Sur. La inexistencia jurídica de dicho régimen se basa en la ilegalidad de su origen, sin embargo si dicho régimen hubiera conseguido un gran número de reconocimientos éstos habrían sanado el vicio inicial de forma que nos encontraríamos en presencia de un Estado.

(30) Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) non obstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, Avis Consultatif, CIJ. Recueil 1971, p. 58.

De la misma forma que en el caso de Rhodesia del Sur si la Republica Saharai recientemente proclamada fuera reconocida por un gran número de Estados, podría hablarse de la existencia de un Estado, si su gobierno fuera capaz de controlar efectivamente una cierta parte del conjunto territorial que constituía el antiguo Sahara español.

El tratamiento jurídico del reconocimiento de gobierno no puede diferir mucho del que hemos dado al reconocimiento de Estado. Aunque desde un punto de vista teórico existe una distinción neta entre el reconocimiento de Estado y el reconocimiento de gobierno, esta distinción tiende a confundirse, según NKAMBO MUGERWA, en los casos de guerra civil, revolución u otro cambio radical (31). Además afirma NKAMBO MUGERWA, " el reconocimiento de un nuevo Estado es implícitamente un reconocimiento de su gobierno ".

Siguiendo al mismo autor diremos que " la distinción entre un cambio de Estado y un cambio de gobierno es importante para la comprensión adecuada de la naturaleza legal del reconocimiento de los gobiernos. 1) En el reconocimiento de los gobiernos no hay problema de creación de nuevos sujetos de Derecho internacional. La personalidad internacional es la del Estado, y ella sobrevive a los cambios de gobierno. 2) La distinción hace posible definir las relaciones de un Estado con otro cuyo gobierno no ha sido reconocido por aquél. 3) En materia de sucesión, el problema de si el cambio se refiere a la condición de Estado o al gobierno, tiene gran significación " (32).

(31) NAKAMBO MUGERWA, " Sujetos de Derecho internacional " en SORENSEN, Manual de Derecho internacional, traducción española a cargo de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, revisión y adiciones a la edición en español de B. Sepulveda, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 279.

(32) ibid., p. 280

Como hemos dicho anteriormente, el reconocimiento de un Estado supone, normalmente, el reconocimiento implícito de su primer gobierno. El problema del reconocimiento no se plantea respecto de los gobiernos que se suceden progresivamente según las normas constitucionales del Estado que se trate. La cuestión del reconocimiento se plantea, sin embargo, caso de cambio de gobierno, faltando a las normas constitucionales, es decir en casos de golpe de estado, guerra civil, etc.

El reconocimiento de gobierno es, como el reconocimiento de Estado, un acto libre. Sin embargo, como en el caso del reconocimiento de Estado, en algunos casos se ha tratado de someter el reconocimiento de gobierno a normas jurídicas. " Los Estados centroamericanos (Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador) firmaron en Washington, el 20 de febrero de 1907, un tratado por el que se comprometían a no reconocer los gobiernos llegados al poder, en las cinco repúblicas, mediante un golpe de Estado o una revolución, antes de la renovación constitucional del país a base de una elección popular. Esta declaración, basada en una sugerencia del ministro de Asuntos Exteriores del Ecuador, Dr. Tobar, y reforzada aún más por el tratado de 7 de febrero de 1923, suele llamarse doctrina de Tobar. Sirvió también de pauta a Estados Unidos en sus relaciones con Centroamérica hasta 1913. En 1932, sin embargo, el tratado en cuestión fué denunciado por Costa Rica y El Salvador, lo que contribuyó a que Estados Unidos modificase a su vez su actitud " (33).

La práctica de los Estados sobre el reconocimiento se fundamenta sobre lo que se ha dado en llamar " doctrina Estrada ". Esta doctrina fue formulada el 27 de septiembre de 1930 por el Ministro de Asuntos

.../...

(33) VERDROSS, Derecho internacional público, traducción española con adiciones y bibliografías complementarias de A. Truyol y Serra con la colaboración de M. Medina Ortega, Sexta edición, Madrid, Aguilar, 1976, p. 303.

.../...

Exteriores de Méjico para evitar los problemas de calificación de reconocimiento, afirmando que en lo sucesivo su país se limitaría a mantener o retirar, cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, también cuando lo considere conveniente, a los agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en Méjico. Aunque el tenor literal de esta declaración va en el sentido de una absoluta facultad discrecional de los Estados en materia de relaciones diplomáticas, problema distinto conceptualmente del de reconocimiento de gobiernos, ha sido interpretada generalmente en el sentido de que el reconocimiento no se subordina a ninguna condición" (34).

La liberalidad del reconocimiento de gobierno, afirmada por la doctrina Estrada, sigue vigente en nuestros días. En la Carta de las Naciones Unidas no se contiene ninguna norma al respecto. Más aún, la Asamblea General ha afirmado en su resolución 396 (V)

" que la actitud adoptada por la Asamblea General o por su Comisión Interina respecto a una cuestión de esta naturaleza (se refiere al reconocimiento por las NU de la representación de un Estado miembro), no surtirá efecto de por sí sobre las relaciones directas de los Estados-miembros con el Estado en cuestión".

A pesar de la liberalidad de la resolución de la Asamblea General, el problema de Rhodesia, como hemos podido observar más arriba, ha dado lugar a la creación de una normativa respecto al reconocimiento de gobierno. El caso de Rhodesia es en realidad uno de los casos en que la cuestión del reconocimiento de Estado se confunde con la del reconocimiento de gobierno, por lo que es pertinente que lo citemos como una de las limitaciones del reconocimiento de gobierno.

(34) AKEHURST, op. cit., p. 112.

Respecto de la relación entre el reconocimiento y la existencia de relaciones diplomáticas, la doctrina es unánime en que el reconocimiento es un requisito previo de la existencia de las relaciones diplomáticas. - La existencia de éstas supone que existe el reconocimiento de Estado y de gobierno entre los Estados que intercambian las misiones diplomáticas. No sucede lo mismo a la inversa, pues de la inexistencia de relaciones diplomáticas no tiene que deducirse necesariamente el no reconocimiento.

En casos de cambios de gobierno por vía de golpe de Estado o de guerra civil el mantenimiento de una misión diplomática más allá de un cierto periodo de tiempo, supone el reconocimiento implícito del nuevo gobierno.

C) La necesidad de un acuerdo previo.

Como hemos visto más arriba el reconocimiento mutuo entre dos Estados y sus gobiernos respectivos no implica necesariamente la existencia de relaciones diplomáticas. Para que las relaciones diplomáticas comiencen, se necesita además de los dos requisitos anteriores un acuerdo cuyo contenido es precisamente la creación de dichas relaciones.

La necesidad de un acuerdo previo al establecimiento de las relaciones diplomáticas es generalmente aceptada. Parece lógico admitir que no existe ninguna razón ni ninguna norma que pueda obligar a un Estado a tolerar el establecimiento sobre su territorio de órganos representantes de un poder extranjero.

Esto es así pues incluso los partidarios de la existencia del "derecho de legación" admiten la necesidad de un acuerdo que posibilite el ejercicio de dicho "derecho". Así ZOUREK ha afirmado en el seno de la Comisión de Derecho Internacional que :

" el derecho de legación, tanto activo como pasivo, al igual que el derecho a concertar tratados, es un derecho de caracter general que co-

rresponde a todo Estado, aunque su ejercicio en casos concretos dependa del consentimiento de los demás Estados interesados " (35).

FITZMAURICE en el seno de la misma Comisión ha dicho que:

" en la práctica un Estado que pertenezca a la comunidad de las naciones y que sea miembro de las Naciones Unidas, como casi todos los Estados en la actualidad, procedería de manera insólita si se negara a establecer relaciones diplomáticas con otro Estado, de no ser por razones puramente excepcionales y pasajeras, como por ejemplo el no reconocimiento " (36).

SCELLE, en el mismo sentido que FITZMAURICE ha afirmado que :

" ningún Estado puede legítimamente negarse a establecer relaciones diplomáticas con otro Estado que desee entablarlas, salvo en circunstancias excepcionales " (37).

Debe notarse que ningún jurista llega a atreverse a afirmar que el acuerdo previo a la creación de una misión no es necesario. FITZMAURICE se refiere a " los Estados que actúen de manera insólita " y SCELLE admite la existencia de " casos excepcionales ".

Como vemos, la doctrina en su totalidad admite la necesidad de un acuerdo previo al establecimiento de las relaciones diplomáticas. Es lógico que ello sea así pues cuando se ha intentado crear el derecho de legación por vía de tratado, la experiencia se ha ocupado de demostrar que era imposible. En efecto, el artículo primero de la Convención de La Haya .../...

(35) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, Vol.I, 449ª sesión, p.96.

(36) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, Vol.I, 384ª sesión, ps.9 y 10.

(37) ibid., p. 10.

bana de 1928 decía así :

" Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos " (38).

GARCIA AMADOR ha comentado que :

" dicha disposición no ha resultado muy satisfactoria en la práctica " (39).

En base a dicha experiencia la CDI ha considerado siempre que el acuerdo previo al establecimiento de las relaciones diplomáticas era necesario. Así, el primer proyecto de artículos sobre las relaciones diplomáticas decía en su artículo primero :

" Si dos Estados, que tengan el derecho de legación, están de acuerdo en establecer entre ellos relaciones diplomáticas permanentes, cada uno de ellos puede establecer una misión diplomática ante el otro " (40).

Dicho artículo no fué retenido por su referencia al derecho de legación, siendo sustituido definitivamente por el artículo 2 de la Convención de Viena de 1961 que dice así :

" El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes, se efectúa por consentimiento mutuo ".

El hecho de que se requiera un acuerdo para el establecimiento de las relaciones diplomáticas implica que la continuidad de las mismas depende en todo momento de la voluntad de los dos Estados que mantienen dichas relaciones. La ruptura de relaciones diplomáticas es, por tanto, un acto que depende de la mera voluntad de los Estados. Por esta razón la Convención de Viena de 1961 se limita a legislar sobre las obligaciones poste-

.../...

(38) RTSDN, Vol. 155, p. 260.

(39) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, Vol. I, 449ª sesión, p. 96.-

(40) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Diplomatic intercourse and immunities. Rapport présenté par M.A.E.F. SANDS-TROM, rapporteur spécial", Yearbook of the International Law Commission, 1955, Vol. II, p. 10.

.../...

teriores a la ruptura de las relaciones diplomáticas sin intentar establecer - ninguna limitación a la ruptura de las mismas (41).

2. El estatuto jurídico de la relación diplomática.

El nacimiento de las relaciones diplomáticas da lugar a la creación de órganos especializados de las relaciones exteriores llamados misiones. Dichas misiones son atendidas por un cierto tipo de personas que son conocidas con el nombre de personal diplomático. Tanto la misión en sí misma como el personal diplomático gozan de un estatuto jurídico de Derecho internacional que se manifiesta en el ámbito del derecho interno como un - estatuto privilegiado. Al estudio de este estatuto dedicaremos este apartado.

En este trabajo no podemos realizar un estudio en profundidad de - las relaciones diplomáticas interestatales. Nos limitaremos por tanto a hacer un resumen del mismo para poder establecer las comparaciones necesarias con el estatuto jurídico de las relaciones entre los Estados y las - Organizaciones internacionales, que es el punto central de nuestro estudio. Para ello estudiaremos sucesivamente los fundamentos del estatuto jurídico de la relación diplomática, el carácter bilateral de dicha relación y los derechos de la misión diplomática, del personal diplomático, del Estado que envía y del Estado que recibe la misión.

A) Fundamentos del estatuto jurídico de la relación diplomática.

La cuestión de los fundamentos de las normas jurídicas ha dado lugar desde antiguo a grandes controversias. Desde el iusnaturalismo al positivismo o a la creencia de que el sistema jurídico no es más que una superestructura, las normas jurídicas son discutidas en relación con las bases o fundamentos que justifican su vigencia.

La disputa sobre el fundamento de las normas jurídicas también ha alcanzado al Derecho internacional. En nuestros días, la controversia se ha agudizado por la gran división que conoce la sociedad internacional de
.../...

(41) Artículo 45 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.

.../...

nuestro tiempo. Conceptos tales como ius cogens, condición de validez de los tratados, guerras de liberación nacional, crímenes contra la humanidad por no citar más que algunos ejemplos, son capaces de levantar los más encendidos debates en el ámbito de las conferencias internacionales.

En el Derecho diplomático las doctrinas justificativas de sus reglas han tenido y siguen teniendo gran importancia. La razón quizá esté en el hecho de que el estatuto diplomático da lugar a normas tan excepcionales que necesitan tener un sólido fundamento para ser aceptadas. Otra razón que puede justificar la importancia de las teorías justificativas del estatuto diplomático es el origen consuetudinario de sus reglas. El derecho consuetudinario tiene siempre una necesidad de concretización, lo que justifica la necesidad del establecimiento preciso de las bases o del fundamento de las normas consuetudinarias.

Con la codificación del Derecho diplomático, las teorías justificativas de sus normas han perdido parte de su razón de ser, pues en la medida en que las normas codificadas son claras, la necesidad de las teorías justificativas disminuye. Sin embargo, las teorías justificativas siguen teniendo su importancia en cuanto sirven de principio de interpretación cuando la interpretación misma o el alcance de una norma es objeto de discusión. Por el contrario, las teorías justificativas del estatuto diplomático tienen hoy día, como veremos más adelante, una gran importancia respecto del estatuto de las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales.

Las teorías justificativas de las normas de Derecho diplomático que históricamente han tenido más importancia son la teoría del carácter representativo de los agentes diplomáticos y la teoría de la extraterritorialidad. En la actualidad la doctrina parece coincidir en que la única teoría con posibilidades de vigencia en la teoría del "interés de la función".

La teoría del carácter representativo de los agentes diplomáticos - según CAHIER :

" tiene su origen en el hecho de que en la Edad Media y hasta la -

Revolución francesa, las relaciones internacionales se consideraban como relaciones personales entre príncipes y reyes. Los delegados de tales reyes eran representantes personales suyos y, por lo tanto, toda violencia u ofensa a su dignidad se consideraba como una ofensa al propio soberano. Además, del principio de igualdad de los Estados y de los príncipes que en aquella época personificaban al Estado, se desprende que una ley dictada por un soberano no pudiera aplicarse a otro soberano y, por consiguiente, a su representante directo" (42).

La teoría del carácter representativo de los agentes diplomáticos no puede tener validez en nuestros días. La persona del soberano o del Jefe del Estado se distingue netamente de la del Estado y por tanto el agente diplomático no puede de ninguna manera ser considerado como un representante personal del soberano o Jefe de Estado correspondiente.

El estatuto de los agentes diplomáticos no puede tampoco ser justificado por su cualidad de representantes del Estado mismo. En la actualidad los agentes diplomáticos gozan de un estatuto mucho más privilegiado del que gozan los Estados mismos sobre el territorio del resto de los Estados. La teoría del carácter representativo no puede justificar tampoco el estatuto privilegiado de la familia del diplomático, que no representa a nadie.

El hecho de que la teoría del carácter representativo de los agentes diplomáticos no pueda ser considerada vigente no impide que algunas reglas del derecho diplomático estén basadas en dicha teoría. El tratamiento protocolario que se da a los agentes diplomáticos tiene por razón el carácter representativo de éstos. Lo mismo podría decirse de ciertas normas de cortesía así como de algunos privilegios.

La teoría de la extraterritorialidad ha sido la teoría utilizada para justificar el estatuto diplomático en el siglo pasado. Según esta teoría el -
.../...

(42) CAHIER, Derecho diplomático, p. 255.

.../...

agente diplomático goza de inmunidad respecto al Estado que le recibe por que no tiene en el territorio de dicho Estado más que una presencia de hecho, pero jurídicamente no ha abandonado el territorio de su Estado. Dentro de la teoría de la extraterritorialidad pueden distinguirse dos tendencias diferentes según que la extraterritorialidad haya sido considerada como una realidad o simplemente como una ficción.

La teoría de la extraterritorialidad fué abandonada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia en el periodo de entreguerras. Factor fundamental de esta evolución fué el cambio operado por el Instituto de Derecho Internacional. En efecto, el Instituto de Derecho Internacional aprobó en su sesión de Cambridge de 1895 un "reglamento sobre las inmunidades diplomáticas" en el que puede leerse :

" artículo 1.- Los ministros públicos son inviolables. Gozan de la extraterritorialidad en el sentido y en la medida indicados más abajo y de cierto número de inmunidades.

artículo 7.- El ministro público en el extranjero, los funcionarios oficialmente incorporados a la misión y los miembros de sus familias que vivan con ellos, conservan su domicilio de origen y se siguen rigiendo por las leyes de su domicilio en la medida que éste rige las leyes y las jurisdicciones" (43).

El reglamento anterior no fué aprobado por unanimidad. Diversos miembros del IDI criticaron ya en la sesión de Cambridge la teoría de la extraterritorialidad, por las consecuencias absurdas a las que podía dar lugar su aplicación. Dichas voces contrarias a la extraterritorialidad llegaron a hacerse mayoritarias en la IDI en la sesión del mismo en Nueva York en 1929. En dicha sesión el IDI aprobó una resolución que dice lo siguiente :

" El Instituto de Derecho Internacional

Considerando que el reglamento de Cambridge de 1895 no responde completamente a la evolución reciente del derecho internacional sobre la materia,

(43) Annuaire de l'Institut de Droit International, 1895-96, ps. 240 y 241.

Adopta los artículos siguientes :

artículo 1.- Los agentes diplomáticos tienen derecho, por el interés de sus funciones, a las inmunidades enumeradas en el presente reglamento " (44).

En el mismo sentido que la resolución del IDI de 1929 el preámbulo de la Convención de La Habana de 20 de febrero de 1928 afirma :

" Reconociendo que como los funcionarios diplomáticos representan sus respectivos Estados no deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales ".

La teoría del interés de la función ha sido también afirmada en las Convenciones de Viena de 1961 y de 1975. En el preámbulo de la Convención de 1961 se dice :

" Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados ".

En el preámbulo de la Convención de Viena de 1975 puede leerse :

" Reconociendo que el objeto de los privilegios e inmunidades enunciados en la presente Convención no es favorecer a los individuos sino garantizar el desempeño eficaz de sus funciones en relación con las Organizaciones y conferencias ".

Como puede verse la teoría del interés de la función es la teoría generalmente aceptada como fundamento de los privilegios e inmunidades diplomáticos. Sin embargo parece necesario precisar que el "interés de la función " es el interés de los dos Estados que mantienen entre sí las relaciones diplomáticas. Por esta razón parece lógico sustituir la expresión " interés de la función " por la de " interés recíproco de la función ", lo que nos llevaría a afirmar que el concepto de interés de la función debe completarse con la idea de reciprocidad.

(44) Annuaire de l'Institut de Droit International, 1929, Vol. II, p. 307.

La precisión anterior no es una mera especulación teórica. El estudio que realizamos sobre la diplomacia interestatal no tiene otro objetivo que el de buscar una base comparativa para poder entrar de lleno en el estudio de las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales. Dentro de las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales, la cuestión de las teorías fundadoras del estatuto de las misiones permanentes es de importancia primordial, y por tanto creemos que es necesario matizar lo más posible en lo que se refiere a las teorías que fundamentan las normas jurídicas de las relaciones diplomáticas interestatales.

B) La relación diplomática como relación jurídica bilateral.

La relación diplomática es una relación bilateral. Ello es algo que no necesita razonarse y puede darse por supuesto. Sin embargo, en este trabajo nos interesa destacar la "bilateralidad" de la relación diplomática entre dos Estados para poder compararla con la relación diplomática entre un Estado y una Organización internacional, que caracterizaremos como relación jurídica triangular.

El carácter bilateral de la relación diplomática interestatal no implica la existencia recíproca de dos misiones diplomáticas. Normalmente, las relaciones diplomáticas entre dos Estados suponen la creación de dos misiones, cada una de ellas acreditada por uno de los dos Estados ante el otro. Sin embargo, ya hemos afirmado que ello no tiene necesariamente que ser así. No existe ningún impedimento para que un Estado acredite una misión ante otro sin que éste lo haga ante el primero. De cualquier modo esta posibilidad es más teórica que práctica pues las relaciones diplomáticas dan lugar, prácticamente siempre, a la existencia recíproca de dos misiones.

El hecho de que las relaciones diplomáticas interestatales sean relaciones jurídicas de carácter bilateral no impide que en determinadas circunstancias un tercer Estado pueda ser afectado por dicha relación. La Convención de Viena de 1961 lo ha entendido así señalando en una serie de casos las obligaciones y derechos de los terceros Estados. El supues

to más importante es el del paso del personal diplomático a través de un tercer Estado para "tomar posesión de sus funciones, para reintegrarse a un cargo o para volver a su país". Este supuesto está regulado en el artículo 40 de la Convención de Viena que regula asimismo las facilidades que deben otorgarse al personal administrativo y técnico, a los correos diplomáticos y a las comunicaciones oficiales en general.

Otros supuestos de participación de un tercer Estado en las relaciones diplomáticas interestatales se refieren a la posibilidad de que un Estado que mantiene una misión en el territorio de otro no represente únicamente sus intereses, sino también los intereses de otro Estado tercero, sea por inexistencia de relaciones entre el Estado representado y el Estado receptor (artículos 45 y 46) o simplemente por razones de conveniencia (artículo 6).

Como puede verse, la intervención de un tercer Estado en las relaciones diplomáticas interestatales sucede únicamente en casos excepcionales, por lo que puede afirmarse que el contenido de las obligaciones y derechos entre los Estados que mantienen relaciones diplomáticas prácticamente agota el contenido de dichas relaciones.

C) Derechos y deberes mutuos del Estado acreditante y del Estado receptor.

El estado acreditante nombra a los miembros de la misión diplomática. Este nombramiento es en general libre, excepto en lo que se refiere al jefe de misión (procedimiento del placet) y en ocasiones respecto a los agregados militares, navales o aéreos. Dicho personal goza de un estatuto privilegiado que se manifiesta fundamentalmente en la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción de que gozan los miembros del personal diplomático.

Como contrapartida al estatuto privilegiado del personal diplomático, el Estado receptor conserva un poder de expulsión sobre dicho personal, que se manifiesta mediante el procedimiento de declaración de persona non grata. El personal diplomático tiene, a pesar de su estatuto privilegiado, -

una obligación general de cumplir las leyes del Estado receptor y una prohibición tanto de ejercer actividades comerciales o profesionales como de inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor.

El Estado receptor tiene la obligación de proteger debidamente al personal de la misión y a la misión misma que, por otra parte, es inviolable. Como contrapartida a dicha inviolabilidad los locales de la misión no pueden ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, lo que impide por ejemplo el ejercicio del llamado derecho de asilo diplomático, que únicamente tiene vigencia en el Derecho internacional latinoamericano.

En general, como vemos, existe una obligación de actuar de buena fé tanto por parte del Estado acreditante como por parte del Estado receptor.

Para terminar diremos que el interés mutuo así como la reciprocidad de representaciones hace que el estatuto de las misiones diplomáticas no de lugar a grandes problemas. En general, el Derecho diplomático se cumple puntualmente y las diferencias que siempre pueden surgir son normalmente subsanadas mediante negociaciones entre las partes interesadas, sin tener que recurrir a otro medio de solución de diferencias.

II. Las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales.

Al comienzo de este capítulo ya indicamos cómo los cambios profundos que ha sufrido la Comunidad internacional en los últimos años no habían dejado de tener influencia en las relaciones diplomáticas en tanto que institución jurídica.

La razón fundamental de la evolución de las relaciones diplomáticas en tanto que institución jurídica está causada por el gran desarrollo e importancia que han alcanzado las Organizaciones internacionales en nuestros días. La historia de las relaciones internacionales de los últimos cincuenta años puede estudiarse en gran parte a través de las Organizaciones internacionales. Las Organizaciones internacionales han sido el foro donde se ha realizado gran parte de la política internacional. Además las Organizaciones internacionales han afirmado su calidad de actor de las relaciones -

internacionales, por lo que ha podido hablarse de una política internacional de las Organizaciones internacionales.

La importancia tomada por las Organizaciones internacionales ha tenido como consecuencia que los Estados hayan considerado necesario el -ejercicio de una diplomacia " respecto de " las Organizaciones internacionales y " en " las Organizaciones internacionales. CAHIER ha puesto de relieve que :

" la política de los Estados con respecto a un organismo internacional se realiza fundamentalmente de dos maneras : mediante el envío de representantes a las reuniones de los órganos de la Organización, y, me -diante la creación de delegaciones permanentes acreditadas cerca del or-ganismo de que se trate, y que, al igual que las misiones diplomáticas, -tienen por fin asegurar las relaciones internacionales de tales Estados ante las Organizaciones " (45).

Como vemos la diplomacia entre los Estados y las Organizaciones internacionales utiliza los mismos instrumentos que la diplomacia entre Estados, a saber : el establecimiento de misiones permanentes y el envío de misiones especiales. Este paralelismo nos lleva a plantearnos el problema de si es lícita la unidad de tratamiento de los distintos tipos de relaciones diplomáticas. La estructura del plan de este trabajo implica ya una res-puesta positiva a esta cuestión. En este apartado trataremos de ser más explícitos.

La unidad de tratamiento de las dos clases de diplomacia parece -justificarse por dos tipos diferentes de razones : razones funcionales y -razones jurídicas.

Desde un punto de vista funcional la diplomacia de los Estados regpecto a las Organizaciones internacionales ha tendido a copiar los modelos utilizados por la diplomacia interestatal. Naturalmente que el proceso no ha sido idéntico, lo cual se justifica por la necesidad de adaptación a una situación un tanto diferente; pero en lo fundamental los Estados han tendido a la creación de relaciones con las Organizaciones internacionales que son fundamentalmente semejantes a las relaciones interestatales.

(45) CAHIER, Derecho diplomático, p. 539.

Si desde un punto de vista funcional parece justificarse la unidad de tratamiento entre los dos tipos de diplomacia reseñados, desde un punto de vista jurídico la unidad de tratamiento está aún más justificada. En el capítulo primero vimos cómo los Acuerdos de sede regulaban el estatuto de los representantes permanentes de los Estados mediante la técnica del reenvío al Derecho diplomático tradicional. En lo que no estaba previsto por los Acuerdos de sede, las Organizaciones internacionales han tratado de desarrollar normas propias teniendo en cuenta la normativa que rige la diplomacia interestatal. Por último debemos subrayar que la codificación de las normas relativas a los dos tipos de diplomacia ha seguido procesos paralelos y más aún, la codificación de las normas que rigen las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales se ha basado en gran parte en la codificación de las normas que rigen las relaciones interestatales.

La única diferencia entre los dos procesos codificadores es de carácter meramente técnico. La diplomacia entre los Estados se ha codificado a través de dos Convenciones diferentes: la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención sobre las misiones especiales abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre de 1969. Las normas relativas a las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales se han codificado a través de una única Convención: la Convención de Viena de 1975 que regula por tanto no sólo el establecimiento de las misiones permanentes sino también el envío de misiones a las sesiones de los órganos de la Organización de que se trate. Unido a este problema, la Convención de 1975 regula también el envío de misiones a conferencias convocadas por las Organizaciones internacionales.

Como vemos, la unidad de tratamiento se justifica tanto desde el punto de vista teórico como desde el análisis de los "textos legales" que regulan la materia. La doctrina parece estar de acuerdo en este punto. - CAHIER ha afirmado que :

" debido a la semejanza de las delegaciones permanentes con las -

.../...

.../...

misiones diplomáticas permanentes, las reglas consuetudinarias que se aplican a las últimas se han extendido en gran medida a las primeras"(46).

El Asesor Jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas se expresaba en 1958 en estos términos:

" El desarrollo de la institución de las misiones permanentes desde que se aprobó la resolución 267A(III) de la Asamblea General muestra que las misiones permanentes también tienen funciones de carácter diplomático.. Las misiones permanentes realizan esas diversas funciones mediante unos métodos y de un modo que son semejantes a los que emplean las misiones diplomáticas, y su establecimiento y organización también son semejantes a los de las misiones diplomáticas que los Estados se acreditan entre sí " (47).

La afirmación anterior de la Secretaría de las Naciones Unidas ha sido recogida en el comentario de la CDI al proyecto definitivo de artículos que fué la base de la Convención de Viena de 1975, lo que parece que puede tomarse como indicio de que la CDI avala la afirmación anterior. Por último tenemos el hecho ya reseñado de que los Estados en general han prestado su acuerdo a que el estatuto de la diplomacia ante las Organizaciones internacionales se base en el estatuto de la diplomacia interestatal.

Por todas las razones anteriores creemos que debemos pasar al estudio de las relaciones diplomáticas de los Estados con las Organizaciones internacionales. Estudiaremos esas relaciones en base al mismo esquema conceptual que hemos utilizado para el estudio de las relaciones diplomáticas entre Estados. Nuestro estudio versará sobre la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales tal como se ha desarro -

.../...

(46) ibid., p. 543.

(47) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, - decimocuarto período de sesiones, Suplemento nº 1A.ps.2 y 3.

.../...

llado históricamente, es decir mediante el establecimiento de misiones permanentes de los Estados ante las Organizaciones internacionales. De todas formas, y para que nuestro estudio sea completo, trataremos posteriormente el problema de la representación de las Organizaciones internacionales ante los Estados y ante otras Organizaciones, así como el problema de las relaciones, diplomáticas o no, entre las Organizaciones internacionales y otros sujetos de Derecho internacional.

1. Los presupuestos de las relaciones diplomáticas.

Al comienzo de este capítulo vimos como existían unos presupuestos previos para el nacimiento de las relaciones diplomáticas entre dos Estados. Estos presupuestos eran la personalidad internacional de los dos Estados, el reconocimiento mutuo entre ellos y un acuerdo cuyo contenido fuera precisamente el nacimiento de la relación diplomática.

Si en el apartado anterior hemos admitido el paralelismo entre las relaciones diplomáticas interestatales y las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales, parece necesario estudiar estas relaciones sobre la base de los mismos supuestos jurídicos.

El estudio de la personalidad internacional se justifica porque no puede concebirse la existencia de relaciones diplomáticas, es decir relaciones jurídicas de Derecho internacional público, más que entre sujetos del orden internacional. El estudio del reconocimiento es necesario porque no pueden existir relaciones diplomáticas entre sujetos de Derecho internacional que no se reconocen como tales entre sí. Por último el estudio de la necesidad de un acuerdo previo nos hará ver las diferencias que existen entre las relaciones interestatales y las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales.

A) La personalidad internacional.

En este apartado estudiaremos principalmente la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales, pues el estudio de la personalidad internacional de los Estados ya lo hemos realizado y no es necesario repetirlo aquí. Sin embargo, existen algunas particularidades de la personalidad de los Estados que se manifiestan principalmente en las relaciones de éstos con las Organizaciones internacionales. A estas particularidades dedicaremos el apartado siguiente.

a) La personalidad internacional de los Estados.

En el capítulo primero vimos como una de las innovaciones de la Convención de Viena de 1975 era la regulación del estatuto de las misiones acreditadas ante una Organización internacional por los Estados que no son miembros de la Organización internacional correspondiente. La práctica muestra sin embargo que desde finales de los años cuarenta, los Estados no miembros de las Organizaciones más importantes han creado misiones para seguir el desarrollo de los trabajos de éstas. Sin embargo, dichas misiones no gozaban de ningún estatuto jurídico, pues eran ignoradas por todos los " textos legales " sobre los que se apoya la existencia de las misiones permanentes. En efecto tanto los tratados constitutivos de las Organizaciones universales del sistema de las Naciones Unidas como las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades de las mismas y como los Acuerdos de sede se refieren únicamente a los representantes de los " Estados miembros ". La resolución 257A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas habla de las misiones permanentes de los Estados miembros, y la decisión del Consejo Federal suizo de 31 de marzo de 1948 se refiere a las delegaciones permanentes de los Estados miembros.

El hecho de que las misiones permanentes de los Estados no gozaran de ningún estatuto jurídico implica que no pueda hablarse de relaciones diplomáticas entre los Estados no miembros y las Organizaciones internacionales. Las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas solamente eran posibles por tanto si el Estado en cuestión era miembro de la Organización internacional ante la que se acreditaba la misión.

El hecho de que se insista en la condición de Estado miembro tiene otra consecuencia. Por circunstancias que no son del caso analizar aquí las Repùblicas de Bielorusia y de Ucrania son miembros de las Naciones Unidas y de la mayor parte de los Organismos especializados. Sin embargo no parece posible afirmar que las Repùblicas de Bielorusia y Ucrania sean Estados independientes, ya que pertenecen a una federación y no tienen por lo tanto gobierno autónomo en el sentido que el Derecho internacional da a esta expresión. Sin embargo, en tanto que Estados miembros de las Organizaciones internacionales, tanto la República de Ucrania como la de Bielorusia pueden beneficiarse de los instrumentos constitutivos de las Organizaciones, de las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades y de los Acuerdos de sede, pudiendo por tanto crear misiones permanentes.

La existencia de las misiones permanentes de la República de Ucrania y de la República de Bielorusia parece sin embargo tener un carácter más formal que real, lo que se deduce del hecho de que siendo Estados federados no tienen política exterior independiente. A modo de ejemplo podemos decir que las misiones permanentes de Ucrania y Bielorusia acreditadas ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y el resto de las Organizaciones internacionales con sede en Ginebra constan de un único miembro cada una, mientras que la misión de la Unión Soviética ante las mismas Organizaciones tiene acreditadas a 32 personas (48).

(48) Nations Unies, Missions auprès des Nations Unies à Genève et organes principaux des Nations Unies, Ginebra, 1975, ps. 17, 134 y 135.

El problema de la existencia de las misiones de Ucrania y Bielorusia parece que debe tratarse como una particularidad explicada por razones históricas, pero que no tiene importancia ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico.

b) La personalidad internacional de las Organizaciones internacionales.

Si bien durante el siglo XIX existieron ya algunas entidades que pueden ser calificadas como Organizaciones internacionales, en el sentido que tiene hoy este término, el estudio doctrinal de dichas Organizaciones no comenzó verdaderamente hasta la década de los años veinte, momento en que la doctrina empieza a plantearse la naturaleza de la Sociedad de Naciones y de la Organización internacional del Trabajo.

Dentro del estudio de las Organizaciones internacionales ocupa una plaza central el estudio de su personalidad internacional, pues en él puede resumirse el problema de la naturaleza de dichas Organizaciones.

El Pacto de la Sociedad de Naciones no preveía la personalidad internacional de la Sociedad como tampoco la personalidad de derecho interno. El único indicio de personalidad internacional que el Pacto contiene es el párrafo 5 del artículo 7 que decía así:

" Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, por sus servicios o por sus reuniones serán inviolables ".

Si la personalidad internacional de la Sociedad de Naciones no era afirmada en el Pacto, la doctrina sin embargo no tardó en aseverar que la Sociedad de Naciones era una persona o un sujeto de Derecho internacional. Así SIOTTO PINTOR escribía:

" solo el Estado es persona de Derecho de gentes; para reco -

.../...

.../...

nocer que otras entidades están dotadas de derechos internacionales - determinados no es en absoluto necesario asimilarlas a los Estados, - basta con reconocerles la calidad genérica de sujetos, es decir, de - destinatarios de las normas de Derecho internacional que les concier- nen, y no de todas las normas de este Derecho " (49).

La afirmación anterior podía ser tomada en el sentido de que - niega la personalidad internacional de la Sociedad de Naciones. Sin - embargo nosotros creemos que el hecho de admitir que la Sociedad - de Naciones era destinataria de algunas normas de Derecho interna - cional es ya una forma de reconocer su personalidad internacional. - Con una concepción más amplia que SIOTTO PINTOR, PILOTTI de - cia:

" Podría establecerse una organización sin llegar a la creación de una persona jurídica; pero en el caso de la Sociedad la persona - lidad de esta institución no tiene duda " (50).

ANZILOTTI, jurista que marcó aquella época, contradice a los juristas que han tratado demostrar que solo los Estados pueden ser - sujetos de Derecho internacional (51). MAC NAIR en la cuarta edi - ción del libro de OPPENHEIM afirmaba que la Sociedad de Naciones

" en su calidad de persona internacional sui generis, es sujeto - de muchos derechos que, por regla general, solo pueden ser ejercidos por los Estados soberanos " (52).

(49) SIOTTO PINTOR, "Les sujets du Droit international autres que - les Etats", RCADI, Vol. 49, 1932 (III), p. 299.

(50) PILOTTI, "Les Unions d'Etats" RCADI, Vol. 24, 1928 (IV), p. 484.

(51) ANZILOTTI, Corso di Diritto internazionale, Volume primo: Introdu - zione Teorie generali, Roma, Athenaeum, 1928, p. 113.

(52) OPPENHEIM-MAC NAIR, International Law, Cuarta edición, 1928; citado en ACDI, 1963, Vol. II, p. 209.

Como vemos la doctrina aceptaba con facilidad la idea de la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales o por lo menos de la personalidad internacional de la Sociedad de Naciones. Ello no quiere decir que no hubiera autores que negaran la posibilidad de que las Organizaciones internacionales gozaran de la personalidad internacional, lo cual es lógico por la novedad que el problema tenía en aquella época (53).

La cuestión de la personalidad internacional volvió a plantearse en la Conferencia de San Francisco. En dicha Conferencia, la delegación belga se mostró partidaria de introducir un artículo que afirmara sin equívocos la personalidad internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Las razones sobre las que se apoyaba la delegación belga eran las siguientes:

" la cualidad de sujeto del Derecho internacional ha sido negada a la Sociedad de Naciones. De ello han resultado dificultades prácticas que se han manifestado sobre todo en la vida administrativa de la Sociedad. Posteriormente la tendencia dominante de la doctrina y de la jurisprudencia ha sido de admitir dicha personalidad.

La delegación belga considera que conviene confirmar dicha evolución poniendo fin a toda posibilidad de controversia.

La delegación belga propone la adopción del texto siguiente:

Las Partes en la presente Carta reconocen que la Organización que establecen posee la personalidad internacional con los derechos que derivan de ello.

Se entiende que el beneficio de esta disposición se extenderá a

.../...

(53) Así por ejemplo NEUMEYER, "Les Unions internationales ", Revue de Droit international, de sciences diplomatiques, politiques et sociales, 1924, p. 357; citado en ACDI, 1963, Vol. II, p. 209.

.../...

las instituciones vinculadas, a cualquier título, a la Organización de Naciones Unidas " (54).

La propuesta belga no fue aceptada en la Conferencia. Así el artículo 104 de la Carta se limita a afirmar:

" La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propositos ".

Un artículo semejante puede encontrarse en la mayoría de los instrumentos constitutivos de las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

El texto del artículo 104 parece restrictivo en lo que se refiere a la atribución de la personalidad internacional a la ONU. Sin embargo, en el comentario de dicho artículo no se duda la existencia de dicha personalidad. En efecto en dicho comentario puede leerse:

" Esta disposición esta concebida en términos generales. Ella se limita a recordar la obligación que tienen todos los Estados miembros de actuar de tal manera que la Organización goce en su territorio de un estatuto que le permita ejercer sus atribuciones ".

" En cuanto a la cuestión de la personalidad jurídica internacional, el Comité ha juzgado superfluo reseñarla. La personalidad internacional está regulada implícitamente por el conjunto de disposiciones de la Carta " (55).

Como vemos, la Carta no proclama de forma expresa la personalidad internacional a la Organización; sin embargo da a la Organización una serie de facultades que unicamente son ejercidas por entidades

.../...

(54) UNCIO, Vol. 4, p. 483.

(55) ibid., Vol. 13, ps. 720 y 721.

.../...

que son sujetos de Derecho internacional. Así los artículos 43 y 63 -
prevén la conclusión de acuerdos entre la Organización y los Estados
miembros o entre la Organización y los Organismos especializados. -
Los artículos 77 y ss pueden interpretarse como autorización a la -
Organización para ser parte en los Acuerdos de administración fidu -
ciaria. El artículo 105 prevé que la Organización y sus funcionarios -
gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización
de sus fines. Por último, el párrafo cuarto del artículo 62 autoriza al
Consejo Económico y Social a convocar conferencias internacionales -
sobre asuntos de su competencia.

Tanto la capacidad de concluir tratados como el hecho de gozar
de privilegios e inmunidades o la posibilidad de convocar conferencias-
internacionales son competencias típicas de los sujetos de Derecho in -
ternacional, por lo que parece que si bien la Carta no proclama expre -
samente la personalidad internacional a la Organización existen serias -
presunciones de que implícitamente la personalidad internacional está re -
gulada por el conjunto de disposiciones de la Carta, como afirmaba el -
comentario del artículo 104.

El problema de la personalidad internacional de las Naciones U -
nidas va a plantearse en la práctica en el año 1948 con la muerte del -
Conde F. Bernadotte, Mediador de las Naciones Unidas en Palestina y
del Coronel A. Serot, oficial francés perteneciente al " estado mayor " -
del Mediador de las Naciones Unidas que murieron en Palestina en cir -
cunstancias que implicaban la responsabilidad del Gobierno israeli.

La solución del Derecho internacional clásico para el problema -
anterior hubiera sido que tanto Suecia como Francia ejercieran la pro -
tección diplomática para pedir reparación por la muerte de personas de
su nacionalidad. El problema fué discutido en la Asamblea General de -
las Naciones Unidas que decidió pedir un dictamen al TIJ para que con -
testase a dos preguntas de las cuales retenemos la primera:

" En el caso de que un funcionario de las Naciones Unidas sufra, en el ejercicio de sus funciones, un perjuicio en circunstancias tales que impliquen la responsabilidad de un Estado, ¿ la Organización de Naciones Unidas tiene competencia para presentar contra el gobierno de iure o de facto responsable una reclamación internacional para obtener la reparación de los daños causados a) a las Naciones Unidas, b) a la víctima o a sus derechos habientes? " (56).

El TIJ responde

" por unanimidad,

Que en el caso en que un funcionario de las Naciones Unidas sufra, en el ejercicio de sus funciones, un perjuicio en circunstancias tales que impliquen la responsabilidad de un Estado miembro, o que no es miembro, de la Organización, ésta tiene competencia para presentar contra el gobierno de iure o de facto responsable una reclamación internacional para obtener la reparación de los daños causados a las Naciones Unidas ".

por once votos contra cuatro,

que en el caso en que un funcionario de las Naciones Unidas sufra, en el ejercicio de sus funciones, un perjuicio en circunstancias tales que impliquen la responsabilidad de un Estado miembro, o que no es miembro, de la Organización, ésta tiene competencia para presentar contra el gobierno de iure o de facto responsable una reclamación internacional para obtener la reparación de los daños causados a la víctima o a sus derechohabientes " (57).

(56) Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif: CIJ, Recueil 1949, p. 175.

(57) CIJ, Recueil 1949, p. 187. En el texto del dictamen el Tribunal responde separadamente, pero en los mismos términos, a la posibilidad de entablar reclamaciones ante los Estados miembros y ante los no-miembros. Nosotros hemos agrupado ambas respuestas para simplificar.

Si las conclusiones a las que llega el TIJ pueden tener interés para el estudio de la personalidad de las Organizaciones internacionales, mucho más interés tiene el razonamiento sobre el que el Tribunal se apoya.

El Tribunal considera en primer lugar que para poder determinar si la Organización tiene capacidad para presentar una reclamación internacional es necesario establecer antes, si la Organización está revestida de la personalidad internacional. El Tribunal llega a la conclusión de que la Organización de las Naciones Unidas goza de la personalidad, apoyandose en diversas consideraciones. El Tribunal constata que

" La Carta no se ha limitado a hacer simplemente de la Organización creada por ella un centro donde se armonicen los esfuerzos de las naciones en pro de los fines comunes definidos por ella. La Carta la ha dotado de órganos; la ha asignado una misión propia. La Carta ha definido la posición de los Miembros respecto a la Organización.."(58)

El Tribunal pasa seguidamente a estudiar la actuación de la Organización en la práctica, especialmente en lo que se refiere a la conclusión de tratados. También constata el Tribunal que la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas crea derechos y deberes recíprocos entre la Organización y los Estados miembros. Por todos estos motivos el Tribunal afirma que :

" la Organización está destinada a ejercer funciones y a gozar de derechos como lo ha hecho, que no pueden explicarse más que si la Organización posee en gran medida la personalidad internacional y la capacidad de actuar en el plano internacional " (59).

(58) CIJ, Recueil 1949, p. 178.

(59) CIJ, Recueil 1949, p. 179.

Y por lo tanto

" el Tribunal llega a la conclusión que la Organización es una persona internacional " (60).

Sin embargo el Tribunal no saca ninguna consecuencia del hecho de que la Organización sea una persona internacional. En efecto el Tribunal continua su razonamiento de la forma siguiente :

" La cuestión a examinar a continuación es si en el conjunto - de los derechos internacionales de la Organización esta comprendido - el derecho a presentar reclamaciones internacionales de una naturaleza tal como las comprendidas en la petición de esta opinión " (61).

Para poder determinar si la Organización posee o no un derecho concreto, el Tribunal encuentra un criterio que ha sido después - la base de la llamada teoría de los poderes implícitos, aceptada por - una gran parte de la doctrina.

Veamos qué es lo que entiende el TIJ por poderes implícitos:

" Mientras que un Estado posee, en su totalidad, los derechos y deberes internacionales reconocidos por el Derecho internacional, - los derechos y deberes de una entidad como la Organización dependen de los fines y de las funciones de ésta, enunciados o implicados en su acta constitutiva y desarrollados en la práctica " (62).

" Según el Derecho internacional, la Organización posee las - competencias que si bien no están expresamente enunciados en la Carta, estan necesariamente conferidos a la Organización en tanto en cuanto son esenciales para el ejercicio de las funciones de ésta " (63).

(60) CIJ, Recueil 1949, p. 179.

(61) CIJ, Recueil 1949, p. 179.

(62) CIJ, Recueil 1949, p. 180.

(63) CIJ, Recueil 1949, p. 182.

Al admitir como criterio de delimitación el criterio de los poderes implícitos, el TIJ se sitúa en una línea de continuidad jurisprudencial con el TPJI que en su dictamen sobre la " competencia de la OIT para reglamentar accesoriamente el trabajo personal del patrón " había afirmado:

" no solamente la interpretación de conjunto de la parte XIII autoriza a concluir que la Organización Internacional del Trabajo no está privada del derecho de proponer medidas que tiendan a la protección de los asalariados, porque dichas medidas puedan reglamentar de manera accesoria el trabajo personal del patrón, sino que además pueden encontrarse en el Tratado disposiciones especiales que, si se aplican según el sentido que les es normalmente atribuido, puede suponerse que la reglamentación accesoria del trabajo personal del patrón se encuentra virtualmente implicada " (64).

La teoría de los poderes implícitos ha sido utilizada por el TIJ posteriormente en sus dictámenes sobre el estatuto internacional del Sudoeste africano (65) y sobre los efectos de las sentencias del Tribunal administrativo de las Naciones Unidas que conceden indemnización (66). En este último Dictamen el Tribunal argumenta que :

" el poder de crear un tribunal encargado de hacer justicia entre la Organización y los funcionarios es esencial para asegurar el buen funcionamiento de la Secretaría y para dar efecto a la consideración dominante que consiste en la necesidad de asegurar la más altas calidades de trabajo, de competencia y de integridad. Dicha capacidad está necesariamente implicada en la Carta " (67).

(64) CPJI, Recueil des Avis consultatifs, Compétence de l'OIT pour régler le travail personnel du patron, Serie B, nº 13, p. 18.

(65) Statut international du Sud-Ouest africain, Avis consultatif: CIJ, Recueil 1950, p. 137.

(66) Effet de jugements du tribunal administratif des N.U. accordant indemnité, Avis consultatif du 13 juillet 1954: CIJ, Recueil 1954, 47.

(67) CIJ, Recueil 1954, p. 57.

Como puede verse todos los dictámenes del TIJ citados tratan sobre la competencia de las Naciones Unidas. Ello ha dado lugar a algunas opiniones según las cuales las conclusiones a las que llega el TIJ sobre las Naciones Unidas no son generalizables al resto de las Organizaciones. Así el representante de Holanda en la Sexta Comisión ha afirmado que no podía admitirse que todas las Organizaciones internacionales tuvieran el derecho a ejercer la protección funcional(68). Sin embargo la mayoría de los autores admite la generalización de los argumentos del TIJ y trata en los mismos términos la personalidad de las Naciones Unidas que la personalidad del resto de las Organizaciones universales. Así DIEZ DE VELASCO afirma:

podría objetarse que el dictamen transcrito(se refiere al de "reparación por daños") sólo se refiere a las Naciones Unidas. Ello sólo es cierto en parte, ya que contiene afirmaciones que son susceptibles de generalización. De ellas creo necesario resaltar las siguientes:

1. " que los Estados tienen el poder de crear no solo Organizaciones internacionales, sino dotarlas de personalidad internacional objetiva " (69).

En el mismo sentido SEYERSTED dice que :

" es una realidad general que las Organizaciones intergubernamentales realizan en la práctica actos soberanos y actos internacionales incluso si no están autorizadas para hacerlo en sus constituciones, ciertamente ésta es la regla y no la excepción " (70).

(68) Nations Unies, Documents officiels de la quatrième session de l'Assemblée générale, Sixième Commission, Comptes rendus analytiques des séances, 20 septembre-29 novembre 1949, p. 292.

(69) DIEZ DE VELASCO, op. cit., Tomo I, p. 236.

(70) SEYERSTED, "International personality of intergovernmental Organizations. Do their capacities depend upon their constitutions?", IJIL, - Vol. 4, 1964, p. 6.

La teoría de los poderes implícitos, tal como ha sido enunciada por el TIJ, ha sido admitida por la gran mayoría de la doctrina. A modo de ejemplo citaremos a algunos autores que insisten sobre el carácter limitativo de dicha teoría.

Así O' CONNELL afirma que :

" es una equivocación establecer que una Organización tiene personalidad y deducir capacidades específicas desde una concepción apriorística sobre los efectos de la personalidad. El método correcto es equiparar la personalidad con las capacidades e investigar qué capacidades están implicadas funcionalmente en la Entidad correspondiente " (71).

DETTTER en el mismo sentido afirma :

" el hecho de que una Organización goce de la personalidad internacional no indica que posee derechos concretos: la personalidad es un puro concepto formal que sirve como centro de imputación " (72).

La idea central que une a los autores que aceptan la teoría de los poderes implícitos es que del hecho de que una Organización goce de la personalidad internacional no pueden deducirse conclusiones concretas sobre las facultades o las competencias que posee la Organización de que se trate. La personalidad internacional de las Organizaciones internacionales no tiene, según dicha teoría, un contenido tipificado por el Derecho internacional, sino que varía en cada caso.

(71) O' CONELL, International Law, Londres, Steven & Sons, segunda edición, Volumen I, p. 98.

(72) DETTER, Law making by International Organization, Estocolmo, Norstedt & Söners Förlag, p. 21, nota 1.

Como hemos dicho más arriba, la teoría de los poderes implícitos ha sido aceptada por la mayor parte de la doctrina. Sin embargo - dicha teoría ha sido también objeto de fuertes críticas. Así por ejemplo SERENI ha afirmado:

" las mismas razones por las cuales debe rechazarse la noción de incapacidad jurídica de los Estados excluyen el que pueda hablarse de la incapacidad jurídica de las Organizaciones internacionales que gozan de la personalidad jurídica internacional, o de su personalidad limitada " (73).

SERENI critica la doctrina del TIJ según la cual las Organizaciones internacionales pueden gozar de distintos grados de personalidad jurídica (74). Para SERENI las limitaciones de la personalidad de las Organizaciones internacionales son o bien limitaciones convencionales o bien limitaciones de hecho. Así dicho autor argumenta que:

" las Organizaciones internacionales no pueden hacer la guerra - porque no tienen población ni territorio; pero esto no excluye que en casos excepcionales puedan tener una fuerza armada a su disposición e incluso una fuerza propia " (75).

Lo que le lleva a concluir que

" de forma subordinada a las citadas limitaciones de hecho de sus poderes, los sujetos de carácter funcional son libres de actuar según su voluntad; para ellos, como para los Estados, el concepto de personalidad se identifica con el de libertad " (76).

(73) SERENI, Diritto internazionale, Tomo II: Organizzazione internazionale. Sezione seconda: soggetti a carattere funzionale, Milan, Giuffrè, p. 847.

(74) CIJ, Recueil 1949, ps. 179 y 180.

(75) SERENI, op. cit., Tomo II, Sección segunda, p. 847.

(76) ibid., p. 848.

Con argumentos parecidos a los de SERENI, SEYERSTED ha criticado duramente la teoría de los poderes implícitos. Para SEYERSTED los argumentos del TIJ en su dictamen sobre "reparación por daños" son simplemente argumentos "ex abundante cautela" (77). Para dicho autor, como para SERENI, la diferencia entre la personalidad internacional de los Estados y de las Organizaciones internacionales es una cuestión de hecho, pero no de capacidad jurídica (78).

Para SEYERSTED los argumentos del TIJ en sus opiniones consultivas sobre "reparación por daños" y sobre los "efectos de las sentencias del Tribunal administrativo de las Naciones Unidas" tendrían un efecto muy restrictivo sobre la capacidad de las Organizaciones internacionales si fueran aplicadas al pie de la letra. Ello le lleva a afirmar que :

" un tribunal no puede declarar nulo un acto porque, según su opinión, el objetivo de que se trata con dicho acto podía haber sido conseguido sin recurrir a él, o porque no considere que el acto es esencial o necesario para conseguir dicho objetivo " (79).

Por tanto

" mientras la minoría de los miembros tiene el derecho de impugnar la legalidad, desde un punto de vista interno, de los actos realizados para conseguir objetivos distintos de los definidos en la constitución de la Organización, la minoría no puede impugnar los actos realizados efectuados para conseguir objetivos incluidos en la constitución, por la mera razón de que tales actos no son esenciales o necesarios para conseguir dichos objetivos " (80).

(77) SEYERSTED, op. cit., p. 3, nota 5.

(78) ibid., p. 20.

(79) ibid., p. 21.

(80) ibid., p. 22.

Para SEYERSTED, por tanto, las Organizaciones internacionales tienen una capacidad general de realizar actos internacionales. - Las únicas limitaciones a dicha capacidad son las prohibiciones expresamente enunciadas en los instrumentos constitutivos y los actos que - impliquen nuevas obligaciones para los miembros de la Organización - de que se trate " (81).

Los instrumentos constitutivos tienen también, para dicho autor-efecto negativo en cuanto que limitan los fines que una Organización puede perseguir.

Como puede verse son notables las diferencias entre la teoría - de los poderes implícitos y las teorías defendidas por SEYERSTED - y SERENI. La elección entre una u otra teoría tiene efectos prácticos de mucha importancia, como por ejemplo la posibilidad u imposibilidad - de que la minoría de Estados de una Organización ataque la validez de un acto de ésta. Sin embargo no parece posible inclinarse por una u otra teoría sin haber analizado antes, aunque sea someramente, la actuación de las Organizaciones internacionales en la práctica. A ello dedicaremos los párrafos siguientes.

Los instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas preveían únicamente la personalidad de las Organizaciones en el territorio de los Estados miembros. El contenido de dicha personalidad de Derecho interno ha sido - desarrollado por las Convenciones generales sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, los Organismos especializados y el OIEA. En dichas Convenciones se estipula que las Organizaciones a - las que dichas Convenciones se aplican tienen capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y entablar procedimientos judiciales. Sin embargo dichas capacidades han sido reconocidas a las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas incluso - cuando las Convenciones generales no eran aplicables por no estar ra-
.../...

(81) ibid., p. 55.

.../...

tificadas por el Estado de que se tratase. Por tanto puede decirse - que de forma general las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han podido realizar toda clase de negocios jurídicos en el territorio de los Estados miembros de dichas Organizaciones. En cuanto a los países no miembros, la capacidad de dichas Organizaciones - ha sido reconocida por los Acuerdos de sede respectivos, de forma - que estas Organizaciones han podido actuar libremente en el tráfico - jurídico.

En la esfera internacional el primer derecho que se les ha reconocido a las Organizaciones internacionales es el derecho a crear - su propio orden jurídico.

Dicho derecho implica que las relaciones jurídicas creadas entre las Organizaciones internacionales y sus funcionarios no pertenecen a ningún orden jurídico nacional, sino al orden jurídico propio de la Organización de que se trate. Las consecuencias prácticas de la existencia de un orden jurídico propio de las Organizaciones son muy importantes ya que los tribunales nacionales no pueden declararse competentes para juzgar sobre las relaciones entre las Organizaciones internacionales y sus funcionarios. La razón de que ésto sea así no es la inmunidad de jurisdicción de que pueda gozar la Organización de que se trate, sino la incompetencia del tribunal para juzgar sobre relaciones jurídicas de un orden jurídico extraño. Por esta razón la incompetencia de los tribunales nacionales respecto a los contenciosos que surjan en las Organizaciones internacionales no necesita estar establecida en ningún tratado. Así por ejemplo el Tribunal de Casación italiano se ha declarado incompetente para juzgar sobre una demanda - laboral de un funcionario del Instituto Internacional de Agricultura aunque de dicha renuncia se derivara un vacío de jurisdicción, ya que dicho Instituto no poseía un tribunal como el que tienen hoy día las Organizaciones internacionales. El Tribunal italiano argumenta:

" aunque es evidente que es necesario un sistema más progresivo, no hay nada que autorice la intervención de una jurisdicción externa " (82)

En un caso similar al anterior, el Tribunal Civil de Versailles - afirma:

" es generalmente admitido que los funcionarios internacionales - ejercen sus funciones para el interés público, pero bajo una autoridad - internacional y fuera del sistema legal del Estado al que pertenecen. No habiendo sido el Estado francés encargado por la Convención internacional del deber de asistir a los funcionarios reclutados según dicha Convención, parece que las reglas según las cuales debe resolverse la demanda de Chemidlin caen fuera del marco del Derecho francés y guardan su carácter internacional. Por tanto la ley francesa no es aplicable" (83).

Como puede verse, la incompetencia de los tribunales nacionales - respecto a las relaciones que pertenecen al orden interno de las Organizaciones internacionales es reconocida, aunque no exista ningún tratado - que acuerde dicha incompetencia. Además la mayoría, por no decir la - totalidad, de los acuerdos sobre los privilegios e inmunidades de las Organizaciones internacionales conceden a los funcionarios internacionales - la inmunidad de jurisdicción respecto a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Dicha inmunidad es concedida por los distintos Es
.../...

(82) "International Institute of Agriculture v. Profili. Court of Cassation, 26-2-1931" en ADPIL, Vol.5, 1929-30, ps. 413-5.

(83) "Chemidlin v. International Bureau of Weights and Measures. Tribunal Civil of Versailles, 27-6-45" en ADPIL, Vol.12, 1943-45, ps 281-2. Ver también las siguientes sentencias:

"In re Dame Adrián and Others. France, Conseil d'Etat, 17-6-31" en ADPIL, Vol.6, 1931-32, p. 33.

"In re Banque de l'Union Franco-Chinoise. France, Conseil d'Etat, 17-6-31" en ADPIL, Vol.6, 1931-32, p. 34.

"Branno v. Ministry of war. Italy, Court of Cassation, 14-6-54 en - ILR, Vol.22, 1955, p. 276.

"Manzzanti v. H.A.F.S.E. and Ministry of Defence. Italy, Tribunal of Florence, 2-1-54" en ILR, Vol.22, 1955, p. 758.

.../...

tados incluso a los funcionarios de su propia nacionalidad. Esto se justifica porque los actos realizados por los funcionarios internacionales en el ejercicio de sus funciones son considerados como pertenecientes al orden jurídico propio de la Organización, pues los Estados son en general muy refractarios a conceder inmunidades a sus propios nacionales.

Otra forma de manifestarse la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales es la de no verse afectadas por obligaciones o derechos respecto de los cuales no hayan expresado su consentimiento. A este respecto el Asesor jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas ha afirmado :

" Es evidente que una conferencia diplomática no puede imponer deberes y obligaciones al Secretario General o a otros órganos de las Naciones Unidas, especialmente si el desempeño de tales deberes tiene consecuencias financieras. No obstante, no es raro que las conferencias de las Naciones Unidas redacten convenciones en las que se disponga que el Secretario General u otros órganos diferentes desempeñen funciones administrativas de muy diversos tipos. Tales disposiciones en el momento de su redacción constituyen simplemente propuestas o peticiones dirigidas a las Naciones Unidas; pero si un órgano de las Naciones Unidas competente para ello acepta tales propuestas o peticiones, éstas adquieren eficacia jurídica cuando la convención entra en vigor " (84).

La práctica da la razón al Asesor Jurídico del Secretario General. Así la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, requiere el consentimiento de cada Organismo especializado para que dicha Convención le sea aplicable.

(84) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972, p. 190.

Otro caso en que se ha previsto la necesidad del consentimiento de las Organizaciones internacionales en el acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos sobre Nueva Guinea Occidental (Irian Occidental) por el que dichos Estados acordaron transferir la administración de aquel territorio al Secretario General de las Naciones Unidas (85). La resolución 1752 (XVII) de la Asamblea General autorizó al Secretario General para que aceptase las funciones que le eran encomendadas en dicho acuerdo, lo que se hizo mediante un intercambio de cartas entre las Naciones Unidas, los Países Bajos e Indonesia (86).

Otro caso que demuestra que el consentimiento de una Organización internacional es necesario para que pueda estar obligada jurídicamente es la resolución de la conferencia de Viena sobre el Derecho de los tratados relativa al artículo 66 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados y el Anexo de dicha Convención. Dicha resolución reza así :

" La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los tratados,

Considerando que conforme al párrafo 7 del anexo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados los gastos de toda comisión de conciliación que se constituya en virtud del artículo 66 de dicha Convención sean sufragados por la Organización de las Naciones Unidas.

Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que tome nota del párrafo 7 de ese Anexo y que las apruebe".

(85) RTNU, Vol. 437, p. 275.

(86) RTNU, Vol. 437, p. 293.

La Asamblea General ha aceptado dichas obligaciones mediante su resolución 2534 (XXIV).

Los casos que hemos citado no son la excepción sino la regla, pues podríamos citar muchos otros casos semejantes. Parece por tanto que existe en el Derecho internacional una regla bien establecida según la cual es necesario el consentimiento de las Organizaciones internacionales para que éstas puedan quedar jurídicamente obligadas. Dicha regla ha sido confirmada por la Convención de Viena de 1978 cuyo artículo 90 dice así :

" Después de la entrada en vigor de la presente Convención, el órgano competente de una Organización internacional de carácter universal podrá decidir aplicar las disposiciones pertinentes de la Convención. La Organización notificará la decisión al Estado huésped y al depositario de la Convención ".

La entrada en vigor de la Convención queda supeditada, según el artículo dos párrafo primero de la misma, a que la Organización de que se trate cumpla dicho procedimiento.

Otra faceta de la personalidad de las Organizaciones internacionales es su capacidad para administrar territorios. La Carta de las Naciones Unidas autoriza a la Organización a administrar territorios sometidos al régimen de administración fiduciaria (art. 81). Sin embargo la capacidad de la Organización para administrar otros territorios ha sido generalmente admitida. Así por ejemplo el Consejo de Seguridad aceptó por su resolución de 10-1-1947 (87) las responsabilidades que ponía a su cargo el Tratado de paz entre las Potencias aliadas e Italia y que preveía en su anexo 6 artículo 2:

(87) Nations Unies, Conseil de Sécurité, Procès-verbaux officiels, - Deuxième année, n°3, quatrevingt-onzième séance, 10 janvier 1947, p. 60.

" El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas asegura la integridad y la independencia del Territorio Libre - (se refiere al Territorio libre de Trieste). Esta responsabilidad implica que tiene a su cargo :

a) hacer observar las disposiciones del Estatuto Permanente, especialmente en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales del hombre;

b) mantener el orden y la seguridad en el Territorio Libre (88).

La resolución citada del Consejo de Seguridad fué aprobada con un único voto en contra. El Consejo de Seguridad no llegó a administrar el Territorio Libre de Trieste por razones que no es del caso analizar aquí. De todos modos la competencia de las Naciones Unidas para ejercer la administración de territorios quedó bien establecida. Por el contrario, en el caso de Nueva Guinea Occidental las Naciones Unidas llegaron efectivamente a administrar dicho territorio.

La personalidad de las Organizaciones internacionales también se ha manifestado mediante el ejercicio de reclamaciones internacionales para exigir la responsabilidad de otros sujetos de Derecho internacional. Las Naciones Unidas han presentado reclamaciones internacionales en varias ocasiones siendo las más conocidas las referentes a la muerte del Conde Bernardotte y el Coronel Serot. La responsabilidad de un Estado ha sido también exigida en una ocasión por la UNESCO por daños sufridos por uno de sus funcionarios (89).

De la misma forma que las Organizaciones internacionales han -

.../...

(88) RTNU, Vol. 49, p. 72.

(89) " Práctica seguida por las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 314.

.../...

presentado reclamaciones internacionales contra los Estados, éstos han presentado a su vez reclamaciones contra las Organizaciones internacionales. El caso más conocido es la reclamación de Bélgica por los daños causados por las tropas de las Naciones Unidas durante las operaciones en el Congo a ciudadanos belgas. Las negociaciones entre el Estado belga y el Secretario General de las Naciones Unidas dieron lugar a los Acuerdos U Thant-Spaak en los que las Naciones Unidas reconocían su responsabilidad y se comprometían a entregar al Gobierno belga la cantidad de un millón quinientos mil dólares de Estados Unidos en concepto de indemnización (90). Hay que subrayar, en primer lugar, que en dichos Acuerdos se reconoce la responsabilidad jurídica de Derecho internacional de la Organización, pues si en algunos documentos relativos a la negociación se hablaba de responsabilidad moral (91) en los Acuerdos entre las Naciones Unidas y Bélgica, así como en los Acuerdos entre las Naciones Unidas y Grecia y Luxemburgo respectivamente se habla pura y simplemente de responsabilidad (92).

Los acuerdos U Thant-Spaak dieron lugar a una gran polémica entre el Secretario General y el Gobierno de la Unión Soviética. El Gobierno de la Unión Soviética sostenía que Bélgica no tenía derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos por personas de su

.../...

(90) "Canje de cartas que constituyen un acuerdo entre las NU y Bélgica relativo a la liquidación de reclamaciones contra las NU en el Congo por nacionales belgas, Nueva York, 20 de febrero de 1965"; Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965, p. 41.

(91) Así por ejemplo en la carta del Secretario General U Thant al Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica M.P.A.Spaak de 5 de julio de 1964. El texto de dicha carta se reproduce parcialmente en SALMON, "Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI, 1965, p. 479.

(92) "Canje de cartas que constituye un acuerdo entre las NU y Grecia relativo a la liquidación de reclamaciones de nacionales griegos contra las Naciones Unidas en el Congo, Nueva York, 20 de junio de 1966"; Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1966, p. 41.

.../...

nacionalidad a causa de las acciones de las tropas de las Naciones Unidas en el Congo. Para el Gobierno soviético, Bélgica era culpable de agresión y por tanto era dicho país el que debía ser declarado responsable de las consecuencias de su agresión. Además la Unión Soviética alegaba que el Secretario General no tenía competencia para concluir un acuerdo que concedía una indemnización. Así, el representante de la Unión Soviética afirmaba:

" La Misión permanente de la URSS en las Naciones Unidas señala a la Secretaría que no tiene ningún derecho en este caso a concertar en nombre de las Naciones Unidas ningún acuerdo con respecto al pago de indemnizaciones sin estar autorizada por el Consejo de Seguridad " (93).

Como puede verse el representante de la Unión Soviética no niega la posibilidad de que las Naciones Unidas puedan ser internacionalmente responsables, lo que niega es la responsabilidad en el caso del Congo y la falta de competencia del Secretario General para actuar a este respecto sin haber recibido autorización para ello del Consejo de Seguridad.

De la misma forma ha sido exigida por un Estado la responsabilidad de un Organismo especializado en una ocasión (94). Debe notarse que los estudios sobre la práctica de las Organizaciones no recogen los casos de menor importancia en los que las Organizaciones internacionales son declaradas responsables por vía de arbitraje o reconoce su responsabilidad por vía de negociación.

(93) "Carta de 2 de agosto de 1965 dirigida al Secretario General por el Representante permanente interino de la URSS "; Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965, p. 42.

(94) "Práctica seguida por las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 314.

La práctica de las Organizaciones internacionales demuestra - también que las Organizaciones han actuado como miembros fundadores de otras Organizaciones internacionales. Así, por ejemplo la Agencia Internacional de la Energía Atómica junto con Tunez, Líbano, Libia, la República Árabe Unida y otros países árabes han creado el Centro Regional de Radioisotopos del Oriente Medio, órgano dotado de personalidad jurídica y de los mismos privilegios e inmunidades de los que suelen gozar las Organizaciones internacionales (95).

No podemos extendernos más en el análisis de la práctica de las Organizaciones internacionales pues haríamos interminable este estudio. Señalaremos sin embargo que las Organizaciones internacionales han concluído toda clase de acuerdos previstos y no previstos en sus instrumentos constitutivos, que las Organizaciones han convocado conferencias diplomáticas, que poseen barcos y aviones que utilizan el pabellón de la Organización, que participan en arbitrajes y que pueden participar en procedimientos contenciosos ante el TIJ utilizando el procedimiento de los dictámenes obligatorios.

¿Qué consecuencias pueden deducirse del estudio de la práctica de las Organizaciones internacionales ? De forma general puede decirse que la actuación de las Organizaciones internacionales va mucho más lejos de lo que sus constituciones establecen y de lo que en ellas está implícito o necesariamente implicado. La teoría de los poderes implícitos no parece por tanto que pueda retenerse como criterio de delimitación de las competencias de las Organizaciones internacionales.

La teoría de los poderes implícitos tampoco es convincente, porque sus partidarios rara vez demuestran la necesidad de una competencia concreta para conseguir un fin de la Organización. Esto ha sido puesto de relieve por el juez HACKWORTH que en su opinión disidente al -

.../...

(95) Ver RTNU, Vol. 494, p. 221

.../...

dictamen del TIJ sobre " reparación por daños " reprocha al Tribunal la falta de argumentación de sus decisiones. El juez HACKWORTH se expresa en los siguientes términos:

" Los poderes presuntos derivan de la concesión de poderes expresados; no existen más que aquellos que son necesarios para el ejercicio de poderes conferidos expresamente. La existencia de esta necesidad para el ejercicio de los poderes de los que se trata aquí no ha sido demostrada en absoluto " (96).

Por otra parte la demostración de la necesidad de un cierto medio para conseguir un fin es muchas veces imposible. Así por ejemplo la existencia de un Tribunal administrativo que dé sentencias obligatorias en los contenciosos entre una Organización internacional y sus funcionarios parece muy conveniente pero no puede considerarse como " esencial ", tal como afirma el TIJ (97), si por " esencial " se entiende necesario o ineludible. Si por " esencial " se entiende meramente conveniente, la teoría de los poderes implícitos perdería toda su entidad, y no se distinguiría de las teorías defendidas por SEYERSTED y SERENI. La teoría de los poderes implícitos debe por tanto rechazarse porque es excesivamente restrictiva.

De forma contraria a la teoría de los poderes implícitos, la teoría de SEYERSTED, está mucho más cerca de la práctica de las Organizaciones internacionales.

SEYERSTED tiene razón al afirmar que la actuación práctica de las Organizaciones va mucho más lejos de lo que la teoría de los poderes implícitos puede justificar. Sin embargo si el punto de partida de SEYERSTED es correcto, sus conclusiones son arbitrarias. Así

.../...

(96) CIJ, Recueil 1949, p. 198.

(97) CIJ, Recueil 1954, p. 57.

.../...

por ejemplo no podemos admitir la comparación que hace dicho autor - entre las constituciones de las Organizaciones internacionales y las constituciones de los Estados cuando afirma que si los poderes de las Organizaciones internacionales no están expresados en sus constituciones tampoco están expresados en sus constituciones los derechos y deberes internacionales de los Estados (98). Tratar de equiparar a las Organizaciones internacionales con los Estados es algo que va directamente contra la realidad de los hechos. Para las Organizaciones internacionales - su instrumento constitutivo es la base de su existencia, mientras que la personalidad internacional de un Estado no depende en absoluto de la existencia de una constitución, que tiene por único objeto regular los derechos y deberes dentro de su propio sistema jurídico.

Tampoco podemos admitir la afirmación de SEYERSTED de que el que las Organizaciones internacionales no tengan fuerzas armadas y no puedan declarar la guerra es una mera cuestión de hecho y no una imposibilidad legal (99). Las afirmaciones de SEYERSTED son contrarias a la práctica internacional y es precisamente en dicha práctica donde creemos que está el fundamento de las competencias de las Organizaciones internacionales.

La capacidad de las Naciones Unidas para presentar reclamaciones internacionales no se justifica por un poder implícito de la Organización, sino por una práctica que se ha desarrollado y ha sido aceptada. La práctica demuestra que cuando las Naciones Unidas han ejercido la llamada protección funcional, los Estados de la nacionalidad de los funcionarios han renunciado a ejercer la protección diplomática (100). El hecho de que las Organizaciones internacionales hayan concluido tratados, hayan recibido misiones permanentes, hayan administrado territorios y - hayan fundado otras Organizaciones internacionales sin que dicha activi -

.../...

(98) SEYERSTED, op. cit., p. 39.

(99) ibid., p. 52.

(100) " Práctica por las NU respecto a privilegios e inmunidades " ACDI, 1967, Vol. II, p. 226, nota 33.

.../...

dad haya sido impugnada por los Estados miembros es lo que justifica la capacidad general de las Organizaciones internacionales para actuar en la esfera internacional. Tiene razón DIEZ DE VELASCO cuando dice:

" como ocurre con frecuencia, ha sido la práctica y la jurisprudencia internacional quienes han resuelto el problema precisamente en favor de la subjetividad de las Organizaciones, antes que la doctrina - diera una solución unánime " (101).

El fundamento de las competencias de las Organizaciones internacionales debe basarse, por tanto, en sus constituciones y en la práctica de las Organizaciones internacionales. De esta opinión es REUTER actual Relator especial de la Comisión de Derecho Internacional para la codificación del Derecho de los tratados concluidos por las Organizaciones internacionales, que afirma :

" La capacidad de las Organizaciones internacionales para celebrar tratados, admitida en principio por el Derecho internacional, está determinada en su extensión por las normas pertinentes de cada Organización " (102).

La definición de " reglas de la Organización " se encuentra en el artículo primero párrafo 1 sección 34 de la Convención de Viena de 1975 que dice:

" se entiende por reglas de la Organización en particular los instrumentos constitutivos de la Organización, sus decisiones y resoluciones pertinentes y su práctica establecida ".

(101) DIEZ DE VELASCO, op. cit., Tomo I, p. 235.

(102) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Tercer informe sobre la cuestión de los tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre dos o más Organizaciones internacionales, por el Sr. Paul REUTER, Relator especial", ACDI, 1974, Vol. II - primera parte, p. 150.

Las reglas de la Organización tienen para cada Organización - caracter de norma primera aplicable para la Organización antes que - cualquier otra norma de Derecho internacional. Este principio ha sido recogido por la Convención de Viena de 1975 cuyo artículo 3 dice:

" Las disposiciones de la presente Convención se entenderán - sin perjuicio de las reglas pertinentes de la Organización o de las dis - posiciones pertinentes del reglamento de la conferencia " :

La capacidad de las Organizaciones internacionales para recibir misiones permanentes dependerá por tanto de las " reglas de la Orga - nización " del mismo modo que el derecho de los Estados, miembros - o no miembros, de enviar misiones dependerá asimismo de las " re - glas de la Organización ". Este ha sido el criterio seguido por la Con - vención de Viena que en su artículo 5 dice:

"1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados - miembros podrán establecer misiones permanentes para el desempeño - de las funciones previstas en el artículo 6.

2. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para - el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7 ".

B) El reconocimiento.

El reconocimiento entre Estados y Organizaciones internacionales es un problema que apenas ha sido estudiado por la doctrina. La razón de esta falta de atención quizá resida en el hecho de que rara vez se - plantean problemas prácticos de reconocimiento entre los Estados y las Organizaciones internacionales. Sin embargo el hecho de que la Conven - ción de Viena de 1975 haya regulado el estatuto de las misiones acredi - tadas por un Estado ante una Organización de la que dicho Estado no - es miembro, nos obliga a estudiar dicho problema. En dicho estudio tra - taremos sucesivamente el reconocimiento de las Organizaciones interna - cionales por parte de los Estados y el reconocimiento de los Estados por

parte de las Organizaciones internacionales.

Debemos precisar que dado el ámbito de nuestro estudio nos limitaremos únicamente a estudiar el reconocimiento respecto a las Organizaciones internacionales de carácter universal.

a) El reconocimiento de las Organizaciones internacionales por parte de los Estados.

Las Organizaciones internacionales son creadas mediante un acuerdo entre un determinado número de Estados (103). En principio si se siguen las reglas clásicas del Derecho internacional, los tratados no tienen efecto respecto a terceros si éstos no prestan su consentimiento, - por lo que puede afirmarse que la personalidad de una Organización internacional, que debe su existencia a un tratado (104), solo tiene efecto respecto de los Estados que son parte en dicho tratado. Esta forma de argumentar ha sido contradicha por el TIJ en su dictamen sobre "reparación por daños sufridos en el servicio de las Naciones Unidas". En efecto en dicho dictamen el TIJ afirma que :

" cincuenta Estados, que representan la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional, tienen el poder, según el Derecho internacional, de crear una entidad internacional con una personalidad internacional objetiva, y no simplemente una personalidad internacional reconocida solamente por ellos "(105).

(103) Como hemos visto más arriba algunas veces las Organizaciones internacionales también participan en la creación de otras Organizaciones internacionales, pero esto es la excepción y no la regla.

(104) Las Organizaciones internacionales no son creadas necesariamente por un tratado, pero en todo caso en el origen de todas las Organizaciones hay un acuerdo entre sujetos de Derecho internacional.

(105) CIJ, Recueil 1949, p.185.

Si como dice el TIJ la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales (106) es de carácter objetivo, el reconocimiento de dicha personalidad no tiene objeto, pues la personalidad de las Organizaciones internacionales se impone a los Estados no miembros.

El hecho de que la personalidad de las Organizaciones internacionales tenga carácter objetivo supone la derogación de la regla de Derecho internacional según la cual los tratados no tienen efectos respecto a terceros, salvo que éstos hayan prestado su consentimiento. Ello ha llevado a una parte de la doctrina a admitir que dicha regla ha sido derogada únicamente respecto a la ONU, por las altas funciones que cumple dicha Organización, pero no respecto a otras Organizaciones (107).

La cuestión del carácter objetivo de la personalidad de las Organizaciones internacionales presenta además mucho más interés práctico en el caso de las Naciones Unidas que respecto al resto de las Organizaciones. En efecto, unido al problema del carácter objetivo de la personalidad de la ONU va el problema de la obligatoriedad de ciertos preceptos de la Carta (108) para los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas.

La afirmación del TIJ sobre el carácter objetivo de la personalidad de las Naciones Unidas ha sido seguida durante años por la doctrina. Sin embargo parece que en la actualidad va imponiéndose la opinión de que la regla según la cual los tratados no tienen efecto respecto a los terceros sin su consentimiento no ha sido nunca derogada y sigue estando vigente en la actualidad. En este sentido R. BINDSCHEDLER ha afirmado :

(106) En realidad el TIJ no habla más que de la personalidad internacional de la Organización de las Naciones Unidas.

(107) BRONWIE, op. cit., p. 669. De la misma opinión PASTOR RIVERA, "Los efectos de los acuerdos internacionales respecto a los terceros", RED, Vol. XIII, 1980, ps. 410 y 411.

(108) Especialmente el artículo 2 párrafo 6 y el artículo 103 de la Carta.

" mientras que su personalidad jurídica (se refiere a las Organizaciones) se establece automáticamente respecto de los Estados miembros que son partes en el tratado que las crea, no sucede lo mismo respecto a los Estados terceros, respecto de los cuales el acto constitutivo convencional no puede crear ni derechos ni obligaciones. En consecuencia, un acto de reconocimiento por parte de los Estados terceros es indispensable para que la Organización pueda aparecer respecto a ellos como titular de derechos y obligaciones " (109).

WALDOCK reprocha al TIJ que no da ningún argumento para demostrar el carácter objetivo de la personalidad de las Naciones Unidas.- Así dicho jurista afirma:

" En cuanto a la competencia de los Estados contratantes para investir a la Organización de personalidad objetiva, la Corte no dió otro fundamento que el hecho de que representaban a la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional " (110).

CAHIER tomando la argumentación de WALDOCK afirma que :

" el criterio cuantitativo, aparte de su vaguedad, no ha sido nunca utilizado en Derecho internacional. ¿A partir de cuantos Estados miembros tendrá una Organización internacional personalidad de carácter objetivo?"- (III).

Además, continúa dicho autor:

" el argumento que nos parece decisivo, es que el Derecho internacional no obliga a los Estados a reconocerse entre sí. Sería paradójico admitir que esta falta de obligación desaparecería respecto de las Or-
.../...

(109) BINDSCHEDLER, R, "La délimitation des compétences des Nations Unies", RCADI, Vol. 108, 1963 (I), p. 404.

(110) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Tercer informe sobre el Derecho de los tratados, por Sir Humphrey WALDOCK, Relator especial, ACDI, 1964, Vol. II, ps. 29 y 30.

(III) CAHIER, "Le problème des effets des traités", RCADI, Vol. 143, - 1974 (III), p. 705.

.../...

ganizaciones que son creadas y están compuestas por Estados soberanos. Sería extraño que los Estados que se han negado siempre a admitir una obligación de reconocer la hayan admitido en favor de las Organizaciones internacionales " (112).

La codificación del Derecho de los tratados parece que ha dado la razón a WALDOCK y a CAHIER (113). Los artículos 34 a 38 de la Convención de Viena de 1969 excluyen la posibilidad de que un tratado tenga efectos respecto a terceros sin que éstos presten su consentimiento. Parece que según la redacción del artículo 5 de dicha Convención los artículos 34 a 38 serían aplicables a los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales. En cualquier caso, no habiendo entrado en vigor la Convención de Viena, parece que la no oponibilidad a terceros de la personalidad de las Organizaciones internacionales puede apoyarse en las reglas clásicas del Derecho internacional sobre la materia. Tengase en cuenta la opinión de WALDOCK que, refiriéndose al dictamen del TIJ sobre "reparación por daños", ha dicho :

" cabe hacer conjeturas sobre si la Corte se hubiese pronunciado en favor del carácter objetivo de las Naciones Unidas en la opinión relativa a las Reparaciones en el caso de que hubiese tenido ante sí un Estado que se negase a reconocer a la Organización " (114).

Si el reconocimiento de las Organizaciones internacionales es necesario para que la personalidad de éstas sea oponible respecto a terceros, debemos estudiar las formas que puede adoptar dicho reconocimiento.

En primer lugar, el reconocimiento de una Organización internacional puede realizarse de una forma expresa. Así la sección I del Acuerdo

.../...

(112) ibid., p. 706.

(113) De la misma opinión SCHWARZENBERGER, Manual of International Law, Londres, Stevens & Sons, 1967, p. 80.

(114) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Tercer informe sobre el Derecho de los tratados, por Sir Humphrey WALDOCK, Relator especial", ACDI, 1964, Vol. II, p. 30.

.../...

de sede entre Suiza y la ONU dice como sigue:

" El Consejo Federal suizo reconoce la personalidad internacional y la capacidad jurídica de la Organización de Naciones Unidas" (115).

Hay que notar que en todos los Acuerdos de sede concluidos entre Suiza y los Organismos especializados que tienen su sede en Suiza-existe un precepto semejante (116).

El reconocimiento de una Organización internacional puede deducirse también de la conclusión de un acuerdo entre una Organización internacional y un Estado por el cual dicho Estado conceda privilegios e inmunidades a la Organización internacional.

Tanto las declaraciones del Consejo federal suizo como la concesión de privilegios e inmunidades son actos explícitos de reconocimiento; sin embargo parece que el mero hecho de la conclusión de un tratado entre una Organización internacional y un Estado que no es miembro de la misma da por supuesto el reconocimiento de la Organización (117).

Por último, debemos plantearnos si la creación de una misión de observación ante una Organización internacional supone el reconocimiento de dicha Organización por parte del Estado que crea la misión. En este capítulo hemos visto como la existencia de relaciones diplomáticas entre dos Estados suponía el reconocimiento mutuo entre ellos. Sin embargo, las misiones de observación acreditadas ante una Organización por un Estado que no es miembro de la misma no gozan de ningún estatuto diplomático. De todas formas, la falta de estatuto diplomático no nos parece que...

(115) RTNU, Vol. 1, p. 164.

(116) Artículo 2 del Acuerdo entre Suiza y la OIT en RTNU, Vol.15,p. 382; artículo 2 del Acuerdo entre Suiza y la OMS en RTNU, Vol. 26, p. 332 y artículo 2 del Acuerdo entre Suiza y la UIT en Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1971, p. 28.

(117) De esta opinión es LALIVE, J.F., op. cit., p. 329, nota 1.

.../...

sea razón suficiente, pues un Estado que crea una misión ante una Organización internacional manifiesta de alguna manera que desea entablar relaciones con dicha Organización, por lo que podemos afirmar que la creación de una misión de observación significa el reconocimiento de la Organización ante la que la misión es acreditada. Además la creación de las misiones de observación ante las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas suele ir acompañada de una petición de admisión a la Organización de que se trate y la petición de admisión a una Organización internacional supone el reconocimiento de la misma.

Por otra parte, el reconocimiento de las Naciones Unidas puede deducirse también del hecho de que un Estado pase a formar parte del estatuto del TIJ, que en realidad no es más que un órgano de las Naciones Unidas. Por último debemos añadir que el reconocimiento por parte de un Estado de la personalidad de las Naciones Unidas supone el reconocimiento del resto de las Organizaciones que están ligadas a dicha Organización.

b). El reconocimiento de los Estados por parte de las Organizaciones internacionales.

La forma más clara de que una Organización internacional reconozca a un Estado es la admisión de dicho Estado como miembro de la Organización.

La Carta de las Naciones Unidas regula la admisión de Estados en su artículo 4 que textualmente dice así :

" 1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones

Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Del texto de este artículo se deduce que la candidatura de un Estado debe ser aprobada tanto por la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad, por lo que cualquiera de los Miembros permanentes de dicho Consejo puede vetar la entrada de un Estado en la Organización.

La explosión de la "guerra fría" hizo que fuera imposible, durante el decenio de 1945 a 1955, llegar en el Consejo de Seguridad a algún acuerdo sobre la admisión de los nuevos Miembros. La Unión Soviética intentaba que las recomendaciones del Consejo de Seguridad se hicieran mediante votaciones en las que se recomendara al mismo tiempo la admisión de varios Estados. Los países occidentales argüían que el voto único sobre varias candidaturas era ilegal y que debía decidirse caso por caso. Además los países occidentales intentaban imponer una interpretación estricta del párrafo primero del artículo 4 de la Carta, según la cual cada Estado miembro al ejercer su voto sobre la admisión de un Estado debía atenerse únicamente a los criterios "objetivos" señalados por dicho artículo. Para fundamentar jurídicamente esta interpretación la Asamblea General por su resolución 113 (II) B pidió un dictamen al TIJ. La pregunta dirigida al Tribunal decía así:

" Un miembro de las Naciones Unidas llamado, en virtud del Artículo 4 de la Carta, a pronunciarse por su voto en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General sobre la admisión de un Estado en las Naciones Unidas, ¿está jurídicamente facultado para hacer depender su asentimiento, a esta admisión, de condiciones no expresamente previstas en el párrafo 1 del citado Artículo? En especial cuando tal Miembro reconoce que las condiciones fijadas en dicha disposición se cumplen por el Estado interesado, ¿puede subordinar su voto afirmativo a la condición

adicional de que, al mismo tiempo que al Estado de que se trata se admita a otros Estados como Miembros de las Naciones Unidas?".

El Tribunal respondió de la manera siguiente:

" El Tribunal

por nueve votos contra seis,

es de la opinión de que un Miembro de la Organización de las Naciones Unidas llamado, en virtud del artículo 4 de la Carta, a pronunciarse mediante su voto, ya sea en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, sobre la admisión de un Estado como Miembro de las Naciones Unidas, no tiene fundamento jurídico para hacer depender su consentimiento a esta admisión de condiciones que no estén previstas expresamente en el párrafo primero de dicho artículo;

que en particular, un Miembro de la Organización no puede, mientras que reconoce que las condiciones previstas por este texto se cumplen por el Estado de que se trate, subordinar su voto afirmativo a la condición de que al mismo tiempo del Estado de que se trate, otros Estados sean admitidos como Miembros de las Naciones Unidas" (118).

Como puede verse el voto en el TIJ no fué ni mucho menos unánime. En la opinión disidente colectiva de los jueces BASDEVANT, WINIARSKI, MC NAIR y READ se dice:

" Las resoluciones sobre recomendaciones o decisiones en materia de admisión son decisiones de orden político: emanan de órganos políticos; llevan consigo, según la opinión de todos, el examen de elementos políticos para estimar si las condiciones requeridas por el artículo 4

.../...

(118) Admission d'un Etat aux Nations Unies (Charte, art. 4), Avis consultatif: CIJ, Recueil 1948, p. 65.

.../...

párrafo primero se cumplen; tienen un efecto político que consiste en modificar el status del Estado de que se trate convirtiéndole en Miembro de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad que interviene aquí mediante la recomendación, asume, según los términos del artículo 24 de la Carta, la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, el cual está colocado por el artículo primero en primer lugar de los propósitos de las Naciones Unidas. La admisión de un nuevo Miembro es, en primer lugar, un acto político, un acto político de la más alta importancia ". (119).

Basados en esta argumentación los cuatro jueces consideran que la respuesta del TIJ a la primera pregunta de la Asamblea General debía haber sido la siguiente:

" Un Miembro de las Naciones Unidas llamado, en virtud del artículo 4 de la Carta, a pronunciarse mediante su voto, ya sea en la Asamblea General o en Consejo de Seguridad, sobre la admisión de un Estado que posea las cualificaciones previstas en el párrafo 1 de este artículo, participa en una decisión política; por tanto tiene fundamento jurídico para hacer depender su consentimiento a esta admisión de toda consideración que sea pertinente según él. Sin embargo, en el ejercicio de este poder, este Miembro está obligado jurídicamente a atenerse al principio de buena fé, a inspirarse en los propósitos y principios de las Naciones Unidas, y a actuar de manera que no suponga violación de la Carta " (120).

A la segunda pregunta los cuatro jueces responden de la siguiente forma :

(119) CIJ, Recueil 1948, p. 85.

(120) CIJ, Recueil 1948, p. 92.

" Si, como hemos expuesto más arriba, un Miembro de las Naciones Unidas tiene fundamento jurídico para negar su voto de admisión por razones distintas de las cualidades previstas expresamente por el artículo 4 párrafo primero, esta interpretación encontrará su aplicación en la solución de la segunda pregunta.

La consideración que se deduce del deseo de obtener al mismo tiempo que la admisión del Estado de que se trate la admisión de otros Estados es extraña a la constatación de que el primero cumple las condiciones previstas en el artículo cuatro párrafo primero; es una consideración política. Si un Miembro de las Naciones Unidas tiene fundamento jurídico para determinar su negativa a la admisión por consideraciones políticas, esto es precisamente lo que hace en este caso " (121).

De la lectura de la respuesta del Tribunal así como de la opinión disidente de estos cuatro jueces y del estrecho margen de mayoría por la que fué decidida la opinión del Tribunal puede deducirse que este dictamen tiene muy poca autoridad. Tengase en cuenta además que los dictámenes del T.I.J. no son obligatorios y que su única autoridad es la de proceder del " órgano judicial principal de las Naciones Unidas ".

Cualquiera que sea el significado de la decisión del TIJ, es claro que un Estado tiene siempre la posibilidad de basar su voto negativo respecto a una petición de admisión en el carácter " no pacífico " del Estado que la haya pedido, pues difícilmente puede imponerse una interpretación objetiva sobre el pacifismo o el belicismo de los Estados. Esto llevó a los Estados occidentales a intentar desplazar del Consejo de Seguridad a la Asamblea General el poder de decisión sobre la admisión de nuevos Miembros. Para ello la Asamblea General mediante su resolución...

(121) C.I.J., Recueil 1948, p. 93.

.../...

lución 296 (IV), después de declarar que Austria, Ceilán, Finlandia, - Irlanda, Jordania, la República de Corea, Portugal y Nepal eran Estados pacíficos y que debían formar parte de la Organización, pedía al - TIJ que emitiera un dictamen en el que respondiera a la siguiente pregunta:

" La admisión de un Estado como Miembro en las Naciones Unidas, con arreglo al párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta, ¿puede efectuarse mediante una decisión de la Asamblea General, cuando el Consejo de Seguridad no ha hecho recomendación alguna para la admisión, - bien porque el candidato no ha obtenido la mayoría necesaria o porque - un Miembro permanente ha emitido un voto negativo respecto a un proyecto de resolución encaminado a hacer tal recomendación? ".

El TIJ respondió de la forma siguiente:

" El Tribunal,

por doce votos contra dos,

es de la opinión que un Estado no puede ser admitido como Miembro de las Naciones Unidas, en virtud del párrafo dos del artículo cuarto de la Carta, por decisión de la Asamblea General, si el Consejo de Seguridad no ha recomendado su admisión ya sea por que el Estado - candidato no ha obtenido la mayoría requerida o porque un Miembro permanente ha votado contra una resolución que recomendaba su admisión " (122).

Puede decirse que con esta decisión del TIJ, los países occidentales renunciaron al empeño de imponer criterios objetivos para la admisión de nuevos Estados en las Naciones Unidas.

(122) Compétence de l'Assemblée pour l'admission aux Nations Unies, - Avis consultatif: CIJ, Recueil 1950, p. 10.

Si la admisión de Estados en las Naciones Unidas es una competencia compartida por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, - parece que el reconocimiento de Estados debe depender de la decisión - de estos dos órganos. Esto nos llevaría a afirmar que la admisión de un Estado como parte del Estatuto del TIJ, admisión que debe ser aprobada tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General, puede ser considerada como reconocimiento de dicho Estado.

La admisión de un Estado como Miembro de las NU o como parte del Estatuto del TIJ suponen un reconocimiento expreso de dicho Estado por las NU. Además parece que de determinados actos de la Organización puede deducirse un reconocimiento tácito de un Estado. Así los tratados concluidos por las NU con un Estado pueden ser considerados como reconocimiento tácito de dicho Estado. Como ejemplo de dichos tratados podríamos citar los Acuerdos de Administración Fiduciaria y los Acuerdos de sede concluidos por las NU con un Estado que no sea Miembro de la Organización.

La admisión de un Estado en un Organismo especializado parece que podría ser considerada también como un reconocimiento tácito de dicho Estado por parte de las NU. Por el contrario la admisión de una misión de observación ante las NU no parece que pueda interpretarse como el reconocimiento del Estado que envía la misión por parte de la Organización dado que dichas misiones no han gozado, hasta ahora, de estatuto oficial dentro del orden jurídico de las NU. De esta opinión es el Asesor jurídico del Secretario General de las NU cuando afirma :

" Dado que los observadores permanentes de Estados no miembros carecen de un estatuto reconocido oficialmente, las facilidades que le proporciona la Secretaría están restringidas estrictamente a las relacionadas con su asistencia a sesiones públicas y son de la misma naturaleza, generalmente, que las que se conceden a visitantes distinguidos-

de la Sede de las Naciones Unidas " (123).

Las reglas sobre reconocimiento de Estados aplicables en la ONU parece que pueden hacerse extensivas a los Organismos especializados - y al OIEA. Sin embargo el hecho de que en estas Organizaciones no exista un sistema de competencias compartidas, como él de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, hace que sea más fácil - que los órganos competentes de dichas Organizaciones puedan realizar - actos expresos de reconocimiento.

Si en el orden jurídico actual de las NU la creación de una misión de observación no supone el reconocimiento por parte de la Organización del Estado que envía la misión no sucederá lo mismo una vez que la Convencción de Viena de 1975 entre en vigor dado que ésta concede un estatuto jurídico oficial a las misiones creadas por los Estados no miembros de una Organización. En efecto el artículo 5 párrafo 2 de la Convención dice :

" Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7 ".

El artículo 7 preveé entre las funciones de la misión permanente de observación las siguientes :

" a) asegurar la representación del Estado que envía y salvaguardar sus intereses ante la Organización y mantener el enlace con ella ;

b) fomentar la cooperación con la Organización y celebrar negociaciones con ella ".

(123) " Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades ", ACDI, 1967, Vol. II, p. 196.

Así las misiones de observación que puedan crearse según el régimen de la Convención de 1975 serán auténticas misiones diplomáticas - acreditadas ante la Organización de que se trate, por lo que su creación supondrá el reconocimiento mutuo entre Estado que acredita la misión y la Organización ante la que la misión es acreditada.

La posibilidad de que un Estado acredite una misión de observación dependerá, según el artículo 5 párrafo 2, de las " reglas de la Organización ". Por tanto, las Organizaciones internacionales que acepten la vigencia de la Convención, según el procedimiento previsto en el artículo 90 deberán establecer las " reglas de la Organización " aplicables al reconocimiento de los Estados no miembros.

Un último punto que debemos subrayar antes de acabar con el reconocimiento de Estado es que la admisión de un Estado como miembro de las Naciones Unidas significa su reconocimiento por parte del conjunto de las Organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. La condición de Estado miembro de la ONU da derecho a ser miembro, de forma automática, de la mayoría de los Organismos especializados y del OIEA. El hecho de que sea la ONU la Organización competente para conceder y negar los reconocimientos deriva también del derecho de veto que tienen las Naciones Unidas sobre la admisión de Estados en muchos de los Organismos especializados y en el OIEA.

Respecto al reconocimiento de gobierno, puede decirse que normalmente no existe problema dentro de las Organizaciones internacionales para saber cuál es el gobierno que debe representar a un Estado miembro en la Organización.

Sin embargo cuando existen dos autoridades distintas que pretenden ambas ser el gobierno legítimo de un Estado, la Organización debe elegir necesariamente una entre ellas, reconociendo implícitamente a la autoridad elegida como gobierno del Estado miembro.

De forma general puede afirmarse que el órgano competente en una Organización internacional para reconocer a un Estado será también competente para reconocer cual debe ser el gobierno que represente a un Estado en la Organización. Sin embargo esta regla general tiene una excepción en el caso de la ONU.

Como hemos dicho más arriba en la NU el reconocimiento de Estados es una competencia compartida del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. No sucede lo mismo respecto al reconocimiento de gobiernos que es competencia exclusiva de la Asamblea General. La resolución 396 (V) de la Asamblea General dice en su parte dispositiva:

" La Asamblea General,

1. Recomienda que siempre que más de una autoridad afirme ser el gobierno con derecho a representar a un Estado miembro en las Naciones Unidas, y la cuestión llegue a suscitar divergencias en las Naciones Unidas, se considere la cuestión teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta y las circunstancias de cada caso;

2. Recomienda que, de plantearse una cuestión de esta naturaleza, el asunto sea considerado por la Asamblea General, o de no estar ésta reunida, por su Comisión interina;

3. Recomienda que la actitud adoptada por la Asamblea General o por su Comisión Interina respecto a una cuestión de esta naturaleza, sea tomada en cuenta por los demás órganos de las Naciones Unidas y por los Organismos especializados ".

Esta resolución ha sido confirmada en la práctica sobre todo en el caso de la representación de China en las NU que es el caso más problemático sobre reconocimiento de gobiernos con el que ha tenido que enfrentarse la Organización.

Respecto a la representación de China, es bien conocido que el Gobierno de Taiwan ha representado a dicho Estado en la ONU hasta el 25 de octubre de 1971, fecha en que la Asamblea General por su resolución 2758 (XXVI) decidió

" restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-Shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas relacionados ".

Así en el caso de la representación de China, la Asamblea General fué el único órgano que decidió sobre el reconocimiento de las autoridades legítimas de dicho Estado. " Cuando la decisión de la Asamblea fué tomada, el Secretario General informó al Presidente del Consejo de Seguridad e invitó a Pekin a designar su representante en el Consejo. La delegación china llegó a Nueva York durante el mes de noviembre " (124).

Como vemos, el Consejo de Seguridad no tomó ninguna decisión y aceptó sin más la decisión de la Asamblea General. Dicha actitud del Consejo de Seguridad era consecuente con la resolución de la Asamblea General 396 (V) antes citada.

En cuanto a los criterios seguidos por la Asamblea General respecto al reconocimiento de gobiernos MEDINA afirma que :

" Fuera del caso de China, el único criterio de legitimidad que aplicaban las Naciones Unidas para el reconocimiento de gobiernos era su control de facto del territorio nacional ... Sin embargo en los últimos .../...

(124) TAVERNER, " L'année des Nations Unies-Questions juridiques", AFDI, Vol. XVII, 1971, p. 555.

.../...

años, la Asamblea General parece estar dispuesta a sustituir sus tradicionales criterios de legitimidad por otros de carácter sustantivo, al menos con respecto a los supuestos de colonialismo portugues y de apartheid en Sudáfrica " (125).

De la misma forma que hemos afirmado respecto al reconocimiento de Estado, la creación de una misión de observación ante una Organización internacional del sistema de las NU no supone el reconocimiento, por parte de la Organización, del gobierno que envía la misión. La razón, como dijimos entonces, es la falta de estatuto oficial que tienen dichas misiones en el orden jurídico actual de las Organizaciones del sistema de las NU. Igualmente, la entrada en vigor de la Convención de Viena de 1975 supondrá una evolución en este punto dado que concede estatuto oficial a las misiones de observación. Por esta razón, una vez que la Convención de 1975 esté en vigor, la creación de una misión de observación supondrá el reconocimiento del gobierno que la envía por parte de la Organización que la recibe.

C) La necesidad de un acuerdo previo.

Como hemos visto anteriormente las relaciones diplomáticas entre Estados no podían comenzar sin la existencia de un acuerdo previo, cuyo contenido era precisamente el nacimiento de dichas relaciones. La necesidad de un acuerdo previo implicaba, por otra parte, la inexistencia del llamado " derecho de legación " cuya existencia es todavía defendida por una pequeña minoría de la doctrina.

En el presente apartado, siguiendo el esquema conceptual de las relaciones diplomáticas interestatales, vamos a estudiar cómo se plantea la necesidad de un acuerdo previo en las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales. La especialidad de las relaciones
.../...

(125) MEDINA, La Organización de las Naciones Unidas, Madrid, Tecnos, segunda edición, 1974, p. 44.

.../...

nes diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales, relaciones jurídicas triangulares y no bilaterales, hace que tengamos que estudiar de forma separada el consentimiento de la Organización internacional y el del Estado huésped respecto de la creación de una misión permanente o una misión permanente de observación.

a) El consentimiento de la Organización internacional.

Cuando estudiamos la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales vimos como la capacidad de éstas para recibir misiones permanentes dependía de lo que la CDI ha llamado las " reglas de la Organización ". De las " reglas de la Organización " depende por tanto la posibilidad que tienen los Estados miembros para acreditar misiones permanentes ante una Organización internacional. Si las " reglas de la Organización " permiten la creación de las misiones permanentes los Estados miembros que lo deseen pueden acreditar una misión ante la Organización sin necesidad de pedir el consentimiento de ésta. Las Organizaciones internacionales están basadas en el principio de igualdad soberana de los Estados miembros (126) y por tanto el derecho a acreditar misiones ante la Organización de que se trate existe para todos los Estados miembros o para ninguno.

Cuestión distinta es la de la acreditación de las misiones permanentes de observación, pues si la Organización no puede hacer distinciones entre los Estados miembros si está capacitada para hacerlas entre los Estados no miembros. Las Organizaciones son capaces en la actualidad de llevar a cabo una política propia. Esto lleva consigo el que una Organización pueda tener interés, o no tenerlo, en el establecimiento de una misión de un Estado no miembro.

(126) Artículo 2, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas.

La necesidad del consentimiento de la Organización para la creación de una misión de observación parece deducirse del artículo 5 párrafo segundo de la Convención, cuyo texto es el siguiente:

" Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7 ".

Sin embargo el hecho de que la posibilidad de crear una misión de observación se haga depender de las " reglas de la Organización " - de la misma forma que la creación de las misiones permanentes, puede hacer pensar que los Estados pueden crear libremente misiones de observación ante las Organizaciones internacionales de las que no son miembros siempre que exista dicha práctica en la Organización de que se trate. Para evitar dicha interpretación, el Gobierno suízo propuso:

" que se sustituyan las palabras " de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización " por las palabras " Con el acuerdo de la Organización y de conformidad con sus reglas o su práctica ", que - figurarían al comienzo del texto. El Gobierno suízo considera, en efecto, que conviene dejar a la Organización la facultad de aceptar o denegar el establecimiento de una misión permanente de observación. La referencia actual a las reglas o la práctica de la Organización parece significar que podrán establecerse misiones permanentes de observación si la práctica general de la Organización admite su existencia, pero, en cambio, no parece permitir la posibilidad de tomar decisiones caso por caso sobre cada candidatura " (127).

En el mismo sentido el Reino Unido observó

" la redacción de este artículo podría sugerir que un Estado no -
.../...

(127) Naciones Unidas, "Observaciones de los Estados miembros", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 440.

.../...

miembro tiene, de alguna manera, el derecho de establecer una misión permanente de observación si considera que puede hacerlo de conformidad con las normas o la práctica de la Organización Por definición, un Estado no miembro no es parte en la constitución de la Organización de que se trata y solo por acuerdo o decisión de los miembros puede adquirir el derecho de enviar una misión de observación "(128).

Contrariamente al Reino Unido y a Suiza, otros Estados han considerado que la dependencia de la creación de una misión de observación de las " reglas de la Organización "es una norma excesivamente restrictiva. Así en las observaciones del Gobierno de Hungría puede leerse:

" Este artículo debe prever que todos los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación ante las Organizaciones internacionales de carácter universal. El texto actual de la disposición y concretamente la expresión " de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización "contraviene los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la universalidad. Es también incompatible con el proyecto de artículo 75, que prohíbe la discriminación entre los Estados "(129).

Con los mismos argumentos que el Gobierno de Hungría, la delegación de Checoslovaquia propuso, en la Conferencia de Viena, una enmienda al párrafo segundo del artículo 5 cuyo texto decía así:

" En los casos en que los Estados miembros puedan establecer misiones permanentes, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7 " (130).

(128) ibid., p. 427.

(129) ibid., p. 408.

(130) Conferencia, II, p. 85 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.20).

Defendiendo su enmienda, la representante Checoslovaca afirmó en la Conferencia:

" la enmienda no requiere explicaciones. Se basa en el principio de la igualdad soberana de los Estados y en el principio de la universalidad. Su aprobación serviría los intereses de la comunidad internacional en general y el de los Estados en particular así como los de las propias Organizaciones " (131).

La enmienda de Checoslovaquia no fué aceptada por la Conferencia (132). Debe notarse que con anterioridad a la discusión del artículo 5 la Conferencia había aprobado el artículo 3 cuyo texto es el siguiente:

" Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de las reglas pertinentes de la Organización o de las disposiciones pertinentes del reglamento de la conferencia ".

Parece que si las " reglas de la Organización " prevalecen sobre las disposiciones de la Convención de Viena, esta Convención no puede obligar a las Organizaciones internacionales a recibir a una misión permanente de observación de un Estado no miembro, ya que la práctica de las Organizaciones universales respecto a los Estados no miembros demuestra que las Organizaciones nunca han admitido una participación " automática " en sus trabajos de los Estados no miembros.

Por otra parte hemos de tener en cuenta que la creación de una misión permanente de observación ante una Organización internacional supone el reconocimiento por parte de la Organización del Estado que envía la misión y del Gobierno que representa a dicho Estado. Debe notarse que la práctica de las Organizaciones internacionales universales -

.../...

(131) Conferencia, I, p.89.

(132) Conferencia, I, p.94.

.../...

demuestra que éstas han seguido siempre una política selectiva en lo - que se refiere al reconocimiento de los Estados no miembros por lo - que según el artículo 3, arriba citado, el consentimiento de la Organización es necesario para la creación de una misión permanente de observación.

b) El consentimiento del Estado huésped.

Como vimos en el capítulo primero la existencia de las misiones permanentes no estaba prevista ni en las constituciones de las Organizaciones internacionales, ni en las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni en los Acuerdos de sede (133). Sin embargo, a pesar de que las misiones no estuvieran previstas, desde fines de los años cuarenta los Estados comenzaron a acreditar misiones permanentes ante la mayoría de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

Tanto en los pocos casos en que la existencia de las misiones permanentes estaba prevista en los Acuerdos de sede como en los casos en que su estatuto se ha basado en el estatuto de los representantes permanentes, la creación de una misión permanente no ha necesitado nunca del consentimiento del Estado huésped.

Las misiones permanentes están acreditadas ante una Organización internacional y no ante el Estado huésped. El Estado huésped, al admitir que una Organización internacional establezca su sede sobre su territorio, admite implícitamente, como una consecuencia de dicho establecimiento, la existencia de las misiones permanentes. Esto puede dar lugar a que Estados que no son reconocidos, o Estados cuyo gobierno no es reconocido, por el Estado huésped puedan crear misiones perma

.../...

(133) Las misiones permanentes solamente estaban previstas en los Acuerdos de sede entre Canadá y la OACI y entre Austria y el OIEA.

.../...

nentes sobre el territorio de éste.

En general, los acuerdos de sede no prevén el caso del no reconocimiento del Estado o del gobierno que envía por parte del Estado huésped. En estos casos, los Estados o los gobiernos no reconocidos han podido crear sus misiones permanentes sin mayores problemas. - En otros casos (134) los Acuerdos de sede prevén expresamente el caso de los representantes de gobiernos no reconocidos por el Estado huésped, permitiendo una cierta discriminación contra los representantes de los gobiernos no reconocidos. De ello puede deducirse que la creación de una misión permanente, según el régimen anterior a la Convención de Viena de 1975, no necesita el consentimiento del Estado huésped

La Convención de Viena no ha innovado en este punto. El párrafo tercero del artículo 5, artículo que regula la creación de las misiones, se limita a decir:

"La Organización notificará al Estado huésped la creación de una con antelación a su establecimiento".

El supuesto del no reconocimiento entre el Estado huésped y el Estado que envía está previsto en el artículo 82 de la Convención que dice lo siguiente:

"Los derechos y obligaciones del Estado huésped y del Estado que envía en virtud de la presente Convención no serán afectados ni por el no reconocimiento por uno de esos Estados del otro Estado o de .../...

(134) Ver sección 15, apartado 4 del Acuerdo de sede entre los EE.UU y la ONU y la sección 24 del Acuerdo entre Italia y la FAO.

.../...

su gobierno, ni por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre ellos".

Este artículo enuncia una regla lógica, pues como hemos dicho - más arriba la política exterior del Estado huésped no debe interferirse - en el desarrollo independiente de las actividades de la Organización que tiene la sede sobre su territorio.

Como vemos la falta de necesidad del consentimiento del Estado - huésped para la creación y el mantenimiento de las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación es una regla de derecho bien establecida. Sin embargo es válida dicha regla en cualquier circunstancia o, por el contrario pueden existir casos excepcionales en los que el Estado huésped pueda exigir que cesen las actividades de una determinada misión?

La CDI se ha planteado este problema de los efectos de las situaciones excepcionales, tales como la ausencia de reconocimiento, la ausencia o ruptura de relaciones diplomáticas y consulares y el caso de conflicto armado (135).

La ausencia de reconocimiento o de relaciones diplomáticas no son problemas que planteen problemas especiales. Como hemos visto más arriba, la Convención de Viena ha resuelto estos problemas siguiendo una línea de continuidad respecto del régimen anterior. Sin embargo, el caso -
.../...

(135) Ver Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Examen por la Comisión de la cuestión de los posibles efectos de situaciones excepcionales-tales como ausencia de reconocimiento, ausencia o - ruptura de relaciones diplomáticas o consulares o conflicto armado- sobre la representación de los Estados ante Organizaciones internacionales: documento de trabajo preparado por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator especial", ACDI, 1971, Vol. II, segunda parte, p. 105.

.../...

de conflicto armado entre el Estado que envía la misión y el Estado huésped es de difícil solución.

En las relaciones diplomáticas interestatales la explosión de un conflicto armado entre el Estado acreditante y el Estado receptor supone el cese automático de dichas relaciones. La Convención de Viena de 1961 se limita a prever las consecuencias de dicho cese en su artículo 44.

En cuanto a las misiones permanentes el primitivo proyecto de artículos de la CDI preveía también, en su artículo 45(136) las facilidades de salida de su territorio que debía conceder el Estado huésped a las misiones permanentes en caso de conflicto armado. Dicho artículo parece que daba a entender que en caso de conflicto armado entre el Estado huésped y el Estado que envía la misión, éste debería retirar su misión. La cuestión fue discutida por la CDI en su sesión de 1969, sin que fuera posible llegar a un acuerdo. KEARNEY propuso una regulación del estatuto de la misión permanente tanto para los casos de falta de reconocimiento o de ruptura de relaciones diplomáticas entre el Estado que envía y el Estado huésped como en el caso de conflicto armado entre éstos(137). El texto de KEARNEY no fue aceptado por la Comisión que lo consideró muy restrictivo. OUCHAKOV presentó otro texto totalmente contrario al anterior que decía así:

"La ruptura o la inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares entre el Estado huésped y el Estado que envía no modificará los .../...

(136) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Tercer informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator especial", ACDI, 1968, Vol. II, p. 155 (En adelante: "Tercer informe, EL-ERIAN", ACDI, ...)

(137) ACDI, 1969, Vol. I, 1035ª sesión, p. 247.

.../...

derechos u obligaciones de uno u otro Estado en virtud de los presentes artículos ni aún en el caso de conflicto armado " (138).

La solución de OUCHAKOV tampoco fue aceptada por la Comisión que, ante la dificultad de llegar a un acuerdo, suprimió toda referencia al conflicto armado en su proyecto de artículos. El problema del conflicto armado tampoco fué tratado en la Conferencia de Viena, por lo que en el caso de que se produzca una situación de este tipo el vacío legislativo será total.

La dificultad de una posible regulación de los efectos del conflicto armado entre el Estado huésped y el Estado que envía la misión deriva de la casi imposibilidad de que dicha regulación pueda proteger al mismo tiempo dos intereses que son contradictorios. Por un lado, el Estado huésped tiene derecho a tomar las medidas necesarias para su seguridad. Por otro lado, el Estado que envía la misión tiene derecho a continuar participando en las actividades de la Organización de que se trate. Esta participación es aún más necesaria si se trata de una Organización, como la ONU, cuya actividad puede ser fundamental en el desarrollo del conflicto armado.

A la dificultad que supone la oposición de intereses se une la imposibilidad de encontrar reglas aplicables tanto de carácter convencional como de carácter consuetudinario. Por tanto, la única salida parece ser tratar de encontrar una solución en base a los principios que pueden deducirse de las normas que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales.

Un Estado es completamente libre de aceptar o no aceptar el establecimiento de una Organización internacional sobre su territorio, pero una vez que ha prestado su consentimiento, el Estado huésped tiene que
.../...

(138) ACDI, 1969, Vol. 1, 1035ª sesión, p. 248.

.../...

soportar las consecuencias de la instalación de la Organización. Sin embargo, el desencadenamiento de un conflicto armado es un hecho que produce un cambio total de las circunstancias en las que pudo negociarse el acuerdo de establecimiento entre la Organización internacional y su país huésped. Parece por tanto que en caso de conflicto armado un Estado tiene derecho a pedir que cesen sobre su territorio las actividades de una Organización. Debe tenerse en cuenta que no es una misión permanente - la que puede poner en peligro la seguridad de un Estado en caso de conflicto armado, sino más bien la actividad de una Organización internacional en su conjunto, cuyas comunicaciones no tienen derecho a interferir - el Estado huésped. Sin embargo si el Estado huésped acepta la continuidad de la Organización sobre su territorio, tiene que permitir la presencia de representantes de Estados con los que el Estado huésped pueda estar en situación de conflicto armado. Ello no impide que la presencia de dichos representantes pueda estar acompañada de medidas de vigilancia del Estado huésped, medidas que deben ser negociadas entre la Organización y su Estado huésped. Dichas medidas de vigilancia tienen sin embargo que permitir a las misiones el cumplimiento de las funciones para las que han sido creadas.

2. El estatuto jurídico de la relación diplomática.

Como vimos más arriba, el nacimiento de las relaciones diplomáticas da lugar a la creación de órganos llamados misiones. Tanto las misiones como las personas que las sirven, el personal diplomático, gozan de un estatuto privilegiado de Derecho internacional que se manifiesta en el orden jurídico interno del Estado sobre cuyo territorio está situada la misión. Al estudio de este estatuto dedicaremos el siguiente apartado.

A) Los fundamentos jurídicos de la relación diplomática.

Si las misiones permanentes se distinguen claramente de la Organización internacional ante la que están acreditadas, el fundamento de su

existencia deriva sin embargo del de la Organización internacional. En efecto, el establecimiento de las misiones permanentes es una de las consecuencias del establecimiento de una Organización sobre el territorio de un Estado. Si dicho Estado acepta el establecimiento de una Organización internacional sobre su territorio, debe aceptar también como consecuencia obligada la participación de los distintos Estados en las actividades de la Organización, lo que supone normalmente la creación de misiones permanentes.

En la primera parte de este capítulo vimos cómo en la actualidad era generalmente aceptado que los privilegios e inmunidades diplomáticos están basados en la teoría del " interés de la función ". Vimos también cómo el mismo no es un interés abstracto, sino el concreto de los Estados que mantienen entre sí las relaciones diplomáticas por lo que es posible afirmar que los privilegios e inmunidades diplomáticos están basados fundamentalmente en el " interés recíproco de la función " o dicho de otra manera, en la reciprocidad. Unida a la reciprocidad, o al " interés recíproco de la función ", la idea del carácter representativo de los agentes diplomáticos sirve todavía de base a algunos privilegios diplomáticos.

Respecto al fundamento de los privilegios e inmunidades diplomáticos de las Organizaciones internacionales, la doctrina ha insistido en general sobre la imposibilidad de basar dichos privilegios en la reciprocidad, encontrando su fundamento en el interés de la función. Así en los trabajos preparatorios de la sesión de Viena del Instituto de Derecho Internacional puede leerse :

" Los privilegios e inmunidades diplomáticos de los funcionarios de la Sociedad tienen siempre el mismo fundamento : su objeto es permitir a la Sociedad el ejercicio con plena independencia de las funciones de pacificación y de cooperación internacionales que la asigna el Pacto. Como lo subraya la primera resolución sometida a las deliberaciones del

Instituto por su subcomisión, este fundamento es " un interés de función " (139).

En la misma dirección que el IDI, CAHIER ha afirmado :

" Un Estado concede privilegios e inmunidades a los funcionarios de una Organización internacional que tiene su sede en su territorio, - pero esta Organización internacional no puede de ninguna manera hacer otro tanto por la simple razón que no posee territorio y tiene un orden jurídico muy limitado. Por esta razón la reciprocidad no podría aplicarse a las Organizaciones internacionales (140).

Para EL-ERIAN

" Como las Organizaciones internacionales no tienen jurisdicción territorial, no se puede recurrir a la ficción de la extraterritorialidad; - por otra parte, tampoco poseen el carácter soberano de los Estados, - en el que está basada la teoría del carácter representativo. Por lo tanto, las inmunidades internacionales sólo pueden estar basadas en la teoría del interés de la función " (141).

Como puede verse el acuerdo es total sobre la vigencia de la teoría del " interés de la función ". Parece necesario sin embargo precisar de qué interés se trata.

Los Estados miembros de una Organización internacional están - en general interesados en el éxito de la actividad de la Organización en .../...

(139) Annuaire de l'Institut de Droit International, 1924, p. 3.

(140) CAHIER, Etude des accords de siège conclus entre les Organisations internationales et les Etats où elles resident, Milan, Giuffrè, 1959, p. 198.

(141) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Segundo informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, por Abdullah EL-ERIAN, Relator especial", ACDI, 1967, Vol. II, p. 146. (En adelante: "Segundo informe, - EL-ERIAN", ACDI....).

la que participan. Además, están obligados por un tratado a contribuir al desarrollo de las actividades de la Organización. Sin embargo, el interés de un Estado en la actividad de una Organización puede no ser suficiente como para justificar el establecimiento de la Organización internacional sobre un territorio, sobre todo si se tiene en cuenta el estatuto tan privilegiado de que suelen gozar las Organizaciones internacionales. Por otra parte, un Estado está obligado a contribuir al éxito de la actividad de una Organización internacional en la que participa, pero dicha obligación no es tan extensa como para que un Estado tenga que admitir a la Organización sobre su territorio. Por tanto, la teoría del interés de la función difícilmente justifica el estatuto de que gozan las Organizaciones internacionales sobre el territorio del país huésped.

Las obligaciones convencionales de los Estados miembros de una Organización no van más allá de permitir y proteger las actividades de la Organización sobre su territorio, actividades normalmente esporádicas y siempre de carácter limitado. Sin embargo, el establecimiento de una Organización da lugar a una serie de cargas de tal magnitud para el Estado huésped que difícilmente pueden justificarse sobre la base del interés de dicho Estado en las actividades de la Organización. Además puede suceder que el Estado huésped no sea miembro de la Organización en cuyo caso no está jurídicamente vinculado por el interés de las actividades de la Organización.

¿Cuál es entonces el fundamento de los privilegios e inmunidades de las Organizaciones internacionales sobre el territorio del Estado huésped? El fundamento puede encontrarse fácilmente en la idea de la reciprocidad. No comprendemos la afirmación, tan extendida entre la doctrina, de que la reciprocidad no puede existir entre Estados y Organizaciones internacionales. La reciprocidad entre una Organización internacional y su Estado huésped es de distinta naturaleza que la que existe entre dos Estados, pero que sea de distinta naturaleza no quiere decir que no exista.

El establecimiento de una Organización internacional sobre el territorio de un Estado produce grandes beneficios para el Estado huésped. En primer lugar existe una serie de beneficios políticos para el Estado huésped que se derivan del hecho del establecimiento de la Organización sobre su territorio. Si los beneficios políticos son importantes mucho más importantes son aún los beneficios económicos. En efecto, la vida diaria de una Organización internacional, de sus funcionarios y de las misiones permanentes suponen numerosos ingresos para la balanza de pagos del país huésped. Por otra parte, el consumo al que dan lugar la Organización, sus funcionarios y los representantes de los Estados produce un cierto número de puestos de trabajo para los ciudadanos del Estado huésped y sobre todo produce grandes beneficios para sus comerciantes y empresarios. Téngase en cuenta además el efecto multiplicador, explicado por KEYNES, que tienen los aumentos de demanda efectiva respecto al aumento del Producto nacional bruto.

La demostración de los grandes beneficios que produce el establecimiento de una Organización internacional sobre el territorio de un Estado es muy sencilla. Cada vez que se crea una Organización internacional, existe un gran número de Estados que presentan su candidatura para ser sede de la Organización. Si del establecimiento de una Organización no se derivasen beneficios, no existirían tantas candidaturas. Además ningún Estado huésped de una Organización internacional ha pretendido nunca que una Organización abandone su territorio. Recuerdese el pánico que creó en la prensa ginebrina en el otoño de 1975 el simple rumor de la existencia de un proyecto de traslado de Ginebra a Viena de una serie de órganos de las Naciones Unidas.

El fundamento jurídico del estatuto de las misiones permanentes se encuentra por tanto en la obligación que tiene el Estado huésped de permitir el desarrollo independiente de las actividades de la Organización internacional establecida sobre su territorio. La actividad de las misiones permanentes se justifica por tanto por ser una parte de las actividades de la Organización internacional ante la que están acreditadas.

B) La relación diplomática como relación jurídica entre tres sujetos,

La idea de la reciprocidad entre una Organización internacional y su Estado huésped nos lleva a la conclusión de que detrás de las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales existen dos tipos distintos de relaciones. Esto ha sido claramente explicado por la CDI en su comentario al proyecto de Convención de Viena. La Comisión afirma que :

" En el marco de las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales, el consentimiento y los nexos jurídicos de él derivados se establecen : a) entre el Estado huésped y la Organización y b) entre cada Estado que envía y la Organización " (142).

La idea de dos relaciones jurídicas yustapuestas es satisfactoria para explicar el nacimiento de las misiones permanentes, pero una vez establecidas éstas la misión entra necesariamente en relación con las autoridades del Estado huésped. Hay que tener en cuenta que si bien la misión está acreditada ante la Organización, la mayor parte de la actividad de sus miembros se desarrolla sobre el territorio del Estado huésped. Parece por tanto que la mejor manera de caracterizar las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales es hacerlo como relaciones jurídicas triangulares.

Debe tenerse en cuenta que si la actividad diplomática de las misiones permanentes se realiza en y ante la Organización, la garantía de que dicha actividad pueda realizarse de manera independiente solamente puede ser prestada por el Estado huésped. Además, el estatuto privilegiado de las misiones permanentes y del personal diplomático de dichas misiones solamente puede ser concedido por el Estado huésped.

(142) " Proyecto de artículos ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p, 358.

La caracterización de las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales como relaciones jurídicas triangulares es fundamental para explicar dichas relaciones y para proponer soluciones equilibradas a los problemas que dichas relaciones presentan. Esto no ha sido entendido por algunos Estados, que han insistido en las relaciones del Estado que envía con la Organización y con el resto de los Estados miembros de la Organización (143) y por otros que han querido eliminar el papel de la Organización insistiendo sobre la relación bilateral entre el Estado que envía la misión y el Estado huésped (144). Frente a estas posturas que no ven más que una parte del problema, el Relator especial de la CDI ha resumido de la forma siguiente las relaciones entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización internacional :

" en la diplomacia que tiene lugar en una Organización internacional, la relación creada equivale a una situación jurídica tripartita que abarca al Estado acreditante, a la Organización internacional y al Estado huésped en cuyo territorio el representante del Estado acreditante o la Organización internacional y su personal disfrutan de la condición jurídica que les ha sido concedida " (145).

C) Derechos y deberes mutuos del Estado acreditante, del Estado huésped y de la Organización internacional.

En este apartado vamos a intentar deducir las consecuencias lógicas que se derivan de la caracterización de las relaciones diplomáticas entre Estados y Organizaciones internacionales que hemos realizado en -
.../...

-
- (143) Ver la intervención del representante de Argentina en la Conferencia de Viena respecto de la ratificación de la Convención en Conferencia, I, p. 53.
- (144) Ver las observaciones del Gobierno de Bélgica en Naciones Unidas, " Observaciones de los Estados miembros ", ACDI, 1971, Vol.II, - primera parte, p. 389.
- (145) " Segundo informe, EL-ERIAN ", ACDI, 1967, Vol.II, p. 145.

los apartados anteriores. Nuestro propósito es realizar un análisis de lege ferenda, sin entrar en el estudio de los textos legales que regulan los derechos y deberes del Estado que envía, del Estado huésped y de la Organización internacional, estudio que realizaremos en los capítulos siguientes.

Como hemos visto más arriba, el Estado huésped está obligado a permitir el libre desarrollo de la actividad de la Organización establecida sobre su territorio. La actividad de la Organización internacional supone la creación de misiones permanentes mediante las cuales los Estados pueden asegurar la continuidad de la comunicación con la Organización internacional.

Las misiones permanentes, así como el personal diplomático que las sirve, deben gozar de un estatuto privilegiado que garantice la libertad y la independencia de sus actividades. Dicho estatuto consiste fundamentalmente en la inviolabilidad de la misión y de sus comunicaciones y en la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción del personal diplomático.

En la diplomacia bilateral un Estado puede declarar persona non grata a un diplomático de otro Estado, sin necesidad de motivar su decisión (146).

Del hecho de que no sea necesaria la motivación de la declaración de persona non grata se deduce que un Estado puede hacer retirar a un diplomático por simples razones de conveniencia.

En la diplomacia multilateral no existe la institución de la declaración de la persona non grata. El personal diplomático perteneciente a una misión permanente está acreditado ante una Organización internacional y no ante el Estado huésped. El Estado huésped no tiene por tanto compe

.../...

(146) Artículo 9 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.

.../...

tencia para opinar sobre la idoneidad de las personas que sirven la misión, no pudiendo declararlas persona non grata.

Si las misiones permanentes están acreditadas ante la Organización internacional y no ante el Estado huésped, que una misión pueda ser acreditada o no dependerá de la política de la Organización y no de la del país de sede. Esto lleva consigo que puedan existir misiones permanentes que representen a Estados o Gobiernos a los que el Estado de sede no reconoce.

Si la creación de una misión no depende del consentimiento del Estado huésped y tampoco puede éste declarar persona non grata al personal diplomático, el Estado huésped tiene por el contrario el derecho a que la misión sea utilizada únicamente para el cumplimiento de los fines que justifican su existencia. El Estado que envía la misión está obligado a no utilizar la presencia de la misión sobre el territorio del Estado huésped para otros fines distintos del de asegurar la comunicación con la Organización y con el resto de los Estados que participan en las actividades de ésta.

El personal diplomático está obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado huésped, a no perturbar el orden público y a no realizar ningún acto contra la soberanía ni contra la seguridad del Estado huésped. De estas obligaciones debe derivarse un derecho de expulsión por parte del Estado huésped. Notese que decimos derecho de expulsión y no declaración de persona non grata, instituciones muy diferentes, pero que son a menudo confundidas.

La justificación de un derecho de expulsión se basa en la necesidad que tiene el Estado huésped de poder tomar las medidas necesarias para su seguridad o para el mantenimiento de un orden público. Debe subrayarse sin embargo que un acto de expulsión debe ser claramente motivado, pues el Estado huésped no puede basarse en motivos subjetivos como en la diplomacia bilateral.

Si bien hemos defendido la existencia de un derecho de expulsión por parte del Estado huésped, creemos que la Organización debe poder intervenir en los casos de expulsión. La reciprocidad existe entre el Estado huésped y la Organización, por lo que parece que la intervención de ésta es necesaria para garantizar los límites de la actuación por parte del Estado huésped.

Por otra parte parece que el Estado que envía está obligado a actuar de buena fé cuando realiza los nombramientos del personal de la misión. Parece que un Estado no debe nombrar a personas que sean especialmente indeseables para el Estado de sede, como por ejemplo un diplomático que hubiera sido expulsado del país huésped por atentar contra su seguridad cuando pertenecía a la misión acreditada ante el Estado huésped.

De la misma forma que el Estado que envía debe actuar de buena fé, el Estado huésped tiene por su condición de tal una obligación de cortesía hacia las misiones y hacia el personal de dichas misiones. Como hemos visto más arriba, el establecimiento de una Organización internacional produce grandes beneficios para el Estado huésped. De ello debe derivarse una buena acogida por parte del Estado huésped y una gran prudencia en las actuaciones de sus autoridades.

Como vemos, es posible trazar un cuadro de los derechos y deberes del Estado huésped y del Estado que envía atendiendo a los intereses de ambos. La falta de claridad en el planteamiento de dichos derechos y deberes ha creado un cierto problema, especialmente en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, entre las autoridades federales y locales y las misiones permanentes. Las misiones permanentes se quejan de la indefensión que sufren y de la pasividad de las autoridades respecto a las agresiones que sufren. El Estado huésped se queja del abuso que hacen los diplomáticos de sus privilegios. Trescientos ochenta y tres mil dólares de facturas no pagadas en el plazo de un mes por par-

te de los miembros de las misiones acreditadas en Nueva York (147). - parece una cifra intolerable para el Estado huésped. Por el contrario, - los actos continuos de enemistad y las agresiones de que son objeto las misiones de ciertos Estados y sus miembros, organizadas por ciertas - comunidades neoyorkinas, hacen muy penosa la vida de ciertas misiones en Nueva York. La creación de un Comité que estudie esos problemas, como el Comité de relaciones con el Estado huésped creado por la resolución de la Asamblea General 2819 (XXVI), parece una medida adecuada. Un diálogo sereno sobre los problemas debe siempre reducirlos.

III. Las relaciones diplomáticas entre las Organizaciones internacionales y otros sujetos de Derecho internacional distintos de los Estados.

En los apartados anteriores hemos estudiado las relaciones diplomáticas entre los Estados y las Organizaciones internacionales. Sin embargo las relaciones " exteriores " de las Organizaciones internacionales no se agotan en sus relaciones con los Estados. El lugar especial - que ocupan las Organizaciones internacionales en la escena internacional hace que éstas entren en relación con otros sujetos de Derecho internacional.

En este apartado estudiaremos por tanto las relaciones de las Organizaciones internacionales con otras Organizaciones internacionales; en segundo lugar estudiaremos las relaciones de las Organizaciones internacionales con las Organizaciones supranacionales, para plantearnos en - último lugar el problema de las relaciones entre las Organizaciones y los Movimientos de liberación nacional.

1. Las relaciones entre Organizaciones internacionales (148).

El artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas preveía que la
.../...

(147) Naciones Unidas, " Informe del Comité de relaciones con el país-huésped ", Documentos oficiales de la Asamblea General, Trigésimo período de sesiones, Suplemento nº 26, p. 22.

(148) Sobre este tema ver DUPUY, "Le droit des relations entre les Organisations internationales", RCADI, Vol. 100, 1960 (II), ps. 457 a 589.

.../...

ONU sería el centro de un sistema de Organizaciones, cada una especializada en uno de los sectores en los que la cooperación internacional es necesaria. Para la realización de dicho sistema el artículo 63 de la Carta preveía la conclusión de acuerdos entre la ONU por un lado y el resto de las Organizaciones que entraban a formar parte del sistema de las Naciones Unidas mediante la conclusión de dichos acuerdos.

Los acuerdos entre las Naciones Unidas y los Organismos especializados prevén siempre un derecho de representación recíproca entre éstos y la ONU. Las Naciones Unidas pueden enviar representantes a las reuniones de los órganos de los Organismos especializados y éstos a su vez pueden enviar representantes a las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas.

Para facilitar la relación continua entre las Naciones Unidas y los Organismos especializados, la mayoría de estos Organismos han creado una oficina de enlace en Nueva York, sede de las Naciones Unidas(149). Cual es el estatuto de dichas misiones? La mayoría de ellas están situadas en la misma sede de las Naciones Unidas por lo que pueden beneficiarse de la inviolabilidad de los locales de la ONU. Caso de que la misión esté situada fuera del distrito administrativo de las Naciones Unidas, parece que la misión en cuanto tal debe gozar de la inviolabilidad de sus locales y de sus comunicaciones sobre la base del derecho consuetudinario. En cuanto a los funcionarios que sirven dichas misiones, la sección 13 del Acuerdo de sede entre las Naciones Unidas y los EEUU prevé que dichos funcionarios no estarán sujetos a las leyes de inmigración. Dichos funcionarios pueden beneficiarse también de la inmunidad de jurisdicción por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, regla que tiene una sólida base consuetudinaria.

(149) En la actualidad los Organismos especializados que mantienen una misión en Nueva York son los siguientes: FAO, OIT, UNESCO, y OMS.

En cualquier caso, parece que las relaciones entre las Naciones Unidas y los Organismos especializados no pueden calificarse de relaciones diplomáticas. Los funcionarios de dichas misiones no gozan normalmente del estatuto diplomático. Además los lazos estrechos que existen entre la ONU y los Organismos especializados hace que difícilmente pueda admitirse que existen relaciones diplomáticas entre dichas Organizaciones, que son partes de un mismo cuerpo.

Distinto del problema de las relaciones entre Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas es el de las relaciones entre éstas y otras Organizaciones intergubernamentales. Algunas de estas Organizaciones acreditan representantes ante la ONU o ante alguno de los Organismos especializados. Así por ejemplo la Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Unidad Africana tienen acreditadas misiones ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y ante los Organismos especializados con sede en Ginebra.

Las relaciones a las que da lugar la creación de dichas misiones podrían calificarse de relaciones diplomáticas, pues se establecen entre dos sujetos de Derecho internacional completamente ajenos entre sí. Si las relaciones entre Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas son relaciones orgánicas más que relaciones diplomáticas, las relaciones entre Organizaciones independientes son similares a las relaciones diplomáticas tradicionales. Sin embargo, las misiones acreditadas por las Organizaciones independientes del sistema de las Naciones Unidas no gozan de ningún estatuto privilegiado, pues no pueden beneficiarse ni de los Acuerdos de sede, que no las prevén, ni de las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, que no les son aplicables.

Además si respecto a las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas puede hablarse de reglas consuetudinarias bien establecidas, no parece que pueda decirse lo mismo del resto de -

las Organizaciones internacionales.

La única regla consuetudinaria que podría ser aplicable a todas las Organizaciones internacionales, y aún con muchas reservas, es la de la inmunidad de jurisdicción de los funcionarios internacionales por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones; pero dicha regla tiene más que ver con la incompetencia ratione materiae que con la inmunidad propiamente dicha.

Las misiones acreditadas por las Organizaciones internacionales suelen recibir diversas cortesías por parte del Estado huésped, pero dichas cortesías no son consideradas obligatorias por parte del Estado huésped. Sin embargo, los representantes de una Organización internacional pueden gozar del estatuto privilegiado de los diplomáticos mediante el procedimiento de ser acreditados como representantes de un Estado miembro de la Organización a la que representan. Este procedimiento ha sido utilizado en algunas ocasiones.

2. Las relaciones entre Organizaciones internacionales y las Comunidades europeas.

En el apartado anterior hemos visto cómo las Organizaciones internacionales pueden estar interesadas en seguir de cerca las actividades de otras Organizaciones internacionales, creando para ese fin misiones acreditadas ante una Organización internacional. Sin embargo, las Organizaciones internacionales no sustituyen a sus Estados miembros en la participación en otras Organizaciones, por lo que las misiones acreditadas por una Organización pueden tener por función seguir de cerca los trabajos de la Organización ante la que están acreditadas, pero no participar directamente en ellos.

Cuestión distinta es la de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros de dichas Comunidades pueden ceder a una de éstas las

competencias en una serie de materias, de manera que los Estados en cuanto tales dejan de tener poder para negociar aisladamente y es la Comunidad la que debe hacerlo.

La Comunidad Económica Europea ha recibido de sus Estados miembros la competencia para cuestiones relacionadas con la política comercial. Esto implica que en algunos foros sea la Comunidad la que esté capacitada para participar y no los Estados miembros. Así por ejemplo en las Negociaciones Comerciales Multilaterales que tienen lugar en Ginebra desde fines del año 1973 es la Comunidad en cuanto tal la que participa en las mismas. Esto ha obligado a la CEE a crear una misión permanente en Ginebra acreditada ante las Naciones Unidas y ante la ICITO (150). Las funciones de dicha misión no son observar y seguir el trabajo de una Organización internacional, sino participar directamente en las Negociaciones Comerciales Multilaterales y en los órganos gestores del GATT. Sin embargo en la CEPE y en la UNCTAD los representantes de la Comunidad tienen solamente una actuación conjunta con la de los Estados miembros.

¿Qué estatuto tiene la misión de la Comunidad? No es fácil saberlo. Las misiones que participan en las negociaciones multilaterales son las mismas que están acreditadas ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y ante la ICITO (151) cuyo estatuto depende del Acuerdo de sede entre Suiza y la ONU y de la decisión del Consejo federal suizo de 31-3-48. Ni el Acuerdo de sede ni la decisión del Consejo federal suizo prevén las misiones acreditadas por las Organizaciones internacionales. Sin embargo es muy probable que exista algún tipo de acuerdo -
.../...

(150) La sigla ICITO significa " Interin Comission for the International - Trade Organization, órgano que tiene por cometido administrar el GATT.

(151) El Acuerdo de sede concluido entre Suiza y la ONU es también aplicable a la ICITO por decisión del Consejo federal suizo de 20-5-48, Ver Naciones Unidas, Legislative texts and treaty provisions, Vol.II., p. 101, nota 1.

.../...

entre la CEE y el Consejo federal Suizo que prevea el estatuto diplomático de la misión de la CEE. Dicho acuerdo no ha sido publicado, según nuestras noticias, pero sin embargo creemos que es muy difícil que dado los lazos estrechos de Suiza con los Estados miembros de la Comunidad y con la Comunidad misma, la misión de ésta no goce de estatuto-diplomático en Suiza.

3. Las relaciones entre las Organizaciones internacionales y los Movimientos de Liberación Nacional.

La Carta de las Naciones Unidas definía en su capítulo XI las responsabilidades de los " Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio ".

En dicho capítulo, la palabra " independencia " es claramente evitada. Sin embargo la referencia a los pueblos que no hayan alcanzado " todavía " la plenitud del gobierno propio, así como la obligación de la potencia administradora de desarrollar el gobierno propio de dichos territorios y el desenvolvimiento progresivo de sus instituciones libres, unida a la afirmación que hace la Carta en los artículos 1 y 55 del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, parece que autoriza a afirmar que la Carta obliga a los Estados miembros a poner fin al colonialismo.

La práctica de las Naciones Unidas, así como sus resoluciones, especialmente la resolución 1514 (XV), han ido definiendo el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, derecho que ha sido solemnemente afirmado por la resolución de la Asamblea General 2625 (XXV) que aprobó la " declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas ". En dicha

declaración, aprobada por consensus en la Asamblea General, se afirma:

" El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra ".

¿Que significa que el territorio de una colonia posea una condición jurídica separada y distinta de la del territorio del Estado que lo administra? . En nuestra opinión, dicha frase significa el reconocimiento de la colonia como un Estado en formación. Esto tiene como consecuencia que el Estado administrador no pueda invocar el artículo 2, párrafo 7 de la Carta, sobre la competencia reservada, y que por tanto la ONU puede " inmiscuirse " en los asuntos coloniales. Otra consecuencia del reconocimiento de la colonia como Estado en formación es que el representante de hecho de dicho Estado en formación, es decir, el Movimiento de liberación nacional que lucha por la independencia de dicho territorio, goza de un cierto locus standi en Derecho internacional. Dicho locus standi se manifiesta sobre todo en la participación de los Movimientos de liberación nacional, en calidad de observadores, tanto en las conferencias internacionales como en las actividades de las Organizaciones internacionales.

En el momento actual, los Movimientos de liberación nacional tienen el status de observador en tres órganos subsidiarios de las Naciones Unidas (152) y en un órgano principal (153), así como en nueve Organismos especializados (154). Los Movimientos de liberación nacional tienen el caracter de miembro asociado de la Comisión económica para Africa y han participado en numerosas conferencias convocadas por las Naciones Unidas (155).

(152) Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, Comité de descolonización y Comité del apartheid.

(153) Cuarta Comisión de la Asamblea General.

(154) FAO, OIT, UNESCO, OMS, UPU, UIT, OACI, OMCI y OMM.

(155) Todos los datos anteriores han sido tomados de LAZARUS, " Le statut des mouvements de libération nationale à l'Organisation des Nations Unies ", AFDI, Vol. XX, 1974, p. 173.

La participación de los Movimientos de liberación nacional en las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a título de observador o de miembro asociado, ha tenido como consecuencia en algún caso la creación de misiones de observación ante dichas Organizaciones internacionales. Así por ejemplo en Ginebra existe una misión de observación de la Organización de liberación de Palestina ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas(156). Sin embargo, las misiones representativas de los Movimientos de liberación nacional no gozan de ningún estatuto privilegiado. Para remediar esta situación, una serie de países propusieron en la Conferencia de Viena lo siguiente:

"Deben incluirse en el proyecto de artículos disposiciones en virtud de las cuales dichos artículos, y en particular los relativos a los privilegios e inmunidades, sean aplicables mutatis mutandis, a las misiones de observación y a las delegaciones de observación enviadas por los Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas, a quienes la Organización de que se trate haya concedido, de conformidad con su práctica respectiva, la condición de observador"(157).

Ante la imposibilidad de que la Conferencia aceptase dicha propuesta, se intentó simplemente que la Conferencia aprobara una resolución en la que se llamaba la atención sobre la necesidad de que los Estados huéspedes concedieran un estatuto privilegiado a las misiones representantes de los Movimientos de liberación nacional. Esta nueva propuesta fué considerada por la Conferencia, dando lugar a una violenta discusión.../...

(156) La lista diplomática de las Naciones Unidas denomina a dicha misión "Bureau d'observation" como al resto de las misiones acreditadas por las Organizaciones internacionales, incluida la de la CEE, Ver Naciones Unidas, Missions permanentes auprès des Nations Unies á Genève et organes principaux des Nations Unies, Ginebra julio de 1975, p. 154-b.

(157) Conferencia, II, p. 192(Documento: A.CONF.67/L.1 y ADD.1).

.../...

sión especialmente entre los representantes de Israel y de Egipto (158).

La resolución fue por fin aprobada por 53 votos a favor, 5 en contra y quince abstenciones. La parte dispositiva de la resolución dice así :

" La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales,

1., Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que examine sin demora esta cuestión en su trigésimo periodo ordinario de sesiones;

2. Recomienda, mientras tanto, a los Estados interesados que concedan a las delegaciones de los Movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los Estados Arabes, o por ambas, en sus regiones respectivas y a los que la Organización internacional correspondiente haya concedido el estatuto de observador, las facilidades, privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de sus funciones, inspirándose en las disposiciones pertinentes de la Convención aprobada por la Conferencia ;

3. Decide incluir la presente resolución en el Acta Final de la Conferencia ".

Los deseos expresados en esta resolución tienen pocas posibilidades de convertirse en realidad. Sin embargo una regulación del estatuto de las misiones representativas de los Movimientos de liberación nacional sería muy necesaria, pues la presencia de sus representantes sobre el territorio de los Estados huéspedes da lugar a problemas jurídicos de solución difícil y de amplias consecuencias políticas.

(158) Conferencia, I, p. 56 y ss.

IV. La representación de las Organizaciones internacionales ante los Estados,

Las relaciones diplomáticas interestatales suponen normalmente la creación recíproca de dos misiones, cada una representativa de un Estado y acreditada ante el otro. Por el contrario, las relaciones diplomáticas entre un Estado y una Organización internacional suponen solamente la creación de una misión representativa de un Estado ante una Organización internacional. Sin embargo, en ciertas ocasiones las Organizaciones internacionales crean misiones que las representan en el territorio de un Estado. Esto ha llevado a la doctrina a discutir si las Organizaciones internacionales tienen o no el " derecho de legación activa ". Así por ejemplo LAUTERPACHT en la séptima edición del libro de OPPENHEIM - afirma :

" las Naciones Unidas, que es una persona internacional sui generis, posee el derecho de legación aunque no sea un Estado " (159).

DO NASCIMENTO E SILVA distingue entre las Organizaciones - que tienen el derecho de legación y los que no lo tienen. Dicho autor - afirma :

" En la lista de las entidades que tienen el derecho de recibir y - enviar representantes diplomáticos debemos incluir a las grandes Organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos, la Liga de los Estados Arabes y las Comunidades Europeas. Sin embargo - las Organizaciones intergubernamentales especializadas, como la FAO, - la UNESCO, la OIT, y la OACI, no lo poseen " (160).

(159) OPPENHEIM-LAUTERPACHT, op. cit., Vol.1, p. 692.

(160) DO NASCIMENTO E SILVA, Diplomacy in International Law, Leiden, Sijthof, 1972, p. 41.

GUGGENHEIN ponía como condición para que las Organizaciones internacionales ejerzan el derecho de legación activa y pasiva que las Organizaciones sean capaces de llevar a cabo una política exterior independiente (161).

Las constituciones de las Organizaciones internacionales no suelen prever la posibilidad de que las Organizaciones creen misiones. En algunos casos sin embargo dicha posibilidad está prevista. Así el artículo 10 del instrumento constitutivo de la FAO se recoge la acreditación de Directores regionales que serán nombrados de acuerdo con el Estado ante el que estén acreditados. Del mismo modo, la constitución de la OMS prescribe en su artículo 46 la constitución de oficinas regionales y en su artículo 52 el nombramiento de Directores regionales que dirijan dichas oficinas.

Como vemos, con excepción de la FAO y de la OMS, los instrumentos constitutivos de las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no prevén el " derecho de legación activa " de dichas Organizaciones. Esta ha sido la razón de la discusión doctrinal, a la que antes aludíamos, sobre si las Organizaciones internacionales tienen o no el " derecho de legación activa ". Esta discusión, basada en la teoría de los poderes implícitos, no tiene mucho sentido. Como vimos cuando estudiamos la personalidad de las Organizaciones internacionales, en lo que se refiere a la subjetividad internacional la práctica y la jurisprudencia han resuelto el problema mucho antes que la doctrina. Esto mismo sucede respecto al " derecho de legación activa de las Organizaciones internacionales ".

La capacidad de una Organización internacional para crear una misión que la represente depende únicamente de las " reglas de la Orga
.../...

(161) GUGGENHEIM, op. cit., Tomo I, p. 489.

.../...

nización ". En general las constituciones de las Organizaciones internacionales permiten la creación de órganos subsidiarios y nada impide que dichos órganos puedan estar situados en un lugar geográfico distinto del de la sede. En base a dicho poder de crear órganos subsidiarios, las Organizaciones internacionales han creado órganos o misiones que las representen fuera de su sede (162). Para la creación de dichas misiones, las Organizaciones suelen concertar un Acuerdo de sede (163) que prevé los privilegios e inmunidades de la misión y de sus funcionarios. En algunos casos el Acuerdo de sede no contempla otras inmunidades que las contenidas en la Convención general sobre privilegios e inmunidades aplicable. En otros casos, sin embargo, los funcionarios principales de dichas misiones gozan de un estatuto similar al de los diplomáticos.

Para el nombramiento del funcionario " jefe de misión " suele existir algún procedimiento mediante el cual el Estado receptor presta su acuerdo a dicho nombramiento (164) de forma semejante al procedimiento del placet que existe en las relaciones diplomáticas interestatales.

Podemos afirmar por tanto que entre las Organizaciones internacionales y los Estados existen en algunos casos relaciones similares a las relaciones diplomáticas. Sin embargo, desde el punto de vista de las funciones que ejercen dichas misiones, las relaciones entre Organizaciones internacionales y los Estados pueden diferir mucho de las relaciones diplomáticas interestatales. La mayoría de las misiones acreditadas por las Organizaciones internacionales suelen ser creadas en el marco de un plan

.../...

(162) La relación de tales misiones puede encontrarse en la publicación- United Nations Yearbook cuya última edición fué publicada en 1973.

(163) Dichos Acuerdos se encuentran recopilados en Naciones Unidas, - Legislative texts and treaty provisions concerning the legal status, - privileges and immunities of International Institutions, Volúmenes I y II y en el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas (1963-1975).

(164) Ver por ejemplo la aceptación por parte de Fiji del nombramiento del Director regional de la OMS en Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1971, p. 13.

.../...

de asistencia a los países subdesarrollados, por lo que las funciones de los representantes de las Organizaciones son muy diferentes de las funciones propias de un diplomático.

Como vemos, si lo normal es que sean los Estados los que acrediten misiones ante las Organizaciones internacionales, también puede suceder lo contrario. Las relaciones entre Organizaciones y Estados se establecen entre dos sujetos de Derecho internacional que se reconocen entre sí y que concluyen un acuerdo para la creación de una misión. Sin embargo, dichas misiones suelen ser creadas para cumplir un objetivo concreto y no para asegurar la continuidad de la comunicación entre dos sujetos de Derecho internacional. Las relaciones entre Organizaciones internacionales y Estados son por tanto semejantes y distintas de las relaciones diplomáticas interestatales.

CAPITULO TERCERO : LAS MISIONES PERMANENTES Y LAS MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACION.

El propósito de este capítulo es estudiar la creación, la actividad y la eventual desaparición de las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación. Para que el estudio de la actividad de las misiones sea completo, tendremos necesariamente que estudiar también el nombramiento y el fin de las actividades de los miembros de la misión.

La diferencia entre los terminos " misiones permanentes " y " misiones permanentes de observación " consiste, como hemos visto en el capítulo anterior, en que el primero se emplea para denominar a una misión acreditada por un Estado miembro de una Organización ante ésta, mientras que el segundo se utiliza para denominar a una misión acreditada por un Estado ante una Organización de la que no es miembro. El hecho de que tanto unas como otras sean llamadas misiones, y no embajadas o legaciones, responde a una voluntad de diferenciación entre la diplomacia interestatal y la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales.

El termino " misión permanente " ha sido utilizado siempre para denominar a las misiones acreditadas ante las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo el término " misión permanente de observación " es un término nuevo, acuñado por la Comisión de Derecho Internacional.

En el régimen anterior a la Convención de Viena de 1975, el término " misión permanente de observación " era desconocido. Los términos utilizados eran el de " observador permanente ", o el de " oficina del observador permanente ". Esta denominación respondía al hecho de que las misiones permanentes de observación no tenían existencia jurídica como tales misiones. Sin embargo, la Convención de Viena de 1975 ha equiparado las misiones permanentes a las misiones permanentes de ob -

servación, razón por la cual ha sido necesario crear una nueva terminología.

1. La creación de una misión.

En el capítulo anterior vimos como según el artículo 5, párrafo 1 y 2, de la Convención de Viena de 1975, el establecimiento de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación dependía únicamente de las " reglas de la Organización ", por lo que el consentimiento del Estado huésped no era necesario.

El hecho de que tanto el establecimiento de las misiones permanentes como el de las misiones permanentes de observación dependan de las " reglas de la Organización " no quiere decir que estas reglas tengan - que ser las mismas en uno y otro caso.

Respecto a las misiones permanentes las " reglas de la Organización " deberán precisar en qué casos, y en cuáles no, los Estados miembros de una Organización pueden crear misiones permanentes ante la sede principal de la Organización. Recordemos que las Organizaciones internacionales están basadas en el principio de igualdad soberana de los Estados miembros, por lo que la posibilidad de crear misiones permanentes existirá para todos los Estados miembros o para ninguno.

Las " reglas de la Organización " deben prever también la posibilidad u imposibilidad de crear misiones permanentes ante las Oficinas - de la Organización situadas en lugar geográfico distinto al de la sede. En la actualidad existe la práctica de acreditar misiones ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas de Ginebra y ante alguna de las Comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. La Convención de Viena confirma esta posibilidad de crear misiones permanentes ante las distintas sedes que pueda tener una Organización. En efecto el artículo 1, párrafo 1, apartado 15, dice :

" se entiende por Estado huésped el Estado en cuyo territorio :

a) la Organización tiene su sede o una oficina ".

De este artículo puede desprenderse que la creación de misiones permanentes acreditadas ante las distintas sedes de una Organización de pende, una vez más de las " reglas de la Organización ", sin que sea necesaria la autorización del Estado huésped.

De la misma forma que la de las misiones permanentes, la creación de las misiones permanentes de observación depende de las " reglas de la Organización ". Esto implica que los Estados no miembros de una Organización no poseen un derecho automático de crear una misión ante una Organización, sino que deben atenerse a las " reglas de la Organización ". Respecto a la creación de las misiones permanentes de observación, parece que por " reglas de la Organización " debe entenderse la decisión del órgano competente de la Organización, ya que no existe práctica sobre la materia, y los instrumentos constitutivos de las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no dicen nada al respecto.

En el régimen anterior a la Convención de Viena parece que los Estados huéspedes no eran consultados respecto a la creación de las misiones de observación. Esto resulta lógico, pues aunque las misiones de observación no estaban previstas en los Acuerdos de sede, como tampoco gozaban de ningún estatuto privilegiado, su creación no suponía ninguna carga para el Estado huésped.

En el régimen de la Convención de Viena, la creación de las misiones permanentes de observación tampoco depende del consentimiento del Estado huésped. El párrafo tercero del artículo 5 de la Convención, aplicable tanto a las misiones permanentes como a las misiones permanentes de observación dice así :

" La Organización notificará al Estado huésped la creación de una misión con antelación a su establecimiento ".

En el proyecto de la CDI la obligación de notificar al Estado huésped la creación de una misión con antelación a su establecimiento solamente era obligatorio " cuando fuera posible " (1). Una enmienda presentada por el Camerun, Bélgica y la República federal alemana (2), que preveía la obligación, en cualquier caso, de notificar al Estado huésped la creación de una misión con antelación a su establecimiento fué aprobada en la Conferencia de Viena, lo que dió lugar al texto actual del párrafo tercero del artículo tercero de la Convención.

La obligación de notificar al Estado huésped la creación de una misión con antelación a su establecimiento es absolutamente lógica. Si el Estado huésped está obligado a conceder a la misión un estatuto privilegiado, parece lógico que dicho Estado tenga conocimiento de la existencia de la misión.

Si el consentimiento del Estado huésped no es necesario en general para la creación de una misión, la necesidad de dicho consentimiento surge en el caso de que un Estado quiera crear una misión en una localidad distinta a la de la sede de la Organización.

Las misiones permanentes han sido creadas prácticamente siempre en la misma localidad en la que la Organización ante la que están acreditadas tiene su sede. Sin embargo, en algunos casos las misiones se han establecido en otras localidades. En general los Estados huéspedes no han puesto inconvenientes a dicha instalación, aunque la han acompañado de algunas limitaciones. La Convención de Viena ha regulado este supuesto, que no había sido previsto en los Acuerdos de sede, en su artículo 18 que dice así :

(1) " Proyecto de artículos ", ACDI, 1971, Vol.II, primera parte, p.312.

(2) Conferencia, II, p. 86.

" Las misiones deben establecerse en la localidad donde la Organización tenga su sede. Sin embargo, si las reglas de la Organización lo permiten, y con el consentimiento previo del Estado huésped, el Estado que envía podrá establecer una misión o una oficina de una misión en una localidad distinta de aquella en que la Organización tenga su sede ".

La necesidad del consentimiento del Estado huésped es una garantía para éste que la Convención le ofrece con buen criterio. Sin embargo, no entendemos la referencia a las " reglas de la Organización " en un problema que debe depender únicamente del Estado que envía y del Estado huésped. El texto propuesto por la CDI preveía únicamente la necesidad del consentimiento del Estado huésped (3); sin embargo una enmienda presentada en la Conferencia por la Republica federal de Alemania (4) hizo que el establecimiento de las misiones en una localidad distinta a la de la sede de la Organización dependa también de las llamadas " reglas de la Organización ".

El establecimiento de una misión puede plantear problemas prácticos para el Estado que envía. En ciertas ocasiones puede resultar difícil encontrar locales adecuados para la misión en la localidad en la que la Organización tiene su sede. La Convención de Viena ha previsto esta posibilidad en su artículo 21, cuyo primer párrafo dice :

" 1. El Estado huésped y la Organización ayudarán al Estado que envía a obtener en condiciones razonables los locales necesarios para la misión en el territorio del Estado huésped. Cuando sea necesario, el Estado huésped facilitará de conformidad con sus leyes la adquisición de esos locales ".

(3) " Proyecto de artículos ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 322.

(4) Conferencia, II, p. 96 (Documento : A/CONF.67/C.1/L.41).

Si el Estado huésped ha admitido sobre su territorio a la Organización de que se trate, está obligado en consecuencia a facilitar el establecimiento de las misiones permanentes. En circunstancias normales éstas no tendrán problemas especiales para encontrar locales adecuados, pero puede darse el caso de que esto sea difícil y en este caso el Estado que envía tiene derecho a que el Estado huésped y la Organización le presten su asistencia.

Según la redacción del artículo 21 parece que el Estado huésped no está obligado a facilitar la compra por parte del Estado que envía de los locales necesarios para la misión permanente, siempre que exista la posibilidad de arrendar esos locales en condiciones razonables. Caso de que el arrendamiento no sea posible, el Estado huésped está obligado a permitir la adquisición de los locales necesarios para el establecimiento de las misiones permanentes.

Antes de terminar este apartado es preciso hacer una referencia al problema de la vigencia conjunta de los Acuerdos de sede con el artículo 5 de la Convención de Viena. Como vimos en el capítulo primero en caso de contradicción entre la Convención y un Acuerdo de sede, debe ser éste el que prevalezca en aplicación del artículo 4 párrafo a) de la misma Convención. Tanto el párrafo primero como el tercero del artículo 5 son consecuentes con los Acuerdos de sede, por lo que puede afirmarse que dichos párrafos son la codificación de las reglas previstas en los Acuerdos de sede y de la práctica establecida durante su vigencia. Sin embargo, la regulación de las misiones permanentes de observación es completamente nueva, pues dichas misiones no están previstas en los Acuerdos de sede. Parece, por tanto, que si la Convención es ratificada por un Estado huésped, el párrafo segundo del artículo 5 debe ser aplicable. Los Acuerdos de sede priman sobre la Convención en caso de contradicción entre ambos, pero los Acuerdos de sede no excluyen a las misiones de observación, limitándose a no regularlas. Por esta razón creemos que en caso

de vigencia conjunta de la Convención con un Acuerdo de sede, el establecimiento de misiones permanentes de observación se regirá por el párrafo segundo del artículo 5.

II. El nombramiento del personal de la misión.

Una vez creada la misión, se plantea el problema del nombramiento de sus miembros. El nombramiento de los miembros de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación es uno de los temas más problemáticos del Derecho diplomático conexas con las Organizaciones internacionales. Para facilitar su comprensión estudiaremos separadamente el nombramiento de las distintas clases de personal que puede existir en una misión.

I. El nombramiento del jefe de misión.

Tanto en las relaciones diplomáticas interestatales como en las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales, la figura del jefe de misión se distingue del resto del personal diplomático.

El jefe de misión es el auténtico representante de su Estado y su gobierno en el Estado o la Organización ante los que esté acreditada la misión. El resto del personal diplomático no tiene el mismo carácter representativo que el jefe de misión. El jefe de misión es por tanto la persona capaz de ser portavoz de la misión que dirige y del Estado que envía la misión.

La actividad de la misión exige que exista siempre una persona que esté al frente de ella. Por otra parte el Estado que concede los privilegios e inmunidades a la misión diplomática necesita que exista una persona cuya palabra y cuyas decisiones puedan ser tomadas como decisiones del Estado que envía la misión.

La necesidad de que exista siempre un jefe de misión ha creado la figura del " encargado de negocios ad interim " o persona que ejerce

las funciones del jefe de misión cuando éste está imposibilitado para hacerlo o cuando el puesto de jefe de misión ha quedado vacante. Esta figura del "encargado de negocios ad interim", propia del Derecho diplomático tradicional, ha sido utilizada también en la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales. La Convención de Viena ha previsto la figura del "encargado de negocios ad interim" en el artículo 16, que dice - como sigue :

" Si queda vacante el puesto de jefe de misión, o si el jefe de misión no puede desempeñar sus funciones, el Estado que envía podrá nombrar un jefe de misión interino, cuyo nombre será notificado a la Organización y por ésta al Estado huesped ".

No vemos cuál es la utilidad de sustituir la expresión "encargado de negocios ad interim" por la de "jefe de misión interino". La Convención de Viena de 1961 utiliza la expresión "encargado de negocios ad interim" que ha sido la expresión corrientemente utilizada en el Derecho diplomático (5).

El jefe de misión interino sustituye al jefe de misión a todos los efectos. La única diferencia que existe entre uno y otro son de índole protocolaria.

A) Los límites al nombramiento del jefe de misión.

En la diplomacia interestatal, los Estados, antes de acreditar a una persona como jefe de la misión ante otro Estado, tienen que asegurarse - que esta persona es aceptable para el Estado receptor. Este trámite, llamado corrientemente placet, está regulado por el artículo 4 de la Convención de Viena de 1961, cuyo texto es el siguiente:

" 1. El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado.

(5) El proyecto de la CDI utilizaba la expresión "encargado de negocios - ad interim". Sin embargo una enmienda inglesa hizo sustituir dicho término por el de "jefe de misión interino", Ver Conferencia, II, p.95 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.II).

2. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento ".

En las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales el procedimiento del placet nunca ha sido previsto, pues los Estados han considerado que las Organizaciones internacionales no deben tener la facultad de oponerse al nombramiento de los representantes estatales. Ni los tratados constitutivos de las Organizaciones, ni los Acuerdos de sede, ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades conceden esta facultad a las Organizaciones. La resolución de la Asamblea General 257A (III) prevé únicamente :

" 1. Que las credenciales de los representantes permanentes sean expedidas por el Jefe del Estado, por el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores, y comunicadas al Secretario General ;

2. Que los nombramientos y cambios de los miembros de las misiones permanentes que no sean el representante permanente sean comunicados por escrito al Secretario General por el jefe de la misión ".

La práctica de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas confirma lo previsto en esta resolución.

En la conferencia de Viena de 1975 no se ha tratado en ningún momento de la cuestión del placet. Tampoco se ha previsto el placet respecto a los representantes permanentes de los Estados no miembros. El procedimiento del placet existe sin embargo respecto de los representantes de los Estados no miembros ante las Comunidades Europeas. Respecto de los representantes de los Estados parte en la Convención de Yaounde, las autoridades comunitarias se limitan a " tomar nota " de los nombramientos, no existiendo ninguna posibilidad de control respecto de los nombramientos realizados por los Estados miembros y los Estados asociados (6).

(6) HARDY, Modern Diplomatic Law, Manchester, Manchester University Press, 1968, ps. 105 y 106.

Si la cuestión del placet no se ha planteado ni en la práctica ni en la conferencia de Viena, no ha sucedido lo mismo con el supuesto derecho del Estado huésped de aceptar o no los nombramientos de los representantes de los Estados ante las Organizaciones internacionales. Sin embargo, la inexistencia del procedimiento del placet lleva consigo que los límites del nombramiento del jefe de misión sean los mismos que los del personal diplomático en general, por lo que trataremos este tema cuando estudiemos el nombramiento de éste, para evitar repeticiones.

B) Las credenciales del jefe de misión.

En la diplomacia interestatal el nombramiento de un jefe de misión diplomática va acompañado de la extensión de un documento, conocido con el nombre de " cartas credenciales ", en el que el Jefe del Estado acreditante ruega al Jefe del Estado receptor que acepte el nombramiento del Jefe de misión. Las " cartas credenciales " son entregadas por el jefe de misión al Jefe del Estado receptor en una ceremonia que suele estar revestida de una cierta solemnidad. Con la entrega de las " cartas credenciales " comienza oficialmente y generalmente la actividad del jefe de misión.

En la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales se ha evitado a menudo la utilización del termino " cartas credenciales " sustituyéndola por la de " poderes ". Esta misma sustitución ha sido realizada también en el idioma francés que ha utilizado el vocablo " pouvoirs " en vez de " lettres de créance "; sin embargo la lengua inglesa ha utilizado siempre la palabra " credentials " para denominar tanto las cartas credenciales de los embajadores como los poderes de los representantes permanentes.

La distinción entre " poderes " y " cartas credenciales " tiene su origen en el deseo de algunos Estados de dejar bien sentado que las Organizaciones internacionales no tienen ningún poder de control sobre los -

nombramientos que hacen los Estados. Sin embargo debe tenerse en cuenta que en la diplomacia interestatal antes del nombramiento del jefe de una misión, el Estado receptor ha dado su consentimiento a dicho nombramiento mediante el procedimiento del placet. El hecho de que en el texto de las " cartas credenciales " sea incluida la petición de que el jefe de misión que las entrega sea aceptado por el Estado receptor es una mera cláusula de estilo.

En el proyecto de artículos presentado por la CDI se utiliza el termino " credenciales " en el texto castellano (7) mientras que en el texto francés se seguía utilizando el término " pouvoirs "(8). La razón de esta divergencia quizá resida en el hecho de que Francia siempre ha sido el Estado que más se ha opuesto a la utilización de la expresión " cartas credenciales " en la diplomacia ante las Organizaciones internacionales. Sin embargo una sugerencia del Asesor jurídico de las Naciones Unidas fué aceptada en la Conferencia de Viena por lo que el artículo 10 de la versión francesa de la Convención utiliza el termino " lettres de créance " y no el de " pouvoirs "(9), no habiendose cambiado la versión castellana.

De la misma forma que los embajadores entregan sus " cartas credenciales " al Jefe del Estado receptor, los jefes de misión de las misiones permanentes entregan sus " credenciales " al más alto funcionario de la Organización ante la que están acreditados. La práctica varía sin embargo de unas Organizaciones a otras, por lo que la Convención no ha querido especificar quién debía recibir dichas " credenciales " limitandose a prever en su artículo 10 que las credenciales " serán transmitidas a la Organización ".

(7) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, Volumen II, primera parte, p. 316.

(8) Annuaire de la Commission de Droit International, 1971, Volume II, première partie, p. 309.

(9) Conferencia, I, p. 113.

El artículo 10 de la Convención prevé también que las " credenciales " serán expedidas por el Jefe del Estado, por el Jefe del Gobierno o el Ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización lo permiten, por otra autoridad competente del Estado que envía. Este último inciso responde al deseo de no impedir la práctica que existe en ciertas Organizaciones " técnicas " en las que las " credenciales " de los representantes son expedidas por el Ministerio competente sin necesidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores actúe de correa transmisora.

La acreditación de los representantes permanentes no es en principio más que una acreditación ante la Secretaría de la Organización de que se trate.

La resolución 257 A (III) de la Asamblea General afirma:

" 4. Que los miembros que deseen hacerse representar en el seno de uno o varios órganos de las Naciones Unidas por sus representantes permanentes especifiquen los nombres de dichos órganos en las credenciales que envíen al Secretario General ".

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Administración Fiduciaria los representantes permanentes necesitan para representar a su Estado poderes emanados del Jefe del Estado, del Jefe del Gobierno o del Ministro de Relaciones Exteriores (10). Sin embargo los poderes emanados de la misión permanente son válidos para participar en el Consejo Económico y Social (11).

La práctica de los Organismos especializados es bastante similar -

.../...

(10) " Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades ", ACDI, 1967, Vol. II, ps. 170 a 172.

(11) ibid., p. 171.

.../...

a la de las Naciones Unidas. El hecho de estar acreditado como representante permanente ante un Organismo especializado no habilita en general para participar en un órgano, sin una acreditación expresa para dicho órgano (12).

Recogiendo la práctica de las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el artículo 11 de la Convención dice:

" 1. En las credenciales expedidas para su representante permanente, un Estado miembro podrá especificar que dicho representante está facultado para actuar como delegado ante uno o varios órganos de la Organización.

2. A menos que un Estado miembro disponga otra cosa, su representante permanente podrá actuar como delegado ante órganos de la Organización para los cuales no haya requisitos especiales concernientes a la representación.

3. En las credenciales expedidas para su observador permanente, un Estado no miembro podrá especificar que dicho observador está facultado para actuar como delegado observador ante uno o varios órganos de la Organización cuando ello esté permitido por las reglas de la Organización o del órgano de que se trate ".

Este artículo es suficientemente claro y no necesita comentario alguno. El texto coincide con el propuesto por la CDI, sin que se presentara ninguna enmienda en la Conferencia de Viena.

C) Los poderes del jefe de misión para concluir tratados.

El artículo 7 párrafo segundo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados dice:

(12) ibid., ps. 199 a 201.

" 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

c) los representantes acreditados por los Estados ante una Conferencia internacional o ante una Organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, Organización u órgano.

Este artículo se limita a regular los poderes de los representantes permanentes respecto de los tratados adoptados " en " las Organizaciones internacionales. La CDI consideró por tanto que era conveniente incluir - en su proyecto de artículos sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales un artículo semejante aplicable a los tratados celebrados " entre " los Estados y las Organizaciones internacionales.

Algunos gobiernos se mostraron disconformes con el parecer de la CDI. Así el Gobierno suízo consideró que este artículo debía ser suprimido, pues el lugar adecuado para regular esta cuestión era la futura convención sobre los tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales(13). En la Conferencia de Viena la delegación española, basada en las mismas razones que el gobierno suizo, presentó una enmienda pidiendo que el artículo fuera suprimido (14). La delegación de los EE.UU. afirmó que, a pesar de estar de acuerdo con las razones expresadas por España, el artículo podría ser aceptable si se aplicara únicamente a las misiones permanentes pero no a las misiones permanentes de observación (15). A pesar de estas oposiciones el proyecto de la Comisión fué aceptado por la Conferencia convirtiéndose en el artículo 12 de la Convención de Viena cuyo texto es el siguiente:

(13) " Observaciones de los Estados miembros ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 438.

(14) Conferencia, I, p. 113.

(15) Conferencia, I, p. 114.

" 1. Para la adopción del texto de un tratado entre su Estado y la Organización, se considerará que el jefe de la misión, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su Estado.

2. Para la firma de un tratado con carácter definitivo o la firma de un tratado ad referendum, entre su Estado y la Organización, no se considerará que el jefe de misión en virtud de sus funciones representa a su Estado, a menos que de la práctica de la Organización o de otras circunstancias se deduzca que la intención de las partes ha sido prescindir de la presentación de plenos poderes ".

Desde un punto de vista teórico, las razones expresadas por el Gobierno suízo y la delegación española en la Conferencia de Viena están plenamente justificadas. Este artículo debería insertarse en la futura convención sobre el Derecho de los tratados concluidos entre Estados y Organizaciones internacionales y no en una convención sobre Derecho diplomático. Sin embargo creemos que la adopción de este artículo era conveniente, habida cuenta de que la obra codificadora de la CDI sobre el Derecho de los tratados concluidos por las Organizaciones internacionales puede tardar mucho tiempo en convertirse en realidad.

El párrafo primero del artículo 12 se refiere a los poderes del jefe de misión para la " adopción " de un tratado con la Organización. Parece lógico que entre las facultades de un representante permanente esté la de la adopción de un tratado con la Organización ante la que esté acreditado. Por otra parte el texto de este párrafo no es más que la aplicación al caso de las Organizaciones internacionales de las normas que rigen la conclusión de tratados entre Estados (16).

En cuanto al segundo párrafo del artículo 12 diremos que su contenido es de carácter restrictivo de forma consecuente con la práctica se -
.../...

(16) Estas normas están contenidas en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los tratados.

.../...

guida por las Organizaciones internacionales para concluir tratados. Sin embargo este párrafo segundo del artículo 12 tiene la virtud de dejar la puerta abierta a los particularismos que puedan existir en algunas Organizaciones.

D) La acreditación múltiple pasiva del jefe de misión.

La acreditación múltiple pasiva del jefe de misión plantea dos problemas diferentes. En primer lugar, debemos considerar la posibilidad de que un jefe de misión sea acreditado al mismo tiempo ante un Estado y una Organización internacional. En segundo lugar, nos plantearemos el problema de la acreditación de un jefe de misión ante varias Organizaciones internacionales.

La práctica de acreditar a la misma persona ante un Estado y ante una Organización internacional data de la época de la Sociedad de Naciones, cuando un cierto número de Estados acreditaban ante la Sociedad de Naciones a miembros del personal perteneciente a la misión diplomática acreditada en Berna ante la Confederación helvética. En un primer momento el gobierno suizo no aceptaba de buen grado esta práctica por temor a que la importancia creciente de la Sociedad de Naciones absorbiera considerablemente la actividad del cuerpo diplomático acreditado en Berna. Para tratar de que esto no sucediera, el Gobierno suizo sometía la acreditación múltiple a ciertas limitaciones (17). Con el desarrollo de las misiones permanentes, la acreditación simultánea ante un Estado y una Organización ha sido menos frecuente. Sin embargo, esta práctica ha seguido siendo utilizada por algunos Estados de economía subdesarrollada, que no cuentan con los medios económicos necesarios para establecer misiones permanentes ante todas las Organizaciones internacionales cuyas actividades desean seguir de cerca.

(17) GHEBALI, op. cit., Vol. I, p. 69.

El problema de la acreditación múltiple ante un Estado y una Organización internacional se planteó en la Conferencia de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. El proyecto de artículos que la CDI presentó a dicha Conferencia solamente preveía la posibilidad de acreditación múltiple ante varios Estados, ya que previamente se había determinado que los trabajos de la CDI deberían limitarse a la codificación de las normas que rigen las relaciones diplomáticas entre Estados. A pesar de esto, la delegación de Colombia presentó una enmienda al proyecto de la CDI (18) en la que se preveía la acreditación múltiple ante un Estado y una Organización internacional.

Algunas delegaciones, sin oponerse al principio de la acreditación múltiple, consideraron que el Estado receptor debería poder oponerse a que un miembro de una misión acreditado ante dicho Estado fuera acreditado de forma simultánea ante una Organización internacional (19). La argumentación de estas delegaciones se veía fortalecida por el hecho de que la enmienda de Colombia había sido ampliada en el Comité de redacción de forma que alcanzaba a cualquier Organización internacional sin importar donde tuviera ésta su sede. La Conferencia aprobó el texto propuesto por el Comité de redacción que se convirtió de esta forma en el párrafo tercero del artículo 5 de la Convención de Viena de 1961, cuyo texto es el siguiente :

" El jefe de misión o cualquier miembro del personal diplomático de la misión podrá representar al Estado acreditante ante cualquier Organización internacional ".

(18) El texto de la enmienda presentada por Colombia era el siguiente: -
" Un jefe de misión puede, igualmente, representar a su país ante organismos internacionales con sede en el Estado receptor; ver : -
Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, p. 12 (Documento: A/CONF. 20/C.1/L. 36).

(19) Ver las intervenciones de las delegaciones de Francia y Suiza en la Conferencia de Viena sobre las relaciones diplomáticas en Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, ps. 11 y 12.

Del texto de este artículo se desprende que el Estado que envía - no necesita pedir el consentimiento del Estado receptor para acreditar a un miembro de su misión diplomática ante una Organización internacional. Esta falta de consentimiento contrasta con la facultad que tiene el Estado receptor para oponerse a que un miembro de una misión diplomática acreditada ante él sea a su vez acreditado ante otro Estado (20).

El artículo 5 párrafo tercero es aplicable a cualquier Organización internacional. Hubiera parecido más lógico que, sin consentimiento del Estado receptor, pudiera acreditarse a un miembro de la misión diplomática ante una Organización del sistema de las Naciones Unidas, pero no ante cualquier Organización internacional.

Por último debemos subrayar que la posibilidad de acreditación múltiple que regula el artículo 5 párrafo 3 de la Convención de Viena de 1961 se refiere tanto al jefe de misión como a cualquier miembro del personal diplomático.

La acreditación múltiple ante varias Organizaciones internacionales es una práctica mucho más frecuente que la acreditación múltiple ante un Estado y una Organización internacional. En general los Estados, con ánimo de reducir gastos, suelen acreditar una misma misión ante varias Organizaciones internacionales. El problema se plantea de forma especial en Ginebra, ciudad en la que tienen su sede la Oficina europea de las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y la OMM. Esta es la razón por la cual el Gobierno suízo demostró una preocupación especial por el problema de la acreditación múltiple.

(20) La acreditación múltiple ante varios Estados está regulada por el artículo 5, párrafo 1, de la Convención de Viena de 1961 que dice: - "1. El Estado acreditante podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados, o bien destinar a ellos a cualquier miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los Estados receptores se oponga expresamente".

La preocupación fundamental del Gobierno suízo era la de mantener la práctica actual, según la cual los Estados acreditan ante todas las Organizaciones internacionales con sede en Ginebra una única misión, al frente de la cual existe un único jefe de misión, incluso en los casos en que en la misión hay varias personas con rango de embajador. Por esta razón el Gobierno suízo consideraba peligrosa la redacción del artículo 5 del proyecto de la CDI (21), que trataba sobre el establecimiento de las misiones permanentes, y cuya interpretación podía dar lugar a que los Estados establecieran en Ginebra varias misiones permanentes, cada una de ellas acreditada ante una Organización.

Para evitar esta proliferación de misiones, el Gobierno suízo propuso que se añadiera al artículo 5 del proyecto un párrafo que dijera así :

" Los Estados miembros podrán establecer una sola misión ante varias Organizaciones "(22).

El Relator Especial de la CDI no tuvo en cuenta la propuesta suiza aduciendo para ello que

" la cuestión de la acreditación de una misión permanente ante más de una Organización internacional esta regulada por el artículo 8 "(23).

(21) El texto del artículo 5 era el siguiente:

" 1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados miembros podrán establecer misiones permanentes para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 6.

2. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7, Ver: " Proyecto de artículos ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 312.

(22) "Observaciones de los Estados miembros", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 438.

(23) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Sexto informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator especial", ACDI, 1971 Vol. II, primera parte, p. 27 (En adelante: "Sexto informe, EL-ERIAN, - ACDI..."). El texto del artículo 8 citado era el siguiente:

"1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como jefe de misión ante dos o más Organizaciones internacionales o nombrar a un jefe de misión como miembro del personal diplomático de otra de sus misiones. (...)

Como dicho artículo 8 no recogía la petición suiza, la delegación - de este país pidió en la Conferencia de Viena la supresión de dicho artículo (24). La delegación suiza argumentaba que el texto propuesto por la CDI facilitaba que cada Estado nombrara varios jefes de misión, cada uno de ellos acreditado ante una Organización internacional, lo que podía dar lugar a la proliferación de misiones permanentes. El delegado suizo se expresaba en la Conferencia en los siguientes términos :

" se ha establecido en Ginebra una práctica particular, por la cual las personas acreditadas por un Estado ante las diversas Organizaciones se hallan todas bajo la responsabilidad de un jefe de misión que actúa como tal ante diez Organizaciones. Si no se hubiese establecido dicha práctica, el cuerpo diplomático habría llegado en Ginebra a proporciones muy difíciles de manejar y habría actualmente 1.400 jefes de misión. El artículo 8 incluye una disposición que la delegación de Suiza estima positiva : - la de la primera parte del párrafo 1. En el resto del artículo, se parte - de hipótesis de que habría que multiplicar misiones. Ello incita en cierto modo a multiplicarlas " (25).

Varias delegaciones observaron en la Conferencia que la supresión del artículo 8 podía ser contraproducente para los deseos suizos, por lo que la delegación de este país retiró su enmienda (26), siendo aprobado el texto propuesto por la CDI (27).

Los temores de la delegación suiza no estaban completamente justificados. La proliferación de misiones permanentes no es probable que se .../...

(23)..... 2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal diplomático de la misión como jefe de misión ante otras Organizaciones internacionales o nombrar a un miembro del personal de la misión como miembro del personal de otra de sus misiones". Ver: "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 314.

(24) Conferencia, II, p. 88 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.25).

(25) Conferencia, I, p. 109.

(26) Conferencia, I, p. 112.

(27) Conferencia, I, p. 113.

.../...

produzca, pues acarrearía muchos gastos para los Estados sin proporcionarles ninguna ventaja. En cuanto a la proliferación de jefes de misión, debemos recordar que el estatuto privilegiado de éstos es, con excepción de las cuestiones protocolarias, similar al del resto del personal diplomático, por lo que no creemos que la proliferación de jefes de misión sea una cuestión problemática en el caso poco probable de que llegue a producirse. Sin embargo, creemos que la CDI debería haber incluido en su proyecto el párrafo propuesto por Suiza.

Quizá el Relator Especial de la CDI tuviera razón en que el texto propuesto por Suiza no debería figurar en el artículo relativo al "establecimiento de misiones", pero pudo haberlo incluido en el relativo a la "acreditación o nombramiento múltiples", en cuyo caso habría sido aceptado por la Conferencia.

E) La acreditación múltiple activa del jefe de misión.

Distinto del problema de la acreditación múltiple pasiva es el de la acreditación múltiple activa, procedimiento mediante el cual dos o más Estados se hacen representar por un único jefe de misión ante otro Estado o ante una Organización internacional.

En las relaciones diplomáticas interestatales la acreditación múltiple activa está regulado por el artículo 6 de la Convención de Viena de 1961, cuyo texto es el siguiente :

" Dos o más Estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de misión ante un tercer Estado, salvo que el Estado receptor se oponga a ello ".

En el ámbito de las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales, la acreditación múltiple ha sido tratado por la Secretaría de las Naciones Unidas en los siguientes términos :

" La cuestión de la representación de más de un gobierno o de un Estado por el mismo representante ha sido planteada en diferentes ocasiones en órganos de las Naciones Unidas. La Secretaría y los órganos interesados han adoptado siempre la posición de que dicha representación no es permisible, a menos que esté prevista claramente en el reglamento del órgano correspondiente. La práctica, a veces seguida, de acreditar a un funcionario de un gobierno como representante de otro no ha sido considerada jurídicamente objetable, con tal que el funcionario interesado no actúe simultáneamente como representante de dos países " (28).

El proyecto de la CDI sobre relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales no preveía en su articulado, aunque sí en sus comentarios (29), el supuesto de la acreditación múltiple activa. En la Conferencia de Viena, la delegación de Costa de Marfil presentó una enmienda verbal (30) que fué aceptada por la Conferencia y que se convirtió en el tercer párrafo del artículo 8 que dice así :

" Dos o más Estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de misión ante la misma Organización internacional ".

Como puede verse este párrafo regula únicamente la acreditación múltiple del jefe de misión. Sin embargo parece lógico admitir la posibilidad de una acreditación múltiple respecto de cualquier miembro del personal diplomático. Esta interpretación extensiva creemos que es lícita, si se consideran los tres párrafos del artículo 8 de forma conjunta.

Por otra parte, hay que observar que el artículo 8 párrafo 3 regula únicamente la acreditación ante la Organización internacional, pero no la participación de los jefes de misión nombrados por dos Estados en .../...

(28) "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 174.

(29) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 315.

(30) Conferencia, II, p. 88.

.../...

las sesiones de los órganos de las Organizaciones internacionales. Respecto a esta participación la Convención, en su artículo tercero, se limita a remitirse a " las reglas pertinentes de la Organización " por lo que serán estas reglas las que deberán determinar si una misma persona puede representar a dos Estados en las sesiones de un órgano. En general, podemos afirmar que la representación múltiple en un mismo órgano no es posible.

2. El nombramiento del personal diplomático.

El nombramiento del personal diplomático plantea varios problemas, alguno de ellos de muy difícil solución. En primer lugar tenemos el problema del discutido derecho de oposición a los nombramientos del personal diplomático, que algunos Estados huéspedes han reclamado. En segundo lugar tenemos que plantearnos el problema de los límites del nombramiento de dicho personal, especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad de los miembros del personal diplomático y al número de miembros que pueden existir en una misión permanente.

A) La posibilidad del Estado huésped de oponerse a los nombramientos.

El nombramiento del personal diplomático de las misiones permanentes ha sido uno de los puntos de fricción en la Conferencia de Viena de 1975. Los Estados huéspedes de las principales Organizaciones pretendían que les fuera reconocida la posibilidad de oponerse en ciertos casos a los nombramientos de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes. La mayoría de los Estados consideraban sin embargo que no era pertinente que los Estados huéspedes pudieran oponerse a los nombramientos del personal de la misión, sobre todo si se tiene en cuenta que dicho personal está acreditado ante la Organización internacional correspondiente y no ante el Estado huésped. Este punto fué recalcado por numerosas delegaciones, ya que la posibilidad de veto a los nombra-

mientos del personal diplomático por parte del Estado huésped ha sido objeto de largas controversias y de fuertes enfrentamientos, sobre todo en la sede principal de las Naciones Unidas.

Puede decirse que en general la mayoría de los Estados consideran que el nombramiento del personal diplomático, tanto en la diplomacia entre Estados como en la diplomacia ante las Organizaciones internacionales, es competencia reservada del Estado que envía. Sin embargo esta libertad de nombramiento puede dar lugar a graves problemas. En efecto ¿que ocurriría si un Estado nombrara como representante suyo a una persona de su nacionalidad y que, sin ser residente en el Estado receptor, se encontrara ya en el territorio de dicho Estado, si sobre dicha persona pasara la amenaza de un proceso judicial o si se hubiera entablado ya un proceso contra ella ? El problema dista mucho de ser teórico, habiéndose planteado un caso similar en el ámbito de las relaciones interestatales conocido como el caso " Vitianu ".

En febrero de 1947 (31), Solvan Vitianu, de nacionalidad rumana, entró en Suiza. El 24 de abril de 1947 presentó en Ginebra una solicitud de permiso de residencia y de permiso de trabajo, declarandose representante en Suiza de varias empresas rumanas. La petición de Vitianu fué rechazada, trasladando éste su residencia a Zurich.

El 9 de diciembre de 1947 la sociedad "Kommerz und Finanz A.G." solicitó un permiso de residencia para Vitianu a la policía de extranjeros de Zurich, que no respondió a la solicitud.

El 18 de junio de 1948 la Legación rumana en Berna dirigió una nota al Departamento político federal, informando a éste que Vitianu había sido nombrado Consejero económico de la Legación rumana. El Departamento
.../...

(31) Todos los hechos sobre el caso Vitianu están tomados de RUSTOM, Les conditions d'admission aux privilèges et immunités diplomatiques, Ginebra, Université de Genève, 1957, ps. 97 a 109.

.../...

to político federal no respondió a la nota rumana, pues poseía ya una serie de informes sobre Vitianu, que podían dar lugar a persecuciones judiciales.

El 25 de junio de 1948 el Ministro rumano en Berna pidió información al jefe del Servicio de Protocolo suizo sobre si el Departamento político federal iba a responder a la nota rumana del 18 de junio anterior. - El jefe de Protocolo respondió que el nombramiento como diplomático de un hombre de negocios residente en el Estado receptor era contrario a los usos y costumbres internacionales, y que la transformación del estatuto de extranjero en estatuto privilegiado requería una investigación previa, por lo que la respuesta del Departamento político federal sería dada después de un cierto plazo.

El 11 o el 12 de julio, el Consejero de la Legación rumana pidió audiencia al jefe de Protocolo, el cual le comunicó que el nombramiento de Vitianu como diplomático no podía ser tomado en consideración por el Departamento político federal.

El 13 de julio de 1948 Vitianu y su esposa René eran detenidos en Zurich por la policía federal, acusados de espionaje político y económico y de realizar actos prohibidos en favor de un Estado extranjero. El 15 de julio, la Legación rumana protestó por la conducta del Gobierno suizo, calificando esta conducta de violación de las reglas y usos habituales entre Estados que mantienen relaciones diplomáticas normales. La Legación rumana reclamaba, además, la inmunidad diplomática para Vitianu y la puesta en libertad inmediata tanto de Vitianu como de su esposa.

En una nota de 16 de julio de 1948, el Departamento político federal expresó su extrañeza y calificó de anormal el nombramiento de Vitianu. - Además, el Departamento político federal consideraba que el nombramiento era inconveniente, puesto que se produjo en el momento en que Vitianu había atraído ya la atención del Fiscal de la Confederación y en que la policía estaba a punto de detenerle. Por último, el Departamento político -

federal indicaba que la notificación de 18 de junio de 1948 era un acto unilateral de la Legación rumana y que Suiza no había concedido nunca, ni expresa ni tacitamente, el status diplomático a Vitianu.

El 15 de diciembre de 1948, el Fiscal general de la Confederación acusaba a Vitianu y a su esposa de diversos delitos tipificados en el código penal suizo. Los acusados pidieron la suspensión del proceso, que fué rechazada primero por el Fiscal general de la Confederación y posteriormente por el Tribunal penal federal, con fecha de 23 de mayo de 1949.

El Gobierno rumano, queriendo a toda costa evitar un proceso público, pidió que el caso fuera examinado por la Comisión de conciliación prevista en el Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje obligatorio concluído entre Suiza y Rumanía el 3 de febrero de 1926.

En la Comisión de conciliación, Rumanía sostuvo que el funcionario diplomático goza de los privilegios e inmunidades desde el momento en que su nombramiento ha sido notificado al Estado receptor. El acto de nombramiento era por tanto un acto constitutivo que obligaba al Estado receptor, que solamente podía oponerse declarando persona non grata al diplomático nombrado.

El punto de vista de Suiza era contrario al de Rumanía. Suiza argumentaba que el personal diplomático no goza de los privilegios e inmunidades hasta que su nombramiento ha sido aceptado, de forma expresa o tácita, por el Estado receptor. Para Suiza, suponer que los privilegios existían automáticamente como consecuencia del nombramiento del Estado acreditante, era una interpretación extensiva y absolutamente injustificable del principio de la inmunidad del personal diplomático. Si la inmunidad pudiera constituirse de forma unilateral, argumentaba Suiza, cualquier Estado que mantiene una misión diplomática en otro Estado podría sustraer de la jurisdicción de este Estado a cualquiera de sus naciones por el sencillo metodo de nombrarle miembro de la misión diplomática.

En la Comisión de conciliación no se llegó a un acuerdo y Vitianu fué declarado culpable, el 22 de octubre de 1949, condenandosele a una - pena de dieciocho meses de reclusión. En diciembre de 1949 Vitianu fué - liberado y expulsado de Suiza, después de haber cumplido las dos terce - ras partes de su pena.

El Gobierno suizo no quedó satisfecho del caso Vitianu y, con el - fin de afianzar su posición, ordenó a las legaciones suizas que pregunta - ran a los gobiernos ante los que estaban acreditadas cómo hubieran actúa - do dichos gobiernos en un caso semejante. El contenido de la nota dirigi - da a diversos gobiernos que puede resumirse así : Si se notifica a un Es - tado el nombramiento como diplomático de un extranjero que vive en su te - rritorio y este extranjero es objeto de una investigación policial y su deten - ción es inminente el Servicio de Protocolo estaría dispuesto a reconocer - a esta persona como diplomático ?.

Doce gobiernos, por conducto de sus Servicios de Protocolo res - pectivos, respondieron a la nota suiza. Unicamente la Unión Soviética no respondió sobre el fondo de la cuestión, por considerar que no se trataba de un caso que estuviera relacionado con las relaciones entre Suiza y la Unión Soviética. El resto de los gobiernos consultados apoyaron la tesis - suiza, según la cual el nombramiento de un miembro de una misión diplo - mática requiere el consentimiento, tácito o expreso, del Estado receptor. - Las respuestas de los EE.UU., el Reino Unido y Turquía insistían en que no existía inconveniente para que si se había comenzado un proceso con - tra la persona nombrada como diplomático, dicho proceso siguiera su cur - so.

El problema del nombramiento del personal diplomático se planteó - de nuevo cuando la CDI comenzó a discutir el tema de los privilegios e - inmunidades diplomáticas. El primer proyecto de SANDSTROM preveía - en su artículo tercero que con excepción del jefe de misión, cuyo nombra - miento está sujeto al procedimiento del placet, el Estado que envía podría

nombrar libremente a los miembros de la misión, dejando como única - defensa para el Estado receptor la posibilidad de declarar persona non grata a cualquier miembro de la misión (32).

VERDROSS, considerando que la propuesta de SANDSTROM - dejaba sin defensa al Estado receptor, propuso que se añadiera al citado artículo tercero un párrafo que dijera así:

" todo Estado podrá negarse a admitir a cualquiera de las personas que le sean notificadas como formando parte de una misión diplomática " (33).

La enmienda de VERDROSS fué derrotada en la CDI por nueve votos contra ocho y una abstención (34). El texto definitivo, sobre esta - materia, propuesto por la CDI era el siguiente :

" Artículo 6. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, 8 y 10, el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En - el caso de los agregados militares, navales y aéreos, el Estado receptor puede exigir que se le sometan de antemano sus nombres a efectos - de consentimiento " (35).

Los únicos límites que reconoce este proyecto de artículo son los del artículo 7, nombramiento de nacionales del Estado receptor, el artículo 8, posibilidad del Estado receptor de declarar persona non grata a los miembros de la misión y el artículo 10 sobre el número de efectivos - de la misión. Consecuentemente, y según el proyecto de la CDI, el nombramiento del personal diplomático, con excepción del jefe de misión y de los agregados militares, era considerado como un acto libre del Estado - que envía la misión.

(32) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Diplomatic intercourse and immunities. Rapport présenté par M.A.E.F. SANDSTROM rapporteur spécial", Yearbook of the International Law Commission, 1955, Vol. II, p. 10.

(33) ACDI, 1957, Vol. I, 388ª sesión, p. 28.

(34) ACDI, 1957, Vol. I, 389ª sesión, p. 32.

(35) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas" ACDI, 1958, Vol. II, p. 98.

El nombramiento del personal diplomático volvió a plantearse en la Conferencia de Viena de 1961. Varios Estados (36) presentaron enmiendas al artículo 6 del proyecto de la CDI, con objeto de que los nombramientos del personal diplomático tuvieran que ser aprobados por el Estado receptor. Las enmiendas no llegaron a someterse a votación en la Comisión plenaria, pues la delegación de Ghana propuso y fué aceptado por la Comisión plenaria que se votara directamente el texto propuesto por la CDI (37). Dicho texto fué aprobado en la Comisión plenaria por 54 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones, con la salvedad de que la delegación suiza manifestó que interpretaba el artículo en el sentido de la enmienda propuesta por Italia, que concordaba con la práctica seguida por el gobierno suizo (38).

La cuestión de la posible oposición por parte del Estado receptor a los nombramientos del personal diplomático volvió a plantearse cuando la Conferencia discutía el artículo 38 del proyecto de la CDI, que regulaba la duración de los privilegios e inmunidades. Varios Estados (39) intentaron de nuevo introducir la facultad del Estado receptor de oponerse a los nombramientos del personal diplomático. Las enmiendas citadas fueron rechazadas por la Comisión plenaria (40) aprobándose el texto propuesto por la CDI, la delegación suiza manifestó de nuevo sus reservas respecto a la interpretación de este artículo (41).

Según el artículo 7 de la Convención de Viena de 1961, el Estado acreditante nombra libremente al personal de la misión diplomática. Los únicos límites que dicho artículo reconoce son los siguientes:

-
- (36) Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, enmienda de Méjico, p. 12 (Documento: A/CONF. 20/C. 1/L. 32/Rev. 1); enmienda de Francia, p. 9 (Documento: A/CONF. 20/C. 1/L. 1); enmienda de los EE. UU., p. 11 (Documento: A/CONF. 20/C. 1/L. 20 y enmienda de Italia, p. 14 (Documento: A/CONF. 20/C. 1/L. 48/Rev. 1) p. 14.
- (37) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 101.
- ((38) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 101.
- (39) Ver la lista de enmiendas en Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, - p. 212, nota a pie de página.
- (40) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 213.
- (41) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, ps. 214 y 215.

a) prohibición de acreditar a los miembros de la misión ante dos Estados de forma simultánea sin permiso de los Estados receptores.

b) Imposibilidad de acreditar como miembros de la misión diplomática a personas que posean la nacionalidad del Estado receptor, a menos que dicho Estado preste su consentimiento.

c) Posibilidad del Estado receptor de declarar, en cualquier momento, persona non grata a cualquier miembro de la misión.

d) Derecho del Estado receptor a que el número de miembros de la misión esté dentro de los límites de lo que se considere razonable y normal.

Otros dos artículos de la Convención de 1961 complementan la regulación del artículo 7 sobre el nombramiento del personal de las misiones.- El artículo 39 párrafo 1 dice así:

" Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones exteriores ".

El texto del artículo 38, párrafo 1 es el siguiente:

" Excepto en la medida en que el Estado receptor conceda otros privilegios e inmunidades, el agente diplomático que sea nacional de ese Estado o tenga en él residencia permanente solo gozará de inmunidad de jurisdicción por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ".

Debe notarse que los artículos 7, 38 y 39 no han sido objeto de ninguna reserva por parte de los 117 Estados que habían ratificado, o se

habían adherido a la Convención de Viena de 1961 al 31-12-1976 (42).

Los textos de los artículos 7 y 39, párrafo primero, parecen terminantes. Si se interpretan literalmente dichos artículos, la argumentación rumana en el caso Vitianu sería correcta, salvo que Vitianu hubiera sido considerado como residente permanente en Suiza.

La interpretación literal de los artículos 7 y 39 párrafo primero - puede dar lugar a graves problemas. Cualquier Estado podría sustraer - a uno de sus nacionales de las persecuciones, administrativas o judiciales, de que fuera objeto por parte de las autoridades de otro Estado, por el sencillo método de nombrarle miembro de su misión diplomática acreditada ante este último Estado, siempre que dicha persona no tuviera su residencia permanente en el Estado receptor.

Las consecuencias a que podría dar lugar la interpretación literal de los artículos 7 y 39 párrafo primero han forzado a una parte de la doctrina a proponer una interpretación restrictiva de dichos artículos. Así CAHIER ha afirmado que :

" no sería equitativo que el diplomático gozase de sus privilegios e inmunidades después de la notificación de su nombramiento, sin que el Estado receptor pudiera impugnarlo. Sin que pretendamos hacer necesario el consentimiento del último, parece sin embargo que si el Estado receptor se opone en un plazo prudencial, invocando la mala fé del nombramiento, el diplomático ha de ser considerado como no nombrado y por tanto - nunca habrá gozado del estatuto de privilegio " (43).

Otros autores han sostenido que el Estado receptor puede oponerse al nombramiento hecho de mala fé de un miembro de una misión diplomática, dando lugar dicha oposición a la nulidad del nombramiento. Para

.../...

(42) Nations Unies, Traité Multilatéraux, ps. 51 a 61.

(43) CAHIER, Derecho diplomático, p. 430.

.../...

sostener esta afirmación, algunos autores se han apoyado en el artículo 9 de la Convención de Viena de 1961, que permite al Estado receptor de clarar, en cualquier momento, que un miembro de la misión diplomática es persona non grata o no aceptable. Otros autores han sostenido una argumentación similar, basandose en el artículo 39 de la misma Convención. Así DENZA ha afirmado que:

" el Estado receptor puede apoyarse en el termino " normalmente " del párrafo segundo del artículo 39 y sostener que, aunque los privilegios e inmunidades cesan " normalmente " en el momento en que la persona nombrada salga del país o en que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para permitirle salir de él, esta regla puede no ser aplicada cuando el Estado receptor se niegue a admitir un nombramiento inmediatamente después de haber recibido la notificación del mismo "(44).

Las opiniones anteriores parecen acertadas si nos mantenemos en el terreno de la pura lógica. Sin embargo, dichas afirmaciones no son aceptables si nos atenemos al texto de la Convención de Viena de 1961. Del texto de la Convención así como de los trabajos preparatorios de la misma se desprende que el nombramiento del personal diplomático es un acto libre del Estado que envía, con la salvedad de las excepciones mencionadas. Parece por tanto que, en el caso de que un Estado abusara de la libertad de nombramiento del personal diplomático, la única defensa posible que tiene el Estado receptor es la amenaza de ruptura de relaciones o la ruptura pura y simple.

Si en las relaciones diplomáticas entre Estados no se reconoce al Estado receptor la posibilidad de fiscalizar los nombramientos que realice el Estado que envía, parece que en las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales el Estado huésped no podrá, de ninguna

.../...

(44) DENZA, Diplomatic Law, Londres, The British Institute of International and Comparative Law, 1976, p. 245.

.../...

manera, fiscalizar los nombramientos de los representantes de los distintos Estados ante la Organización internacional.

La libertad de nombramiento de que goza el Estado que envía puede dar lugar a controversias de difícil solución. En las relaciones entre Estados, la existencia de la reciprocidad evita que la libertad de nombramiento de lugar a abusos. En las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales no existe sin embargo una reciprocidad entre el Estado que envía y el Estado huésped sino que la reciprocidad juega entre ambos a través de la Organización. Esta falta de reciprocidad directa hace que los problemas derivados de la libertad de nombramiento del Estado que envía pueda ser causa de mayores problemas en la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales que en la diplomacia entre Estados.

Ni los Acuerdos de sede ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades prevén la posibilidad de que el Estado huésped pueda oponerse a los nombramientos realizados por los Estados que envían las misiones permanentes. La resolución 257A(III) de la Asamblea General de las N.U. preve únicamente que los nombramientos de los miembros de las misiones permanentes sean comunicados por escrito al Secretario General de las N.U. Por último la decisión del Consejo federal-suizo de 3I-3-48, aplicable a las misiones permanentes, prevé en su artículo 4 que " las llegadas y las salidas de los miembros de las delegaciones permanentes (45) sean anunciadas al Departamento político por la misión diplomática en Berna del Estado interesado ".

Puede decirse que en general los Estados huéspedes no han reclamado un derecho de fiscalización de los nombramientos del personal diplomático perteneciente a las misiones permanentes. Sin embargo dos Estados huéspedes muy importantes como son Suiza y los EE.UU., han pretendido poder utilizar este derecho.

(45) La decisión del Consejo federal suizo utiliza el término " delegaciones permanentes " para referirse a las misiones permanentes.

La actitud de Suiza puede deducirse de la sentencia del Tribunal federal suizo en el caso " B contra M ". En este caso, el Tribunal federal no admitió la inmunidad de jurisdicción de un ciudadano iraní que alegaba, y justificaba debidamente, ser miembro de la misión permanente de Iran ante las Naciones Unidas. La razón en que se basaba el Tribunal federal para denegar la inmunidad de jurisdicción es que el nombramiento del demandado no había sido comunicado a las autoridades suizas. Naturalmente que un Estado huésped no tiene que considerar como diplomático a una persona si no ha recibido notificación de su nombramiento. Sin embargo, el razonamiento del Tribunal federal va más lejos cuando afirma que :

" no se ha notificado previamente a las autoridades competentes - suizas el nombramiento del demandante, ni dichas autoridades habían reconocido en forma dicho nombramiento " (46).

Parece que según la argumentación del Tribunal federal suizo el nombramiento del personal de las misiones permanentes debe ser " reconocido " o " aceptado " por las Autoridades suizas, pudiendo por tanto éstas no reconocer un nombramiento realizado de mala fé.

La actitud de los EE.UU. respecto al nombramiento del personal de las misiones permanentes se ha puesto de relieve en el famoso caso- " Santiesteban Casanova ".

Roberto Santiesteban Casanova (47) entró en los EE.UU. el 3 de octubre de 1962 provisto de un pasaporte diplomático, en calidad de agregado y miembro residente de la Misión permanente de Cuba ante las Na-

.../...

(46) " Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades ", ACDI, 1967, Vol. II, ps. 181 y 182.

(47) Todos los datos del caso Santiesteban Casanova están tomados de - "EE.UU. Ex Relatione Roberto Santiesteban Casanova vs. Walter W. Fitzpatrick: Fallo del 16-1-63" en Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963. ps. 214 a 216 y de "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 177.

.../...

ciones Unidas. El pasaporte diplomático contenía un visado emitido por las autoridades norteamericanas de clase G-1, visado utilizado para los miembros de las misiones permanentes. El Jefe de Protocolo de las Naciones Unidas informó a la misión de los EE.UU. del nombramiento de Santiesteban Casanova y el nombre de éste fué inscrito en el libro azul de las Naciones Unidas.

El 16 de noviembre de 1962, Santiesteban Casanova fué detenido en compañía de otros dos miembros de la misión cubana y acusado de haber participado en una conspiración para cometer un acto de sabotaje.

El caso fué visto por el Tribunal federal del distrito sur de Nueva York, ante el cual Santiesteban Casanova alegó la inmunidad de jurisdicción y la inviolabilidad de que gozaba por ser miembro de la Misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. El acusado pedía también ser juzgado en primera instancia por el Tribunal supremo de los EE.UU. derecho que le correspondía por su condición de diplomático.

El Tribunal rechazó la argumentación de Santiesteban Casanova, basándose en dos tipos de argumentos. En primer lugar el Tribunal afirmaba que el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, precepto alegado por el demandado, no confería la inmunidad diplomática y que

" lo más que podía alegarse era que producía efecto por sí mismo en relación con las actividades funcionales. Y aún si se admitiera esta interpretación, no es aplicable al peticionario pues el delito de que se le acusa no es función de ninguna misión ni de ningún miembro de una misión acreditada ante las Naciones Unidas "(48).

La argumentación del Tribunal coincide con la del caso " Ranollo " (49) en el que otro tribunal norteamericano afirmaba que los actos de es

.../...

(48) ibid., Anuario Jurídico, 1963, p. 214.

(49) infra., p. 31.

.../...

pionaje de un funcionario de las N U no podían estar cubiertos por la - inmunidad de jurisdicción, por no ser necesarios para el ejercicio libre de sus actividades respecto a la Organización.

Debemos reiterar, como hicimos cuando hablamos del caso " Ra nollo ", que la forma de argumentar de algunos tribunales norteamericanos en lo que se refiere a la inmunidad de jurisdicción es absolutamente incorrecta. Cuando un tribunal debe decidir sobre la existencia de la - inmunidad de jurisdicción de una persona, no puede referirse al comportamiento correcto o incorrecto de ésta, sino simplemente a si goza o no de la inmunidad de jurisdicción según el Derecho internacional.

El segundo argumento utilizado por el Tribunal de Nueva York es de mucha más consistencia. El Tribunal negaba la inmunidad de jurisdicción de Santiesteban Casanova, basandose precisamente en la sección - 15 del Acuerdo de sede concluído entre los EE.UU. y las Naciones Unidas (50). El texto de la sección 15 es el siguiente:

" 1. Toda persona designada por un Miembro como representante principal ante las Naciones Unidas o como representante permanente con rango de embajador o ministro plenipotenciario;

2. Todos los miembros permanentes de su personal, que sean designados por acuerdo entre el Secretario General, el Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Estado interesado;

.... disfrutarán en el territorio de los Estados Unidos de América, tanto si residen dentro como fuera del distrito de la Sede, de las - prerrogativas e inmunidades que el Gobierno de los Estados Unidos de - América confiere a los enviados diplomáticos acreditados ante él..."

(50) RTNU, Vol. 11, p.27. Hemos utilizado la traducción de la Secretaría de las NU. publicada en ACDI, 1967, Vol. II, p.175.

El Tribunal, apoyándose en la sección 15 del Acuerdo de sede, - afirma :

" No se impide a ningún Estado Miembro que nombre a quien le parezca para que preste servicios como miembro permanente del personal de su misión ante las Naciones Unidas, pero de conformidad con el inciso 2) de la sección 15, los Estados Unidos no están obligados a conferir la inmunidad diplomática por el simple hecho de que una persona es té empleada en una categoría determinada. Los Estados Unidos conservan su derecho a acordar o a negarse a acordar que la inmunidad diplomática ha de hacerse extensiva a todos los individuos que pertenezcan a la amplia categoría de " miembros permanentes de su personal ".

La forma como está redactada la sección es decisiva. No hay nada en su historia o en la práctica seguida al respecto que apoye la solicitud del peticionario. De aceptarse su argumento se estaría en realidad enmendando el inciso 2) de la sección 15 insertando en ella las palabras clases de para que se leyera todas las clases de miembros permanentes" (51):

Respecto a los efectos de la emisión de un visado de clase G-1 - por las autoridades norteamericanas el Tribunal afirma :

" El hecho de que con el visado G-1 se reconociera que el peticionario pertenecía a la categoría mencionada en el inciso 2) de la sección 15 no significa que al expedir dicho visado los Estados Unidos otorgaran el acuerdo requerido en la mencionada sección...

La cuestión del acuerdo de los Estados Unidos para la concesión de la inmunidad diplomática era enteramente distinta de la de facilitar la entrada del peticionario a los Estados Unidos para que asumiera las funciones que le correspondían en su misión....

(51) Anuario Jurídico, 1963, p. 215.

Al conceder el visado o el permiso de desembarco, el Gobierno - de los Estados Unidos no manifestó su acuerdo, respecto a que el peti - cionario... tenía derecho a la inmunidad diplomática de conformidad con - el inciso 2) de la sección 15 del Acuerdo relativo a la Sede " (52).

La argumentación del Tribunal coincide con la mantenida por el re - presentante del Gobierno de los EE.UU. en el proceso. Frente a esta - argumentación, la Secretaría de las Naciones Unidas alegaba que el pá - rrafo segundo de la sección 15 del Acuerdo de Sede se refiere unicamen - te al acuerdo entre las distintas partes sobre las categorías de represen - tantes que tienen derecho a gozar de las inmunidades diplomáticas. La Se - cretaría se apoyaba en la Resolución de la Asamblea General 169 (II). - En esta resolución, aprobada el 31 de octubre de 1947, la Asamblea Ge - neral decidió :

" Recomendar al Secretario General y a las autoridades competen - tes de los Estados Unidos de América que tomen como guía la sección - 16 de la Convención General sobre Prerrogativas e Inmunidades de las - Naciones Unidas cuando examinen, en virtud del párrafo 2 y de la última frase de la sección 15 del Acuerdo relativo a la Sede de la Organización, cuáles son las categorías del personal de las delegaciones que podrán in - cluirse en las listas que se redacten según acuerdo entre el Secretario - General, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno - del Estado miembro interesado ".

Basándose en esta resolución, la Secretaria de las NU ha sosteni - do que :

" ni el tenor del inciso 2) de la sección 15, ni los acuerdos anterio - res justificaban la alegación, hecha por las autoridades de los Estados Uni -
.../...

(52) ibid., p. 215.

.../...

dos, de que el acuerdo entre las tres partes interesadas (el Secretario-General, los Estados Unidos y los Estados Miembros) podía interpretarse en el sentido de que requería el consentimiento de los tres con respecto a todo residente miembro de una misión de un Estado ante las Naciones Unidas. Como se había visto por la práctica posterior, el acuerdo necesario entre las partes se había logrado, en principio, mediante la preparación original de la lista diplomática, en la que se especificaron las categorías del personal de las misiones (como algo distinto de las listas de individuos) con derecho a privilegios e inmunidades en virtud de la sección 15. Los casos que se habían planteado anteriormente se referían al derecho de la persona o personas interesadas a ser calificadas como miembro del personal de una misión, y no a la cuestión de si los Estados Unidos podían negarse a conceder privilegios a personas cuyo derecho a tal calificación se admitía. Por otra parte, el pretender que esa inmunidad no se adquiriría hasta que terminaba el proceso de notificación, haría que todos los miembros de las misiones estuvieran en posición de total indefensión durante el periodo comprendido entre su llegada y la terminación del trámite por los Estados Unidos " (53).

En respuesta a la argumentación de la Secretaría de las NU los Estados Unidos negaron :

" que se hubiera llegado a ningún acuerdo terminante sobre las categorías de personal con derecho a privilegios e inmunidades en virtud de la sección 15; en consecuencia, seguía siendo obligatorio el consentimiento de los Estados Unidos en cada caso concreto..... el tenor de la resolución 169 (II) avala tal interpretación. Además, en casos anteriores en que los Estados Unidos habían rehusado conceder privilegios e inmunidades diplomáticos, las Naciones Unidas... habían aceptado tal posición, lo mismo que los Estados miembros interesados " (54).

(53) "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, - 1967, Vol. II, p. 177.

(54) ibid., p. 177.

Santiesteban Casanova fué finalmente liberado en intercambio con - un ciudadano norteamericano detenido por las Autoridades cubanas. Creemos sin embargo que, aunque este caso fuera solucionado mediante la negociación directa, es necesario que tratemos de encontrar la solución correcta en base al derecho aplicable.

De la lectura de la sección 15 del Acuerdo relativo a la Sede de - las NU, parece deducirse que la interpretación de los EE.UU. es correcta. La práctica parece también dar la razón a los EE.UU. pues en algunas ocasiones su Gobierno se ha negado a conceder el estatuto diplomático a determinadas personas, sin que el Estado interesado o la Secretaria de las NU protestaran (55).

Si la interpretación defendida por los EE.UU. parece correcta, - debe notarse sin embargo que dicha interpretación da lugar a consecuencias absurdas. En efecto, si el párrafo segundo de la sección 15 del Acuerdo de sede se interpreta literalmente, la posibilidad de oposición al nombramiento de un representante de un Estado no corresponde únicamente al - Gobierno de los EE.UU., sino también al Secretario General de las Naciones Unidas y no cabe ninguna duda de que ningún Estado miembro de la ONU, incluido los EE.UU., ha pretendido otorgar al Secretario General de las NU un poder de oposición a los nombramientos de sus representantes.

Como veremos, la interpretación del Acuerdo de sede que el Gobierno de los EE.UU. defiende da lugar a consecuencias absurdas y no queridas por los EE.UU., ni por el resto de los Estados miembros de las NU. A pesar de este razonamiento creemos que como la sección 15 del Acuerdo de sede concede un derecho a los EE.UU., derecho al que
.../...

(55) Ver, por ejemplo, la negativa de los EE.UU. a conceder el estatuto diplomático a un agregado de una misión permanente por haber cometido éstas graves violaciones al Código de circulación en Nueva York en "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 176.

.../...

su Gobierno no desea renunciar, este Gobierno puede oponerse a un nombramiento de un representante de un Estado siempre que justifique - que dicho nombramiento atenta a su seguridad y que manifieste su oposición en un plazo extremadamente reducido.

Las condiciones que consideramos que deben cumplirse para el ejercicio del derecho de oposición a los nombramientos por parte de los EE.UU. se derivan de que su Gobierno solamente puede pretender la - defensa de su seguridad cuando ejerza tal derecho de oposición. En efecto, si la sección 15 del Acuerdo de sede concede a los EE.UU. un derecho de oposición a los nombramientos también es cierto que los EE.UU están obligados a respetar la independencia de la Organización y de la actividad de los Estados miembros respecto a la Organización. Parece - lógico por tanto que los EE.UU. no puedan utilizar el derecho de oposición de forma discrecional, pues la utilización discrecional del derecho - otorgado por la sección 15 del Acuerdo de sede constituiría un abuso de - derecho.

... Del razonamiento anterior podemos deducir la conclusión de que - los EE.UU. cometieron una violación del Derecho internacional en el caso Santiesteban Casanova. Si el Gobierno de los EE.UU. consideraba - que el nombramiento de Santiesteban Casanova atentaba a su seguridad, - debería haberlo hecho saber a la Secretaría de las NU o a la misión cubana. Debe notarse que Santiesteban Casanova entró en los EE.UU. el 3 de octubre de 1962, por lo que las autoridades norteamericanas cono-cian su nombramiento por lo menos desde algunos días antes, como lo - prueba la expedición de un visado de clase G-1. La detención de Santiesteban Casanova no se produjo hasta el 16 de noviembre de 1962, fecha en la que los EE.UU. habían prestado ya su acuerdo tácito al nombramiento de Santiesteban Casanova. En esta fecha, la única posibilidad legal que - le quedaba al Gobierno de los EE.UU. era la de expulsar de su territo-rio a Santiesteban Casanova basandose en la sección 13 del Acuerdo de - sede.

Los EE.UU. no pueden pretender someter a sus tribunales a un representante de un Estado miembro de las NU basándose en que no han prestado su consentimiento al nombramiento. Si los EE.UU. consideran que un nombramiento afecta a su seguridad, deben impedir la entrada de dicho representante en el territorio de los EE.UU. o expulsar le inmediatamente si ya se encuentra allí. Pero lo que es absolutamente contrario al Derecho internacional es pretender que la inmunidad de jurisdicción y la inviolabilidad de un representante, respecto a las actividades posteriores a su nombramiento, no existen porque los EE.UU. no han prestado " aún " su consentimiento. Otra cosa sería juzgar a un representante por actividades anteriores a su nombramiento siempre y cuando se hubiera notificado debidamente su oposición a éste.

El caso Santiesteban Casanova estaba en la mente de todos los delegados cuando se discutía en la Conferencia de Viena de 1975 la cuestión de los nombramientos de las misiones permanentes. El texto propuesto por la CDI era el siguiente :

" Artículo 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 (número de miembros de la misión) y 72 (nacionalidad de los miembros de la misión), el Estado que envía nombrará libremente a los miembros de la misión " (56).

Como vemos, el proyecto de la CDI condicionaba el nombramiento de los miembros de la misión únicamente a que éstos no poseyeran la nacionalidad del Estado huésped y a que su número no sobrepasara un cierto límite. Las razones dadas por la CDI para justificar la libertad de nombramiento del Estado que envía eran las siguientes :

" La posibilidad del Estado que envía de elegir libremente a los miembros de la misión es un principio básico para el desempeño eficaz de las funciones de la misión....

(56) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p.315.

A diferencia de los artículos pertinentes de la Convención sobre relaciones diplomáticas y de la Convención sobre las misiones especiales, - el artículo 9 no subordina la libertad de que disfruta el Estado que envía - para designar los miembros de su misión ante una Organización interna - cional al asentimiento de la Organización o del Estado huésped al nombramiento del jefe de la misión ...

Los miembros de la misión permanente no son acreditados ante el Estado huésped en cuyo territorio está situada la sede de la Organización. No mantienen relaciones directas con el Estado huésped, a diferencia de lo que ocurre en la diplomacia bilateral. En este último caso, el agente - diplomático es acreditado ante el Estado receptor para desempeñar determinadas funciones de representación y negociación entre el Estado receptor y su propio Estado" (57).

Los razonamientos de la CDI fueron duramente atacados en la Conferencia de Viena por la mayoría de las delegaciones de los países occidentales. Así el representante del Reino Unido se expresaba en los siguientes términos :

" el proyecto de artículos no solo desconoce la práctica vigente a este respecto, sino que no tiene en cuenta en absoluto los intereses legítimos del Estado huésped. En efecto, sin negar por ello el principio enunciado en el artículo 9, es forzoso admitir que una persona que represente a un Estado puede, con su comportamiento, poner en peligro la seguridad y el orden interno del Estado huésped....

El argumento según el cual los miembros de una misión ante una - Organización internacional no están acreditados ante el Estado huésped en cuyo territorio se halla la sede de la Organización, a diferencia de lo que sucede en la diplomacia bilateral, no es válido, pues, en lo que respecta a la seguridad interior del Estado huésped, es a todas luces evidente que
.../...

(57) ibid., p. 315.

.../...

no existe diferencia alguna entre los miembros de una misión permanente y los de una misión diplomática. El argumento según el cual una persona puede ser inaceptable en cuanto miembro de una misión diplomática y aceptable en cuanto miembro de una misión permanente tampoco es válido, - pues ello significaría que un miembro de una misión diplomática declarado persona non grata por espionaje y retirado del territorio del Estado huésped podría regresar a él como miembro de una misión permanente ante una Organización internacional, situación que ningún Estado podría admitir " (58).

El representante de los EE.UU. añadía lo siguiente a la argumentación británica :

" El abuso de los privilegios puede ser anterior o posterior al nombramiento del miembro de la misión. El primer caso no se halla previsto en el proyecto de artículos. Sin embargo, se ha producido ya en los Estados Unidos, donde un diplomático al que se había pedido que abandonara el país fué simplemente nombrado miembro de una misión permanente ante una Organización internacional que tienen su sede en los Estados Unidos. ¿Hay que dejar al Estado huésped sin protección contra tales maniobras ?" (59).

En base a los razonamientos anteriores Canadá y el Reino Unido propusieron la siguiente enmienda al artículo 9 :

" Añadase el siguiente párrafo :

" El Estado huésped podrá, después de celebrar consultas con el Estado que envía y la Organización, notificar a ambos que cualquier miembro de la misión no es aceptable. En cualquier caso de ese tipo, el Es-
.../....

(58) Conferencia, I, p. 151.

(59) Conferencia, I, p. 152.

.../...

tado que envía deberá según corresponda o bien retirar a la persona de que se trate o bien dar por terminadas sus funciones en la misión. Podrá declararse inaceptable a una persona antes de que ésta llegue al territorio del Estado huésped " (60).

La enmienda presentada por Canadá y el Reino Unido fué objeto de una subenmienda de Francia que tendía a suavizarla, sustituyendo en dicha enmienda las palabras " no es aceptable " por " es personalmente inaceptable " (61).

Los argumentos de los países occidentales fueron muy criticados por las delegaciones del bloque socialista y del bloque tercermundista. Así el representante de Argentina se expresó en la Conferencia en los siguientes términos :

" Un Estado tiene derecho absoluto a designar a sus representantes ante una Organización internacional y este derecho no puede estar condicionado... Las enmiendas presentadas tendrían consecuencias peligrosas porque darían al Estado huésped un poder considerable, creando así un desequilibrio entre los Estados miembros de una Organización internacional y dando carácter tripartito a relaciones bilaterales que deben continuar siendolo " (62).

El representante de Perú afirmó que :

" Si la propia Organización no tiene derecho a dar o negar su asentimiento a la designación de un miembro de una misión, lo mismo ocurrirá con mayor motivo en el caso del Estado huésped " (63).

(60) Conferencia, II, p. 89 (Documento : A/CONF.67/C.1/L.18).

(61) Conferencia, II, p. 89 (Documento : A/CONF.67/C.1/L.35).

(62) Conferencia, I, p. 152.

(63) Conferencia, I, p. 156.

El representante de Venezuela puso de relieve que :

" Las enmiendas no se refieren a los casos excepcionales en que una persona ha sido declarada non grata y ha tratado de volver a entrar en su territorio como miembro de una misión permanente. Están formuladas en términos generales y conferirían al Estado huésped un derecho - unilateral a declarar que cualquier miembro de la misión no es aceptable" (64).

No cabe duda de que en la Conferencia de Viena de 1975 faltó el espíritu de compromiso. Las transacciones propuestas por Nigeria (65), Costa de Marfil (66) y la República Federal Alemana (67) fueron ignoradas por la Conferencia. Es indudable que los Estados huéspedes tienen derecho a que se les reconozcan medios de defensa para evitar la presencia sobre su territorio de las personas de las que puede razonablemente sospecharse que van a atentar contra su soberanía. Por el contrario, los Estados huéspedes deben reconocer su falta de legitimación para inmiscuirse en las relaciones entre los Estados que envían y la Organización internacional.

El representante de Suiza afirmó con mucha razón que :

" en el actual debate sobre los artículos 9 y 75 y sobre las enmiendas a los mismos, se juega el destino de la futura convención. La situación que crearía el artículo 9, en su forma actual, sería insoportable para los Estados huéspedes tal como es el suyo " (68).

Pero el representante de Brasil respondió con no menos razón que :

(64) Conferencia, I, p. 160.

(65) Conferencia, II, p. 154. (Documento: A/CONF./67/C.1/L.78).

(66) Conferencia, I, p. 159.

(67) Conferencia, I, p. 163.

(68) Conferencia, I, p. 160.

" Algunas delegaciones han dicho que la futura convención sería - inaceptable si el artículo 9 tuviera la forma actual. La respuesta del ora dor es que, si se menoscaba el principio de la libertad de nombramiento introduciendo en el artículo 9 cualquiera de las enmiendas propuestas, la convención futura será totalmente inaceptable para la mayoría de los Estados que envían, que son la mayoría de los miembros de la comunidad-internacional " (69).

La Conferencia aprobó por fin el texto del artículo 9 tal como había sido propuesto por la CDI, es decir afirmando que el nombramiento del personal de las misiones permanentes no conoce más límites que el - de la nacionalidad de los miembros de la misión y el del número de éstos. Sin embargo, el resultado no fué tan negativo como pudiera parecer a primera vista, pues la Conferencia aprobó una enmienda que se convir tió en el párrafo cuarto del artículo 77 cuyo texto es el siguiente :

" 4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se podrá - interpretar en el sentido de que impide que el Estado huésped adopte - las medidas que sean necesarias para su propia protección. En ese caso, el Estado huésped, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84- y 85, consultará de manera apropiada al Estado que envía para evitar - que estas medidas perturben el funcionamiento normal de la misión..."

El estudio en profundidad del artículo 77 lo realizaremos cuando - estudiemos el fin de las actividades de los miembros de la misión, pues - es necesario estudiar dicho artículo en su conjunto. De todas formas diremos que este párrafo cuarto parece autorizar al Estado huésped a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y por tanto a no aceptar la presencia sobre su territorio de las personas que aten ten contra ésta. Por el contrario, no parece que el artículo 77, 4 autori ce al Estado huésped a considerar que un nombramiento de un miembro -
.../...

(69) Conferencia, I, p. 162.

.../...

de una misión permanente es nulo porque ha sido realizado faltando a la buena fé.

De la misma forma que en las relaciones diplomáticas entre Estados, el artículo 37 de la Convención da medios de defensa al Estado huésped respecto al posible nombramiento de personas que tengan en dicho Estado su residencia permanente. El artículo 37 párrafo primero dice así :

" Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros privilegios e inmunidades, el jefe de misión o todo miembro del personal diplomático de la misión que sea nacional del Estado huésped o tenga en él su residencia permanente solo gozará de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ".

Sin embargo la Convención no da medios de defensa al Estado huésped en el caso de que se nombre miembro de una misión permanente a una persona contra la que estuviera a punto de iniciarse, o se hubiera iniciado ya, un proceso si esa persona no tuviera su residencia permanente en el Estado huésped.

Podría argüirse, de la misma forma que se hace respecto a los casos semejantes en las relaciones diplomáticas entre Estados, que el Estado receptor o el Estado huésped en este caso guarda siempre un derecho de oposición a los nombramientos, sobre todo si se trata de personas que están sujetas a un proceso. Este supuesto parece que podría incluirse en el artículo 77, 4. Sin embargo es muy probable que la mayoría de los Estados huéspedes consideren que puede imponerse una interpretación restrictiva de este párrafo cuarto del artículo 77 y opten por la solución más sencilla de no ratificar la Convención.

B) Los límites del nombramiento.

En el apartado anterior vimos cómo el nombramiento de los miembros de las misiones permanentes, con excepción de las cuestiones referentes a la seguridad del Estado huésped, estaba limitado por la nacionalidad de los miembros de las misiones permanentes y por el número de miembros de la misión. En este apartado estudiaremos ambas limitaciones de forma sucesiva.

La justificación del límite del número de miembros de la misión reside en el estatuto privilegiado que el Estado huésped debe conceder a los miembros de las misiones permanentes. En efecto si el Estado huésped está obligado a otorgar un estatuto privilegiado a los miembros de las misiones permanentes, también debe estar facultado para exigir que el número de miembros de la misión esté en relación con las necesidades de ésta y no dependa de otras consideraciones.

En general los Acuerdos de sede no prevén la limitación del número de miembros de las misiones permanentes. Solamente el párrafo segundo de la sección 15 del Acuerdo de sede entre los EE.UU. y la ONU, citado en el apartado anterior podría ser interpretado como un límite al número de miembros de las misiones. Sin embargo, a pesar de que no exista una norma limitando el número de miembros de las misiones permanentes, la Secretaría de las NU ha afirmado que :

" aunque no parezca que haya ninguna disposición que delimite específicamente el número de miembros de una misión, en general se ha supuesto que existe un límite....." (70).

La limitación del número de miembros de la misión está regulada, en las relaciones diplomáticas entre Estados, por el artículo 11, párrafo 1
.../...

(70) " Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades ", ACDI, 1967, Vol. II, p. 170.

.../...

de la Convención de Viena de 1961 que dice como sigue :

" A falta de acuerdo explícito sobre el número de miembros de la misión, el Estado receptor podrá exigir que ese número esté dentro de los límites de lo que considere que es razonable y normal, según las circunstancias y condiciones de ese Estado y las necesidades de la misión de que se trate ".

Tomando como base el artículo anterior, la CDI propuso el siguiente artículo :

" El número de miembros de la misión no excederá de los límites de lo que sea razonable y normal, habida cuenta de las funciones de la Organización, las necesidades de la misión de que se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped " (71).

En el comentario a este artículo la CDI afirma que :

" El artículo 14 se basa en el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención sobre relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay entre ambos textos una diferencia fundamental. Con arreglo a lo dispuesto en la Convención, el Estado receptor podrá exigir que ese número esté dentro de los límites de lo que considere que es razonable y normal. El artículo 14 del presente proyecto enuncia el problema de distinto modo. Crea la obligación para el Estado que envía, al constituir su misión, de mantener el número de sus miembros dentro de los límites de lo que es razonable y normal...

En el caso de las misiones ante las Organizaciones internacionales, se ha de reconocer el principio de que el Estado que envía tiene libertad para determinar la composición de su misión y elegir a los miembros de la misma a fin de asegurar el funcionamiento efectivo de la diplomacia -
.../...

(71) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 319.

.../...

multilateral. La solución en el caso de abusos de dicha libertad debe buscarse en el procedimiento de consultas y conciliación previsto en los artículos 81 y 82, respectivamente, del presente proyecto de artículos" (72).

En la Conferencia de Viena, los Estados Unidos y Canadá propusieron una enmienda (73) al proyecto de la CDI con objeto de que el número de miembros de las misiones permanentes fuese determinado mediante un acuerdo tripartito entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización internacional.

El representante de los EE.UU. alegaba que :

" El proyecto de la CDI no precisa como habrá de determinar lo que sea razonable y normal ni a quien corresponderá hacerlo. Al llenar esta laguna, la enmienda presentada elimina toda causa de controversia " (74).

La mayoría de las delegaciones no estuvieron de acuerdo con el representante de los EE.UU. por lo que la enmienda fué rechazada y la Conferencia aprobó el texto propuesto por la CDI, que se convirtió de esta manera en el artículo 14 de la Convención de Viena.

Debe notarse que la enmienda presentada por los EE.UU. y Canadá no estaba justificada. La mayoría de los Estados consideraron, con buen criterio, que los problemas que pudieran surgir a este respecto podrían ser fácilmente solucionados mediante el procedimiento de conciliación previsto en el artículo 85 de la Convención. Por otra parte la experiencia ha demostrado que nunca se han planteado problemas a este respecto (75), por lo que no parece lógico introducir la necesidad de un acuerdo tripartito.

.../...

(72) ibid., p. 319.

(73) Conferencia, II, p. 93 (Documento : A/CONF.67/C.1/L.33).

(74) Conferencia, I, p. 118.

(75) Ver el comentario de la CDI al artículo 14, párrafo 2, del proyecto en " Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol.II, primera parte, p.319.

.../...

tito. Además la participación de la Organización internacional en dicho acuerdo plantearía problemas delicados para ésta, como puso de relieve en la Conferencia el Asesor Jurídico del Secretario General de las-NU (76).

La segunda limitación al nombramiento del personal de las misiones prevista en la Convención se refiere a la nacionalidad de los miembros de la misión. En la diplomacia internacional el personal diplomático no puede tener la nacionalidad del Estado receptor, salvo que este Estado haya prestado su consentimiento expreso que puede retirar en cualquier momento (77). El problema se plantea de manera diferente en la diplomacia ante las Organizaciones internacionales, dado que el personal diplomático de las misiones permanentes está acreditado ante la Organización y no ante el Estado huésped.

Los Acuerdos de sede no contienen ninguna prohibición respecto al nombramiento como representantes de otro Estado de personas que posean la nacionalidad del Estado receptor. Algunos Acuerdos de sede (78) prevén expresamente este caso prescribiendo que los representantes que tengan la nacionalidad del Estado huésped gozaran de un estatuto privilegiado solamente respecto a los actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales. Otros Acuerdos de sede silencian el problema, sin que ello suponga que los representantes que sean nacionales del Estado huésped tengan un estatuto jurídico diferente del que les conceden los acuerdos que regulan esta cuestión de forma expresa.

A pesar de que los Acuerdos de sede no prevén la necesidad del consentimiento del Estado huésped para el nombramiento de uno de sus nacionales como representante de un tercer Estado, la CDI consideró -

.../...

(76) Conferencia, I, p.121.

(77) Artículo 8, párrafo 2 de la Convención de Viena de 1961.

(78) Ver los Acuerdos de sede citados en ACDI, 1967, Vol. II, p. 215 nota a pie de página número 92.

.../...

oportuno, en este caso, separarse del régimen previsto en los Acuerdos de sede. El artículo 72 del proyecto de la CDI (79) preveía por tanto - que para nombrar representante de otro Estado a un nacional del Estado huésped se requería el consentimiento de este Estado, consentimiento que podía ser retirado en cualquier momento.

En la Conferencia, algunas delegaciones mostraron su disconformidad con la manera de proceder de la CDI. Así la delegación española - propuso que se eliminara el requisito del consentimiento del Estado huésped (80). Defendiendo esta enmienda el delegado español afirmó que:

" la única restricción que parece fundada en lo que respecta a - los nacionales del Estado huésped es la relativa a los privilegios e inmunidades..., tales limitaciones se prevén expresamente en los artículos 36 y 37, y convendría atenerse a esto " (81).

La enmienda española no llegó a votarse, pues fué retirada para dar paso a otra presentada por Guatemala, Suiza y la Santa Sede (82) que suponía una solución de compromiso y que fué aceptada por la Conferencia. El texto del artículo 73, una vez incluída la enmienda anterior, es el siguiente :

" 1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión, el jefe de la delegación y los miembros del personal diplomático de la delegación, el jefe de la delegación de observación, los otros-delegados observadores y los miembros del personal diplomático de observación habrán de tener en principio la nacionalidad del Estado que envía.

2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento.

(79) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 350.

(80) Conferencia, II, p. 151 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.131).

(81) Conferencia, I, p. 273.

(82) Conferencia, III, p. 151 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.137).

3. Cuando el jefe de delegación o todo otro delegado o miembro de personal diplomático de la delegación o el jefe de la delegación de observación o todo otro delegado observador o miembro del personal diplomático de la delegación de observación sean designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped, se presumirá el consentimiento de dicho Estado si se le ha notificado tal designación de un nacional del Estado huésped y no ha planteado objeciones ".

Como puede verse para el nombramiento de nacionales del Estado huésped como miembros de las misiones permanentes se requiere el consentimiento expreso mientras que para el nombramiento de miembros de las delegaciones en un órgano o en una conferencia se presume el consentimiento del Estado huésped.

La diferenciación entre uno y otro caso parece lógica, pues dadas las funciones de las delegaciones en órganos y conferencias, éstas suelen tener necesidad de incluir en las mismas a personal técnico muy especializado cualquiera que sea su nacionalidad, supuesto que raramente ocurre en el caso de las misiones permanentes.

Si la acreditación de un nacional del Estado huésped como miembro del personal diplomático de una misión requiere el consentimiento de este Estado, no parece que dicho consentimiento sea necesario en el caso de la acreditación de una persona que posea la nacionalidad de un tercer Estado. En la diplomacia entre Estados, este supuesto está regulado por el artículo 8 de la Convención de Viena de 1961 cuyo texto reproducimos a continuación:

" 1. Los miembros del personal diplomático de la misión habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante.

2. Los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado-receptor, excepto con el consentimiento de ese Estado, que podrá reti -

rarlo en cualquier momento.

3. El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto a los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del Estado acreditante ".

De la lectura de este artículo se deduce que el Estado que envía - puede nombrar como personal diplomático de su misión a una persona - que tenga la nacionalidad de un tercer Estado, salvo que el Estado receptor se haya opuesto en los nombramientos de los nacionales de un Estado determinado.

En la diplomacia ante las Organizaciones internacionales parece que el Estado que envía debe poder actuar con más libertad que en la diplomacia entre Estados, dado que los miembros de las misiones permanentes están acreditados ante la Organización y no ante el Estado huésped.

Los Acuerdos de sede no regulan el supuesto de la acreditación de un nacional de un tercer Estado. Sin embargo la práctica demuestra que los Estados huéspedes no han puesto, en general, inconvenientes a la acreditación de las personas que no posean la nacionalidad del Estado que envía, sino la de un tercer Estado (83). Solamente los Estados Unidos se han negado a conceder el estatuto diplomático a los representantes que no posean la nacionalidad del Estado que envía alegando que:

" teniendo en cuenta que la posesión de la nacionalidad del Estado acreditante era una de las condiciones para conceder el estatuto diplomático en Washington, tal condición se aplicaba asimismo a los miembros de las misiones permanentes en virtud de los términos de la sección 15 del Acuerdo de sede " (84).

La interpretación que hacen en este caso los EE.UU. de la sección 15 del Acuerdo de sede parece abusiva. Como hemos visto más -

.../...

(83) "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, - 1967, Vol. II, ps. 180, 181 y 203.

(84) ibid., p. 180.

.../...

arriba los EE.UU. pueden prevalerse de la sección 15, párrafo segundo, del Acuerdo de sede para proteger su seguridad nacional, pero no para inmiscuirse en la política de los distintos Estados en relación con la ONU.. Esta ha sido la opinión del Jefe de Protocolo de las NU que ha afirmado:

" Reconocemos, desde luego, que la práctica diplomática autoriza al Estado receptor a dar su consentimiento como condición para que un Estado acreditante nombre, como miembro de su misión diplomática, a un nacional de un tercer Estado. En consecuencia, estamos dispuestos a admitir que el Gobierno de los EE.UU. pueda imponer la condición descrita en su carta al personal diplomático que deba acreditarse ante él. Es evidente que tendría importancia directa para el Gobierno de los EE. UU., el que un diplomático que trate con el Departamento de Estado posea la nacionalidad del Estado al que representa. En cambio, las Naciones Unidas siguen abrigando dudas en cuanto a si tal actitud por parte del Gobierno huésped constituye una condición correspondiente en el sentido de la sección 15. En nuestra opinión, la relación existente entre la obligación de los EE.UU. de conferir privilegios diplomáticos por una parte, y el grado de interés que pudiera tener en la nacionalidad del personal diplomático que ha de tratar no con los EE.UU., sino únicamente con las Naciones Unidas y con las demás misiones de los Estados miembros, por otra parte, es demasiado tenue para que tales condiciones en la sede de las Naciones Unidas puedan considerarse como correspondientes a las que existen en Washington" (85).

Parece por tanto que los Estados que envían pueden acreditar libremente a personas que no posean su nacionalidad ni tampoco la del Estado huésped, sino la de un tercer Estado. La Convención de Viena ha recogido este principio en el párrafo primero del artículo 73, antes transcrito, que afirma que los miembros del personal diplomático

" habrán de tener en principio la nacionalidad del Estado que envía ".

(85) ibid., p.180.

A pesar de esta afirmación de principio el artículo 73 no prevé - que sea necesario el consentimiento del Estado huésped para el nombramiento de un nacional de un tercer Estado, por lo que creemos que la interpretación correcta de dicho artículo es que los Estados que envían - pueden nombrar libremente como miembros de sus misiones permanentes a nacionales de un tercer Estado. Sin embargo creemos que el artículo 73 permite la oposición del Estado huésped en casos excepcionales que - pudieran afectar a su seguridad.

3. El nombramiento del personal administrativo y técnico, del personal de servicio y del personal al servicio privado.

Además del personal diplomático, las misiones cuentan con personal administrativo y técnico y con personal de servicio. Tanto el personal administrativo y técnico como el personal de servicio goza de un estatuto especial por su pertenencia a la misión. En el presente apartado - nos ocuparemos del nombramiento de una y otra clase de personal, dejando para el capítulo quinto el estudio de su estatuto especial.

El primer problema que se presenta respecto del personal administrativo y técnico y del personal de servicio es el de su definición. El artículo primero de la Convención define a ambas clases de personal de la manera siguiente:

" se entiende por miembros del personal administrativo y técnico - los miembros del personal empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión...

se entiende por miembros del personal de servicio los miembros del personal empleados por la misión para atender a los locales o realizar cometidos análogos ".

Los Acuerdos de sede no se refieren de forma expresa al personal administrativo y técnico, ni al personal de servicio. En algunos casos

unos y otros quedan englobados en el termino " miembros de la misión "; en otros casos los Acuerdos de sede se refieren unicamente al personal diplomático. La Convención de Viena ha llenado esta laguna adaptando los principios vigentes en las relaciones diplomáticas entre Estados a las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales.

El nombramiento del personal administrativo y técnico y del personal de servicio está regulado por el artículo 9 de la Convención de Viena. Este artículo regula el nombramiento del personal de la misión en general, sin distinguir entre las diferentes clases de personal. Por esta razón nos remitimos a los apartados anteriores en los que estudiamos el nombramiento del personal diplomático.

La única especialidad del nombramiento del personal administrativo y el técnico y del personal de servicio respecto del nombramiento del personal diplomático es la referente a la nacionalidad.

Si los miembros del personal diplomático han de tener " en principio " la nacionalidad del Estado que envía, la presunción juega en sentido contrario en lo que se refiere al personal administrativo y técnico y al personal de servicio. Con frecuencia el personal administrativo y técnico y, sobre todo, el personal de servicio es reclutado en el país en el que está situada la misión. Por ello el artículo 73 de la Convención prevé unicamente la necesidad del consentimiento del Estado huésped respecto al nombramiento de sus nacionales como personal diplomático. Por el contrario el Estado que envía puede nombrar libremente a los nacionales del Estado huésped como personal administrativo y técnico y como personal de servicio.

Distinto del personal de servicio es el " personal al servicio privado ". El personal de servicio forma parte del personal de la misión, mientras que el " personal al servicio privado " no pertenece propiamente a la misión. El artículo primero de la Convención de Viena define al " personal al servicio privado " de la manera siguiente :

" se entiende por personal al servicio privado las personas empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la misión".

Dadas las funciones de dicho personal y el reducidísimo estatuto privilegiado de que goza, su nombramiento es totalmente libre.

4. La familia de los miembros de la misión.

En el derecho que rige las relaciones diplomáticas entre Estados, la familia de los miembros de la misión está considerada como parte del personal perteneciente a la misión diplomática. La razón de esta asimilación de la familia de los miembros de la misión al personal de las misiones diplomáticas reside en el fundamento mismo de las normas de Derecho diplomático. En efecto, si las normas de Derecho diplomático tienen como fin el ejercicio libre e independiente de las actividades de los agentes diplomáticos, parece necesario que la familia de éstos, y también la del resto de los miembros de la misión, gocen del mismo estatuto privilegiado del que goza el personal de la misión.

En la diplomacia entre Estados el estatuto de la familia de los miembros de la misión está regulado por el artículo 37 de la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. Dicho artículo concede a la familia de los miembros de la misión el mismo estatuto privilegiado del que goza el personal de la misión.

Los Acuerdos de sede no regulan el estatuto de la familia de los miembros de la misión, limitándose a regular el estatuto de los representantes de los Estados, y en algunos casos de su comitiva, sin referirse a la familia de dichos representantes. Este silencio de los Acuerdos de sede no ha sido obstáculo para que los familiares de los miembros de las misiones permanentes hayan gozado del mismo estatuto que éstos por aplicación analógica de las reglas aplicables a las misiones diplomáticas. La Convención de Viena ha recogido esta práctica en su artículo 36, que aplica a la familia de los miembros de las misiones permanentes las mismas normas establecidas por el artículo 37 de la Convención de Viena -

de 1961 sobre las relaciones diplomáticas.

Tanto el artículo 37 de la Convención de 1961 como el artículo 36 de la Convención de 1975 se refieren a " los miembros de la familia del personal de la misión que formen parte de su casa". Podemos encontrar el significado de esta expresión en los comentarios de la CDI al proyecto de artículos sobre las relaciones diplomáticas:

" La Comisión no ha querido precisar el sentido de la expresión miembros de la familia ni fijar un máximo de edad para los hijos. El cónyuge y los hijos menores de edad, por lo menos, son universalmente reconocidos como personas de la familia, pero puede haber casos en que otros parientes hayan de ser también tenidos en cuenta. Al disponer que, para poder invocar los privilegios e inmunidades, una persona de la familia ha de formar parte del hogar, la Comisión ha querido indicar que han de existir lazos estrechos y condiciones especiales "(86).

III. El fin de las actividades del personal de la misión.

... Siguiendo un orden cronológico, deberíamos estudiar la actividad de los miembros de las misiones permanentes antes de entrar en el estudio del fin de las actividades de los mismos. Sin embargo, dada la estrecha relación que existe entre el nombramiento del personal de la misión y el fin de sus actividades, creemos que el estudio de uno y otro tema deben ser realizados de forma sucesiva. El estudio de la actividad de los miembros de las misiones permanentes lo realizaremos en el apartado siguiente, relativo a las funciones de la misión.

De acuerdo con la caracterización que hemos realizado de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales como relaciones jurídicas triangulares, examinaremos el fin de las actividades de los miembros de las misiones permanentes en relación al Estado que envía, al Estado huésped y a la Organización internacional.

(86) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1957, Vol. II, p. 152.

1. Causas dependientes del Estado que envía.

Si el nombramiento de los miembros de las misiones permanentes es competencia del Estado que envía, el fin de sus actividades dependerá también de la discrecionalidad de dicho Estado. Las razones por las que un Estado pone fin a la actividad de un miembro de su misión permanente puede ser de muy diversa índole, sin que parezca necesario analizarlas aquí.

En la diplomacia entre Estados, un Estado puede retirar a su Embajador dejando la misión a cargo de un "encargado de negocios" con objeto de mostrar la tirantez de las relaciones con el Estado receptor. Por el contrario en la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales no parece que exista un procedimiento semejante o, al menos, nunca ha sido utilizado. La razón es que las Organizaciones internacionales solamente pueden desarrollar en cuanto tales una política internacional muy limitada. Por otra parte, las Organizaciones internacionales además de ser sujetos con personalidad propia pueden ser consideradas como "foro internacional", por lo que carecería de sentido el que un Estado sustituyera a su Embajador por un "encargado de negocios" para mostrar su desacuerdo con dicho foro. Esto no quiere decir que en circunstancias muy especiales esta medida no pudiera ser utilizada, ya sea por un Estado miembro o por un Estado no miembro de la Organización internacional.

2. Causas que dependen del Estado huésped.

Cuando estudiamos el nombramiento del jefe de misión vimos como en la diplomacia entre Estados, su nombramiento estaba supeditado al consentimiento del Estado receptor, que se formulaba mediante el procedimiento del placet.

El consentimiento que necesariamente presta el Estado receptor respecto del nombramiento del jefe de misión puede ser retirado en cual

quier momento si dicho Estado manifiesta que el jefe de misión ante él - acreditado ha sido declarado persona non grata. Del mismo modo, cualquier miembro del personal diplomático de la misión puede ser declarado también persona non grata y los miembros del personal administrativo y técnico y del personal de servicio pueden ser declarados " persona no aceptable ".

Esta facultad del Estado receptor respecto al personal de las misiones diplomáticas acreditadas ante él está regulada en el artículo 9 de la Convención de Viena de 1961 cuyo texto es el siguiente :

"1. El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener - que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá termino a sus funciones en la misión según proceda. Toda persona podrá ser declarada persona non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor.

2. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecutar en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate ".

Debe notarse que según el artículo anterior el Estado receptor no está obligado a motivar su decisión, de lo que se deduce que ésta puede depender tanto de su apreciación de la actividad oficial como de la actividad privada del miembro de la misión que es declarado persona non grata o " persona no aceptable ".

La posición del Estado huésped respecto a los miembros de las misiones permanentes es diferente de la del Estado receptor respecto a -

a los miembros de las misiones diplomáticas ante él acreditadas. En efecto las misiones permanentes no están acreditadas ante el Estado huésped, sino ante la Organización internacional. Además el Estado huésped está obligado a permitir la libertad y la independencia de las actividades que los diferentes Estados realicen respecto a la Organización y en la Organización. De ésto se deduce que el Estado huésped no puede inmiscuirse en la actuación que los miembros de las misiones permanentes llevan a cabo en la Organización y ante la Organización.

Si el Estado huésped no puede inmiscuirse en la actividad oficial, u oficiosa, de los miembros de las misiones permanentes, no parece que deba suceder lo mismo respecto a los actos privados de éstos. En efecto, si bien es cierto que los miembros de las misiones permanentes no están acreditados ante el Estado huésped, también es verdad que es el Estado huésped quien concede el estatuto privilegiado del que gozan los miembros de las misiones permanentes. El Estado huésped debe, por tanto, tener derecho a exigir que el estatuto privilegiado de los miembros de las misiones permanentes sirva únicamente para garantizar la independencia de éstos, pero no para cubrir actividades contrarias a la soberanía de dicho Estado. Por esta razón es por la que el Estado huésped debe conservar el derecho a expulsar a un miembro de una misión permanente si éste, en su actividad privada, realiza actos que atenten a la soberanía del Estado huésped.

El razonamiento anterior sobre las facultades del Estado huésped está recogido en la sección 25 de la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados cuyo texto reproducimos :

"1. Los representantes de los miembros en las reuniones convocadas por Organismos especializados, mientras duren sus funciones y durante sus viajes al lugar de reunión o de regreso..... no serán obligados -

por las autoridades territoriales a abandonar el país en el cual ejerzan - sus funciones, por razón de actividades realizadas por ellos en su capa - cidad oficial. No obstante, en el caso en que alguna de dichas personas abusase del privilegio de residencia ejerciendo, en ese país, actividades ajenas a sus funciones oficiales, el Gobierno de tal país podrá obligarle - a salir de él, sin perjuicio de las disposiciones siguientes :

2.1. Los representantes de los miembros o las personas que disfrutan de la inmunidad diplomática según lo dispuesto en la sección 21, - no serán obligados a abandonar el país, si no es conforme al procedimien - to diplomático aplicable a los enviados diplomáticos acreditados en ese - país " .

La Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas no contiene un precepto semejante. Esta ha sido la razón por la - que los Estados Unidos al adherirse a dicha Convención han introducido - la siguiente reserva :

" Ninguna de las disposiciones del artículo IV, relativo a las pre - rrogativas e inmunidades de los representantes de los Miembros.... se - interpretará en sentido que conceda a cualquier persona que haya abusa - do de sus privilegios de residencia mediante actividades en los Estados - Unidos extrañas a su condición oficial inmunidad respecto de las leyes y - reglamentos de los Estados Unidos que regulan la continuación de la resi - dencia de extranjeros, a reserva de que : a) no se iniciarán procedimien - tos en virtud de dichas leyes y reglamentos para pedir a cualquiera de - esas personas que abandone los Estados Unidos a no ser con la aproba - ción previa del Secretario de Estado de los Estados Unidos. Dicha apro - bación solo se dará después de consultas con el Estado Miembro interesa - do en el caso de representantes de un Estado miembro (o un miembro - de su familia); b) un representante del Estado miembro interesado.... ten - drá derecho a comparecer en cualquier procedimiento de ésta índole en - nombre de la persona contra la cual se haya incoado; c) no se pedirá a

las personas con derechos a prerrogativas e inmunidades diplomáticas en virtud de la Convención que abandonen los Estados Unidos sino de conformidad con el procedimiento consuetudinario aplicable a los miembros de las misiones diplomáticas acreditadas ante los Estados Unidos o que hayan sido objeto de la correspondiente notificación a los Estados Unidos " (87).

La reserva introducida por los EE.UU. no era necesaria, ya que según la sección 13 del Acuerdo de sede entre las NU y los EE.UU. - las autoridades norteamericanas gozan del derecho de expulsión de los representantes acreditados ante las Naciones Unidas en caso de abuso de privilegios. Tengase en cuenta además que según la sección 26 del Acuerdo de sede, en caso de contradicción entre el Acuerdo de sede y la Convención general, es el Acuerdo de sede el que prevalece.

Del mismo modo que el Acuerdo de sede concluido entre los EE.UU. y la ONU, algunos acuerdos de sede (88) prevén el derecho del Estado huésped a expulsar a los miembros de las misiones permanentes en caso de abuso de privilegios. Otros Acuerdos no mencionan la posibilidad de expulsión, limitándose a establecer la obligación del Estado que envía de no permitir que sus representantes abusen de los privilegios e inmunidades que se les conceden. Además los Acuerdos de sede contienen normalmente una autorización general al Estado huésped para que pueda tomar todas las medidas que sean necesarias para su seguridad. Basándose en dicha autorización, los Estados huéspedes se han considerado con suficiente derecho para expulsar a los miembros de las misiones permanentes que, según dichos Estados, han abusado de sus privilegios.

La cuestión del derecho de expulsión de los miembros de las misiones permanentes fué ampliamente discutida en la CDI donde varios de sus miembros pusieron de relieve la dificultad de conciliar la protección debida
.../...

(87) Naciones Unidas. Anuario Jurídico, 1970, p.29, nota a pie de pagina nº 3.

(88) Ver por ejemplo la sección 29 del Acuerdo de sede entre Canadá y la OACI y el artículo 9 del Acuerdo de sede entre Francia y la UNESCO.

.../...

al Estado huésped con la garantía para los Estados que envían de que el Estado huésped no cometería abusos. Después de discutir diversos proyectos, la CDI propuso a la Conferencia el siguiente texto :

" Artículo 75.- Respecto de las leyes y reglamentos del Estado huésped.

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. También estarán obligadas a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de jurisdicción, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá termino a las funciones que ejerza en la misión o la delegación o asegurará su partida según proceda. El Estado que envía tomará la misma medida en caso de injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado huésped. Las disposiciones de este párrafo no se aplicarán en el caso de un acto realizado por la persona de que se trate en el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación.

3. Los locales de la misión no deberan ser utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación " (89).

Comparado con el régimen establecido por los Acuerdos de sede, el texto propuesto por la CDI restringía apreciablemente el derecho de expulsión de los Estados huéspedes. Sin embargo en su comentario del artículo 75, la CDI interpretaba el derecho de expulsión del Estado huésped
.../...

(89) " Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p.352.

.../...

ped de una forma mucho más amplia de la que los términos del artículo parecían permitir. Así la CDI era de la opinión de que :

" la repetición de infracciones leves de la legislación penal puede dar lugar a una infracción grave y manifiesta y caer por tanto en el su puesto del párrafo dos " (90).

Además la CDI afirmaba que:

" El párrafo 2 no constituye una limitación de las obligaciones - enunciadas en el párrafo 1 El incumplimiento de las obligaciones - establecidas en el párrafo 1 también permite exigir la retirada de dicha - persona, incluso si las infracciones no son de carácter penal o si las - infracciones o injerencias no son necesariamente graves o manifiestas. - En otras palabras, el párrafo 2 define las obligaciones del Estado que - envía en circunstancias determinadas, incluso la obligación de retirar a - la persona de que se trate cuando se den esas circunstancias, pero no se propone limitar los casos en que el Estado huésped puede pedir al - Estado que envía que retire a la persona que goza de privilegios e inmu - nidades " (91).

El texto propuesto por la CDI fué duramente criticado en la Confe - rencia de Viena por la mayoría de las delegaciones de los países occi - dentales y especialmente por los Estados huéspedes de las Organizacio - nes internacionales más importantes. Así el representante del Reino Uni - do subrayó que :

" El artículo 75 se limita a imponer al Estado que envía la obliga - ción de retirar a la persona de que se trate, de poner término a sus - funciones o de asegurar su partida en determinadas circunstancias, es -
.../...

(90) ibid., p. 352.

(91) ibid., p. 352.

.../...

decir, cuando haya cometido una infracción grave y manifiesta de la legislación penal del Estado huésped. En todas las demás circunstancias, parece que un miembro de la misión puede abusar de sus privilegios e inmunidades. En efecto, el proyecto de artículos no reconoce al Estado huésped el derecho a exigir el retiro de la persona de que se trate y no impone al Estado que envía obligación alguna a este respecto.... Tales disposiciones son inaceptables, pues no tienen en cuenta los intereses legítimos del Estado huésped y contradicen de este modo la práctica internacional y los principios perfectamente establecidos del Derecho diplomático y del Derecho relativo a las Organizaciones internacionales, que reconocen al Estado huésped el derecho a declarar inaceptable a cualquier persona que haya abusado de sus privilegios de residente " (92).

El representante de los EE.UU. afirmó que :

" el comentario de la CDI reconoce implícitamente que el proyecto es incompleto porque no abarca todas las circunstancias en que el Estado huésped podría pedir al Estado que envía que retire a una persona - que disfruta de privilegios e inmunidades " (93).

El representante de Japón observó que no creía :

" que las autoridades encargadas de la seguridad en posibles Estados huéspedes de Africa, Asia y America Latina estén dispuestas a - aceptar el significado que tiene realmente el artículo 75 tal como lo ha formulado la CDI " (94).

Varios Estados propusieron diversas enmiendas (95) que amplían las facultades del Estado huésped de expulsar a los miembros de las .../...

(92) Conferencia, I, p. 284.

(93) Conferencia, I, p. 291.

(94) Conferencia, I, p. 292.

(95) Conferencia, II, p. 154 (Enmienda de Nigeria:A/CONF.67/C.1/L.78; Enmienda de Francia:A/CONF.67/C.1/L.119 y A/CONF.67/C.1/L.134; Enmienda de España:A/CONF.67/C.1/L.132; Enmienda del Reino Unido:A/CONF.67/C.1/L.141 y Enmienda de Italia:A/CONF.67/C.1/L.144).

.../...

misiones permanentes en caso de abuso de privilegios. Las enmiendas - propuestas fueron rechazadas en bloque por las delegaciones de los Estados socialistas y de los pertenecientes al grupo de los 77. Así el representante de Polonia dijo que :

" Polonia no puede apoyar ninguna de las enmiendas al artículo - 75 y se pronuncia por el texto de la CDI " (96).

El representante de la India, criticando la enmienda presentada por Nigeria, dijo que dicha enmienda

" trata de introducir en el artículo 75 un procedimiento de declaración de persona non grata ajeno a las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales (97).

El representante del Perú alegó que :

" El Estado huésped está suficientemente protegido por diversas - disposiciones del proyecto de convención y en particular por los artículos dedicados a los procedimientos de consultas y conciliación " (98).

El debate subió algo de tono. El representante de los E.E.UU. reprochó :

" la mala voluntad de que dan prueba algunos miembros de la Comisión cuando se trata de tener en cuenta las necesidades legítimas de los Estados huéspedes que indica claramente que no están particularmente interesados en que los Estados huéspedes se adhieran a la Convención" (99).

(96) Conferencia, I, p. 285.

(97) Conferencia, I, p. 288.

(98) Conferencia, I, p. 285.

(99) A/CONF.67/C.1/SR.39, p. 16. En el texto definitivo de los documentos de la Conferencia los terminos utilizados por el delegado norteamericano han sido suavizados. Ver Conferencia, I, p. 287.

Es probable que al representante de los EE.UU. no le faltara razón. Sin embargo hay que tener en cuenta que las enmiendas estaban redactadas en términos muy generales de forma que hacía posible la comisión de toda clase de abusos por parte de los Estados huéspedes.

La Conferencia rechazó el fondo de las enmiendas del Reino Unido y de Nigeria admitiendo solamente algunos pequeños cambios que trataban de precisar el texto. De esta forma los tres primeros párrafos del artículo 77 quedaron redactados de la forma siguiente :

"1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. También estarán obligadas a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de jurisdicción, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá término a las funciones que ejerza en la misión, la delegación o la delegación de observación o asegurará su partida, según proceda. El Estado que envía tomara la misma medida en caso de injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado huésped. Las disposiciones de este párrafo no se aplicarán en el caso de un acto realizado por la persona de que se trate en el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación o de la delegación de observación.

3. Los locales de la misión o la delegación no deberán ser utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación ".

La Conferencia aprobó sin embargo la enmienda presentada por Francia (100). La enmienda francesa, aprobada por 33 votos a favor, -
.../...

(100) Conferencia, II, p. 155 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.134).

.../...

30 en contra y 8 abstenciones, tenía la virtud de ser un intermedio entre las dos posturas que se habían enfrentado en la Conferencia. Una vez - aprobada dicha enmienda el texto de los párrafos 4 y 5 del artículo 77 es el siguiente :

"4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se podrá interpretar en el sentido de que impide que el Estado huésped adopte las medidas que sean necesarias para su propia protección. En ese caso, - el Estado huésped, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 85, consultará de manera apropiada al Estado que envía para evitar que estas medidas perturben el funcionamiento normal de la misión, la delegación o la delegación de observación.

5. Las medidas previstas en el párrafo 4 del presente artículo se tomarán con la aprobación del ministro de relaciones exteriores o de cualquier otro ministro competente de conformidad con las normas constitucionales del Estado huésped ".

De la interpretación conjunta de ambos párrafos parece deducirse que el Estado huésped tiene derecho a expulsar a un miembro de una misión permanente en caso de abuso de privilegios. El párrafo quinto, al aludir a la aprobación del Ministro de relaciones exteriores, da a entender que la expulsión de un miembro de una misión es una de las medidas que contempla el párrafo cuarto. Este párrafo está concebido en términos bastante amplios, pues permite que sean tomadas todas las medidas necesarias para la protección del Estado huésped. El concepto de protección es mucho más amplio que otros que podían haber sido utilizados a este respecto como, por ejemplo, el de seguridad nacional.

Parece por tanto que el artículo 77 de la Convención supone una protección suficiente para el Estado huésped. El Estado huésped goza de un derecho de expulsión de carácter inmediato en caso de " infracción grave y manifiesta de su legislación penal " o de " injerencia grave y ma

nifiesta en los asuntos internos de dicho Estado ". Además el Estado huésped goza de un derecho suplementario para tomar todas las medidas necesarias para su protección, incluyéndose en estas medidas la expulsión de un miembro de una misión permanente. En este caso, el Estado huésped deberá consultar al Estado que envía, procedimiento previsto igualmente en el Acuerdo de sede concluído entre los EE.UU. y las NU (101).

Si comparamos el régimen previsto en el artículo 77 de la Convención con el de los Acuerdos de sede que prevén la expulsión de los miembros de las misiones permanentes en caso de abuso de privilegios, podemos concluir que el artículo 77 codifica las normas establecidas en dichos Acuerdos. Por el contrario, si comparamos el régimen de la Convención con el de los Acuerdos de sede que no prevén el derecho de expulsión de los miembros de las misiones permanentes, concluiremos que la Convención defiende mejor los intereses de los Estados huéspedes, legitimando una práctica ejercida por dichos Estados que no puede apoyarse directamente en dichos acuerdos.

A nuestro juicio el artículo 77 de la Convención, gracias a la enmienda francesa, es un texto de compromiso aceptable tanto para los Estados que envían como para los Estados huéspedes. Sin embargo, éstos no debieron entenderlo así, absteniéndose masivamente en la votación de dicho artículo (102).

3. Causas que dependen de la Organización internacional.

Cuando estudiamos el nombramiento del jefe de misión vimos cómo en la diplomacia entre Estados existía un procedimiento, llamado procedimiento del placet, mediante el cual el Estado que envía se aseguraba que
.../...

(101) Ver sección 13, b,1, de dicho Acuerdo.

(102) El artículo 75 fué aprobado por 41 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones.

.../...

la persona que iba a ser designada como jefe de misión era aceptable - para el Estado receptor. Respecto al resto del personal de la misión no existe ningún procedimiento semejante al procedimiento del placet. Sin embargo el Estado receptor guarda siempre la posibilidad de declarar persona non grata o " persona no aceptable " a cualquier miembro del personal de la misión, por lo que puede afirmarse que la permanencia de un miembro de la misión diplomática en su puesto depende del asentimiento - tácito del Estado receptor.

En la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales - no existe ningún procedimiento semejante al procedimiento del placet, mediante el cual una Organización internacional puede ejercer respecto a - las personas acreditadas ante ella los mismos derechos que el Estado - receptor puede utilizar en la diplomacia entre Estados.

La misma forma en que suelen ser redactados los poderes o las credenciales de los representantes permanentes ante las Organizaciones internacionales demuestra la afirmación anterior (103). En dichos poderes la autoridad competente del Estado que envía se limita a " comunicar " al más alto funcionario de la Organización internacional el nombramiento de un representante permanente, lo que demuestra que la generalidad de los Estados nunca han considerado posible que el Secretario - General o el Director General de una Organización pueda poner reparos al nombramiento de un representante de un Estado.

Aún reconociendo que el Secretario General de una Organización internacional no puede fiscalizar los nombramientos de los representantes estatales y menos aún pedir que se ponga fin a sus funciones, el Asesor jurídico del Secretario General de las NU ha considerado que en supuestos muy especiales el Secretario General de una Organización podría actuar en este sentido. En un memorandum presentado al Secretario Gene
.../...

(103) Ver por ejemplo la redacción de los poderes del Delegado permanente de Francia ante las NU en REUTER y GROSS, Traités - et documents diplomatiques, Paris, PUF, tercera edición, 1970, p. 508.

.../...

ral en 1958, el Asesor jurídico se expresaba en los siguientes términos:

" En el caso de las delegaciones acreditadas ante las NU, ningún órgano de las NU ha recibido la amplia potestad de un Estado receptor con respecto a los agentes diplomáticos. Sin embargo, se ha establecido una distinción que es pertinente a este respecto, entre las funciones oficiales de los representantes y otras actividades que puedan desarrollar..

En nuestra opinión, esta distinción entre el ejercicio de las funciones oficiales y de las otras actividades de un miembro de una misión permanente tiene una importancia fundamental. Las actividades correspondientes al ejercicio de las funciones de una misión permanente, mientras se desarrollen de conformidad con las reglas y procedimientos establecidos por los órganos de las Naciones Unidas, únicamente están sujetas al control y supervisión del gobierno al que represente la misión..... En cambio, las actividades emprendidas por los miembros de la misión que no correspondan a las funciones de representación oficial del Estado miembro interesado no están protegidas de un modo análogo, y si constituyeran un abuso de la condición de representante de las Naciones Unidas, estaría justificada la intervención de las Naciones Unidas.

Según los principios expuestos, parece que hay ciertas situaciones que justificarían claramente la formulación de reparos por los órganos de las Naciones Unidas a un Estado miembro con respecto a la composición de su misión permanente. Uno de estos casos se presentaría si un Estado miembro incluyese en la lista de su misión permanente a una persona que no desempeñase realmente ninguna función relacionada con la labor de la misión, pero que hubiera sido incluida en la lista con objeto de facilitarle la entrada en el Estado huésped o el disfrute de la condición jurídica y las facilidades de un representante acreditado ante las Naciones Unidas...

Todavía no se ha determinado que órganos tendrían derecho a actuar en nombre de las Naciones Unidas cuando hubiese que formular reparos a un Estado miembro con respecto a las actividades y la condición jurídica de un miembro de su misión permanente. Al parecer el Secretario General podría asumir esa función de conformidad con sus funciones y poderes en virtud del Capítulo XV de la Carta " (104).

A nuestro juicio la opinión del Asesor jurídico no es acertada en este caso. Respecto de los actos realizados por los miembros de las misiones permanentes fuera de sus funciones oficiales parece que las autoridades del Estado huésped tienen suficientes facultades como para no necesitar la asistencia del primer funcionario de la Organización. Respecto de los actos cometidos en el ejercicio de funciones oficiales, o al menos dentro del recinto de la Organización, creemos que el Secretario General puede llamar la atención de los órganos competentes pero nunca tomar medidas por su cuenta o ponerse en contacto directamente con las autoridades del Estado que envía. Otra cosa sería que el Secretario General pudiera realizar una función de ese tipo si el órgano competente le facultara para ello.. Las medidas que eventualmente pudieran tomar los órganos de una Organización respecto al representante de un Estado dependería naturalmente de " las reglas de la Organización ".

Por otra parte debe subrayarse que el conceder al Secretario General de una Organización poderes respecto a los representantes de los Estados haría muy delicada la función de dicho Secretario General, dificultándose el ejercicio de las funciones que le son propias.

IV. Las funciones de la misión,

Los Acuerdos de sede no contienen ninguna enumeración de las -
.../...

(104) " Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades ", ACDI, 1967, Vol. II, ps. 169 y 170.

.../...

funciones de las misiones permanentes. No parece sin embargo que la delimitación de estas funciones haya ocasionado problemas en la práctica. De todas formas parece lógico que una Convención codificadora de las normas de Derecho diplomático trate de delimitar cuáles son las funciones de las misiones permanentes.

Siguiendo el modelo trazado por la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas la Convención de Viena de 1975 se refiere a las funciones de la misión en general y no a las funciones del agente diplomático. Esto es lógico en la medida en que ambas Convenciones intentan subrayar el carácter de las misiones diplomáticas y de las funciones permanentes como órganos del Estado que envía. Las funciones de los agentes diplomáticos se definirán por tanto como las funciones de los representantes o de los órganos de las misiones diplomáticas y de las misiones permanentes.

La delimitación de las funciones de los miembros de las misiones permanentes tienen mucha trascendencia pues debe servir de base para distinguir entre la actividad de dichos agentes " en el ejercicio de funciones oficiales " y la actividad privada de los mismos. Esta distinción tiene mucha importancia como hemos podido comprobar en el apartado dedicado al fin de las funciones de los miembros de la misión.

Debido a que la Convención de Viena de 1975 confiere status oficial a las misiones representativas de los Estados no miembros de la Organización internacional, las funciones de estas misiones también son reglamentadas por la Convención. Examinaremos por tanto las funciones de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación de forma sucesiva.

1. Las funciones de las misiones permanentes.

Las funciones de una misión permanente pueden ser muy variadas, dependiendo tanto del Estado que envía como de la Organización interna -

cional ante la que la misión permanente está acreditada. De acuerdo con esta idea, la Convención de Viena de 1975 no trata de establecer una - enumeración exhaustiva de las funciones de las misiones permanentes limi_itándose a indicar cuáles son las funciones más típicas o más frecuentes-. Por esta razón, el artículo 6 de la Convención esta redactado de la for_uma siguiente:

" Las funciones de la misión permanente son, en particular:

- a) asegurar la representación del Estado que envía ante la Organización;
- b) mantener el enlace entre el Estado que envía y la Organización;
- c) celebrar negociaciones con la Organización y dentro del marco de ella;
- d) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e in_oformar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
- e) asegurar la participación del Estado que envía en las activida_odes de la Organización;
- f) proteger los intereses del Estado que envía ante la Organización;
- g) fomentar la realización de los propósitos y principios de la Or_oganización cooperando con ella y dentro del marco de ella.

Las funciones enumeradas en el artículo anterior pueden dividirse en dos clases: unas se refieren a las funciones de la misión respecto a la Organización como sujeto de Derecho internacional; otras se refieren a las funciones de la misión respecto a la Organización internacional con_osiderada ésta como foro. Podría decirse por tanto que las funciones de - una misión permanente se dividen en funciones " ante " la Organización y las funciones " en " la Organización.

A la categoría de funciones " ante " la Organización pertenecen las de " asegurar la representación del Estado que envía ante la Organización "(art. 6 a), la de " mantener el enlace entre el Estado que envía y la Organización "(art. 6b) y la de " celebrar negociaciones con la Organización "(art. 6c). A la categoría de funciones " en " la Organización pertenecen las de "celebrar negociaciones dentro del marco de la Organización "(art. 6 c) y la de " asegurar la participación del Estado que envía en las actividades de la Organización "(art. 6 e).

Otras funciones pueden ser consideradas como de carácter mixto o pertenecientes a las dos categorías mencionadas. Así las funciones de " enterarse de las actividades realizadas en la Organización e informar de ello al gobierno del Estado que envía "(art. 6 d) y la de " fomentar la realización de los propositos y principios de la Organización cooperando con ella y dentro del marco de ella "(art. 6 g) hacen referencia tanto a la Organización como sujeto como a la Organización como foro.

Tambien debe ser incluida en la categoría de funciones de carácter mixto la de " proteger los intereses del Estado que envía ante la Organización "(art. 6 f). La redacción del apartado f) del artículo 6 parece que da a entender que se trata de una función " ante " la Organización. Sin embargo creemos que la protección de los intereses del Estado que envía se realiza tanto " ante " la Organización con " en " la Organización.

2. Las funciones de las misiones permanentes de observación.

Del mismo modo que el artículo 6, respecto a las misiones permanentes, el artículo 7 de la Convención enumera las funciones de las misiones permanentes sin dar a dicha enumeración carácter exhaustivo. El texto del artículo 7 es el siguiente:

" Las funciones de la misión permanente de observación son, en particular:

a) asegurar la representación del Estado que envía y salvaguardar sus intereses ante la Organización y mantener el enlace con ella;

b) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;

c) fomentar la cooperación con la Organización y celebrar negociaciones con ella ".

Como puede verse, las funciones de las misiones permanentes de observación son más reducidas que las de las misiones permanentes. Esto es lógico pues si el Estado que envía la misión no es miembro de la Organización, la misión consecuentemente desarrollará sus funciones " ante " la Organización y solamente de forma excepcional " en " la Organización.

Según el criterio anterior el artículo 7 recoge las funciones propias de las misiones permanentes que hemos caracterizado como funciones " ante " la Organización y también las caracterizadas como de carácter mixto. A la primera categoría pertenecen las de " asegurar la representación del Estado que envía ante la Organización "(art.7,a), la de " mantener el enlace entre el Estado que envía y la Organización "(art. 7,c) y la de " celebrar negociaciones con la Organización "(art.7c). A la segunda categoría pertenecen la de " enterarse de las actividades realizadas en la Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía "(art. 7,b) y la de " fomentar la cooperación con la Organización "(art.7,c).

Debe subrayarse que tratándose de las funciones de las misiones acreditadas ante Organizaciones internacionales universales no debería haberse hecho tanta distinción entre la función de " fomentar la realización de los propositos y principios de la Organización "(art.6,g), función propia de las misiones permanentes, y la de " fomentar la coope -

ración con la Organización "(art.7,c), función propia de las misiones permanentes de observación. Habría de tener en cuenta que los Estados no miembros que mantienen una misión ante una Organización internacional aceptan de una u otra forma los principios y propósitos de la Organización.

En unos casos la aceptación de los principios y propósitos de la Organización está contenida en la demanda de admisión a la Organización realizada por dichos Estados. En cuanto a los Estados que no han realizado dicha demanda de admisión, suelen haber prestado su acuerdo, de una u otra forma, con los principios y propósitos de las Organizaciones universales.

V. La transformación, suspensión y extinción de las misiones permanentes.

Si comenzamos el presente capítulo con el estudio de la creación de las misiones permanentes parece que corresponde cerrarlo con el estudio de la suspensión y extinción de dichas misiones. Distinta de ambas es la figura de la transformación de la misión que estudiaremos también en este apartado.

Ni los Acuerdos de sede ni las Convenciones generales contienen normas sobre estas figuras, viniendo la Convención de Viena a llenar un vacío en la materia.

1. La transformación de la misión.

Si las misiones diplomáticas tradicionales pueden tener diversas categorías como embajada, legación, etc, no sucede lo mismo con las misiones permanentes, que tienen todas la misma categoría. La única diferencia posible entre las misiones permanentes viene determinada por la pertenencia o no pertenencia del Estado que envía la misión a la Organización internacional ante la que la misión está acreditada. En base a di -

cho criterio se distingue entre misiones permanentes y misiones permanentes de observación. Cabe por tanto que una misión permanente se transforme en misión permanente de observación o a la inversa según la evolución de la condición de miembro de la Organización del Estado que envía.

El supuesto más probable en la práctica es el de la transformación de una misión permanente de observación en misión permanente en el caso de que el Estado que envía la misión adquiera la condición de miembro de la Organización ante la que la misión esté acreditada. Parece lógico que en este caso pueda hablarse de transformación de la misión y no de extinción de la misión permanente de observación y creación sucesiva de una misión permanente. De la continuidad de la misión se deriva la continuidad de sus miembros, por lo que parece que en principio las credenciales del jefe de misión siguen siendo válidas. Otra cosa es que exista una necesidad práctica de nuevas credenciales, ya que los poderes de un representante permanente son necesariamente más amplios que los de un observador permanente.

El otro supuesto de transformación, de una misión permanente en una misión permanente de observación, es muy difícil que pueda darse en la práctica. En la historia de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas no se conoce ningún caso de expulsión de un Estado miembro, no afectando los cambios de gobierno a la existencia de la misión en cuanto tal.

Por último debemos precisar que la figura jurídica de la transformación solamente puede producirse una vez que la Convención de Viena de 1975 esté vigente ya que en el régimen actual las misiones permanentes de observación no tienen más que un status oficioso.

2. La suspensión de la misión.

Refiriéndose a las misiones diplomáticas CAHIER afirma que:

" La suspensión de una misión diplomática implica que ésta, por cualquier razón, no se encuentra en condiciones de representar los intereses del Estado acreditante ante el Estado receptor, aunque las relaciones diplomáticas entre los dos Estados no se hayan roto. Se trata de casos poco frecuentes, pero que han tenido lugar durante la Segunda Guerra mundial "(105).

Las causas que pueden provocar la suspensión de una misión diplomática son las mismas que provocarían la suspensión de una misión permanente. En la historia de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas no se conoce ningún caso de suspensión de una misión permanente. No sucede lo mismo respecto a las misiones acreditadas ante la Sociedad de Naciones, pues por ejemplo la delegación permanente de Noruega ante la Sociedad de Naciones fué cerrada en abril de 1940, fecha de la invasión de dicho país por Alemania, siendo abierta de nuevo en noviembre de 1942 (106).

La suspensión de la misión no está prevista en los Acuerdos de sede. La Convención de Viena ha venido a llenar esta laguna al establecer en su artículo 41 las obligaciones del Estado huésped en caso de que la misión permanente " sea definitiva o temporalmente retirada ". El contenido del artículo 41 lo analizaremos en el apartado siguiente, dado que las obligaciones del Estado huésped en el caso de la suspensión de la misión son las mismas que en el caso de su extinción.

3. La extinción de la misión.

La extinción de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación puede obedecer a diversas causas que examinaremos de forma sucesiva.

(105) CAHIER, Derecho diplomático, p. 242.

(106) GHEBALI, op. cit., Volumen. I, p. 55.

La primera causa de extinción puede ser la expulsión por la Organización del Estado que envía la misión. Respecto a las misiones permanentes de observación no cabe que el Estado que envía sea expulsado de la Organización por no ser este Estado miembro de la misma.

Una causa común de extinción de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación sería la desaparición de la personalidad internacional del Estado que envía, dado que la personalidad internacional es requisito para entablar y mantener relaciones diplomáticas. Parece sin embargo que respecto a los Estados miembros de la Organización, la desaparición de facto de su personalidad no tendría efectos jurídicos hasta que dicho Estado no fuera excluido formalmente de la Organización. La práctica de la Secretaría de la Sociedad de Naciones contradice sin embargo la afirmación anterior. En efecto, a partir de la incorporación a la Unión Soviética de los tres Estados bálticos, la Secretaría de la Sociedad de Naciones dejó de reconocer a dichos Estados como miembros aunque formalmente siguieron siendo miembros de la Sociedad de Naciones hasta la disolución de ésta (107).

Otra causa que puede determinar la extinción de las misiones permanentes y de las misiones permanentes de observación es el cambio en la personalidad internacional del Estado que envía la misión. Este supuesto se ha planteado en la práctica en el caso de la fusión de Siria y Egipto en un único Estado, con el nombre de República Árabe Unida.

La fusión de dos Estados miembros de una Organización en uno solo implica necesariamente la fusión de sus misiones respectivas en una sola misión. No poseemos datos concretos sobre las vicisitudes de las misiones permanentes de Egipto y Siria aunque lo probable es que llegarán a fusionarse. Tal fusión hubiera adquirido carácter definitivo si la fusión entre Egipto y Siria hubiera tenido dicho carácter. Sin embargo, .../...

(107) ibid., ps. 54 y 55.

.../...

aunque la fusión de ambos Estados fué concebida con caracter definitivo - duró poco más de tres años. Tanto Egipto como Siria recobraron su ca lidad de miembros originarios de las Naciones Unidas, por lo que de he cho este caso tendría más que ver con la suspensión de la misión que - con el de la extinción.

Por último, la extinción de las misiones permanentes y de las mi siones permanentes de observación puede deberse a la supresión de la - misión por parte del Estado que envía. La supresión puede deberse a - razones económicas, supuesto que no se ha dado en la práctica de las - Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La supresión puede deberse también a la retirada de un Estado de la Organización con carac ter definitivo.

La retirada con caracter definitivo de una Organización internacio-
nal del sistema de las NU se planteó por primera vez en la OMS. " El
12 de febrero de 1949, el Ministro adjunto de Sanidad de la URSS infor-
maba al Director general de la OMS que el Ministerio de Sanidad de la-
URSS no estaba satisfecho del trabajo de la OMS y que la URSS ya no
se consideraba miembro de esta Organización. Esta comunicación fué se-
guida, el 14 y el 17 de febrero, de dos comunicaciones análogas firmadas
por los Ministros adjuntos de sanidad de Ucrania y Bielorusia (108). Po-
co tiempo después otros seis Estados (109) informaron al Director gene-
ral de la OMS " que ya no se consideraban miembros de la Organización
(110).

Por razones diferentes en 1950 la República de China expresó tam-
bien su deseo de abandonar la OMS (111) retirandose efectivamente. En -
1953 la República de China se incorporó de nuevo a la OMS, llegandose
.../...

(108) BERTRAND, "La situation des membres inactifs de l'OMS, AFDI,
Vol. II, 1956, p. 60.

(109) Bulgaria, Rumania, Albania, Checoslovaquia, Hungría y Polonia.

(110) BERTRAND, op. cit., p. 605.

(111) United Nations, United Nations Yearbook, 1950, p. 943.

.../...

a un acuerdo en el Consejo de dicha Organización sobre el pago de las cuotas de los años en que China no participó en las actividades de la OMS (112).

El 11 de mayo de 1956, la novena Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución precisando las condiciones para "la reanudación de la participación activa de ciertos Miembros en los trabajos de la Organización" (113). En base a dicha resolución Albania, Bulgaria, Polonia y la Unión Soviética se reintegraron a la OMS (114) haciéndolo el resto de los Estados en los años siguientes.

Un problema similar al de la retirada de algunos Estados de la OMS se planteó en 1952 cuando los Gobiernos de Checoslovaquia, Hungría y Polonia se retiraron de la UNESCO (115). El problema fué solucionado en 1954 mediante una resolución de la Conferencia general de la UNESCO en la que se concedía una moratoria de pago para las cuotas de los "años de inactividad" (116). Tanto en este caso como en el planteado en el seno de la OMS, la exigencia del pago de las cuotas "atrasadas", en un caso parcialmente y en el otro de forma total, así como el cumplimiento de dicha obligación, parecen demostrar que la condición de miembro no se interrumpió en ningún momento.

Otro caso de retirada de un Estado de una Organización del sistema de las Naciones Unidas es el de la retirada de Indonesia de la ONU en 1965. El 20 de enero de ese mismo año el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia comunicaba oficialmente al Secretario General de las NU la retirada de Indonesia de las Naciones Unidas (117). No cabe duda que las autoridades de Indonesia concebían la retirada de las-

.../...

(112) BERTRAND, op. cit., ps. 611 y 612.

(113) ibid., p. 602.

(114) United Nations, United Nations Yearbook, 1957, p. 445.

(115) United Nations, United Nations Yearbook, 1952, p. 848.

(116) BERTRAND, op. cit., p. 610.

(117) NIZARD, "Le retrait de l'Indonesie des Nations Unies", AFDI, Vol. XI, 1965, p. 498.

.../...

NU como definitiva, como lo prueba el siguiente fragmento del discurso pronunciado por el Presidente Sukarno el 7-I-65 :

" Declaro que Indonesia se retira de la ONU. A partir de este momento nuestro país no es ya miembro de las NU. Al diablo la ONU" (118).

La retirada de Indonesia de las Naciones Unidas tampoco tuvo carácter definitivo, reincorporándose a la Organización el 20-9-66 (119).- En una declaración del Presidente de la Asamblea General de las NU, - éste interpretaba la reincorporación de Indonesia como una reanudación en la participación activa en los trabajos de la Organización, sin que hubiera desaparecido en ningún momento la condición de miembro de la ONU. Esta interpretación fué aceptada por la Asamblea General ya que ningún Estado presentó objeciones a la misma (120).

Como vemos, de la misma forma que en los casos planteados en la OMS y en la UNESCO, la retirada de Indonesia de las NU tampoco llegó a adquirir carácter definitivo. Sin embargo, el largo espacio de tiempo transcurrido entre la retirada y la reincorporación nos obliga a incluir estos casos en este epígrafe relativo a la extinción de la misión.

El caso de la retirada de varios Estados de la OMS no plantea ningún problema respecto a la existencia de las misiones acreditadas ante dicha Organización, dado que la sede de la OMS está en Ginebra en donde es costumbre que una misma misión permanente esté acreditada ante las distintas Organizaciones que tienen su sede en dicha ciudad. La pérdida o la suspensión de la condición de miembro de la OMS no afecta por tanto al Estado huésped, ya que las misiones permanentes de los Estados que se retiraron siguieron existiendo por estar acreditadas ante otras Organizaciones internacionales.

(118) Citado en NIZARD, ibid., p. 499.

(119) TAVERNIER, "L'année des Nations Unies. Questions juridiques", AFDI, Vol. XII, 1966, p. 261.

(120) ibid., p. 261.

El caso de la retirada de varios Estados de la UNESCO tampoco plantea problemas de orden práctico. La misión de Polonia ante la UNESCO estaba integrada en la Embajada de Polonia ante Francia (121) y las delegaciones de Checoslovaquia y Hungría estaban situadas dentro de la sede de la UNESCO (121).

El problema de las obligaciones del Estado huésped en el caso del cese de las actividades de la misión se planteó en el caso de la retirada de Indonesia de las NU. En la misma carta en la que el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia comunicaba al Secretario General de las NU la retirada de Indonesia de la Organización se decía:

" Si bien nuestra retirada de las Naciones Unidas se efectuó de hecho en Nueva York el 1º de enero de 1965, me permito sugerir que, a los efectos de la clausura técnica de la Misión Permanente de Indonesia en Nueva York y, reciprocamente, de la Oficina de las Naciones Unidas en Indonesia, nuestras oficinas respectivas se cierren oficialmente el 1º de marzo de 1965. Ruego a V.E. tenga la amabilidad de mantener el estatuto oficial de la Misión de Indonesia en Nueva York hasta el 1º de marzo de 1965, haciéndose lo propio con la Oficina de las Naciones Unidas en Yakarta " (122).

Con fecha 26 de febrero de 1965 el Secretario General de las NU comunicó al Ministro de Relaciones Exteriores que :

" En cumplimiento de la solicitud de V.E. se han tomado disposiciones a fin de mantener la condición oficial de la Misión de Indonesia en Nueva York hasta el primero de marzo de 1965 " (123).

(121) Ver GERBET, "Les représentations permanentes auprès des Organisations internationales sises en France: UNESCO, Conseil de l'Europe, OTAN, OCDE" en Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Les missions permanentes auprès des Organisations internationales, Bruselas, Bruylant, 1971, 1973, 1975 y 1976, cuatro volúmenes, Vol. I, p. 361.

(122) "Práctica de las NU respecto a privilegios e inmunidades", ACDI, 1967, Vol. II, p. 182.

(123) ibid., p. 182.

El Acuerdo de sede concluído entre las NU y los EE.UU. no preveía las obligaciones del Estado huésped en caso de extinción de una misión permanente. Sin embargo parece que por aplicación de las normas que rigen la extinción de las misiones diplomáticas, el Estado huésped estaba obligado en este caso a mantener la inviolabilidad de los locales de la misión permanente durante un cierto tiempo y así se hizo en la práctica. Esta práctica ha sido recogida por el artículo 41 de la Convención de Viena cuyo texto es el siguiente :

" 1. Cuando la misión sea definitiva o temporalmente retirada, el Estado huésped deberá respetar y proteger los locales, bienes y archivos de la misión. El Estado que envía deberá adoptar todas las medidas que sean apropiadas para liberar al Estado huésped de ese deber especial lo antes posible. Podrá confiar la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión a la Organización, si ésta así lo decide, o a un tercer Estado aceptable para el Estado huésped.

2. El Estado huésped deberá, si así se lo solicita el Estado que envía, dar a éste facilidades para retirar los bienes y los archivos de la misión del territorio del Estado huésped".

El artículo 41 obliga al Estado huésped a respetar y proteger los locales, bienes y archivos de la misión. Sin embargo el Estado que envía debe liberar de dicha obligación al Estado huésped " lo antes posible ". - La CDI había propuesto en su proyecto de artículos que la obligación del Estado huésped estuviera vigente durante " un plazo prudencial " (124). - Sin embargo una enmienda presentada por la delegación de Grecia (125) fué aceptada por la Conferencia dando lugar a este cambio de texto, que no parece muy acertado.

(124) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 335.
(125) Conferencia, Vol. II, p. 113 (Enmienda verbal).

El proyecto de la CDI preveía que la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión podía ser encargada a otro Estado que fuera aceptable para el Estado que envía y para el Estado huésped. Sin embargo una enmienda presentada por la República Federal de Alemania - (126) hizo que la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión pudiera también ser encomendada a la Organización ante la que la misión estaba acreditada. Esto evitará problemas prácticos cuando sea difícil encontrar un Estado a quien confiar la custodia de la misión, que sea aceptable tanto para el Estado que envía como para el Estado huésped. Naturalmente que la Organización no está obligada a hacerse cargo de la custodia de la misión si no presta su consentimiento.

Por último el artículo 41 obliga al Estado huésped a dar facilidades para la retirada de los bienes y archivos de la misión.

(126) Conferencia, Vol. II, p. 113 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.70).

CAPITULO CUARTO: EL ESTATUTO PRIVILEGIADO DE LAS - MISIONES PERMANENTES.

En el capítulo segundo vimos cómo el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos sujetos de Derecho internacional da lugar a la creación de órganos representativos, llamados misiones, a los que el Derecho internacional concede un estatuto jurídico especial. Este estatuto jurídico de las misiones, aunque está basado en el Derecho internacional, se manifiesta principalmente en el orden jurídico interno del Estado que recibe la misión. Al estudio de este estatuto, que es privilegiado, dedicaremos el presente capítulo.

En un principio el estatuto privilegiado de las misiones era el estatuto aplicable a las misiones diplomáticas representativas de un Estado y acreditadas, a su vez, ante otro Estado. Este conjunto de derechos y deberes que integran el estatuto diplomático ha sido aplicado también a las misiones acreditadas por los Estados ante las Organizaciones internacionales.

La coincidencia entre el estatuto aplicable a las misiones diplomáticas y el aplicable a las misiones permanentes deriva del hecho de que los redactores de los Acuerdos de sede no consideraron necesario especificar en que consistía el estatuto de las misiones permanentes, limitándose a afirmar que a éstas les era aplicable el estatuto propio de las misiones diplomáticas.

Las reglas jurídicas que integran el estatuto privilegiado de las misiones diplomáticas, aunque de origen consuetudinario, son reglas bien delimitadas, gracias al proceso codificador realizado en el marco de las Naciones Unidas, dicho proceso ha cristalizado en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Por esta razón el proceso de codificación de las reglas aplicables a las misiones permanentes no ha presen

tado grandes dificultades en lo que respecta a la determinación del estatuto privilegiado de las misiones permanentes, ya que dicho proceso codificador tenía bases sólidas sobre las que apoyarse. Si en la Conferencia de Viena las reglas sobre la creación de las misiones o sobre el nombramiento y el cese de los miembros de las misiones han dado lugar a duras y ásperas discusiones, no ha sucedido lo mismo en lo que respecta al estatuto privilegiado de las misiones permanentes.

El estatuto privilegiado de las misiones permanentes consiste fundamentalmente en la inviolabilidad y en la inmunidad de jurisdicción de la misión y del personal de la misma. Al estudio de estas dos figuras jurídicas estará dedicada la parte fundamental de este y el próximo capítulo. Sin embargo no seguiremos el método tradicional de ir estudiando las distintas inmunidades y privilegios de forma sucesiva, sino que, siguiendo el orden utilizado por la Convención de Viena de 1961 y la Convención de Viena de 1975, analizaremos en este capítulo el estatuto de las misiones en cuanto tales y en el capítulo siguiente el estatuto de los miembros de la misión.

Si bien las inmunidades de las misiones permanentes tienen el mismo fundamento que las inmunidades de los agentes diplomáticos, no cabe duda de que en el caso de las misiones las razones en que se apoya la existencia del estatuto diplomático están aún más justificadas que en el caso de los agentes diplomáticos. En efecto, sin que tratemos de menoscabar el carácter representativo de los agentes diplomáticos, y sobre todo del jefe de misión, debemos subrayar que la máxima representatividad del Estado que envía reside en la misión en cuanto tal. Aparte de este carácter representativo, la misión es la base fundamental de la actividad diplomática del Estado que envía y en definitiva la existencia de la misión en cuanto tal es la que da la permanencia y la continuidad de dicha actividad diplomática.

Como vimos más arriba las Convenciones generales sobre privile

gios e inmunidades y la mayoría de los Acuerdos de sede no preveían - el estatuto de las misiones permanentes. Este estatuto privilegiado de las misiones permanentes se ha desarrollado por tanto como un reflejo del - estatuto de los representantes permanentes de los Estados, o, dicho en - el lenguaje actual, de los jefes de misión de las misiones permanentes - acreditadas ante las Organizaciones internacionales.

Al no haberse previsto en los Acuerdos de sede el estatuto de las misiones permanentes, se ha aplicado a éstas por analogía el estatuto de que son beneficiarias las misiones diplomáticas. La Convención de Viena de 1975 ha venido a ratificar esta equiparación, previendo un estatuto pa-
ra las misiones permanentes prácticamente idéntico al de las misiones di-
plomáticas.

Siguiendo un orden de importancia estudiaremos en primer lugar - la inviolabilidad de la misión; en segundo lugar nos plantearemos el pro-
blema de la inmunidad de jurisdicción de la misión, para continuar con el estudio de los privilegios fiscales y aduaneros y concluir con el estudio - de una serie de privilegios de menor importancia de los que también go-
zan las misiones permanentes.

Por último debemos subrayar que el estatuto privilegiado de las mi-
siones permanentes, que vamos a estudiar en el presente capítulo, no es sólo el estatuto de las misiones permanentes propiamente dichas, sino tam-
bien el de las misiones permanentes de observación. Como hemos visto - más arriba la Convención de Viena de 1975 ha equiparado en este punto - a unas y otras misiones, no haciendo ninguna distinción respecto a su es-
tatuto privilegiado.

I. La inviolabilidad de la misión permanente.

La inviolabilidad de la misión es la inmunidad más importante de -

las que constituyen el estatuto jurídico privilegiado de las misiones permanentes.

En el capítulo segundo vimos cómo la existencia de las inmunidades y privilegios de las misiones permanentes era un corolario de la obligación del Estado huésped de permitir y proteger el libre desarrollo de las actividades de la Organización internacional que ha establecido su sede sobre el territorio de dicho Estado huésped. De la misma forma parece lícito afirmar que la actividad de los distintos Estados, miembros o no miembros, respecto a una Organización internacional difícilmente podría ser libre si los órganos que llevan a cabo dicha actividad no gozasen de inviolabilidad respecto de las autoridades del Estado huésped.

El contenido de la inviolabilidad de las misiones permanentes es doble. Por un lado, la inviolabilidad concede a la misión permanente una inmunidad total respecto a cualquier tipo de medidas coercitivas que pudieran tomar las autoridades del Estado huésped respecto a la misión. Por otro lado, las autoridades del Estado huésped están obligadas a proteger especialmente a la misión permanente y a garantizar la libertad de acción de ésta. Ambos aspectos, el de la inmunidad de coerción y el del deber de protección, serán tratados de forma separada.

1. La inmunidad de coerción de la misión permanente.

Como hemos visto más arriba, la inmunidad de coerción de las misiones permanentes supone que las autoridades del Estado huésped no pueden tomar ningún tipo de medidas coercitivas respecto a las misiones permanentes.

La imposibilidad de ser objeto de ningún tipo de medidas coercitivas no afecta únicamente a los locales de la misión permanente, sino también a los bienes muebles pertenecientes a la misma y a los archivos de la misión. Además, la inmunidad de coerción de la misión permanente incluye también la inviolabilidad de las comunicaciones de la misión permanente -

con el exterior. Todos estos aspectos los iremos examinando sucesivamente.

A) La inmunidad de coerción de los locales.

La inmunidad de coerción de los locales de la misión permanente - está regulada por el artículo 23, párrafo primero y tercero, de la Convención de Viena, cuyo texto es el siguiente :

" 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución".

La inmunidad de coerción supone que los agentes del Estado huésped no pueden penetrar en los locales de la misión permanente sin el consentimiento previo del jefe de misión. Además la misión no puede ser objeto, tal como señala el párrafo tercero del artículo 23, de ningún registro, embargo o medida de ejecución. La inmunidad de coerción supone - también, aunque no lo diga expresamente el artículo 23 de la Convención, que las autoridades del Estado huésped no pueden proceder en la misión - a ningún tipo de notificaciones o citaciones judiciales o administrativas.

El artículo 23 de la Convención concede la inviolabilidad a los locales de la misión, sin precisar cuales son éstos. La definición de los "locales de la misión" podemos encontrarla en el artículo 1 de la Convención cuyo párrafo 32 dice así :

" se entiende por locales de la misión los edificios o partes de edificios y el territorio accesorio a los mismos que, cualquiera que sea su propietario, se utilicen para los fines de la misión, incluida la residencia

del jefe de misión ".

De la definición de los " locales de la misión " parece que puede deducirse que si la misión permanente ocupa la totalidad de un inmueble, los agentes del Estado huésped no pueden penetrar, sin permiso del jefe de misión, en dicho inmueble, ni siquiera en el territorio accesorio al mismo, como puede ser un jardín que rodee el edificio dedicado a la misión. Por el contrario si la misión permanente ocupa únicamente una parte de un inmueble, lo que suele ser normal, las autoridades del Estado huésped pueden penetrar en el inmueble, pues la inviolabilidad solamente afecta a la parte de dicho inmueble que ocupa la misión permanente.

Un problema que se plantea respecto a la inmunidad de coerción de la misión permanente es el de su duración. La inmunidad de coerción de los locales de la misión comienza con la creación de la misión. Sin embargo, la creación de la misión permanente debe de ir acompañada de la notificación al Estado huésped del lugar donde la misión ha sido instalada. Parece lógico que no pueda exigirse al Estado huésped el respeto de la inviolabilidad de la misión, si no se le ha informado previamente de la instalación de la misma. La Convención de Viena de 1975 lo ha entendido así, pues el artículo 15 de la misma afirma :

" 1. El Estado que envía notificará a la Organización :

.....

e) la situación de los locales de la misión y de las residencias particulares que gocen de inviolabilidad conforme a los artículos 23 y 29, - así como cualquier otra información que sea necesaria para identificar tales locales y residencias.

.....

3. La Organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo ".

El hecho de que la notificación al Estado huésped se realice a través de la Organización internacional, puede originar retrasos que podrían dar lugar a problemas si la Organización no trasmite al Estado huésped la notificación de la creación de la misión con la debida celeridad. Por esta razón el artículo 15 ha previsto, en su párrafo cuarto, que el Estado que envía pueda notificar la creación de la misión directamente al Estado huésped.

Por otra parte, hay que señalar que la notificación de la instalación de una misión permanente no basta por sí misma para que los locales de ésta gocen de inviolabilidad. Hace falta, además, que los locales se dediquen efectivamente al servicio de la misión permanente. Por esta razón, si el Estado huésped recibiera una notificación sobre la instalación de una misión permanente en unos locales determinados, y esta instalación no llegara a realizarse en un plazo prudencial de tiempo, el Estado huésped no estaría obligado a reconocer la inviolabilidad de dichos locales.

La inviolabilidad de la misión permanente dura mientras la misión sigue existiendo. Si la misión permanente es retirada, la inviolabilidad pierde su razón de ser, aunque subsista durante un cierto plazo para permitir al Estado que envía que proceda al cierre de la misión. La Convención recoge esta regla en su artículo 41, párrafo primero, cuyo texto es el siguiente :

" 1. Cuando la misión sea definitiva o temporalmente retirada, el Estado huésped deberá respetar y proteger los locales, bienes y archivos de la misión. El Estado que envía deberá adoptar todas las medidas que sean apropiadas para liberar al Estado huésped de ese deber especial lo antes posible. Podrá confiar la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión a la Organización, si ésta así lo decide, o a un tercer Estado aceptable para el Estado huésped ".

Como vemos, el Estado huésped está obligado a respetar la inviolabilidad de los locales de la misión permanente aún después de que ésta haya dejado de existir. Sin embargo esta obligación no existe más - que durante un plazo prudencial, pasado el cual la inviolabilidad de los - locales deja de existir.

La inmunidad de coerción de las misiones permanentes, como todas las inmunidades y privilegios diplomáticos, supone una restricción de las competencias propias del Estado huésped. Esta disminución de las - competencias del Estado huésped es una limitación voluntaria que el Estado huésped admite al permitir el establecimiento de una Organización - internacional sobre su territorio. Sin embargo, del hecho de que esta - limitación de competencias sea voluntaria no puede deducirse que la inmunidad de coerción de las misiones permanentes, o las inmunidades y privilegios diplomáticos en general, no tengan ninguna contrapartida, o no - deban sujetarse a ciertas normas. Así la inmunidad de coerción de las misiones permanentes existe porque es necesaria para que la diplomacia de los distintos Estados respecto a una Organización internacional pueda desarrollarse libremente. Por esta razón, la inmunidad de coerción de la misión permanente no puede ser utilizada para fines ajenos a la actividad para la que ha sido creada la misión permanente ni, por supuesto, para atentar contra la soberanía del Estado huésped. Esta regla ha sido recogida por el artículo 77 de la Convención cuyo párrafo tercero dice - así:

"3. Los locales de la misión o la delegación no deberán ser utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación".

A pesar de que la inmunidad de coerción de la misión permanente tenga como contrapartida la prohibición de utilizar los locales de la - misión permanente de manera incompatible con el ejercicio de las funciones

nes de la misma, ésto no quiere decir que en caso de abuso de privilegios por parte de la misión permanente desaparezca la inmunidad de coerción de la misión.

La existencia de la inmunidad de coerción de la misión permanente es, por tanto, independiente de la obligación de no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con sus funciones. Esto nos lleva a plantearnos el difícil problema de los límites de la inmunidad de coerción de las misiones permanentes.

Como vimos en el capítulo primero, ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni la inmensa mayoría de los Acuerdos de sede preveían la existencia de las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales. Las inmunidades y privilegios de estas misiones nacieron, por tanto, como un reflejo de las inmunidades y privilegios de los representantes permanentes de los Estados. En el capítulo primero vimos también cómo los Acuerdos de sede no regulan con detalle el estatuto de los representantes permanentes, limitándose, la mayoría de las veces, a concederles los privilegios e inmunidades diplomáticos en general. De esta forma, la inmunidad de coerción de las misiones permanentes nació, por aplicación analógica a estas misiones de las reglas aplicables a las misiones diplomáticas. Por esta razón antes de entrar a estudiar el problema de los límites de la inmunidad de coerción de las misiones permanentes parece obligado examinar cómo se plantea el problema de los límites de la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas.

La inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas es una regla de claro origen consuetudinario. La generalidad de la doctrina ha admitido desde antiguo la existencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Sin embargo, la mayoría de la doctrina, así con la práctica de los Estados, no han considerado que la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas fuera una regla absoluta, admitiendo la existen

cia de límites en casos excepcionales. Así PRADIER-FODERE, citando a HEFFTER, afirmaba :

" cuando exista la certeza de que una persona sospechosa de un crimen se ha refugiado en el domicilio de un agente diplomático, las autoridades del país tienen derecho a hacer rodear el inmueble y a tomar en el exterior de éste todas las medidas necesarias para que la persona sospechosa no pueda escaparse. Además, si después de que la autoridad competente se lo haya solicitado, el ministro se niega a la entrega del sospechoso, las autoridades pueden detener a éste utilizando la fuerza armada " (1).

En el mismo sentido, SIBERT ha afirmado :

" justificada por el único fin que persigue la franchise de l'hôtel - se convertiría en abuso intolerable... Si sirviera para perpetrar impunemente actos contrarios al orden público y a las leyes del Estado receptor. Cuando, en 1896, el Gobierno británico tuvo conocimiento de que el Dr. Sut-Yet-Sen había sido secuestrado y se encontraba en peligro de muerte en la Embajada china en Londres, los ministros de la Reina hubieran estado autorizados a penetrar en la misión y poner fin a este atentado a las leyes si el representante chino no hubiera accedido a la petición de puesta en libertad del secuestrado. Cuando el 6 de abril de 1927, las autoridades chinas realizaron un registro en los locales de la Embajada soviética en Pekin, su acción suscitó las protestas injustificadas del Gobierno de la URSS; el inventario de los objetos incautados - en el curso de esta operación demostró que la Embajada soviética era un centro activo de propaganda antigubernamental y bolchevique. Cuando el 2 de octubre de 1929, la policía judicial francesa penetró, a petición del Sr. Bessedowsky, en la Embajada soviética en París (de donde éste acababa de escaparse) para evitar que su familia fuera objeto de ac-
.../...

(1) PRADIER FODERE, Cours de Droit diplomatique, Paris, A. Pedone, 1899, Tomo segundo, p. 87.

.../...

tos de violencia, lo hizo sin violar el respeto debido a la franchise de l'hôtel diplomatique ya que ningun Estado civilizado podría permitir que una legación extranjera se convirtiera en centro de prisión y, menos aún, de ejecución capital" (2).

Las limitaciones a la inmunidad de coerción de la misión diplomática han sido defendidas también por GUGGENHEIM (3), y por LAUTERPACHT en la séptima edición del libro de OPPENHEIM (4). Parece por tanto que podemos afirmar que antes de la conclusión de la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas, la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas no era absoluta y estaba sometida a limitaciones.

El problema de los límites de la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas se planteó en la CDI cuando ésta comenzó el estudio de las "relaciones e inmunidades diplomáticas". El primer proyecto de artículos redactado por SANDSTROM, Relator especial de la CDI, admitía que las autoridades del Estado receptor podían penetrar en los locales de la misión, incluso sin permiso del jefe de misión,

"en caso de extrema urgencia, a fin de evitar los riesgos graves e inminentes para la vida humana, los bienes o la sanidad pública o para proteger la seguridad del Estado" (5).

En la CDI, varios de sus miembros manifestaron su oposición a que se admitieran límites a la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas pues, argumentaban, ello podría dar lugar a innumerables abusos. Como consecuencia de esta oposición, el Relator especial retiró su propuesta sobre los límites (6), por lo que el proyecto definitivo...

(2) SIBERT, Traité de Droit international public, Paris, Dalloz, 1951, Tomo segundo, p. 25.

(3) GUGGENHEIM, op. cit., Tomo I, p. 505.

(4) OPPENHEIM-LAUTERPACHT, op. cit., Vol. I, p. 714.

(5) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Diplomatic intercourse and immunities. Rapport présenté par M.A.E.F. SANDTROM. Rapporteur spécial" YBILC, 1955, Vol. II, p. II.

(6) ACDI, 1957, Vol. I, 395ª sesión, p. 61.

.../...

de la CDI sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas regula la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas en terminos absolutos (7).

En la Conferencia de Viena de 1961, algunas delegaciones presentaron enmiendas dirigidas a introducir limitaciones a la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas. Así, las delegaciones de Irlanda y Japón propusieron que se añadiera al artículo 20 del proyecto de la CDI - el siguiente párrafo :

" No obstante lo dispuesto en el presente artículo, el Estado Receptor podrá adoptar las medidas que sean indispensables para proteger vidas y bienes en casos excepcionales de peligro o de perturbación del orden público " (8).

Más matizada era la enmienda propuesta por la delegación española, cuyo texto decia así :

" En caso de peligro para la vida o las propiedades de súbditos - del Estado receptor, las autoridades locales dirigirán una demanda urgente de entrada en los locales y terrenos al jefe de la misión; que por su parte deberá concederla a menos que tome plena responsabilidad en nombre de su Gobierno de las consecuencias de su negativa " (9).

Las enmiendas fueron duramente atacadas por numerosas delegaciones. Así el eminente profesor G.I. TUNKIN, jefe de la delegación de la URSS, se expresaba en los siguientes terminos :

" Para justificar su opinión, los autores de las enmiendas que limitan la aplicación del principio de la inviolabilidad afirman que, si no se prevén excepciones a este principio, se cometerán abusos. No cabe duda .../...

(7) El artículo 20 del proyecto decía así: "1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Ver Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, ACDI, 1958, Vol.II, p. 102.

(8) Conferencia de Viena de 1961, Vol.II, p. 26.

(9) ibid., Vol.II, p. 26 (Documento: A/CONF.20/C.1/L.168).

.../...

de que siempre es posible que se abuse de un derecho. Pero es mucho más grave el peligro que entraña que el Estado receptor haya de apreciar si existen circunstancias excepcionales que le permiten penetrar en los locales de la misión sin el consentimiento del jefe de misión, puesto - que puede perjudicar a las relaciones internacionales " (10).

En el mismo sentido el delegado de Suecia afirmó:

" La tendencia que, al parecer se manifiesta, a restringir en ciertas circunstancias la aplicación del principio de la inviolabilidad de los locales de la misión es causa de inquietud para la delegación sueca, que - estima que dicho principio tiene suma importancia. Su Gobierno se niega firmemente a reconocer que esa tendencia sea compatible con el Derecho internacional " (11).

Los partidarios del carácter absoluto de la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas triunfaron en la Conferencia. El artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 que regula la inviolabilidad de la mi-sión diplomática dice en sus párrafos primero y tercero:

" 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de - la misión.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situa-dos en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución ".

La interpretación de este artículo no parece que pueda ofrecer muchas dudas. Los términos del artículo 22 son tajantes e inequívocos, por lo que puede afirmarse que en la actualidad la regla de la inmunidad de - coerción de las misiones diplomáticas no conoce excepciones. Sin embar-
.../...

(10) ibid., Vol. I, p. 141.

(11) ibid., Vol. I, p. 141.

.../...

go algunos autores no lo han entendido así. Refiriéndose a los casos concretos de entrada por la fuerza en una misión diplomática, citados más arriba, CAHIER ha afirmado :

" Todas estas intervenciones del Estado receptor se justifican por el derecho de legítima defensa que ha sido reconocido en todos los tiempos a los Estados y que, en la actualidad, se halla consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas " (12).

Las posibles violaciones de la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas difícilmente pueden justificarse en base al derecho de legítima defensa de los Estados, pues en el caso de que un Estado considere que la existencia de una misión diplomática atenta contra su seguridad puede hacer rodear la misión por sus fuerzas armadas, lo que es suficiente garantía. Respecto a la referencia al artículo 51 de la Carta, diremos que dicho artículo regula "el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas" y que la inviolabilidad de la misión sigue existiendo aún en caso de conflicto armado. En efecto, la influencia de un conflicto armado sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas está regulada por los artículos 44 y 45 de la Convención de Viena de 1961, que prevén la obligación del Estado receptor de respetar la inviolabilidad de la misión, aún en caso de conflicto armado.

La existencia de limitaciones de la inviolabilidad de la misión diplomática ha sido también defendida por DENZA. Refiriéndose a la entrada de la policía de Pakistan en la Embajada de Iran en Islamabad, donde la policía de Pakistan encontró un fuerte alijo de armas, este autor afirma :

" En este caso la entrada por la fuerza pudo justificarse ex post por la clara violación de la obligación, contenida en el artículo 41, 3, de .../...

(12) CAHIER, Derecho diplomático, p. 278.

.../...

no usar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misma. Pero un acto de este tipo podría justificarse únicamente en caso de abuso extremo. La mera sospecha de la violación del artículo 41 no podría justificar la violación de la regla de la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática " (13).

La argumentación de DENZA no es correcta. Ciertamente Iran ha bía violado el Derecho internacional y había incurrido en responsabilidad por utilizar las inmunidades diplomáticas para introducir armas en Pakis-tan. Pero la violación del Derecho internacional realizada por Iran no implicaba el que las autoridades de Pakistan pudieran violar a su vez la inmunidad de coerción de la misión iraní sin incurrir en responsabilidad. - Téngase en cuenta, además, que la violación de la inmunidad de coerción de la misión iraní no era el único medio que podía utilizar Pakistan para defender su seguridad. Las autoridades de Pakistan podían haber hecho rodear la misión iraní por sus fuerzas de policía y, en última instancia, - Pakistan podía haber roto las relaciones diplomáticas y dar un tiempo excepcionalmente corto para que Iran evacuase los locales de la misión.

Otros autores como FAVRE han sostenido que existe una regla - consuetudinaria que permite a las autoridades del Estado receptor entrar por la fuerza en una misión diplomática en casos de incendio o para impedir un crimen o un delito en el interior de los locales de la misión diplomática (14).

Ciertamente antes de la entrada en vigor de la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas podía hablarse de la existencia de una regla consuetudinaria que limitaba la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas en casos excepcionales. Sin embargo, la existencia de dicha regla no puede mantenerse en la actualidad, una vez que
.../...

(13) DENZA, op. cit., p. 84.

(14) FAVRE, Principes des Droit des gens, Friburgo, Librairie de - Droit et de Jurisprudence, 1974, p. 605.

.../...

117 Estados han ratificado la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. No hay que olvidar, por otra parte, que ninguno de los Estados que han ratificado, o se han adherido, a la Convención de 1961 han introducido reservas al artículo 22 de la Convención (15).

El problema de la inmunidad de coerción de las misiones volvió a plantearse con ocasión de la codificación de las reglas aplicables a las misiones especiales. El artículo 25 del proyecto de la CDI sobre las misiones especiales admitía que el consentimiento del jefe de misión para entrar en los locales de la misma podría presumirse en caso de incendio o de otra calamidad (16). El texto propuesto por la CDI fué ligeramente modificado en las discusiones de la Sexta Comisión, dando lugar al artículo 25 de la Convención de 1969 sobre las misiones especiales, cuyo texto dice así :

" 1. Los locales en que la misión especial se halle instalada de conformidad con la presente Convención son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión especial o, en su caso, del jefe de la misión diplomática permanente del Estado que envía acreditado ante el Estado receptor. Este consentimiento podrá presumirse en caso de incendio o de otro siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública, y solo en el caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento expreso del jefe de la misión especial o, en su caso, del jefe de la misión permanente ".

Como puede verse este artículo admite la presunción del consentimiento del jefe de misión para que las autoridades del Estado receptor puedan penetrar en los locales de la misión especial cuando circunstancias excepcionales hagan necesaria esta entrada.

(15) El texto de las reservas puede verse en Nations Unies, Traités - Multilateraux, ps. 55 a 61.

(16) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre las misiones especiales y comentarios", ACDI, 1967, Vol. II, p. 374.

Algunos autores han señalado que el hecho de que en circunstancias excepcionales pueda presumirse el consentimiento del jefe de la misión especial para la entrada en ésta, supone una evolución muy positiva en el Derecho diplomático. Sin embargo, la influencia de la Convención sobre las misiones especiales en el Derecho diplomático ha sido muy es casa dada la falta de aceptación que ha tenido dicha Convención entre los Estados (17).

En lo que se refiere a las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales, el proyecto de artículos de la CDI - contenía también la presunción del consentimiento del jefe de misión para que las autoridades del Estado huésped pudieran entrar en los locales - de la misión permanente en casos excepcionales. Así, el artículo 23, párrafo primero del citado proyecto decía como sigue :

" 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión. Este consentimiento podrá presumirse en caso de incendio o de otro siniestro que ponga en serio peligro la seguridad pública, y sólo en el caso de que no haya sido posible obtener el consentimiento expreso del jefe de misión " (18).

El texto presentado por la CDI suscitó numerosas discusiones en la Conferencia de Viena. Los Estados huéspedes de las Organizaciones internacionales más importantes defendieron con diversos argumentos la propuesta de la CDI, que sin embargo encontró una fuerte oposición en las delegaciones de los Estados del bloque socialista.

(17) Hasta el 31-12-76 solamente diez Estados se habían ratificado, o adherido, a la Convención. Ver Nations Unies, Traités Multilatéraux, p. 72.

(18) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 324.

El representante de los EE.UU. subrayó que :

" Los riesgos de abuso por parte del Estado huésped no son tales que justifiquen la falta de protección en situaciones que pueden ser desastrosas " (19).

Por el contrario el representante de Rumanía puso de manifiesto - que :

" ni aún en caso de siniestro deben autorizarse excepciones al principio de la inviolabilidad de los locales sin el consentimiento expreso del jefe de la misión. En otras palabras, una prerrogativa jurídica objetiva y expresa, como es la inviolabilidad de los locales de la misión, no puede depender del juicio subjetivo de las autoridades del Estado huésped " (20).

Varios Estados presentaron una enmienda al artículo 23 del proyecto con objeto de suprimir la segunda frase del párrafo primero del citado artículo, de forma que la inmunidad de coerción de la misión quedara - enunciada en términos absolutos (21). La enmienda fué rechazada en la Comisión Plenaria (22). Sin embargo en el Plenario de la Conferencia, la delegación de la Unión Soviética pidió que se votase de forma separada la primera y la segunda frase del párrafo primero del artículo 23 del proyecto. La primera frase fué aprobada pero la segunda fué rechazada (23) por lo que el texto definitivo del artículo 23, párrafo primero, es - el siguiente :

" 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión ".

(19) Conferencia, Vol.I, p. 148.

(20) Conferencia, Vol.I, p. 146.

(21) Conferencia, Vol.II, p. 100 (Documento: A/CONF.67/C.1/L.46)

(22) Conferencia, Vol.I, p. 150.

(23) Conferencia, Vol.I, p. 19.

Como vemos, el artículo 23 de la Convención de Viena de 1975 - regula, la inmunidad de coerción de las misiones permanentes con los - mismos términos absolutos que utiliza la Convención de Viena de 1961 - para regular la inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas. Es - to nos obliga a plantearnos cuál debería ser la solución correcta en el - caso de que el respecto a la inviolabilidad de la misión permanente impi - diera tomar las medidas necesarias para defender la seguridad del Es - tado huésped o para hacer frente a eventos extraordinarios como, por - ejemplo, un incendio en los locales de la misión que amenazara con pro - pagarse a los inmuebles vecinos.

Un dato importante a tener en cuenta en lo que respecta a la de - fensa de la seguridad del Estado huésped es que la situación del Estado huésped respecto a las misiones permanentes es más delicada que la de un Estado receptor respecto a las misiones diplomáticas. En efecto, el Estado receptor de una misión diplomática siempre guarda la facultad de poner fin a la actividad de dicha misión si rompe las relaciones diplomá - ticas con el Estado que envía la misión. Por el contrario, el Estado - huésped de una Organización internacional no puede pretender, mientras la Organización esté establecida en su territorio, que una misión perma - nente ponga fin a sus actividades.

En general los Acuerdos de sede prevén que, en el caso de que el Estado huésped considere que existe un abuso de privilegios, puede - solicitar el concurso de la Organización internacional para poner fin a - ese abuso de privilegios. Sin embargo, la intervención de la Organiza - ción puede no ser garantía suficiente para el Estado huésped. Por esta razón algunos Acuerdos de sede han facultado expresamente al Estado - huésped para que tome las medidas necesarias para defender su seguri - dad nacional. Así por ejemplo el artículo 26 del acuerdo de sede entre - Suiza y la UIT, de 23 de julio de 1971, dice :

" 1. Ninguna disposición del presente acuerdo afectará el derecho del Consejo Federal Suizo a tomar las precauciones necesarias para -

la seguridad de Suiza " (24).

Un precepto semejante al anterior lo encontramos en el artículo - 77 párrafo cuarto de la Convención de Viena de 1975, cuyo texto es el siguiente :

" 4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se podrá - interpretar en el sentido de que impide que el Estado huésped adopte las medidas que sean necesarias para su propia protección. En este caso, el Estado huésped, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 85, consultará de manera apropiada al Estado que envía para evitar que es tas medidas perturben el funcionamiento normal de la misión, la delega - ción o la delegación de observación ".

Parece por tanto que, caso de peligro para su seguridad, el Es - tado huésped puede tomar cualquier medida que sea necesaria para de - fenderla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que difícilmente un Esta - do huésped podrá justificar que la violación de la inmunidad de coerción - de una misión es una medida absolutamente necesaria para defender su - seguridad. Por tanto el Estado huésped debe tomar previamente todas - las medidas a su alcance para defender su seguridad y solamente en ca - so de que dichas medidas no hayan sido eficaces el Estado huésped de - ja de estar obligado por la regla de la inviolabilidad de la misión.

Si respecto a las medidas necesarias para defender la seguridad - nacional la situación del Estado receptor de una misión diplomática es di - ferente de la del Estado huésped, ya que éste no guarda la facultad de - poner fin a las actividades de una misión permanente, la situación de am - bos Estados se plantea de la misma forma en los casos en que sea nece - sario tomar medidas de urgencia para hacer frente a un evento extraor - dinario. Así si por ejemplo se declarase un incendio en los locales de -
.../...

(24) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1971, p. 33.

.../...

una misión que amenazara con propagarse a los inmuebles vecinos o si existiera la certeza de que iba a cometerse un crimen en los locales de la misión ¿cual debería ser la actitud del Estado huésped?

Debemos repetir que en estos casos la situación del Estado huésped es similar a la del Estado receptor de una misión diplomática, ya que la urgencia hace inefectivas las facultades del Estado receptor de poner fin a la actividad de la misión diplomática.

En general, puede afirmarse que no se plantearán problemas de este tipo, ya que normalmente en caso de incendio o de peligro de que se cometa un delito, el jefe de misión permitirá la entrada en la misión de los agentes del Estado huésped. Sin embargo, puede suceder que no exista tiempo suficiente para pedir el consentimiento del jefe de misión o simplemente que éste niegue su consentimiento.

De acuerdo con las reglas vigentes la solución es fácil. Sin permiso del jefe de misión los agentes del Estado huésped no pueden penetrar en los locales de una misión permanente, aunque sea para impedir un crimen. Esto es lo que prescribe el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 respecto a las misiones diplomáticas, precepto que es también aplicable a las misiones permanentes ya que los Acuerdos de sede hacen aplicable a las misiones permanentes el estatuto diplomático de forma general. El artículo 23, párrafo primero, de la Convención de Viena de 1975 no modifica por tanto la solución aplicable a las misiones permanentes en este caso. Sin embargo, no parece lógico que las autoridades del Estado huésped no eviten que se cometa un crimen o que se propague un incendio por respeto a la inmunidad de coerción de la misión permanente; la inflexibilidad de la norma puede en estos casos obligar a su violación.

B) La inmunidad de coerción de los bienes muebles al servicio de la misión.

Si la inmunidad de coerción de los locales de la misión permanente es un requisito absolutamente necesario para el ejercicio independiente y libre de las actividades de la misión permanente, este ejercicio independiente y libre requiere que también el resto de los medios necesarios para las actividades de la misión goce de inmunidad respecto a las medidas coercitivas que pudieran tomar las autoridades del Estado huésped. Este principio está recogido en el artículo 23, párrafo tercero de la Convención de Viena de 1975 que reproduce textualmente el artículo 23, párrafo tercero, de la Convención de Viena de 1961 y cuyo texto dice así:

" 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución."

El artículo 23, párrafo tercero, se refiere de forma general al mobiliario y demás bienes situados en los locales de la misión. Parece por tanto que es necesario hacer una interpretación extensiva del término " mobiliario ", para abarcar a toda clase de bienes muebles que sean necesarios para el servicio de la misión. Dentro de esta categoría es necesario hacer una referencia especial a las cuentas corrientes que pueda mantener una misión permanente en los establecimientos bancarios del Estado huésped.

La inviolabilidad de los fondos depositados en un establecimiento bancario por una misión permanente parece que puede deducirse del párrafo tercero del artículo 23. Tengase en cuenta, que el artículo 29, párrafo segundo, de la Convención afirma que los bienes del jefe de misión o de los miembros del personal diplomático son inviolables. Parecería -

absurdo por tanto que los bienes propios de los agentes diplomáticos gozaran de inviolabilidad y que los bienes propios de la misión pudieran ser objeto de embargo o de cualquier otra medida de ejecución.

El problema de la inviolabilidad de las cuentas bancarias se planteó en 1963 con ocasión de las medidas tomadas por los EE.UU. respecto a los fondos que un Gobierno extranjero mantenía en diversos establecimientos bancarios de dicho país. A este respecto el Asesor jurídico del Secretario General de las NU afirmó:

" A nuestro juicio, el gobierno invitante no debe intervenir en las actividades legítimas de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas impidiendo que estas misiones o el personal de las mismas utilice fondos depositarios en el país. Desde el punto de vista jurídico, esta cuestión está comprendida en las disposiciones del párrafo 2 del artículo 105 de la Carta, en el cual se prevé que los representantes de los Estados miembros gozarán en el territorio de cada Estado miembro de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización "(25).

Como vemos, el Asesor jurídico se apoya directamente en el artículo 105 de la Carta para subrayar el principio de la independencia de la actividad de las misiones permanentes respecto de las medidas coercitivas tomadas por las autoridades del Estado huésped. Debemos notar que la inviolabilidad de los fondos depositados en un establecimiento bancario por una misión permanente puede basarse también en la sección 15 del Acuerdo de sede concluido entre las Naciones Unidas y los EE.UU., que concede a los representantes de los Estados miembros de las NU los mismos privilegios e inmunidades que a los agentes diplomáticos acreditados ante los EE.UU.

Dentro de los bienes muebles pertenecientes a la misión permanente, debemos hacer también una referencia especial a los archivos y documentos de la misión. La inviolabilidad de los archivos y documentos de

.../...

(25) Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963, p.179.

.../...

la misión permanente es de especial importancia por la información secreta que normalmente contienen. Por esta razón, la Convención de Viena de 1975 ha dedicado un artículo especial a la inviolabilidad de los archivos y documentos. El artículo 25 de la Convención dice:

" Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables, dondequiera que se hallen ".

Normalmente los archivos y documentos se encontrarán dentro de los locales de la misión permanente y estarán, por tanto, cubiertos por la inviolabilidad de la misión. Sin embargo, la Convención ha querido resaltar la inviolabilidad de los archivos, dedicando un artículo a este fin. Además la inviolabilidad de los archivos no cesa de existir aún después de que la misión haya sido retirada. Recordemos lo que el artículo 41 de la Convención, ya citado, dice a este respecto.

Por último debemos indicar que el artículo 23 párrafo tercero se refiere expresamente, entre los bienes muebles de la misión que son inviolables, a los medios de transporte de la misión. El problema de la inviolabilidad de los medios de transporte de la misión será estudiado sin embargo en el apartado siguiente, que dedicaremos a la inviolabilidad de las comunicaciones de la misión.

C) La inmunidad de coerción de las comunicaciones.

La inmunidad de coerción de los locales de la misión permanente no sería garantía suficiente del ejercicio libre e independiente de las actividades de la misión si la misión permanente no pudiera comunicarse de forma libre y secreta con el gobierno del Estado que envía la misión, así como con el resto de las misiones acreditadas por dicho Estado. Por esta razón en el presente apartado estudiaremos las obligaciones del Estado huésped respecto a los medios de comunicación de la misión permanente.

Los medios de comunicación que puede utilizar la misión permanen

te son numerosos. La Convención de Viena de 1975 se refiere a los "medios de transporte de la misión, la radio, la correspondencia, la valija de la misión, el correo de la misión y el correo ad hoc de la misión". Esta enumeración no tiene carácter exhaustivo, ya que la misma Convención dice, en su artículo 27, que

" la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados ".

La inviolabilidad de los medios de comunicación de las misiones permanentes no está regulada de forma sistemática ni en las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni en los Acuerdos de sede. La Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas concede, en su sección II, a los representantes de los Estados:

" el derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta y valija sellada ".

La Convención sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados concede este mismo derecho en su sección 13. Algunos Acuerdos de sede contienen una norma semejante, que concede a los representantes permanentes el derecho de utilizar claves y recibir documentos y correspondencia por valija. Sin embargo la mayoría de los Acuerdos de sede se limitan a conceder a los representantes permanentes los privilegios e inmunidades diplomáticos en general, con lo que las reglas aplicables a las comunicaciones de las misiones diplomáticas se hacen extensivas a las misiones permanentes. Este ha sido el método utilizado por la Convención de Viena de 1975, que reproduce respecto a las misiones permanentes las reglas aplicables a las comunicaciones de las misiones diplomáticas.

El Estado huésped tiene la obligación general, no sólo de permitir, sino también de proteger las comunicaciones de las misiones perma-

nentes para los fines oficiales. Por " comunicaciones de la misión permanente para fines oficiales " debemos entender las comunicaciones de la misión permanente no sólo con el gobierno del Estado que envía la misión, sino también con las misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales, delegaciones y delegaciones de observación enviadas por el mismo Estado. La misión permanente tiene además el derecho a emplear la clave y la cifra en sus comunicaciones.

Todas estas normas de carácter general sobre las comunicaciones de la misión permanente se contienen en el párrafo primero del artículo 27 de la Convención, cuyo texto reproducimos a continuación:

" 1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas permanentes, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales, delegaciones y delegaciones de observación, dondequiera que se encuentren, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, la misión solo podrá instalar y utilizar una emisora de radio con el consentimiento del Estado huésped ".

Una vez vistas las obligaciones de carácter general del Estado huésped respecto a las comunicaciones de las misiones permanentes, pasaremos a estudiar las reglas aplicables a cada medio de comunicación, siguiendo el orden utilizado por el artículo 27 de la Convención.

El primer medio que puede utilizar la misión permanente es la radio. La utilización de la radio puede plantear muchos problemas al Estado huésped, por el ámbito limitado de longitud de onda en la que pueden emitir los emisores de radio. Además la utilización de la radio como me

dio de comunicación ocasiona muchos gastos por lo que los Estados de economía poco desarrollada nunca han sido partidarios de que se utilice este medio de comunicación.

En la Conferencia de Viena de 1961 hubo una gran oposición entre países desarrollados y países subdesarrollados a propósito de la utilización de la radio por las misiones diplomáticas. La Conferencia llegó a una solución de compromiso, que se plasmó en el párrafo primero del artículo 27 de la Convención de Viena de 1961 en cuyo texto puede leerse:

" únicamente con el consentimiento del Estado receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio ".

Una norma semejante a la anterior se contiene en el artículo 27, párrafo primero, de la Convención de Viena de 1975 en cuyo texto se dice:

" la misión solo podrá instalar y utilizar una emisora de radio con el consentimiento del Estado huésped ".

Como vemos, la instalación y utilización de un emisor de radio en una misión diplomática o en una misión permanente está supeditada al consentimiento previo del Estado receptor de la misión diplomática o del Estado huésped de la misión permanente. Sin embargo, mientras el Estado receptor es libre de conceder el permiso para la instalación de radio a unas misiones y no concedérselo a otras, el Estado huésped no puede hacer distinciones entre las distintas misiones permanentes, por lo que en caso de que un Estado huésped conceda dicho permiso a una misión permanente no podrá negárselo a otras.

Esta obligación de tratar a todas las misiones permanentes por igual se deriva del artículo 83 de la Convención de Viena de 1975 que dice:

" En la aplicación de la presente Convención no se hará discriminación entre los Estados ".

El artículo 47 de la Convención de Viena de 1961 también prohíbe la discriminación entre las distintas misiones diplomáticas acreditadas ante un mismo Estado receptor, pero dicho artículo especifica que :

"... no se considerara como discriminatorio:

b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recíprocamente un trato más favorable que el requerido en las disposiciones de la presente Convención ".

Siguiendo el orden utilizado por el artículo 27 de la Convención, nos referiremos a continuación a la " correspondencia oficial ". Por " correspondencia oficial " de la misión debemos entender las cartas o paquetes enviados a la misión permanente o por la misión permanente a través del correo ordinario. El artículo 27, párrafo segundo, dice a propósito de la correspondencia:

" La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Se entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la misión y a sus funciones ".

Según este precepto, parece que la inviolabilidad de la correspondencia alcanza a toda la correspondencia dirigida a la misión o por la misión. La inviolabilidad de la correspondencia es sin embargo una regla fácil de incumplir por el Estado huésped sin que la falta de cumplimiento pueda probarse fácilmente. Por esta razón las misiones permanentes no utilizan la correspondencia para cuestiones secretas, sino únicamente para cuestiones de importancia menor.

El medio de comunicación más utilizado, y más seguro, por las misiones permanentes es la " valija de la misión ". Para definir la " va

lija de la misión " podemos utilizar la definición dada por la CDI de la valija diplomática:

" la valija puede ser definida como una valija (saco, bolsa, sobre o cualquier otro embalaje) que contiene documentos y (u) objetos destinados a fines oficiales... La valija debe llevar signos exteriores visibles indicadores de su caracter "(26).

La inviolabilidad de la valija diplomática es una regla de origen consuetudinario que ha sido modificada al ser codificada . Como dice DENZA :

" Antes de la Conferencia de Viena (se refiere a la de 1961) - la práctica internacional aceptaba, y probablemente el Derecho internacional también, que en los casos en que existían razones para sospechar que se había abusado de la inviolabilidad de la valija el Estado receptor podía hacer abrir ésta "(27).

El proyecto de la CDI sobre las relaciones diplomáticas se apartaba de ésta tendencia, atribuyendo a la valija diplomática una inviolabilidad absoluta(28).

En la Conferencia de Viena de 1961 varios Estados propusieron enmiendas al proyecto de la CDI, que concedían al Estado receptor, en los casos en que pudiera sospecharse que se había abusado del privilegio de la valija, el derecho si no a abrir la valija, por lo menos, de hacerla volver a su lugar de origen(29). Las enmiendas propuestas fueron rechazadas y la Conferencia no admitió excepciones al principio de...

(26) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958 - Vol. II, p.104.

(27) DENZA, op. cit., p.125.

(28) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958 - Vol. II, p.104.

(29) Las enmiendas fueron presentadas por Ghana y la RAU; Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, ps. 24 y 46 (Documentos: A/CONF.20/C.1/L.294 y A/CONF.20/C.1/L.151/Rev.2).

.../...

la inviolabilidad de la valija diplomática. El párrafo tercero del artículo - 27 de la Convención de Viena de 1961 dice:

" 3. La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida ".

Una norma semejante se contiene en la Convención sobre las misiones especiales de 1969 cuyo artículo 28, párrafo cuarto, dice:

" 4. La valija de la misión especial no podrá ser abierta ni retenida ".

La CDI de forma consecuente con los resultados de los trabajos - codificadores anteriores sobre Derecho diplomático propuso, en su proyecto de artículos sobre las relaciones entre Estados y Organizaciones - internacionales, la inviolabilidad absoluta para la valija de la misión permanente. En efecto el artículo 27, párrafo tercero, del proyecto de la - CDI decía textualmente:

" 3. La valija de la misión no podrá ser abierta ni retenida "(30).

En la Conferencia de Viena de 1975, la delegación de Kuwait propuso una enmienda según la cual el Estado huésped podría obligar a devolver la valija a su lugar de origen cuando existieran razones para creer que la valija contenía objetos no destinados al uso oficial y los representantes de la misión permanente se negasen a que la valija fuera abierta - (31). La enmienda propuesta por Kuwait fué aprobada en la Comisión - plenaria por 34 votos a favor, 8 en contra y 21 abstenciones(32). Sin embargo, y de la misma forma que sucedió respecto al artículo referente a la inviolabilidad de los locales, en el plenario de la Conferencia se aprobó el poner a votación de forma separada el texto propuesto por la CDI y la enmienda de Kuwait. Esta no alcanzó la mayoría de dos ter -

.../...

(30)"Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 326.

(31)Conferencia, Vol. II, p. 103 (Documento: A/CONF. 67/C.1/L. 54).

(32)Conferencia, Vol. I, p. 170.

.../...

cios necesaria para ser aprobada por el Plenario de la Conferencia, - por lo que fué rechazada. Por esta razón el texto propuesto por la CDI (33) se convirtió en el párrafo tercero del artículo 27 de la Convención. Habría que plantearse quizá la falta de lógica de un reglamento (34) que permite que las enmiendas que eran aprobadas en la Comisión plenaria - por mayoría simple no pudieran prevalecer en el Pleno por no alcanzar - en éste la mayoría de dos tercios.

De la misma forma que la inviolabilidad absoluta de los locales de la misión, la inviolabilidad absoluta de la valija de la misión puede plantear graves problemas. Como dice CAHIER :

" Con el progreso de la técnica, la valija diplomática podría servir incluso para el contrabando de piezas especiales de bombas atómicas, material radioactivo, etc " (35).

La inviolabilidad absoluta de la valija puede, en alguna ocasión atentar contra la vida misma. Así en 1964 " una persona de nacionalidad israelita fué encontrada drogada, atada y amordazada en el aeropuerto de Roma en un baul marcado con el sello de correspondencia diplomática que era enviado por la misión de Egipto a El Cairo " (36).

Como vemos la inviolabilidad absoluta de la valija de la misión puede dar lugar a situaciones indeseables. Esto ha llevado a CAHIER a afirmar :

" Dado que lo importante es el respeto del secreto de la correspondencia y que la valija no se abra, si las autoridades locales tienen la fuerte presunción de que contiene objetos ilícitos, nada se opone a que la valija sea examinada por rayos X, o a que se rechace su admisión " (37).

(33) " Proyecto de artículos ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 326.

(34) El texto del Reglamento de la Conferencia de Viena de 1975 puede verse en Conferencia, Vol. I, p. XVIII.

(35) CAHIER, Derecho diplomático, ps. 292-3.

(36) HARRIS, Cases and materials of International Law, Londres, Sweet & Maxwell, 1973, p. 293.

(37) CAHIER, Derecho diplomático, p. 294.

La solución de CAHIER es completamente lógica, aunque mucho dudamos que no sea contradictoria con el artículo 27 de la Convención de Viena de 1961.

En lo que respecta a la valija de las misiones permanentes, creemos sin embargo que el Estado huésped en caso de amenaza para su seguridad podría aplicar el párrafo cuarto del artículo 77 de la Convención de Viena de 1975 que permite al Estado huésped "tomar las medidas necesarias para su propia protección" y en consecuencia hacer que la valija de la misión fuera reexpedida a su lugar de origen e incluso abrirla en caso de sospecha fundada de que una persona estuviera dentro de la valija.

El artículo 27 de la Convención incluye también entre los medios de comunicación de la misión permanente a los "correos de la misión" y a los correos ad hoc. El "correo de la misión" es una persona encargada de llevar la valija de la misión o la correspondencia dirigida a la misión o enviada por dicha misión.

El artículo 27 de la Convención distingue entre el "correo de la misión" y el "correo ad hoc". Parece que la distinción entre una y otra figura reside en el hecho de que el "correo de la misión" es una persona que habitualmente y de forma profesional transporta la valija o la correspondencia oficial de la misión mientras que el "correo ad hoc" solamente realiza esta función en una circunstancia determinada. El "correo de la misión", según el artículo 27, debe llevar consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal y el número de bultos que constituyan la valija. El "correo de la misión" goza de inviolabilidad personal y no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El "correo ad hoc" goza del mismo status que el "correo de la misión", con la única diferencia de que su inviolabilidad cesa en el momento en que entrega la valija de la misión a su destinatario.

Por último, el artículo 27 autoriza en su párrafo séptimo a que - la valija de la misión pueda ser confiada " al comandante de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar a un punto de entrada autorizado ". El artículo 27, párrafo séptimo, prescribe además que :

" El comandante deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como un correo de la misión. Previo acuerdo con las autoridades competentes del Estado huésped, la misión podrá enviar a uno de sus miembros a tomar posesión de la valija directa y libremente de manos del comandante del buque o de la aeronave ".

Hasta aquí hemos examinado los medios de comunicación regulados por el artículo 27 de la Convención, artículo dedicado a la " libertad de comunicación ". Existe otro medio de comunicación que debemos estudiar también en este apartado que es el de los medios de transporte de la misión. El artículo 23, párrafo tercero, de la Convención dice :

" 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución ".

Como vemos, según este artículo la inviolabilidad de los medios de transporte de la misión es absoluta. Es lógico pensar sin embargo, - que no sería lícito que un automóvil de la misión fuera utilizado para hacer salir del territorio del Estado huésped a una persona que fuera buscada por la policía y que se hubiera refugiado en los locales de la misión. Parece por tanto que en estos casos las autoridades del Estado huésped estarían legitimadas para exigir la entrega de la persona perseguida por la policía y en caso de negativa podrían, al menos, inmovilizar el vehículo.

2. El deber de protección del Estado huésped,

Como hemos dicho anteriormente la inviolabilidad de la misión permanente comprende tanto la inmunidad de la misión, de sus bienes y de sus medios de comunicación respecto de las medidas coercitivas que puedan tomar las autoridades del Estado huésped, como el deber del Estado huésped de proteger de forma especial a la misión permanente.

Dentro del deber del Estado huésped de proteger a las misiones permanentes, hay que distinguir entre el aspecto material de la protección debida a las misiones permanentes y el aspecto jurídico de la misma. A estas dos cuestiones dedicaremos los siguientes apartados.

A) El aspecto material del deber de protección.

La inmunidad de coerción de la misión permanente supone para el Estado huésped una obligación "de no hacer", es decir un deber de abstenerse de tomar cualquier medida coercitiva respecto de la misión permanente o respecto de los bienes y los medios de comunicación de ésta. Por el contrario, el deber de protección de las misiones permanentes supone para el Estado huésped una obligación "de hacer", es decir un deber de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que nadie pueda impedir u obstaculizar el libre desarrollo de las actividades de la misión permanente. El Estado huésped está obligado, por tanto, a impedir que ningún particular dificulte la actividad de la misión permanente o atente al respeto debido a la misión por su calidad de órgano representativo de un Estado.

La negligencia del Estado huésped en el cumplimiento de su deber de protección de las misiones permanentes da lugar, sin duda, a la responsabilidad internacional del Estado huésped. Sin embargo, el Estado huésped no sería responsable internacionalmente por cualquier clase de

atentado contra la inviolabilidad de la misión permanente si hubiera empleado la diligencia debida en el cumplimiento de su deber de protección. Refiriéndose a las misiones diplomáticas, CAHIER afirma a este respecto :

" La protección se materializa en una cierta vigilancia de los locales de la misión por parte de la policía del Estado receptor. Sin embargo, esta vigilancia debe hacerse dentro de los límites razonables y no cabe pretender que continuamente se mantenga estacionadas importantes fuerzas de policía en las proximidades de la misión diplomática. En tiempos normales, las misiones no tienen nada que temer ; por el contrario, cuando se presume que van a producirse manifestaciones hostiles en razón al estado de la opinión pública y a la existencia de cierta tensión entre el país acreditante y el país receptor, éste último debe reforzar la protección policiaca. Si no lo hiciera y la misión sufriera daños, el Estado receptor incurriría en responsabilidad internacional " (38).

En el mismo sentido que CAHIER, NASCIMENTO E SILVA - afirma que el Estado receptor no es responsable respecto a los atentados contra una misión diplomática si dicho Estado ha tomado todas las medidas razonables para prevenir dicha acción y persigue, arresta y entrega a los culpables de dicho acto a la justicia (39).

Modernamente se ha sugerido, sin embargo, que el Estado receptor de una misión diplomática podría ser responsable internacionalmente - por cualquier acción que fuera cometida contra la inviolabilidad de la misión aunque no hubiera habido negligencia por parte del Estado receptor- (40).

(38) CAHIER, Derecho diplomático, ps. 296-7.

(39) DO NASCIMENTO E SILVA, op. cit., p. 92.

(40) VILARIÑO, "A propósito de los sucesos de septiembre de 1975 en los locales de la Misión diplomática y Consulado general de España en Lisboa", REDI, Vol. XXIX, ps. 82-3.

El tratar de dar un carácter objetivo a la responsabilidad del Estado receptor no nos parece correcto. La Convención de Viena de 1961 no regula del mismo modo la inviolabilidad pasiva (inmunidad de coerción de la misión) que la inviolabilidad activa de la misión (deber del Estado receptor de proteger a la misión). La inmunidad de coerción de las misiones diplomáticas está regulada en los párrafos primero y tercero del artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 que concede a las misiones diplomáticas una inmunidad de coerción absoluta. Por el contrario el deber de protección del Estado receptor de la misión está regulado en el párrafo segundo del artículo 22 de la misma Convención, que excluye expresamente la responsabilidad objetiva del Estado receptor. En efecto el artículo 22, párrafo segundo, de la Convención de Viena de 1961 dice :

" El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad ".

... En nuestra opinión la interpretación de este precepto no ofrece dudas. El Estado receptor tiene la obligación "especial" de proteger a las misiones diplomáticas, lo que implica que dicho Estado debe tomar "todas las medidas adecuadas" para proteger a la misión ; lo que quiere decir, a nuestro juicio, que el Estado receptor solamente es responsable cuando haya habido negligencia en el cumplimiento de dicha obligación.

Si la responsabilidad del Estado receptor respecto a los actos que atenten contra la inviolabilidad de la misión fuera objetiva, el Estado receptor solamente podría evitar su responsabilidad mediante el estacionamiento de un contingente de tropas alrededor de la misión, lo que no sería lógico en tiempos normales e incluso perjudicaría el desarrollo normal de la actividad de la misión diplomática.

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado huésped res-

pecto a los actos que atenten contra la inviolabilidad de las misiones permanentes, la Convención de Viena de 1975 sigue el modelo trazado por la Convención de Viena de 1961 respecto de las misiones diplomáticas. El artículo 23, párrafo segundo, de la Convención de Viena de 1975 dice :

" a) El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad".

Como vemos este párrafo es semejante al párrafo segundo del artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 arriba citado. El Estado huésped está obligado por tanto a proteger de forma especial a las misiones permanentes. Sin embargo el Estado huésped solamente es responsable por los actos que puedan cometerse contra las misiones permanentes en el caso de que haya existido negligencia en el cumplimiento de su deber de protección.

Por último debemos plantearnos si el deber de protección del Estado huésped respecto a las misiones permanentes obliga a dicho Estado a prohibir, o al menos a impedir, toda manifestación de hostilidad realizada frente a los locales de la misión permanente.

La realización de manifestaciones públicas frente a los locales de las misiones diplomáticas o de las misiones permanentes con objeto de demostrar la hostilidad o la desaprobación de la política del Estado que envía, es un hecho que ocurre con frecuencia en algunos países. Algunos autores han afirmado que el Estado huésped no incurre en responsabilidad por permitir dichas manifestaciones, siempre que se den una serie de condiciones. Así refiriéndose a las misiones diplomáticas, CAHIER ha afirmado :

" Lo que interesa es que en el curso de tales manifestaciones el Estado receptor refuerce su protección, preparándose a intervenir si fue

ra necesario. Es preciso además que la manifestación discurra pacíficamente; que los escritos no sean insultantes para el Estado acreditante y que el desarrollo de dicho acto no impida las funciones normales de la misión; concretamente, que el acceso al inmueble de la última siga siendo libre. Cabe estimar que en la medida en que no se viole el estatuto privilegiado de los diplomáticos, es decir, el libre desempeño de su función, no existe acto ilícito internacional " (41).

Por nuestra parte creemos que, aunque no pueda afirmarse de forma radical la ilicitud de las manifestaciones públicas ante las misiones diplomáticas, este tipo de actos fácilmente dan lugar a la responsabilidad internacional del Estado receptor. Tengase en cuenta que el artículo 22, párrafo segundo, de la Convención de Viena de 1961 dice:

" 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de....evitar - que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad ".

Lo dicho respecto a las manifestaciones públicas frente a los locales de las misiones diplomáticas es válido también respecto a las misiones permanentes. Es muy difícil que pueda afirmarse que una manifestación pública ante los locales de una misión permanente "no turbe la tranquilidad de la misión" y "no atente contra su dignidad". Por esta razón creemos que el Estado huésped debe hacer lo posible para evitar dichas manifestaciones y debe, en todo caso, impedir las si el jefe de la misión permanente lo solicita. Además es relativamente fácil que una manifestación pacífica en su comienzo llegue a convertirse en manifestación violenta, lo que daría lugar sin duda a la responsabilidad del Estado huésped por negligencia en su obligación de proteger a la misión. Esta es la razón de que en los EE.UU. exista una ley que prohíbe las "manifestaciones u otras actividades dirigidas contra gobiernos extranjeros a menos de .../...

(41) CAHIER, Derecho diplomático, ps. 299-300.

.../...

500 pies de un edificio o local utilizado en el distrito de Washington por - representantes de gobiernos extranjeros " .

Recientemente se ha promulgado una ley semejante a la anterior - que protege a las misiones permanentes. Dicha ley ha modificado el artículo 112 del título 18 del " United States Code " de forma que en su redacción actual dice lo siguiente :

" c) El que dentro de los Estados Unidos, pero fuera del Distrito de Columbia y dentro de un límite de 100 pies en torno a cualquier edificio o local poseído o utilizado u ocupado por un gobierno extranjero para fines diplomáticos o consulares, o como misión ante una Organización internacional, o como residencia de un funcionario extranjero, o poseído o utilizado u ocupado por una Organización internacional para actividades - oficiales o como residencia, publicamente .

1) participare en desfiles o manifestaciones, exhibiere cualquier - bandera, estandarte, cartel, letrero o emblema o pronunciare cualquier - palabra u oración o hiciere cualquier sonido o ruido con el propósito de intimidar, constreñir, amenazar u hostigar a un funcionario extranjero o de estorbarlo en el cumplimiento de sus funciones será castigado con multa de hasta 500 dólares o con prisión de hasta - seis meses o con ambas " (42).

B) El aspecto jurídico del deber de protección.

En el caso de que cualquier persona atente contra la inviolabilidad de una misión permanente el Estado huésped está obligado a tomar todas las medidas necesarias para detener al culpable, o a los culpables, del - acto cometido contra la misión. Si los culpables de los actos cometidos - .../...

(42) " Ley de enmienda al título 18 del United States Code con el fin de ampliar la protección de los funcionarios extranjeros y con otros - fines " en Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972, p. 7.

.../...

contra la misión permanente son detenidos, el Estado huésped está obligado a entregarlos a la justicia para que sean juzgados conforme a las leyes del Estado huésped.

La obligación del Estado huésped de perseguir a los culpables de los actos cometidos contra las misiones permanentes es una regla consuetudinaria que ha sido recogida por el artículo 23, párrafo segundo de la Convención de Viena de 1975, cuyo texto es el siguiente :

" b) En caso de que se produzca un atentado contra los locales de la misión, el Estado huésped adoptará todas las medidas adecuadas para procesar y castigar a las personas que hayan cometido el atentado".

La Convención de Viena de 1961 no contiene una regla semejante respecto al deber de los Estados receptores de perseguir y castigar a los culpables de los actos cometidos contra las misiones diplomáticas. Sin embargo no cabe duda que existe una regla consuetudinaria que obliga a los Estados a perseguir y castigar a los culpables de actos cometidos contra las misiones diplomáticas. De todas formas, creemos que es muy oportuno que se haya subrayado esta obligación, incorporandola a la Convención de Viena de 1975.

En algunos ordenamientos jurídicos internos existe una cualificación especial que agrava los delitos cometidos contra las misiones diplomáticas y las misiones permanentes. En cualquier caso, un acto cometido contra una misión es castigado por todos los ordenamientos internos como allanamiento de morada o como atentado contra la propiedad ajena. Además no es difícil que en la mayoría de los ordenamientos internos, los locales de las misiones diplomáticas y de las misiones permanentes puedan ser considerados como locales públicos u oficiales, lo que constituiría, sin duda, una circunstancia agravante del delito cometido contra la misión.

A pesar de que los delitos cometidos contra las misiones diplomáticas o contra las misiones permanentes constituyan en numerosos ordena

mientos un tipo delictivo especial, nunca se ha considerado que los Estados estén obligados por el Derecho internacional a introducir en su ordenamiento dicha figura delictiva. Sin embargo, modernamente y como resultado de los numerosos atentados contra las misiones y contra la vida de los agentes diplomáticos, se ha tratado de crear una obligación internacional de introducir en los ordenamientos internos un tipo delictivo especial - que comprenda los actos cometidos contra las misiones o contra los agentes diplomáticos. Así la " Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión - conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional ", de 2 de febrero de 1971 concluída en el marco de la OEA dice en su artículo 8 :

" Con el fin de cooperar en la prevención y sanción de los delitos - previstos en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados contratantes aceptan las siguientes obligaciones :

.....

d) Procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos delictivos materia de esta Convención cuando no estuvieran ya previstos en aquellas ".

Y el artículo dos de la misma Convención dice :

" Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al Derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos " (43).

(43) El texto de la Convención puede verse en OEA, Comité Jurídico - Interamericano, Extradición, Textos de Convenciones multilaterales y bilaterales, Documento de referencia preparado por la División - de Codificación e Integración Jurídica del Departamento de Asuntos - Jurídicos de la Secretaría General, Noviembre de 1975, (OEA/SER. Q/II.14-CJI-25), p. 155.

Con la misma finalidad que la Convención anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, mediante su resolución - 3166 (XXVIII), la " Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos ". Esta Convención protege igualmente a las misiones diplomáticas y a las misiones permanentes pues en su artículo primero se dice :

"Para los efectos de la presente Convención :

1. Se entiende por " persona internacionalmente protegida " :

.....

b) Cualquier representante o funcionario de un Estado o cualquier funcionario o agente de una Organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al Derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa ".

El artículo dos de esta Convención obliga a los Estados partes a introducir un tipo delictivo especial para los delitos cometidos contra las misiones diplomáticas y las misiones permanentes, así como contra el personal de unas y otras. En efecto el artículo dos de la Convención dice :

" 1. Serán calificados por cada Estado Parte como delitos en su legislación interna, cuando se realicen intencionalmente :

a) La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida ;

b) La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad ;

c) La amenaza de cometer tal atentado ;

d) La tentativa de cometer tal atentado, y

e) La complicidad en tal atentado.

2. Cada Estado Parte hará que estos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

3. Los dos párrafos que anteceden no afectan en forma alguna las obligaciones que tienen los Estados partes, en virtud del Derecho internacional, de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir otros atentados contra la persona, libertad o dignidad de una persona internacionalmente protegida ".

La Convención tiene también numerosas repercusiones respecto a la extradición, que facilita notablemente, y respecto la obligación de perseguir y detener a los que hayan atentado contra las personas internacionalmente protegidas. No nos detendremos en este punto que podría ser objeto de un estudio especial.

La Convención ha entrado en vigor el 20 de febrero de 1977 y las ratificaciones, o adhesiones, que ya se han producido proceden tanto de Estados del bloque occidental como del bloque socialista y del bloque afroasiático. Sin embargo, para que esta Convención proteja realmente a las misiones permanentes, es necesario que sea ratificada por los Estados - que son huéspedes de las Organizaciones internacionales más importantes. Notemos que la Convención ha sido ratificada por los EE.UU. y por Canadá que son huéspedes de las Naciones Unidas y de la OACI respectivamente.

II. La inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución de la misión permanente.

Una vez estudiada la inviolabilidad de la misión permanente, nos corresponde ahora estudiar su inmunidad de jurisdicción.

El estudio de la inmunidad de jurisdicción de la misión permanente nos llevará necesariamente a plantearnos el problema de la inmunidad de ejecución de la misma. Por esta razón nos ha parecido lógico agrupar el estudio de ambas cuestiones, a las que dedicaremos los siguientes apartados.

1. La inmunidad de jurisdicción.

La inmunidad de jurisdicción es una regla de Derecho internacional que impide que en determinadas circunstancias un tribunal de un Estado determinado se declare competente para decidir sobre acciones y pretensiones procesales respecto a las cuales dicho tribunal sería competente de acuerdo con la ley del foro.

En el presente apartado nos corresponde estudiar la inmunidad de jurisdicción de la misión permanente respecto de los órganos judiciales del Estado huésped de la Organización internacional ante la que la misión permanente está acreditada. Dicho con otras palabras, nos corresponde estudiar la posibilidad o la imposibilidad de que los tribunales del Estado huésped puedan conocer y decidir respecto de las acciones y pretensiones procesales entabladas contra una misión permanente.

Para poder determinar si las misiones permanentes gozan o no de inmunidad de jurisdicción en el Estado huésped, es necesario que nos planteemos cuál es la naturaleza de la misión permanente.

La misión permanente es un órgano que representa al Estado que la envía en el orden internacional, y que, para poder llevar a cabo esta función de representación, está localizada geográficamente en el territo -

del Estado huésped de la Organización internacional ante la que la misión permanente está acreditada.

Por su carácter de órgano representativo del Estado que envía en el orden internacional, la misión permanente participa en relaciones jurídicas regidas por el Derecho internacional. Además, la misión permanente en cuanto órgano perteneciente a la Administración Pública del Estado acreditante, puede participar en relaciones jurídicas regidas por el Derecho interno del Estado acreditante. Por último, la misión permanente, dada su situación geográfica, puede participar en relaciones jurídicas regidas por el Derecho interno del Estado huésped. En cualquier caso, hay que resaltar que la misión permanente no goza de legitimación propia para participar en cualquier clase de relaciones jurídicas y que su participación en éstas es únicamente como órgano representativo del Estado que envía o como órgano de la Administración Pública del mismo Estado.

La inmunidad de jurisdicción de la misión permanente no se plantea respecto a los actos de la misión que están regidos por el Derecho internacional o por el Derecho interno del Estado que envía. Los tribunales del Estado huésped no pueden declararse competentes respecto a los contenciosos planteados respecto de relaciones jurídicas que están regidas por ordenamientos jurídicos ajenos a la ley del foro.

El problema de la inmunidad de jurisdicción de las misiones permanentes se plantea por tanto únicamente respecto de los actos que realiza la misión permanente que están regidos por el Derecho interno del Estado huésped. Así por ejemplo, cualquier contrato de suministro que realice la misión permanente con una empresa establecida en el Estado huésped o el alquiler de un local para la misión permanente serían actos regidos por el Derecho interno del Estado huésped.

Al ser la misión permanente un órgano representativo del Estado que envía pero que no goza de personalidad propia, hablar de la inmunidad de jurisdicción de la misión permanente es tanto como hablar de -

la inmunidad de jurisdicción de la misión permanente es tanto como hablar de la inmunidad de jurisdicción del Estado que envía la misión.

En el Derecho internacional clásico existía una regla que hacía imposible que un tribunal de cualquier Estado pudiera declararse competente respecto a las acciones y pretensiones procesales dirigidas contra otro Estado. Dicha regla estaba basada en el principio de igualdad de los Estados, que impedía que un Estado pudiera someterse a los órganos judiciales de otro Estado.

La regla de la inmunidad de jurisdicción de los Estados ha sufrido una gran evolución como consecuencia de la ampliación de la actividad y del ámbito de competencias de los Estados. En efecto, desde hace unos cincuenta años, es cada día más normal que los Estados realicen actividades de orden privado. Por esta razón se ha ido afirmando, cada vez más, una tendencia a considerar que los tribunales pueden declararse competentes respecto a las actividades de orden privado de un Estado extranjero. Esta tendencia se ha apoyado precisamente en el principio de igualdad de los Estados arriba citado. En efecto si los Estados son iguales no parece lógico que un Estado pueda realizar actividades de orden privado en el territorio de otro Estado sin estar sujeto a la competencia de los tribunales de éste. La incompetencia de dichos tribunales constituiría un atentado contra la soberanía del Estado en cuyo territorio otro Estado realiza actividades de orden privado.

La práctica de los Estados respecto a la inmunidad de jurisdicción es muy variada. Así algunos Estados, en especial los del bloque socialista y los anglosajones, siguen admitiendo la inmunidad de jurisdicción absoluta de los Estados, aunque la tendencia actual es la de ir admitiendo cada vez más excepciones a dicho principio. En otros Estados la jurisprudencia ha ido elaborando una teoría que distingue entre los actos realizados por los Estados iure imperii y los actos realizados iure gestionis, existiendo inmunidad de jurisdicción respecto a los primeros y no existiendo la inmunidad respecto a los segundos.

La distinción entre las distintas clases de actos realizados por un Estado es muy problemática, dada la dificultad de encontrar un criterio-válido en todos los casos. De cualquier modo podemos afirmar, a modo de resumen, que la práctica actual de los Estados demuestra que no existen reglas de validez universal en el Derecho internacional sobre la inmunidad de jurisdicción de los Estados. La doctrina parece estar de acuerdo en este punto.

La inexistencia de una regla de validez general sobre la inmunidad de jurisdicción de los Estados nos lleva a plantearnos si la misión permanente goza de inmunidad de jurisdicción, a pesar de no ser más que un órgano representativo de un Estado.

La inmunidad de jurisdicción de la misión permanente estaría justificada por las mismas razones que justifican la existencia del resto de inmunidades y privilegios diplomáticos e internacionales. Podría objetarse que, si se concede la inmunidad de jurisdicción a las misiones permanentes, éstas tendrían un estatuto más privilegiado que el del Estado al que representan. El argumento no nos parece convincente, ya que si la misión permanente no gozase de inmunidad de jurisdicción, el agente diplomático que sí goza de dicha inmunidad, tendría un estatuto más privilegiado que el de la misión, lo que no es lógico. De esta opinión es CAHIER, que refiriéndose a la inmunidad de jurisdicción de las misiones diplomáticas afirma:

" la inmunidad de jurisdicción de la misión diplomática no debe ya fundamentarse en el principio de igualdad y de independencia de los Estados, sino en la necesidad de permitirle el libre ejercicio de sus funciones. De ahí se desprende que la protección de la misión ha de reforzarse con respecto a la del Estado. Si ello no ocurriera así, se llegaría al absurdo resultado de que el Derecho diplomático concediese una inmunidad de jurisdicción civil muy amplia a los agentes diplomáticos, negando a la misión, que es bastante más importante que los agentes. Ciertamente, cabría objetar el razonamiento anterior que es igualmente absur-

do conceder a la misión un trato más favorable que al Estado del cual - es órgano ; sin embargo tal argumentación no nos parece fundada....Una misión diplomática -y en esta razón descansa todo el sistema de privilegios diplomáticos-, tiene que desenvolver libremente sus funciones ; ha de hallarse al margen de todas las molestias del Estado receptor, ya que actúa de forma permanente en su territorio y las funciones que desempeña son delicadas e importantes y de ella depende en gran medida las relaciones entre ambos Estados. Preciso es que no se originen tensiones litigiosas que contribuyan a cargar una atmosfera que, por el contrario, ha de mantenerse siempre propicia a las relaciones pacíficas. En realidad, imperiosas necesidades y de desempeño de las funciones de independencia que le son propias justifican para la misión diplomática un régimen de inmunidad más amplio que el de los Estados" (44).

El examen de la jurisprudencia relativa a la inmunidad de jurisdicción de las misiones permanentes, y de las misiones diplomáticas, no nos aporta ninguna luz respecto de la existencia de una regla sobre la inmunidad de jurisdicción de las misiones. Las sentencias que se refieren a este punto son escasas y contradictorias (45) y la única conclusión que podemos sacar de ellas es la de que no existe una regla fija al respecto.

La Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas, la Convención de 1969 sobre las misiones especiales y la Convención de Viena de 1975 sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales no regulan la inmunidad de jurisdicción de las misiones. La razón de ello es que la CDI, que preparó dichas Convenciones, consideró que no debía entrar en el examen de la inmunidad de jurisdicción de las misiones, pues esto implicaba entrar en el estudio de la inmunidad de jurisdicción de los Estados, tema que podía ser objeto de futuros trabajos de la CDI.

(44) CAHIER, Derecho diplomático, p. 324.

(45) Ver por ejemplo: "Knocklong Corp. v. Kingdom of Afghanistan et United States, State of New York, Nassau County Court. March, 27, - 1957" en ILR, V.24, 1957, p. 202 y "Federal Republic of Germany, - Federal Constitutional Court. October 30, 1962" en ILR, Vol. 38, 1969, - p. 162. Ver también las sentencias citadas en esta última.

Como vemos ninguna de las tres Convenciones multilaterales sobre Derecho diplomático regulan de forma expresa la inmunidad de jurisdicción de las misiones. Sin embargo las tres Convenciones se refieren de forma indirecta a la inmunidad de jurisdicción de la misión, al regular la inmunidad de jurisdicción de los miembros de la misión. En efecto el artículo 31 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas dice ;

" 1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción-civil y administrativa, excepto si se trata :

a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión ; " .

De forma semejante el artículo 31 de la Convención sobre las misiones especiales dice :

" 1. Los representantes del Estado que envía la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor.

2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor, salvo en caso de :

a) Una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión " .

Por último el artículo 30 de la Convención de Viena sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales dice :

" 1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de -

la misión gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped, excepto si se trata de :

a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a manos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión ".

De la redacción de este precepto se deduce que si un miembro de una misión posee un bien inmueble " por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión " goza de inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones reales relativas a dicho inmueble.

Parace por tanto que es lícito deducir que la misión permanente goza de inmunidad de jurisdicción respecto a las acciones reales relativas a bienes inmuebles utilizados para los fines de la misión. Sin embargo, de este hecho no puede deducirse que goce de la misma inmunidad respecto a las acciones personales. Hay que tener en cuenta que una acción real es una acción que se refiere directamente a un bien, sin tener en cuenta quién sea su poseedor. El Derecho diplomático protege por tanto a las misiones respecto a las acciones reales pues si no lo hiciera así podría sufrir la inviolabilidad de la misión.

Como vemos con excepción de la inmunidad relativa a las acciones reales sobre bienes inmuebles, el Derecho internacional convencional no concede la inmunidad de jurisdicción a las misiones permanentes ni tampoco a las misiones diplomáticas y las misiones especiales. La inmunidad de jurisdicción de las misiones tampoco puede apoyarse en una regla consuetudinaria, dado que no existe una práctica estatal constante que reconozca la inmunidad de jurisdicción de las misiones.

Cabría concluir que, si la inmunidad de jurisdicción no es reconocida por el Derecho convencional ni por el Derecho consuetudinario, no existe una regla de validez universal sobre la inmunidad de jurisdicción -

de las misiones. La solución de cada situación concreta dependerá por - tanto de la regla relativa a la inmunidad de jurisdicción de los Estados - aplicable en cada caso.

2. La inmunidad de ejecución.

El artículo 30 de la Convención de Viena de 1975, del mismo modo que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomá - ticas distingue entre la inmunidad de jurisdicción de los miembros de la - misión y la inmunidad de ejecución de los mismos.

La distinción entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecu - ción es también pertinente respecto a las misiones. En efecto la inmuni - dad de jurisdicción impide a un tribunal dictar sentencia respecto a las - acciones y pretensiones procesales dirigidas contra ciertas personas físi - cas o jurídicas. Por el contrario, la inmunidad de ejecución impide que una sentencia pueda ser ejecutada.

La inmunidad de ejecución de la misión permanente no está regula - da de forma específica en la Convención de Viena de 1975. Sin embargo la inviolabilidad que dicha Convención concede a la misión, a sus bienes y a los medios de transporte de la misión protege a ésta de cualquier me - dida de ejecución que pudieran tomar las autoridades del Estado huésped.

En el apartado anterior vimos cómo la inmunidad de jurisdicción - de la misión permanente depende de la inmunidad de jurisdicción del Esta - do que la envía, del que la misión no es sino su órgano representativo. - No sucede lo mismo, sin embargo, respecto a la inmunidad de ejecución, que es absoluta para todos los bienes pertenecientes a la misión. Por es - ta razón puede afirmarse de forma tajante que las medidas de ejecución - que puedan tomar las autoridades del Estado huésped respecto de los bie - nes de otro Estado no pueden afectar a los bienes utilizados para los fi - nes de la misión permanente.

III. La inmunidad fiscal y la franquicia arancelaria de la misión permanente.

En el Derecho diplomático anterior a la Convención de Viena de 1961 las inmunidades fiscales y aduaneras de las misiones diplomáticas no tenían un carácter de obligatoriedad y eran únicamente concedidas por los Estados por razones de cortesía internacional y sobre la base de la reciprocidad. La Convención de Viena de 1961 supuso una gran evolución en este punto, convirtiendo los privilegios fiscales y aduaneros en auténticas inmunidades diplomáticas jurídicamente exigibles a los Estados que sean parte en dicha Convención.

Las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades y los Acuerdos de sede conceden siempre la inmunidad fiscal y la franquicia arancelaria absoluta a las Organizaciones internacionales. Sin embargo, dichas Convenciones y Acuerdos de sede no conceden de forma expresa, salvo excepciones, la inmunidad fiscal y aduanera a las misiones permanentes, limitándose a concederles los privilegios e inmunidades diplomáticos en general. Al no estar incluidas la inmunidad fiscal y aduanera entre los privilegios e inmunidades diplomáticos hasta la entrada en vigor de la Convención de Viena de 1961, las misiones permanentes han tenido en algunas ocasiones dificultades para que les fueran concedidas dichas inmunidades. La entrada en vigor de la Convención de Viena de 1961 (46) hizo que las misiones permanentes pudieran exigir jurídicamente la concesión de las inmunidades fiscales y aduaneras reguladas en dicha Convención. La Convención de Viena de 1975 ha venido a confirmar esta tendencia, regulando la inmunidad fiscal y aduanera en los mismos términos que la Convención de Viena de 1961.

(46) La Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas - entró en vigor el 24 de junio de 1964.

Debe subrayarse que la concesión de la inmunidad fiscal y aduanera está más justificada en el caso de las misiones permanentes que en el caso de las misiones diplomáticas. En efecto, en las relaciones diplomáticas entre Estados la existencia recíproca de dos misiones diplomáticas hace que los efectos de la concesión de la inmunidad fiscal y aduanera sean nulos, dado que los Estados son acreditantes y receptores al mismo tiempo. Por esta razón la existencia, o la inexistencia, de la inmunidad fiscal y aduanera de las misiones diplomáticas perjudica y beneficia al mismo tiempo a los Estados que mantienen relaciones diplomáticas.

El problema se plantea de forma distinta en el caso de las misiones permanentes. El Estado huésped de una Organización internacional no tiene razón alguna para beneficiarse fiscalmente del establecimiento de una Organización sobre su territorio. La creación y el mantenimiento de una Organización internacional es una obra común realizada por varios Estados, de la que uno de ellos no tiene derecho a beneficiarse de forma particular. Además, debe tenerse en cuenta que el establecimiento de una Organización internacional produce innumerables beneficios para el Estado huésped, que recibe sobre su territorio a un gran número de funcionarios y representantes de los Estados que son consumidores pero no ocupan ningún puesto de trabajo existente en dicho Estado antes del establecimiento de la Organización. Por todas estas razones las misiones permanentes, así como el personal de la misión, deberían gozar de una inmunidad fiscal y aduanera casi absoluta. Creemos, por tanto, que la Convención de Viena de 1975 se ha quedado corta en este punto.

1. La inmunidad fiscal,

El artículo 24, párrafo primero, de la Convención de Viena de 1975 dice :

" 1. Los locales de la misión de que sea propietario o inquilino el Estado que envía a toda persona que actúe en representación de ese Es

tado estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales excepto los que constituyan el pago de servicios - determinados prestados".

Este precepto exime a la misión permanente del pago de cualquier impuesto relacionado con los locales de la misión. En dicha exención se comprenden la contribución urbana, el impuesto de transmisiones sobre la compra de los inmuebles dedicados al servicio de la misión así como los impuestos que graven la constitución de hipoteca o cualquier otro gravá - men sobre dichos inmuebles y su inscripción en el Registro de la propie - dad. La exención incluye también el impuesto sobre el tráfico de empresas devengado por la realización de obras en dicho inmueble y el impuesto de actos jurídicos documentados que se devenga en los contratos de inquilinaa to en el caso de que los locales de la misión sean arrendados.

El artículo 24 no exime a la misión permanente del pago de las ta sas que retribuyen la prestación de servicios a la misión, como pueden - ser la recogida de basuras o el suministro de agua. En cuanto a las con - tribuciones especiales, nada dice el artículo 24 aunque dado el tono gene - ral del artículo 24 parece que deben considerarse exentas (47).

Por lo que respecta a los impuestos directos, la exención concedida por el artículo 24 es suficiente, pues la misión permanente no puede - ser sujeto pasivo de ningún impuesto directo, con excepción de la contri - bución territorial, en el sistema fiscal del Estado huésped. Sin embargo - respecto a los impuestos indirectos la exención fiscal de las misiones permanentes debería ser más amplia.

La misión permanente no está exenta del pago de los impuestos - indirectos respecto de los bienes y servicios que adquiera en el Estado -
.../...

(47) Las figuras fiscales y los impuestos citados se refieren al sistema - fiscal español actual.

.../...

huésped, salvo los que se refieren a los locales de la misión. Ciertamente en muchos casos es difícil separar la cuantía del impuesto indirecto del precio total de un producto. Sin embargo, cuando la misión permanente realiza grandes compras de objetos destinados al uso de la misión, se la debería eximir del pago de dicho impuesto.

La falta de exención de los impuestos indirectos es, en algún caso, más perjudicial que beneficiosa para el Estado huésped. Tengase en cuenta que la misión permanente puede hacer importar con franquicia los objetos necesarios para su funcionamiento de otros países y beneficiarse de las exenciones fiscales que fomentan las exportaciones. Por este motivo, y dada la existencia de la franquicia arancelaria que examinaremos en el apartado siguiente, las misiones encontrarán normalmente más ventajosa la importación de los objetos necesarios para su funcionamiento que la compra de dichos objetos en el país huésped. Esta es la razón de que muchos Estados huéspedes concedan la inmunidad fiscal sobre los impuestos indirectos que gravan los bienes adquiridos por las misiones permanentes.

El artículo 24 de la Convención contiene otra norma que impide la traslación del impuesto que debe pagar la persona que contrata con una misión permanente. En efecto el artículo 24, párrafo segundo dice :

" 2. La exención fiscal a que se refiere el presente artículo no se aplicará a tales impuestos y gravámenes cuando, de conformidad con las disposiciones legales del Estado huésped, estén a cargo del particular que contrate con el Estado que envía o con toda persona que actúe en representación de ese Estado ".

2. La franquicia arancelaria.

Como hemos visto más arriba, ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni los Acuerdos de sede regulan el derecho de la misión permanente a importar los bienes necesarios para el uso

oficial con franquicia arancelaria. Sin embargo al quedar incluida en la Convención de Viena de 1961 la importación con franquicia arancelaria entre los derechos de las misiones diplomáticas, las misiones permanentes pueden exigir este derecho, dada la identidad de los estatutos de ambos tipos de misiones.

La Convención de Viena de 1975 al regular el derecho de las misiones permanentes a importar bienes con franquicia arancelaria no ha hecho sino repetir las reglas que sobre este punto contiene el artículo 36 de la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. El artículo 35 de la Convención de Viena de 1975 dice en su párrafo primero:

"1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos:

a) de los objetos destinados al uso oficial de la misión ".

De acuerdo con este artículo la misión permanente tiene derecho a importar con franquicia arancelaria todos los objetos destinados al uso oficial de la misión.

El artículo 35 prevé también que el Estado huésped puede dictar leyes y reglamentos con objeto de regular la importación con franquicia. Este poder regulador que la Convención concede al Estado huésped tiene por objeto permitir que éste pueda controlar que los bienes importados con franquicia son utilizados efectivamente para el uso oficial de las misiones permanentes y que dichos bienes no son vendidos a particulares en el Estado huésped.

IV. El derecho de la misión permanente a enarbolar la bandera y el escudo del Estado acreditante.

Tradicionalmente las misiones diplomáticas hacen ondear en sus locales la bandera del Estado acreditante, práctica que refuerza de alguna

manera el carácter representativo de las misiones diplomáticas.

La posibilidad de hacer ondear la bandera del Estado acreditante - en los locales de la misión diplomática ha sido considerado como un derecho de la misión y no como una mera práctica que los Estados receptores toleraban por cortesía. La Convención de Viena de 1961 ha recogido esta práctica en su artículo 20, cuyo texto dice así:

" La misión y su jefe tendrán derecho a colocar la bandera y el escudo del Estado acreditante en los locales de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, y en los medios de transporte de éste ".

De la misma forma que las misiones diplomáticas, las misiones permanentes suelen hacer ondear su bandera en los locales de la misión, así como en el vehículo y en la residencia del jefe de misión. La Convención de Viena de 1975 ha recogido esta práctica en su artículo 19 cuyo párrafo primero dice así:

"1. La misión tendrá derecho a colocar en sus locales la bandera y el escudo del Estado que envía. El jefe de misión tendrá el mismo derecho con respecto a su residencia y sus medios de transporte ".

La Convención de 1975 ha recogido también en el artículo 19, párrafo segundo, una regla consuetudinaria que sin embargo no está recogida en la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. El artículo 19, párrafo segundo, de la Convención de 1975 dice:

"2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado huésped ".

Este párrafo recoge una práctica diplomática de uso general. Las misiones, diplomáticas o permanentes, no suelen hacer ondear su bandera en los locales de la misión de forma continua, limitandose a hacerlo - algunos días señalados como la fiesta nacional del Estado acreditante o la

del Estado receptor o el Estado huésped en nuestro caso.

Hay que tener en cuenta que la exhibición continua de la bandera del Estado acreditante en los locales de la misión sería una carga muy pesada para el Estado receptor o el Estado huésped que tiene la obligación de proteger especialmente la bandera de los Estados que envían las misiones. Por esta razón el Estado receptor, o el Estado huésped, puede dictar normas que regulen la exhibición de las respectivas banderas nacionales. Sin embargo el Estado huésped no puede dictar normas diferentes para las distintas misiones, dada la prohibición de discriminación que contiene el artículo 83 de la Convención.

CAPITULO QUINTO:EL ESTATUTO PRIVILEGIADO DEL PERSONAL DE LAS MISIONES PERMANENTES.

Una vez estudiado el estatuto privilegiado de las misiones permanentes nos corresponde estudiar en este capítulo el estatuto del personal de dichas misiones.

De la misma forma que el estatuto de las misiones permanentes, el estatuto del personal de dichas misiones se rige por el Derecho internacional, pero se manifiesta en el orden jurídico del Estado huésped como un estatuto privilegiado.

Siguiendo un orden de importancia, estudiaremos en primer lugar el estatuto privilegiado del personal diplomático de las misiones permanentes. En segundo lugar estudiaremos 1) el estatuto del personal administrativo y técnico, 2) el del personal de servicio de la misión y 3) el del personal al servicio privado. En tercer lugar nos plantearemos el problema del estatuto del personal de la misión que posee la nacionalidad del Estado huésped y terminaremos con el estudio del estatuto de los miembros de la familia del personal de la misión.

Dentro del estudio del personal de la misión permanente analizaremos de forma pormenorizada el estatuto del personal diplomático de la misión, y pondremos de relieve las semejanzas y diferencias en relación a éste del estatuto del resto del personal de la misión así como del de la familia del personal de la misma.

I. El estatuto privilegiado del personal diplomático,

Dentro del personal de las misiones permanentes, el personal diplomático(o los agentes diplomáticos) ocupan un lugar principal respecto al resto del personal que se deriva de las funciones que tienen encomendadas.

El personal diplomático de la misión permanente está constituido - por dos categorías diferentes de personas: por un lado tenemos al jefe de misión y por otro al resto del personal diplomático. La definición del jefe de misión no parece que plantee excesivas dificultades. El jefe de misión es la persona nombrada por el Estado acreditante como autoridad máxima de la misión permanente para dirigir la actividad de ésta, que osolta la máxima representación del Estado acreditante y que está acreditado como " jefe de misión" ante una Organización internacional.

El personal diplomático que no es jefe de misión es algo más difícil de definir. El artículo 1 de la Convención de Viena de 1975 dice en su apartado 28:

" se entiende por miembros del personal diplomático los miembros del personal de la misión.... que gocen de la calidad de diplomático para los fines de la misión...".

Como vemos, la definición no es excesivamente precisa. Cabría - decir que el personal diplomático de la misión permanente es el personal encargado de llevar a cabo la tarea propia de la misión en cuanto órgano representativo del Estado que envía. El personal diplomático se distinguiría por tanto del resto del personal de la misión por su ocupación en las actividades político-internacionales de la misión y por su carácter representativo del Estado que envía.

La distinción entre el jefe de misión y el resto del personal diplomático de la misión permanente tiene mucha importancia en lo que se refiere a su nombramiento, así como a las normas que rigen la actividad de una y otra clase de personal. Sin embargo, en lo que se refiere a su estatuto privilegiado no existe diferencia entre el jefe de misión y el resto del personal diplomático, por lo que no haremos ninguna distinción a estos efectos.

Comenzaremos el estudio del estatuto privilegiado del personal diplomático por su derecho a la inviolabilidad; a continuación estudiaremos la -

inmunidad de jurisdicción y de ejecución, para seguir con la inmunidad fiscal y aduanera y terminar con el estudio de una serie de privilegios e inmunidades de importancia menor de los que también goza el personal diplomático de las misiones permanentes.

1. La inviolabilidad del personal diplomático.

En el capítulo anterior vimos cómo la actividad de los distintos Estados respecto de una Organización internacional difícilmente podría cumplir los requisitos de libertad e independencia respecto del Estado huésped si los órganos que llevan a cabo dicha actividad no gozasen de inviolabilidad respecto de las autoridades del Estado huésped. De este razonamiento parece lícito deducir que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes deben gozar de inviolabilidad respecto de las autoridades del Estado huésped, pues en caso contrario su actividad no podría cumplir los requisitos necesarios de libertad e independencia.

De la misma forma que la inviolabilidad de las misiones permanentes, la inviolabilidad de los agentes diplomáticos pertenecientes a éstas tiene un contenido doble. Por un lado, la inviolabilidad implica una inmunidad total del agente diplomático respecto a cualquier tipo de medidas coercitivas que pudieran tomar las autoridades del Estado huésped. Por otro lado, las autoridades del Estado huésped están obligadas a proteger de forma especial a los agentes diplomáticos y a garantizar su libertad de acción. Trataremos ambos aspectos, el de la inmunidad de coerción y el del deber de protección, de forma separada.

A) La inmunidad de coerción del personal diplomático.

La inmunidad de coerción de los agentes diplomáticos supone que las autoridades del Estado huésped no puedan tomar ningún tipo de medidas coercitivas respecto a dichos agentes diplomáticos.

De la misma forma que al estudiar la inmunidad de coerción de la

misión permanente distinguimos entre la inmunidad de coerción de los locales, de los bienes muebles y de las comunicaciones de la misión, al estudiar la inmunidad de coerción de los agentes diplomáticos distinguiremos entre la inmunidad de coerción de la persona del agente diplomático, de su residencia y de sus bienes. Todos estos aspectos los iremos examinando sucesivamente.

a) La inmunidad de coerción de la persona.

La inviolabilidad de la persona del agente diplomático es una de las reglas más antiguas y de mayor importancia del Derecho internacional público. Justificada por razones de carácter religioso o afirmada como regla consuetudinaria, la inviolabilidad de la persona del agente diplomático es una regla de importancia capital para las relaciones de los miembros de la Comunidad internacional. En efecto, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, la inviolabilidad de la persona del agente diplomático es una regla fundamental para poder asegurar la comunicación entre los distintos sujetos de la Comunidad internacional.

La regla de la inviolabilidad de los agentes diplomáticos se ha creado en el marco de las relaciones bilaterales entre Estados. Sin embargo, las mismas razones que justifican la existencia de dicha regla en la diplomacia bilateral hacen también necesaria su existencia en la diplomacia multilateral.

La necesidad de la inviolabilidad de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes es afirmada por la Carta de las Naciones Unidas. En efecto el artículo 105, párrafo segundo de la Carta, dice:

"2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación

con la Organización ".

En nuestra opinión no puede dudarse que la inviolabilidad de los representantes de los Miembros de una Organización internacional es una de las inmunidades necesarias " para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización ".

La inviolabilidad de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes está afirmada también en las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, así como en la totalidad de los Acuerdos de sede concluidos por las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

La Convención de Viena de 1975 se refiere a la inviolabilidad de la persona de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes en su artículo 28 cuyo texto es el siguiente:

" La persona del jefe de misión, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión, es inviolable. Ni el jefe de misión ni esos miembros podrán ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el debido respeto y adoptará las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, así como para procesar y castigar a las personas que hayan cometido tales atentados ".

La obligación del Estado huésped de abstenerse de cualquier medida de coerción respecto de los agentes diplomáticos tiene como contrapartida la obligación de éstos de respetar las leyes vigentes en el Estado huésped. El artículo 77, párrafo primero, de la Convención dice a este respecto:

"1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. También -

estarán obligadas a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado ".

En general la inviolabilidad de los agentes diplomáticos no tiene - por qué dar lugar a abusos. En caso de que éstos se produzcan, el - Estado huésped puede solicitar la cooperación del Estado que envía pa - ra conseguir que dichos abusos cesen.

La cooperación del Estado que envía con el Estado huésped para poner fin a los abusos de los privilegios e inmunidades es obligatoria se_ gún los términos de la Convención de 1975. Así el artículo 76 de ésta di ce:

" Cuando sea necesario y en la medida que sea compatible con el ejercicio independiente de las funciones de la misión, delegación o delega_ ción de observación, el Estado que envía cooperará tan plenamente como sea posible con el Estado huésped en la realización de cualquier investi_ gación o procesamiento que se efectúen conforme a las disposiciones de - los artículos 23, 28, 29 y 58 ".

Normalmente la cooperación entre el Estado que envía y el Estado huésped pondrá fin a los abusos a los que puede dar lugar la inviolabili - dad de los agentes diplomáticos. En cualquier caso, y como vimos en el capítulo tercero, el Estado huésped guarda el poder de expulsión del agen_ te diplomático, lo que constituye garantía suficiente de que la inviolabilidad no de lugar a abusos de importancia. Sin embargo, en algunas ocasiones la expulsión del agente diplomático puede no ser una medida suficiente y - el Estado huésped puede verse obligado a tomar medidas más drásticas - en casos de legítima defensa o en casos que afecten a la propia seguri - dad del Estado huésped. Esto nos lleva a plantearnos los posibles límites de la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos.

La inviolabilidad de la persona del agente diplomático es una regla enunciada en términos absolutos, tanto por el artículo 29 de la Conven - ción de 1961, como por el artículo 28 de la Convención de Viena de 1975.

Sin embargo, la misma CDI ha reconocido algunos límites a dicha regla. Así en el comentario del proyecto de la CDI sobre " relaciones e inmunidades diplomáticas " se dice:

" Por el hecho de su inviolabilidad, el agente diplomático se haya exento de medidas que constituyan una coacción directa. Este principio - no excluye, respecto del agente diplomático, ni las medidas de legítima - defensa ni, en circunstancias excepcionales, medidas para evitar que co - meta delitos o infracciones "(1).

La existencia de límites a la inviolabilidad de los agentes diplomá - ticos pertenecientes a las misiones permanentes puede apoyarse también - en el párrafo cuarto del artículo 77 de la Convención de Viena de 1975, - que autoriza al Estado huésped a adoptar " las medidas que sean nece - sarias para su propia protección ". Parece por tanto que serían lícitas - las medidas coercitivas tomadas por las autoridades del Estado huésped - respecto a un agente diplomático para evitar que éste cometiera un delito. Las autoridades del Estado huésped también podrían tomar las medidas - necesarias para evitar que un agente diplomático atentase contra la segu - ridad del Estado huésped.

b) La inmunidad de coerción de la residencia.

Originariamente la residencia de los agentes diplomáticos estaba si tuada en el mismo edificio que albergaba la misión diplomática, y carecía de sentido hablar de la inviolabilidad de la residencia privada de los agen - tes diplomáticos ya que ésta estaba incluida en la franchise de l'hôtel di - plomatique o inviolabilidad de la misión diplomática.

(1) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de - artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas ", ACDI, 1958, - Vol. II, p. 105.

Modernamente esta situación ha variado y lo normal es que la residencia privada de los agentes diplomáticos esté separada del inmueble - que alberga la misión diplomática, que incluye, cuando más, únicamente la residencia privada del jefe de misión. Esto ha llevado a que la Convención de Viena de 1961 regule en artículos distintos la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática y la de la residencia privada de los agentes diplomáticos.

Si respecto a las misiones diplomáticas puede distinguirse en la - mayoría de los casos entre los locales de la misión y la residencia privada de los agentes diplomáticos, esta distinción es aún más patente respecto de las misiones permanentes, misiones de reciente creación que - rara vez contienen dependencias que puedan ser utilizadas como residencias de los miembros del personal diplomático.

La inmunidad de coerción de la residencia privada de los agentes diplomáticos es una inmunidad absolutamente necesaria para que éstos - puedan desarrollar sus funciones con libertad e independencia respecto - al Estado huésped. Si la residencia privada no fuera inviolable, la inmunidad de la persona de los agentes diplomáticos perdería gran parte de - su eficacia.

La inviolabilidad de la residencia de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no está regulada de manera ex - presa en las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, - aunque puede deducirse de la inviolabilidad personal que dichas Convenciones conceden a los agentes diplomáticos. Los Acuerdos de sede tam - poco se refieren de forma expresa a esta inmunidad que queda engloba - da dentro de los " privilegios e inmunidades diplomáticos " que conceden dichos Acuerdos a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes. Existen, sin embargo, dos Acuerdos de sede que se re - fieren de forma expresa a la inmunidad de coerción de la residencia pri

vada de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes. Así el párrafo cuarto de la sección 15 del Acuerdo entre los EEUU y las NU y el párrafo "b" de la sección 24 del Acuerdo de sede concluido entre Italia y la FAO reconocen expresamente la inviolabilidad de la residencia de los representantes de los Estados cuyos gobiernos no están reconocidos por el Estado huésped, en este caso los EEUU e Italia. Hay que notar que estos artículos están dirigidos precisamente a restringir los privilegios e inmunidades de los Estados cuyos gobiernos no son reconocidos por los EEUU o por Italia y aún en este caso se reconoce la inviolabilidad de la residencia privada.

De la misma forma que la Convención de Viena de 1961, la Convención de Viena de 1975 ha regulado la inmunidad de coerción de la residencia privada de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, equiparando dicha residencia privada con los locales de la misión permanente. Así el párrafo primero del artículo 29 de la Convención de 1975 dice:

"1. La residencia particular del jefe de misión, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión, gozará de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión".

Dada la equiparación entre la inmunidad de coerción de la residencia de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes y la de los locales de dichas misiones, no parece necesario que entremos aquí en el estudio detallado de la inmunidad de coerción de la residencia — por lo que nos remitimos a lo dicho en el capítulo anterior respecto a la inmunidad de coerción de los locales de la misión.

c) La inmunidad de coerción de los documentos, la correspondencia y los bienes.

Siguiendo el orden utilizado por la Convención de Viena de 1975 -

estudiaremos en el presente apartado la inmunidad de coerción de los documentos, la correspondencia y los bienes de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, con lo que el estudio de la inmunidad de coerción de dicho personal quedará completo.

La inmunidad de coerción de los documentos, la correspondencia y los bienes del personal diplomático de las misiones permanentes está regulada por el párrafo segundo del artículo 29 de la Convención de Viena de 1975 cuyo texto dice:

"2. Los documentos, la correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo 30, los bienes del jefe de misión o de los miembros del personal diplomático de la misión gozarán igualmente de inviolabilidad",

Como vemos el artículo 29 de la Convención de 1975 regula la inviolabilidad de los documentos y de la correspondencia en términos absolutos. Es lógico que sea así, dado que los documentos y las comunicaciones de los agentes diplomáticos son en realidad documentos y comunicaciones de la misión permanente, y la violación del secreto que debe rodear a los mismos atentaría contra la libertad y la independencia que deben rodear a las actividades de la misión permanente.

El secreto absoluto de la correspondencia de los agentes diplomáticos ha sido considerado excesivo por los EEUU, que en la Conferencia de Viena de 1961 presentaron una enmienda cuyo objeto era suprimir dicho secreto en los casos en que el agente diplomático no gozase de inmunidad de jurisdicción (2). La enmienda fué rechazada por la Conferencia (3), pues su adopción hubiera podido dar lugar a multitud de abusos. La inviolabilidad absoluta de la correspondencia de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes fué aceptada también en la Conferencia de Viena de 1975 sin que existiera ninguna voz discordante al respecto (4).

(2) Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, p. 37 (Documento: A/CONF.20/C.1/

L.259).

(3) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 171.

(4) Conferencia, Vol. I, p. 21.

Si la inviolabilidad de los documentos y de las comunicaciones de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes es absoluta, no puede decirse lo mismo de la inviolabilidad de sus bienes. El párrafo segundo del artículo 29 admite que la inviolabilidad de los bienes no existe en los casos en que el agente diplomático no goza de inmunidad de jurisdicción. Estas excepciones al principio de la inviolabilidad de los bienes de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes las examinaremos en el apartado dedicado a la inmunidad de ejecución.

Excepto en los casos en que expresamente está establecido lo contrario, la inviolabilidad de los bienes de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes es absoluta. La inviolabilidad alcanza tanto a los bienes inmuebles como a los bienes muebles. Y para que un bien sea inviolable, basta con que esté en posesión del agente diplomático, aunque el título jurídico en que esté basada la posesión pueda ser atacado jurídicamente (5).

Por otra parte parece que aunque la inviolabilidad de los bienes de los agentes diplomáticos sea absoluta, con las excepciones reseñadas, esto no impide que las autoridades del Estado huésped puedan retirar los vehículos pertenecientes a dichos agentes cuando aquellos impidan la circulación. Si se interpretan literalmente tanto el artículo 29 de la Convención de Viena de 1975 como el artículo 30 de la Convención de Viena de 1961, las medidas administrativas de retirada de vehículos son ilegales. Sin embargo, la práctica de algunos Estados no ha considerado que la inviolabilidad de los bienes impida que los vehículos sean desplazados cuando dificultan la circulación, sin que esta práctica haya sido impugnada en términos jurídicos (6).

(5) Existen sentencias que han reconocido la inviolabilidad de los bienes de un agente diplomático aún cuando la propiedad de dichos bienes sea discutida. Ver: "Martell et Admin des Domaines v. Diez del Corral.- France, Court of Appeal of Paris. June 9, 1950" en ILR, 1951. Vol. 18, - ps. 347 y 348 y "The Amazone. England, High Court. Probate Division (Langton, J). May 8, 1939. Court of Appeal" en ADPIL, 1938-40. Vol. 9, p. 417.

(6) DENZA, op. cit., p. 147.

Por último hay que señalar que ni la inviolabilidad de la persona - ni la inviolabilidad de los bienes de los agentes diplomáticos pertenecien - tes a las misiones permanentes eximen a éstos de la inspección de su - equipaje personal a la entrada o a la salida del territorio del Estado huésped siempre y cuando dicha inspección se realice con las garantías necesarias. La inspección del equipaje personal del agente diplomático solamente puede tener por objeto, según el párrafo segundo del artículo 35 de la Convención, la comprobación de que dicho equipaje contiene únicamente - objetos destinados al uso oficial de la misión o al uso personal del agente diplomático, y que no contiene objetos cuya exportación o importación esté prohibida. Además la inspección solo puede efectuarse en presencia del - agente diplomático o de su representante autorizado.

B) El deber de protección del Estado huésped,

Como hemos visto más arriba, la inviolabilidad de los miembros - del personal diplomático de las misiones permanentes comprende tanto la inmunidad de éstos respecto a cualquier medida coercitiva que pudieran - tomar las autoridades del Estado huésped como el deber del Estado huésped de proteger de forma especial a los miembros del personal diplomático pertenecientes a las misiones permanentes.

Dentro del deber del Estado huésped de proteger de forma especial a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes hay que distinguir entre el aspecto material de la protección y el aspecto jurídico de la misma. A estas dos cuestiones dedicaremos los apartados siguientes.

a) El aspecto material del deber de protección.

La inmunidad de coerción de los miembros del personal diplomático supone para el Estado huésped una obligación "de no hacer", es decir un deber de abstenerse de tomar cualquier medida coercitiva respec-

to a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, - su residencia y sus bienes. Por el contrario, el deber de protección supone para el Estado huésped una obligación "de hacer", es decir, un deber de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que nadie pueda impedir u obstaculizar el libre desarrollo de las actividades de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes. El Estado huésped está obligado, por tanto, a impedir que la actividad de dichos agentes diplomáticos pueda ser dificultada u imposibilitada.

La negligencia del Estado huésped en el cumplimiento de su deber de protección de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes da lugar a la responsabilidad internacional del Estado huésped. Sin embargo el Estado huésped no es responsable internacionalmente por cualquier clase de atentado contra la inviolabilidad de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes si ha empleado la diligencia debida en el cumplimiento de su deber de protección. Dicho con otras palabras, la responsabilidad del Estado huésped no es objetiva.

La falta de caracter objetivo de la responsabilidad del Estado respecto de los posibles atentados contra los agentes diplomáticos que recibe se puso de manifiesto en la Conferencia de Viena de 1961. El texto propuesto por la CDI que regulaba el deber de protección del Estado receptor - respecto de los agentes diplomáticos decía :

" La persona del agente diplomático es inviolable. Este no puede - ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado recipiente le tratará con el debido respeto y tomará las medidas prudenciales para - impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad "- (7).

Este texto no satisfizo a la delegación de Bélgica, que consideraba que no protegía suficientemente a los agentes diplomáticos. Por esta razón
.../...

(7) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de - artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958, - Vol.II, p. 105.

.../...

la delegación de Bélgica propuso que en el texto del proyecto las palabras "medidas prudenciales" fueran sustituidas por "toda clase de medidas" - (8).

De haberse adoptado la enmienda belga, la responsabilidad del Estado receptor por los atentados cometidos contra los agentes diplomáticos hubiera adquirido un carácter objetivo. Sin embargo, la enmienda belga fué por fin rechazada por la Conferencia de Viena de 1961 (9). Explicando su voto el representante del Reino Unido explicó que había votado contra la enmienda belga porque :

"la supresión de la palabra prudenciales daría un alcance ilimitado al artículo e impondría a los Estados receptores una obligación difícil de cumplir" (10).

El texto definitivo del artículo 29 de la Convención de Viena de 1961 que regula el deber de protección del Estado receptor es el siguiente :

"La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad".

En la Conferencia de Viena de 1975 la cuestión de la responsabilidad "objetiva" del Estado huésped no llegó a plantearse, siguiendo la Conferencia las líneas trazadas por la Convención de Viena de 1961. En efecto el texto del artículo 28 de la Convención de Viena de 1975 es el siguiente :

(8) Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, p. 32 (Documento: A/CONF. - 20/C.1/L.214).

(9) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 165.

(10) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 165.

" La persona del jefe de misión, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión, es inviolable. Ni el jefe de misión ni esos miembros podrán ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, así como para procesar y castigar a las personas que hayan cometido tales atentados ".

De la misma forma que la responsabilidad del Estado receptor, la responsabilidad del Estado huésped por los atentados cometidos contra los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no es objetiva. El Estado huésped está obligado a " tomar todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado " contra dichos agentes diplomáticos. Cuáles deban ser " las medidas adecuadas ", es algo que dependerá naturalmente de las circunstancias de cada caso.

b) El aspecto jurídico del deber de protección.

En el caso de que cualquier persona atente contra la inviolabilidad de un agente diplomático perteneciente a una misión permanente, el Estado huésped está obligado a tomar todas las medidas necesarias para detener al culpable, o a los culpables del acto cometido contra dicho agente diplomático. Si los culpables de los actos cometidos contra dicho agente diplomático son detenidos, el Estado huésped está obligado a entregarlos a la justicia para que sean juzgados conforme a las leyes del Estado huésped.

Dicha obligación del Estado huésped es una regla consuetudinaria que ha sido recogida en la Convención de 1975. En efecto, el artículo 28 de esta Convención obliga expresamente al Estado huésped a " procesar y castigar a las personas " que hayan cometido atentados contra dichos agentes diplomáticos.

La Convención de Viena de 1961 no contiene una norma semejante.

Sin embargo no cabe duda que existe una regla consuetudinaria que obliga a los Estados a perseguir y castigar a los culpables de actos cometidos contra los agentes diplomáticos. De todas formas, creemos que es oportuno que se haya subrayado esta obligación, incorporandola al texto de la Convención de Viena de 1975.

Los atentados cometidos contra un agente diplomático son castigados por todos los ordenamientos jurídicos internos, cuando menos como un delito contra las personas. Sin embargo, en la mayoría de los ordenamientos, existe una cualificación especial que agrava la pena correspondiente a los delitos cometidos contra los agentes diplomáticos. A pesar de que esta cualificación especial de dichos delitos exista en numerosos ordenamientos, nunca se ha considerado que los Estados estén obligados por el Derecho internacional a introducir en su ordenamiento esta figura delictiva. Sin embargo recientemente, y como resultado de los numerosos atentados contra la vida sufridos por los agentes diplomáticos, se ha tratado de crear una obligación internacional de introducir en los ordenamientos internos un tipo delictivo especial que comprende los atentados cometidos contra los agentes diplomáticos. Así la " Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional ", - concluída en el marco de la OEA, obliga a los Estados parte a procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos delictivos cometidos contra los agentes diplomáticos. Con el mismo objetivo y dentro del marco de las Naciones Unidas se concluyó la " Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos " que obliga a los Estados parte a introducir un tipo delictivo especial para los delitos cometidos contra los agentes diplomáticos.

No entraremos aquí en el estudio del articulado de estas dos Convenciones al efecto de no repetir lo dicho en el capítulo anterior.

2. La inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución del personal diplomático.

Una vez estudiada la inviolabilidad, y siguiendo un orden de mayor a menor importancia, nos corresponde estudiar ahora la inmunidad de jurisdicción del personal diplomático de las misiones permanentes. Unido al problema de la inmunidad de jurisdicción, se plantea el problema de la inmunidad de ejecución, por lo que hemos creído conveniente agrupar el estudio de ambas cuestiones a las que dedicaremos los dos apartados siguientes.

A) La inmunidad de jurisdicción.

En el presente apartado nos corresponde estudiar la inmunidad de jurisdicción de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, respecto de los órganos judiciales del Estado huésped de la Organización internacional ante la que dichos agentes diplomáticos están acreditados. Dicho con otras palabras, nos corresponde estudiar en este apartado la posibilidad de que los tribunales del Estado huésped puedan conocer y decidir respecto de las acciones procesales dirigidas contra un agente diplomático perteneciente a una misión permanente.

Para poder determinar con precisión el alcance de la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos pertenecientes a una misión permanente es necesario que nos planteemos cual es la situación jurídica de dichos agentes diplomáticos.

El agente diplomático adscrito a una misión permanente es una persona designada por el Estado que envía para realizar actividades de representación de dichos Estados y de gestión de sus intereses ante la Organización internacional ante la que ha sido acreditado. De esta situación resulta que el agente diplomático perteneciente a una misión permanente actúa, como representante de su Estado, en relaciones jurídicas regidas por el Derecho internacional. Además el agente diplomático, dada su re-

lación de dependencia respecto al Estado que envía, participa en relaciones jurídico-administrativas regidas por el Derecho interno del Estado que envía. Por último, y dada su residencia permanente en el territorio del Estado huésped, el agente diplomático puede participar en relaciones jurídicas regidas por el Derecho interno del Estado huésped.

La inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no se plantea respecto a los actos ejecutados por éstos regidos por el Derecho internacional o por el Derecho interno del Estado que envía. Los tribunales del Estado huésped no pueden declararse competentes respecto a los contenciosos planteados respecto de relaciones jurídicas que son ajenas a la ley del foro. Realmente en estos casos no puede hablarse de inmunidad de jurisdicción respecto de los tribunales del Estado huésped, sino de incompetencia de éstos para conocer sobre relaciones jurídicas regidas por otros ordenamientos jurídicos.

De la misma forma que la inmunidad de jurisdicción de las misiones permanentes, la de los agentes diplomáticos pertenecientes a éstas se plantea únicamente respecto a los actos realizados por dichos agentes que estén regidos por el Derecho interno del Estado huésped. Sin embargo, si en el caso de la misión permanente solo cabe hablar de la inmunidad de jurisdicción civil respecto de los agentes diplomáticos hay que distinguir entre la inmunidad de jurisdicción civil, penal y administrativa.

Las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades no conceden a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes la inmunidad de jurisdicción civil. La sección 11, a) de la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas concede a dichos agentes :

" Inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal, y respecto a todos sus actos y expresiones, ya sean orales o escritas, en tanto se encuentren desempeñando sus funciones en

dicha capacidad, de inmunidad contra todo procedimiento judicial "(11).

Si las Convenciones generales no conceden la inmunidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes, no sucede lo mismo con los Acuerdos de sede que, ya sea por remisión al " estatuto diplomático " o directamente, conceden a dichos agentes la - inmunidad de jurisdicción sin condiciones (12). Solamente en dos casos los Acuerdos de sede no conceden dicha inmunidad de jurisdicción. Así el - Acuerdo de sede concluido entre Canadá y la OACI y el Acuerdo de sede entre Suiza y las Naciones Unidas se limitan a conceder a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes la inmunidad de jurisdicción por los actos realizados en el desempeño de sus funciones (13). Sin embargo uno de estos dos Acuerdos, el concluido entre Suiza y las Na - ciones Unidas, ha sido modificado en lo que respecta a la inmunidad de - jurisdicción por una declaración del Estado huésped, en este caso Suiza. En efecto, mediante su " Decisión de 31 de marzo de 1948 ", el Consejo federal suizo declaró que los jefes de las misiones permanentes así como el resto del personal de dichas misiones gozaría de los mismos privilegios e inmunidades que el personal perteneciente a las misiones diplomáticas - acreditadas en Berna (14).

Como vemos, los Acuerdos de sede conceden en general la inmu - nidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misio - nes permanentes. La excepción del Acuerdo entre Canadá y la OACI de

.../...

-
- (11) Ver igualmente la sección 13,a) de la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados y la sección 12,a) del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la - AIEA.
- (12) Al referirnos a los Acuerdos de sede en general nos referimos unicamente a los Acuerdos relativos a la sede principal de las Organi - zaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas y no a los Acuerdos relativos a las sedes secundarias que en la mayoría - de los casos no regulan el estatuto de los representantes de los Es - tados.
- (13) Existe además otro Acuerdo de sede, el Acuerdo concluido entre la - OCMI y el Reino Unido que no regula ni en un sentido ni en otro el estatuto de los representantes de los Estados miembros.
- (14) Naciones Unidas, Legislative texts and treaty provisions, Vol. I, p. 92.

.../...

be ser considerada como un anacronismo que no tiene sentido en la actualidad.

Siguiendo la línea trazada por los Acuerdos de sede, la Convención de Viena de 1975 regula la inmunidad de jurisdicción de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes de forma semejante a como lo hace la Convención de Viena de 1961 respecto a los agentes diplomáticos. El artículo 30 de la Convención de Viena de 1975 dice en su párrafo primero :

" 1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión gozarán de la inmunidad de jurisdicción penal del Estado huésped "

El artículo 30 de la Convención concede también a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa. Por esta razón, las autoridades administrativas del Estado huésped no pueden tomar ninguna decisión de naturaleza coercitiva respecto a dichos agentes diplomáticos, y los órganos judiciales del Estado huésped no pueden conocer respecto a las acciones procesales de naturaleza civil dirigidas contra los mismos. Sin embargo, la inmunidad de jurisdicción civil y la inmunidad de jurisdicción administrativa, a diferencia de la inmunidad de jurisdicción penal, no son absolutas, pues existen excepciones a las mismas. En efecto el artículo 30 de la Convención dice en su párrafo primero :

" 1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped, excepto si se trata de :

a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se

trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión ;

b) una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatorio;

c) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado huésped, fuera de sus funciones oficiales".

De acuerdo con este artículo, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no gozan de inmunidad de jurisdicción civil respecto de las acciones reales relativas a bienes inmuebles radicados en el territorio del Estado huésped a menos que dicho inmueble sea utilizado como local de la misión permanente. Tampoco goza el agente diplomático de inmunidad de jurisdicción respecto a las acciones sucesorias - en las que pueda figurar a título privado como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatorio. Ambas excepciones son lógicas, pues su no existencia atentaría contra la soberanía del Estado huésped, sin que sufran la libertad y la independencia de las actividades de los agentes diplomáticos por la falta de inmunidad de jurisdicción en estos casos.

El artículo 30 de la Convención contiene una tercera excepción a la regla de la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa. En efecto, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no gozan de inmunidad respecto a las acciones referentes a las actividades profesionales o comerciales ejercidas por dichos agentes fuera de sus funciones oficiales. Dicha excepción es procedente, pues no sería lógico que - un agente diplomático se beneficiase de su inmunidad de jurisdicción para ejercer el comercio de forma ventajosa. Tengase en cuenta además que - según el artículo 39 de la Convención, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes tienen prohibido el ejercicio de cualquier actividad comercial o profesional en provecho propio.

Aparte de las tres excepciones a la inmunidad de jurisdicción contenidas en el artículo 30 de la Convención, el artículo 31 de la misma - contiene una cuarta. En efecto el artículo 31, párrafo tercero, dice :

" 3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 - del presente artículo entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvencción directamente ligada a la demanda principal ".

Esta excepción se basa en que no sería lógico que un agente diplomático pudiera entablar una acción judicial contra otra persona y que ésta no pudiera defenderse debidamente interponiendo una acción reconven - cional " directamente ligada a la demanda principal ".

Aparte de estas cuatro excepciones a la inmunidad de jurisdicción, diversos Estados, así como la CDI, han tratado de introducir una quinta excepción referente a las acciones sobre daños y perjuicios ocasionados por los accidentes de tráfico. Así, en la Conferencia de Viena de 1961 la delegación de los Países Bajos presentó una enmienda que decía así :

" La inmunidad de jurisdicción civil, en la medida en que se refie - ra a una acción por daños y perjuicios, con motivo de un accidente de - circulación ocurrido en el Estado receptor, en la cual sea parte el agen - te diplomático, quedará sujeta a la condición de que pueda entablar se di - rectamente dicha acción contra una compañía de seguros ante un tribunal - del Estado Receptor " (15).

La enmienda holandesa fué rechazada por la Conferencia (16). Sin embargo la CDI trató de recoger la idea expresada en ella en su proyec - to de artículos sobre las relaciones entre Estados y Organizaciones inter -
.../...

(15) Conferencia de Viena de 1961, Vol. II, p. 29 (Documento:A/CONF. - 20/C.1/L.186/Rev.1).

(16) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 178.

nacionales. En efecto, según el artículo 30 de dicho proyecto, los agentes diplomáticos no gozarían de inmunidad de jurisdicción respecto a :

" una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo utilizado por la persona de que se trate fuera del ejercicio de las funciones de la misión y siempre que esos daños no puedan ser reparados mediante un seguro " (17).

En la Conferencia de Viena de 1975 algunas delegaciones manifestaron su desacuerdo con la propuesta de la CDI. Así las delegaciones de España y de Pakistán presentaron sendas enmiendas pidiendo que fuera suprimido el inciso "d" del párrafo primero del artículo 30 del proyecto de la CDI (18). Sin embargo la mayoría de las delegaciones consideraron que la propuesta de la CDI era aceptable, e incluso la Comisión plenaria aceptó una enmienda del Reino Unido (19) que hizo que el texto aprobado por dicha Comisión plenaria (20) fuera más lejos que el propuesto por la CDI. El texto definitivo del inciso "d" del párrafo primero del artículo 30 negaba la inmunidad de jurisdicción a los agentes diplomáticos respecto a :

" una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo, incluido un buque o una aeronave, utilizado por la persona de que se trate o de su propiedad " (21).

La modificación del texto propuesto por la CDI fué considerada como inaceptable por algunas delegaciones. Por esta razón, la delegación de Brasil pidió en el Plenario de la Conferencia que se votasen separadamente el inciso "d" del párrafo primero y el resto del texto del artículo .../...

(17) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 327.

(18) Conferencia, Vol. II, p. 105 (Documentos:A/CONF.67/C.1/L.56 y A/CONF.67/C.1/L.69).

(19) Conferencia, Vol. II, p. 105 (Documento:A/CONF.67/C.1/L.61).

(20) Conferencia, Vol. I, p. 179.

(21) Conferencia, Vol. II, p. 105.

lo 30 (22). El resultado fué que, al no obtener la mayoría necesaria de dos tercios, el inciso "d" del párrafo primero del artículo 30 fué suprimido (23). La Conferencia aprobó, sin embargo un nuevo artículo propuesto por Bélgica, que obliga a los miembros de las misiones permanentes a asegurar convenientemente sus vehículos. En efecto, el artículo 78 de la Convención dice :

" Los miembros de la misión, de la delegación o de la delegación de observación deberán cumplir todas las obligaciones que impongan las leyes y reglamentos del Estado huésped relativas al seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros por cualquier vehículo, buque o aeronave utilizado por la persona de que se trate o de su propiedad ".

La aprobación de este artículo puede ser considerada como un mal menor. Sin embargo, hubiera sido preferible aprobar el texto propuesto por la CDI, que era realmente un precepto equilibrado y que probablemente hubiera sido aceptado por la Conferencia si no hubiese sido modificado incluyendo la enmienda del Reino Unido (24).

Por último, y antes de terminar este apartado sobre la inmunidad de jurisdicción, debemos hacer algunas precisiones a propósito de ésta. - En primer lugar debemos precisar que la inmunidad de jurisdicción incluye también la dispensa de la obligación de testificar (25). Ello no quiere decir que si la prestación de testimonio no dificulta las actividades oficiales del agente diplomático, éste no deba estar dispuesto a prestar dicho testimonio. Sin embargo, no sería correcto que un juez se dirigiera directamente a un agente diplomático pidiéndole que testifique, por lo que normalmente esta petición se cursa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado huésped.

(22) Conferencia, Vol. I, p. 21.

(23) Conferencia, Vol. I, p. 22.

(24) Conferencia, Vol. II, p. 105 (Documento:A/CONF.67/C.1/L.61).

(25) Ver artículo 30, párrafo primero.

Otra precisión que debemos hacer respecto a la inmunidad de jurisdicción es la de la duración de ésta. El agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción, según dice el artículo 38 de la Convención, desde su entrada en el territorio del Estado huésped o desde que se haya notificado su nombramiento a dicho Estado en el caso de que el agente diplomático se encontrara ya sobre el territorio del Estado huésped. La inmunidad de jurisdicción dura hasta la salida definitiva del agente diplomático del territorio del Estado huésped una vez que han finalizado sus funciones o cuando una vez terminadas éstas, ha expirado un plazo razonable de tiempo. Sin embargo el artículo 38 de la Convención hace una matización respecto a la inmunidad de jurisdicción relativa a los actos realizados por el agente diplomático en el ejercicio de sus funciones oficiales. El artículo 38, párrafo segundo de la Convención, dice a este respecto :

" 2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del territorio o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión ".

Como hemos dicho más arriba no cabe hablar de inmunidad de jurisdicción respecto a los actos de los miembros de las misiones permanentes realizados en el ejercicio de las funciones de la misión. Respecto a este tipo de actos, los tribunales del Estado huésped son incompetentes y su incompetencia no desaparece por el hecho de que el agente diplomático haya sido cesado en sus funciones. De todas formas nos parece conveniente que esta idea quede reflejada en la Convención, aunque sea a costa del error doctrinal de admitir una inmunidad de jurisdicción ad eternum, en vez de haber declarado la incompetencia de los tribunales del Estado huésped para juzgar sobre relaciones jurídicas regidas por otros ordenamientos jurídicos.

Una última precisión nos debería llevar a plantearnos el problema de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, no trataremos de ello aquí, pues creemos que el estudio de esta figura jurídica encaja mejor dentro del estudio general sobre los medios para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático, que realizaremos al final de este capítulo.

B) La inmunidad de ejecución.

El artículo 30 de la Convención de Viena de 1975, del mismo modo que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, distingue entre la inmunidad de jurisdicción de los miembros del personal diplomático de la misión y la inmunidad de ejecución de los mismos.

La inmunidad de jurisdicción impide que los tribunales del Estado huésped dicten sentencia respecto a las acciones procesales dirigidas contra los agentes diplomáticos adscritos a las misiones permanentes. Además, la inmunidad de jurisdicción impide que las autoridades administrativas del Estado huésped tomen decisiones de naturaleza coercitiva respecto a dichos agentes diplomáticos. Por el contrario, la inmunidad de ejecución impide que dichas sentencias judiciales o dichas decisiones administrativas, en el caso de que se produzcan, puedan ser ejecutadas.

El artículo 30 de la Convención de Viena de 1975 concede a los agentes diplomáticos perteneciente a las misiones permanentes la inmunidad de ejecución. Sin embargo esta inmunidad de ejecución no es absoluta, pues el mismo artículo 30 admite excepciones a la misma. En efecto - el párrafo segundo del artículo 30 dice :

" 2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en-

los casos previstos en los apartados a), b) y c) del presente artículo, y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia ".

Las excepciones admitidas son las que se refieren a la ejecución de las sentencias, o de las decisiones administrativas, relativas a las acciones reales sobre bienes inmuebles, acciones sucesorias y acciones referentes a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el territorio del Estado huésped. El artículo 30 no incluye sin embargo entre las excepciones a la inmunidad de ejecución los casos en que el agente diplomático no goza de inmunidad de jurisdicción por tratarse de una acción reconvencional.

La ejecución de una sentencia contra un agente diplomático, en los casos en que es posible, debe hacerse sin que sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia, pues en este caso la actividad oficial del agente diplomático se vería imposibilitada, lo que implicaría que la excepción a la inmunidad de jurisdicción no sería admisible.

Por último debe tenerse en cuenta que la renuncia por parte del Estado que envía a la inmunidad de jurisdicción civil o administrativa del agente diplomático no implica renuncia a la inmunidad de ejecución. El párrafo cuarto del artículo 31 de la Convención dice :

" 4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia ".

Del texto de este párrafo parece deducirse también que la renuncia a la inmunidad penal resulta inimaginable para la Convención. Este punto será examinado convenientemente al final de este capítulo.

3. La inmunidad fiscal y la franquicia arancelaria del personal diplomático.

Como vimos en el capítulo anterior en el Derecho diplomático anterior a la Convención de Viena de 1961 las inmunidades fiscales y aduaneras tanto de la misión como de sus miembros no tenían un carácter de obligatoriedad y eran únicamente concedidas por los Estados por razones de cortesía internacional y sobre la base de la reciprocidad. La entrada en vigor de la Convención de Viena de 1961 supuso una gran evolución en este tema convirtiendo los privilegios fiscales y aduaneros en auténticas inmunidades diplomáticas jurídicamente exigibles a los Estados que sean parte en dicha Convención.

Las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades y los Acuerdos de sede conceden siempre la inmunidad fiscal y la inmunidad aduanera absoluta a las Organizaciones internacionales. Sin embargo dichas Convenciones y Acuerdos de sede no conceden de forma expresa, salvo alguna excepción, la inmunidad fiscal y aduanera a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, limitándose a concederles los privilegios e inmunidades diplomáticos en general. Al no estar incluidas la inmunidad fiscal y aduanera entre los privilegios e inmunidades diplomáticos hasta la entrada en vigor de la Convención de Viena de 1961, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes no tenían hasta dicha fecha base legal para reivindicar las inmunidades fiscal y aduanera. La entrada en vigor de la Convención de 1961 hizo que dichos agentes diplomáticos pudieran exigir jurídicamente la concesión de las inmunidades fiscales y aduaneras reguladas en dicha Convención. La Convención de Viena de 1975 ha venido a confirmar esta tendencia, regulando la inmunidad fiscal y aduanera en los mismos términos que la Convención de Viena de 1961.

Debemos subrayar, como ya lo hicimos en el capítulo anterior, que la concesión de la inmunidad fiscal y aduanera está más justificada en el caso de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanen-

tes que en el caso de los agentes adscritos a las misiones diplomáticas. Hay que tener en cuenta que en las relaciones diplomáticas entre Estados, la existencia recíproca de dos misiones diplomáticas hace que los efectos de la concesión de la inmunidad fiscal y aduanera sean nulos para los Estados que mantienen dichas relaciones, pues dichos Estados son acreditantes y receptores de forma recíproca.

El problema se plantea de forma muy distinta en el caso de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes. Como vimos en el capítulo anterior el Estado huésped de una Organización internacional no tiene derecho a beneficiarse fiscalmente del establecimiento de una Organización internacional sobre su territorio. Debe tenerse en cuenta que la presencia de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes en el territorio del Estado huésped está motivada por el establecimiento de la Organización internacional ante la que están acreditadas en dicho territorio. De esta presencia obligada no debe deducirse que aquellos funcionarios que representan a su Estado ante una Organización internacional puedan ser convertidos por el Estado huésped en sujetos fiscales, ni respecto de los impuestos directos ni de los indirectos vigentes en el Estado huésped. Además hay que tener en cuenta que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes, en razón de su residencia en el país huésped, están obligados materialmente a gastar gran parte de su salario en dicho país, lo que supone unos ingresos considerables para la balanza de pagos del Estado huésped.

Por todas las razones anteriores podemos afirmar que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes deberían gozar de una inmunidad fiscal y aduanera absoluta. Debemos reiterar por tanto, como ya lo hicimos más arriba, que la Convención de Viena de 1975 beneficia excesivamente en este punto a los Estados huéspedes.

A) La inmunidad fiscal.

Como hemos visto más arriba, ni las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, ni los Acuerdos de sede, salvo alguna excep -

ción, regulan de forma expresa la inmunidad fiscal de los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes. Dicha inmunidad se ha basado por tanto en la concesión que hacen los acuerdos de sede a dichos agentes diplomáticos de los "privilegios e inmunidades diplomáticos" en general (26).

De acuerdo con la línea marcada por los Acuerdos de sede, la Convención de Viena de 1975 se limita a reproducir respecto a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes las inmunidades fiscales que la Convención de Viena de 1961 concede a los miembros del personal diplomático de las misiones diplomáticas. La técnica utilizada por el artículo 33 de la Convención de 1975, que reproduce el artículo 34 de la Convención de 1961, consiste en conceder al agente diplomático una inmunidad fiscal total, admitiendo sin embargo un gran número de excepciones. En efecto el párrafo primero del artículo 33 dice :

" El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales regionales o municipales, con excepción de".

Las excepciones que admite el artículo 33 de la Convención las agruparemos en tres grupos según se refieran a impuestos directos, impuestos indirectos y tasas.

En lo que se refiere a los impuestos directos el artículo 33 admite en primer lugar los impuestos y gravámenes sobre bienes inmuebles. Tam
.../...

(26) De las tres Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades únicamente la relativa a las Naciones Unidas parece admitir los privilegios fiscales de los representantes de los Estados. En efecto el párrafo "g" de la sección II de dicha Convención concede a los representantes de los Estados :

" aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades, compatibles con lo antedicho, de los cuales gozan los enviados diplomáticos, con la excepción de que no podrán reclamar exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de venta y derechos de consumo.

Un precepto idéntico al anterior se contiene en el párrafo "g" de la sección 9 del Acuerdo de sede de 11 de junio de 1946 concluido entre Suiza y las Naciones Unidas.

.../...

bién admite dicho artículo los impuestos sobre las rentas "que tengan su origen en el Estado huésped" y los impuestos sobre el capital que graven "las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped".

Creemos que no hay nada que objetar al hecho de que las "rentas que tengan su origen en el Estado huésped", ya sean rentas procedentes del trabajo o del capital, sean objeto de tributación en el Estado huésped. Recordemos que el agente diplomático tiene una prohibición general de ejercer actividades lucrativas en el Estado huésped y en caso de que llegue a ejercer dichas actividades no hay razón para que no tribute por los beneficios que de ellas puedan derivarse. Una argumentación semejante cabe hacer respecto al impuesto sobre las rentas del capital.

Si la tributación por las rentas que tengan su origen en el Estado huésped nos parece lógica, no podemos decir lo mismo de los impuestos relativos a los bienes inmuebles. El párrafo "b" del artículo 33 está enunciado en terminos excesivamente generales. Según dicho párrafo los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes no estarán exentos de :

" los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía y para los fines de la misión ".

Creemos que sería lógico que el agente diplomático estuviese obligado a pagar los impuestos que se devengan por la compra y la propiedad de los bienes inmuebles, pero tal como está redactado este párrafo puede suceder que el mero arrendamiento de un inmueble dé lugar a tributación. Además dentro del párrafo "b" del artículo 33, dados sus terminos generales, podría incluirse hasta un impuesto sobre el lujo por el hecho de residir en determinados inmuebles, lo que nos parecería abusivo.

Dentro de las excepciones relativas a los impuestos directos, el artículo 33 incluye también a los impuestos sobre sucesiones. El párrafo "c" del artículo 33 no exime a los agentes diplomáticos del pago de :

" los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped salvo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 38 ".

El párrafo cuarto del artículo 38 dice :

" 4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que forme parte de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del territorio los bienes muebles del fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallen en el Estado huésped por el solo hecho de haber estado presente en ese Estado el causante de la sucesión como miembro de la misión o de la familia de un miembro de la misión ".

Creemos que es lógico que la transmisión de bienes inmuebles, ya sea inter vivos o mortis causa, sea objeto de tributación por parte del Estado en cuyo territorio radiquen dichos inmuebles. Sin embargo, no creemos que deba suceder lo mismo respecto a los bienes muebles, aunque hayan sido adquiridos en el país huésped. Hay que tener en cuenta que la residencia del agente diplomático en el país huésped es una presencia obligada por el hecho del establecimiento de una Organización internacional en dicho país. Por esta razón, nos parece abusivo que el Estado huésped pueda someter a tributación la transmisión mortis causa de los bienes muebles aunque éstos hayan sido adquiridos en el país huésped.

El artículo 33 de la Convención obliga también a los agentes diplomáticos al pago de :

" a) los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluí dos en el precio de las mercaderías o servicios ".

De acuerdo con este precepto, el agente diplomático no estará obligado a pagar los impuestos indirectos sobre las compras que realice cuando el impuesto no vaya "normalmente incluido en el precio". Cabría preguntarse si según este precepto el agente diplomático no está obligado a pagar el impuesto de transmisiones que se devenga con motivo de la compra de un bien inmueble, ya que dicho impuesto no está "normalmente incluido en el precio" de dichos bienes. Sin embargo, dado que el párrafo "b" del artículo 33 somete a tributación sin excepción a "los impuestos y gravámenes sobre bienes inmuebles" parece que si existe la obligación de pagar dichos impuestos. Por esta razón parece que el párrafo "a" del artículo 33 solamente exime al agente diplomático del pago de los impuestos indirectos sobre bienes muebles cuando dichos impuestos no estén "normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios".

Como hemos dicho más arriba, no existe ninguna razón para que el agente diplomático pague los impuestos indirectos establecidos por el Estado huésped. Sin embargo hay que reconocer que en el tráfico mercantil sería muy problemático la concesión de la exención de los impuestos indirectos que están "normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios". A pesar de esta dificultad, creemos que dado el desarrollo actual de los estudios estadísticos, que pueden cifrar con bastante exactitud la cantidad que pagan los miembros de las misiones permanentes en impuestos indirectos, no sería descabellado pretender que el Estado huésped hiciera anualmente una devolución global de los mismos a las misiones permanentes o a la Organización internacional ante la que éstas están acreditadas.

Por último, el artículo 33 somete a tributación las tasas, así como los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos

a bienes inmuebles. El hecho de que las tasas no resulten exentas es lógico en la medida en que retribuyen directamente un servicio prestado. - En cuanto a la no exención de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a los bienes inmuebles, no tenemos nada que objetar dado que, como hemos dicho más arriba, el Estado huésped tiene derecho a no renunciar a la tributación relativa a los bienes inmuebles situados sobre su territorio.

B) La franquicia arancelaria.

El artículo 35 de la Convención dice en su párrafo primero :

" 1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios analogos :

a) de los objetos destinados al uso oficial de la misión ;

b) de los objetos destinados al uso personal del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión, incluidos los efectos destinados a su instalación ".

De acuerdo con este artículo, que reproduce el artículo 36 de la Convención de Viena de 1961, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes pueden importar con franquicia arancelaria todos los objetos que sean destinados a su uso personal.

Debe notarse que el artículo 35 especifica que los bienes importados con franquicia arancelaria tienen que ser destinados al uso personal del agente diplomático. Por esta razón, el agente diplomático tiene la obligación de afectar dichos bienes unicamente a su uso personal, teniendo prohibido el revenderlos o donarlos a otras personas. Precisamente para prevenir que los bienes importados con franquicia sean afectados unicamen

te al uso personal del agente diplomático, o de su familia, el artículo 35 concede al Estado huésped la facultad de dictar leyes y reglamentos sobre la importación con franquicia arancelaria. Estas leyes y reglamentos, aparte de prevenir las formalidades administrativas a las que debe sujetarse la importación con franquicia, pueden determinar que la importación con franquicia no sobrepase los límites de lo que razonablemente puede ser el consumo de un agente diplomático así como el de las personas que integran su hogar.

Cabría preguntarse si, en uso de su facultad de dictar leyes y reglamentos sobre la importación con franquicia, el Estado tiene la facultad de impedir que el agente diplomático pueda importar bienes cuya importación esté prohibida en el Estado huésped. La redacción del artículo 35 no aporta demasiada luz, pues el texto del artículo no especifica qué clases de leyes y reglamentos puede dictar el Estado huésped sobre la importación con franquicia.

Refiriéndose a la importación con franquicia arancelaria por las misiones diplomáticas así como por los agentes diplomáticos, DENZA ha considerado que el Estado receptor tiene derecho a prohibir que las misiones importen bienes cuya importación esté prohibida en dicho Estado. Para sostener esta opinión, DENZA afirma que el agente diplomático está obligado a cumplir las leyes del Estado receptor y que el párrafo segundo del artículo 36 de la Convención de Viena de 1961, al regular la inspección del equipaje del agente diplomático, admite que existen bienes cuya importación u exportación está prohibida.(27).

Refiriéndose también a las misiones diplomáticas, CAHIER ha considerado que respecto a la facultad del Estado receptor de prohibir la entrada en el país de los bienes cuya importación esté prohibida, hay que distinguir entre los bienes cuya importación "se halle prohibida por razo -
.../...

(27) DENZA. op. cit., p. 214.

.../...

nes de orden estrictamente local " y los bienes cuya importación " sea objeto de reprobación general por parte de los Estados ". De acuerdo con esta distinción el Estado receptor, o el Estado huésped en nuestro caso, podría prohibir la importación de la segunda clase de bienes, pero no de la primera (28). De esta opinión parece ser la CDI que, en su comentario al proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, afirma :

" Al formular la excepción (se refiere a la posibilidad de la inspección del equipaje del agente diplomático), la Comisión ha hecho alusión no sólo a los objetos a los que la exención de derechos de aduana no se aplica excepcionalmente, sino también a los objetos cuya importación u exportación esté prohibida por la legislación del Estado recipiente, pero sin querer sugerir que se menoscabe el trato que se da de ordinario a los objetos destinados al uso personal del agente diplomático " (29).

Creemos que la opinión de la CDI es acertada y que es aplicable al caso de las misiones permanentes. No cabe duda de que el Estado huésped tiene la facultad de prohibir por razones de orden público la importación de ciertos bienes. Sin embargo, también es cierto que el Estado huésped tiene la obligación de permitir que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes puedan llevar en el país huésped una vida normal, sin tener que sujetarse a las particularidades de dicho país.

Por último el artículo 35 admite que las autoridades aduaneras puedan inspeccionar el equipaje personal del agente diplomático. Por supuesto que la inspección es una medida que sólo debe tomarse cuando existan motivos fundados para suponer que el equipaje del agente diplomático contiene objetos no destinados a su uso personal u objetos cuya importación u exportación esté prohibida por el Estado huésped o sometida a sus re -

.../...

(28) CAHIER, Derecho diplomático, p. 395.

(29) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958, Vol. II, p. 108.

.../...

glamentos de cuarentena. Además la inspección del equipaje personal del agente diplomático solamente puede realizarse en presencia de éste o de su representante autorizado.

4. Otros privilegios del personal diplomático.

Además de la inviolabilidad, de la inmunidad de jurisdicción y de los privilegios fiscales y aduaneros, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes gozan de una serie de inmunidades y privilegios que, aunque aparentemente tengan menos importancia, son igualmente necesarios para garantizar la libertad y la independencia de su actividad respecto de y en la Organización internacional ante la que están acreditados.

Dentro de esta categoría de privilegios e inmunidades, agrupados de forma residual, vamos a estudiar las facilidades de residencia, la exención de prestaciones personales, la exención de la aplicación de las leyes relativas a la seguridad social y a la adquisición de la nacionalidad, la libertad de circulación y, por último los privilegios e inmunidades diplomáticos sobre el territorio de un tercer Estado. Al estudio de estos problemas dedicaremos los apartados siguientes.

A) Las facilidades de entrada y salida en el Estado huésped.

El establecimiento de una Organización internacional sobre el territorio de un Estado obliga a éste a permitir el desarrollo de las actividades de dicha Organización internacional. Ello implica para el Estado huésped la obligación de permitir la entrada en su territorio de los representantes de los distintos Estados ante la Organización internacional. Tal obligación está recogida por las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades, así como en numerosos Acuerdos de sede. Así el párrafo "d" de la sección II de la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, concede a los representantes de los Estados :

" exención, con respecto a los representantes y sus esposas, de toda restricción de inmigración y registro de extranjeros y de todo servicio de carácter nacional en el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones ".

Igualmente la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados dice, en su sección 13, párrafo "d" que los representantes de los Estados gozarán de :

" Exención para ellos mismos y para sus cónyuges de toda medida restrictiva en materia de inmigración, de las formalidades de registro de extranjeros y de las obligaciones relativas al servicio nacional en los países que visiten o por los cuales transiten en el ejercicio de sus funciones".

La Convención de 1975 ha recogido esta norma en el artículo 79 - cuyo párrafo primero dice :

" 1. El Estado huésped deberá permitir la entrada en su territorio:

a) a los miembros de la misión y a los miembros de sus familias - que formen parte de sus respectivas casas ".

Normalmente los miembros de las misiones permanentes no necesitarán un visado de entrada para entrar en el país huésped. Sin embargo, en algunos países se sigue exigiendo dicha formalidad. Por esta razón el artículo 79 ha previsto en su párrafo segundo lo siguiente :

" 2. Los visados, cuando fueren necesarios, serán concedidos a las personas mencionadas en el párrafo 1 con la mayor rapidez posible".

De la misma forma que el Estado huésped tiene la obligación de - permitir la entrada en su territorio a los miembros de las misiones permanentes, el Estado huésped tiene también la obligación de permitir, e - incluso facilitar, su salida del mismo. Esta obligación está prevista en el

artículo 80 de la Convención cuyo texto dice :

" El Estado huésped deberá, si se le solicita dar facilidades para-
que las personas que gocen de privilegios e inmunidades y no sean nacio-
nales del Estado huésped, así como los miembros de sus familias, sea -
cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio ".

Hay que pensar que normalmente los miembros de las misiones per-
manentes no tendrán ninguna dificultad para abandonar el país huésped. -
Sin embargo en circunstancias especiales pueden presentarse dificultades-
para dicha salida. Por esta razón el artículo 80 ha previsto que la obliga-
ción del Estado huésped de facilitar la salida de su territorio a los miem-
bros de las misiones permanentes solo toma efecto cuando así se le soli-
cite expresamente.

La obligación del Estado huésped de facilitar la salida se refiere -
unicamente a los miembros de las misiones permanentes que no tienen la
nacionalidad del Estado huésped. Respecto a los miembros de las misio-
nes permanentes que tienen la nacionalidad del Estado huésped, éste no -
tienen ninguna obligación de dejarles abandonar su territorio. Esto es ló-
gico, pues, como veremos después, los miembros de las misiones perma-
nentes que poseen la nacionalidad del Estado huésped siguen bajo la juris-
dicción de este Estado y su estatuto privilegiado es reducidísimo. Sin em-
bargo el Estado huésped si está obligado a dejar salir de su territorio, e
incluso facilitar la partida, de los familiares de los miembros de las misio-
nes permanentes aunque aquéllos posean la nacionalidad del Estado hués-
ped. Esta disposición está pensada para el caso de que un miembro de -
una misión permanente contraiga matrimonio con una persona que tenga la
nacionalidad del Estado huésped.

Cabría reprochar al artículo 80 de la Convención su falta de con-
creción respecto a cuáles son las obligaciones del Estado huésped en ca-
so de que un miembro de una misión permanente solicite su ayuda para -

abandonar el país huésped. En este sentido el artículo 44 de la Convención de 1961 sobre las relaciones diplomáticas, además de prever la obligación general de ayuda para la salida del territorio del Estado receptor, prevé también que dicho Estado

" deberá poner a su disposición, si fuere necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes ".

B) Las facilidades de residencia.

Las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades prevén que los representantes de los Estados no estarán sujetos a las formalidades de inmigración y registro de extranjeros. Los representantes de los Estados no necesitan tampoco la obtención de un permiso de residencia para permanecer en el país huésped. La única obligación a este respecto es la contenida en el artículo 15 de la Convención de 1975, que obliga al Estado que envía a notificar a la Organización internacional y a ésta al Estado huésped :

... " el nombramiento, cargo y orden de precedencia de los miembros de la misión, su llegada, su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión, y los demás cambios concernientes a su condición - que puedan ocurrir durante su servicio en la misión ".

Además de eximirles de las formalidades de inmigración y policía de extranjeros, el Estado huésped esta obligado a hacer posible que los miembros de las misiones permanentes puedan vivir con normalidad en el país huésped. De ahí el deber de protección, ya estudiado, del Estado huésped respecto de los miembros de las misiones permanentes, así como la obligación, contenida en el artículo 28 de la Convención, de tratarles con el debido respeto. La Convención ha previsto también la obligación del Estado huésped de facilitar un alojamiento adecuado a los miembros de las misiones permanentes.

En situaciones de normalidad, debe ser la misión o el propio agente diplomático el que se preocupe de buscar su alojamiento. Sin embargo cuando el arrendamiento de un alojamiento adecuado es muy difícil o excesivamente oneroso, el Estado huésped está obligado a prestar su ayuda. - Esta obligación está prevista en el párrafo segundo del artículo 21 de la - Convención cuyo texto dice :

" 2. Cuando sea necesario, el Estado huésped y la Organización - ayudarán también a la misión a obtener en condiciones razonables alojamiento adecuado para sus miembros ".

C) La exención de prestaciones personales.

De la misma forma que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes están exentos de las cargas fiscales vigentes - en el Estado huésped, dichos agentes diplomáticos están exentos también - de las prestaciones personales que pueda exigir el Estado huésped tanto - a sus nacionales como a los residentes en el país huésped.

La razón de esta exención reside en el hecho de la falta de sumi sión de los agentes diplomáticos a la autoridad del Estado huésped. Si - bien es cierto que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes están obligados a cumplir las leyes vigentes en dicho Estado, también es cierto que su presencia en el país huésped depende unicamente de la necesidad del Estado que envía de estar representado ante la Organización internacional que tiene su sede en el país huésped. Por esta - razón el Estado huésped no puede tratar a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes como unos extranjeros normales - a los que puede exigir prestaciones en determinadas circunstancias.

En tiempos normales no suele ser frecuente que los Estados exijan prestaciones personales a las personas que no sean nacionales de dicho - Estado. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como son la gue-

rra o los grandes desastres, es fácil que un Estado necesite exigir cierto tipo de prestaciones tanto a sus nacionales como a cualquier persona que se encuentre en su territorio. Sin embargo no sería lógico que dichas - prestaciones personales pudieran hacerse extensivas a los agentes diplomáticos.

La exención de las prestaciones personales está prevista ya en la Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades. El párrafo "d"- de la sección 11 de la Convención relativa a las Naciones Unidas exime- tanto a los representantes de los Estados como a sus esposas :

" de todo servicio de caracter nacional en el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones " (30).

La Convención de Viena de 1975 ha venido a confirmar esta norma en su artículo 34, que reproduce respecto al personal diplomático adscri- to a las misiones permanentes las mismas normas que el artículo 35 de - la Convención de Viena de 1961 establece respecto al personal diplomático perteneciente a las misiones diplomáticas. El artículo 34 de la Convención de Viena de 1975 dice textualmente :

" El Estado huésped deberá eximir al jefe de misión y a los miembros del personal diplomático de la misión de toda prestación personal, - de todo servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas- militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamien- tos militares ".

El texto de este artículo es suficientemente claro, por lo que no - es necesario que lo comentemos con detalle. Digamos unicamente que da da la generalidad de sus términos, el Estado huésped no puede imponer- ninguna clase de prestaciones personales a los miembros del personal di
.../...

(30) Ver igualmente el párrafo "d" de la sección 13 de la Convención ge- neral relativa a los Organismos especializados.

.../...

plomático de las misiones permanentes ya sea en tiempo de paz o en tiempos de guerra.

D) La exención de la aplicación de la legislación sobre seguridad social.

Respecto a las leyes sobre seguridad social vigentes en el Estado huésped, hay que distinguir entre la posición del agente diplomático como trabajador asalariado al servicio del Estado que envía y la posición del agente diplomático como empleador de personas que trabajan a su servicio o al servicio de la misión.

Propiamente no cabría hablar del agente diplomático en cuanto empleador de personas que trabajan al servicio de la misión permanente, pues en este caso el verdadero empleador es la misión permanente y no el agente diplomático. Sin embargo, la Convención de Viena de 1975, con un criterio erróneo, ha incluido las normas sobre seguridad social aplicables al personal de la misión entre los artículos dedicados al estatuto de los agentes diplomáticos, en vez de hacerlo entre los relativos al estatuto de las misiones permanentes. La razón reside en que la Convención de Viena de 1975, del mismo modo que la Convención de Viena de 1961, ha evitado rozar el tema de la inmunidad de jurisdicción del Estado que necesariamente se plantearía si las obligaciones relativas a la seguridad social se refiriesen a la misión permanente en cuanto tal y no al personal diplomático de las mismas.

En lo que respecta a su situación como trabajador asalariado al servicio del Estado que envía, el agente diplomático está exento de las normas sobre seguridad social aplicables en el Estado huésped. Esta exención está contemplada en el artículo 32, párrafo primero, de la Convención cuyo texto dice :

" 1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo, el jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la-

misión estarán, en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped".

Respecto a la situación del agente diplomático en cuanto empleado, hay que distinguir dos casos según que la persona empleada sea nacional del Estado huésped o tenga en éste su residencia permanente o que por el contrario dicha persona no posea ninguna de esas dos cualidades. En el caso de que la persona empleada por el agente diplomático sea nacional del Estado huésped o tenga en él su residencia permanente, el agente diplomático está obligado, según el párrafo tercero del artículo 32, a cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social del Estado huésped impongan a los empleadores. Por el contrario, si la persona empleada no es nacional del Estado huésped ni tiene en éste su residencia permanente, el agente diplomático no tiene ninguna obligación respecto al régimen de seguridad social del Estado huésped, dado que la persona empleada gozará de la exención de las leyes sobre seguridad social que prevé el artículo 36 de la Convención tanto para el personal administrativo y técnico como para el personal al servicio de la misión.

Respecto al personal al servicio privado de los miembros del personal diplomático de la misión permanente, el régimen es un poco diferente. El artículo 32, párrafo segundo, de la Convención obliga al agente diplomático a cumplir, respecto a las personas a su servicio privado, las leyes vigentes en el Estado huésped sobre seguridad social a no ser que dichas personas :

" a) no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, y

b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado".

Por último, el artículo 32 de la Convención prevé la posibilidad de que las personas que estén exentas de la participación en el régimen de seguridad social del Estado huésped puedan participar en dicho régimen - si tal participación está permitida por el Estado huésped.

E) La exención de la aplicación de la legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad.

El establecimiento de misiones diplomáticas o de misiones permanentes implica que los miembros del personal diplomático pertenecientes a dichas misiones residen durante cierto tiempo de una forma permanente en el territorio del Estado receptor o del Estado huésped. Durante el tiempo en que los agentes diplomáticos residen en el país receptor o en el país huésped, que puede llegar a ser muy prolongado, el agente diplomático puede tener hijos que nazcan sobre el territorio del Estado receptor o del Estado huésped, o puede suceder también que el agente diplomático contraiga matrimonio con una persona que sea nacional del Estado receptor o del Estado huésped. Si el agente diplomático no está sometido a la jurisdicción del Estado receptor o del Estado huésped, no parece lógico que pudiera verse afectado por la legislación de determinados Estados que confieren automáticamente su nacionalidad a las personas que nacen en su territorio o que contraen matrimonio con uno de sus nacionales.

Mientras los privilegios e inmunidades diplomáticos se basaban en la teoría de la extraterritorialidad, el problema de la aplicación de las leyes sobre nacionalidad vigentes en el Estado receptor no se planteaba, - dado que en base a la extraterritorialidad se consideraba que el agente diplomático no había abandonado su país de origen. Sin embargo, una vez que la extraterritorialidad ha sido abandonada como justificación de los privilegios e inmunidades diplomáticos, el problema de la aplicación a los agentes diplomáticos de las leyes sobre nacionalidad vigentes en el Estado receptor o en el Estado huésped puede plantearse de forma efectiva.

En general las diversas legislaciones sobre nacionalidad que se -
atienden al ius soli en la concesión de la nacionalidad o que conceden de -
forma automática su nacionalidad a la persona que contrae matrimonio -
con uno de sus nacionales, suelen hacer una excepción con los agentes -
diplomáticos. Sin embargo en algunos casos dicha excepción no existe. -
Para tratar de solucionar este problema la CDI introdujo un artículo sobre
la adquisición de la nacionalidad en su proyecto de artículos sobre las re -
laciones e inmunidades diplomáticas. El artículo 35 de dicho proyecto de -
cía así :

" Los miembros de la misión que no sean nacionales del Estado -
receptor y los miembros de sus familias que forman parte de su casa no
adquieren la nacionalidad de dicho Estado por el sólo efecto de su legis -
lación " (31).

En la Conferencia de Viena de 1961 numerosas delegaciones consi -
deraron que el artículo propuesto por la CDI era inaceptable. Los argu -
mentos utilizados para oponerse a este artículo no tenía sin embargo dema -
siada consistencia. En primer lugar se aducía que este artículo podía con -
trariar las legislaciones de ciertos Estados. En segundo lugar se argu -
mentaba que la Conferencia no podía pronunciarse sobre un tema de De -
recho internacional privado que debería incluirse en alguna de las conven -
ciones codificadoras de esta rama jurídica.

Como hemos dicho más arriba, los argumentos anteriores no te -
nían excesiva consistencia. Si una norma internacional es necesaria para
el funcionamiento de la Comunidad internacional no se la puede atacar por
el hecho de que contraría las legislaciones de algunos Estados. Por otra
parte, no puede negarse la competencia de una conferencia sobre Derecho
diplomático para establecer normas sobre cuestiones que pueden afectar -
de forma decisiva la existencia de los privilegios e inmunidades diplomáti -
cos.

(31) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958,
Vol. II, p. 108.

Después de numerosas discusiones, la Conferencia rechazó el artículo propuesto por la CDI sobre la adquisición de la nacionalidad (32). Una vez rechazado dicho artículo, la delegación española propuso una solución de compromiso que consistía en incluir dicho artículo en un protocolo de firma facultativa anejo a la Convención. La propuesta española fué aceptada por la Conferencia (33).

La solución de incluir en un protocolo de firma facultativa un precepto que era necesario para el normal desarrollo de las relaciones diplomáticas no nos parece adecuada, pues los Estados cuya legislación atribuye de forma automática su nacionalidad en determinadas circunstancias, optan por la solución fácil de no ratificar el protocolo.

Consciente de que la regla propuesta sobre la adquisición de la nacionalidad era una regla necesaria para el desarrollo normal de las relaciones diplomáticas, la CDI volvió a introducir un artículo sobre la adquisición de nacionalidad en su proyecto sobre las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales. El texto del artículo propuesto por la CDI era el siguiente:

" Los miembros de la misión o la delegación que no sean nacionales del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas o les acompañen, según el caso, no adquirirán la nacionalidad del Estado huésped por el solo efecto de la legislación de ese Estado "(34).

En la Conferencia de Viena de 1975, de la misma forma que en la Conferencia de Viena de 1961, numerosas delegaciones expresaron su oposición a dicho artículo por considerarlo inaceptable. Los argumentos utilizados fueron los mismos que en la Conferencia de Viena de 1961, por lo que no insistiremos en ellos. Sin embargo, y contrariamente a lo que ocu

.../...

(32) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 32.

(33) Conferencia de Viena de 1961, Vol. I, p. 33.

(34) "Proyecto de artículos", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 351.

.../...

rrió en la Conferencia de 1961, la Conferencia de 1975 aprobó el artículo propuesto por la CDI que se convirtió en el artículo 74 de la Convención. Como dice el comentario de la CDI:

" el artículo no excluye la adquisición de la nacionalidad del Estado huésped mediante consentimiento, sino solamente la adquisición automática en virtud de la legislación del Estado huésped "(35).

En efecto no sería lógico que por su permanencia en el país huésped un agente diplomático tuviera que aceptar que un hijo suyo tuviera la nacionalidad del Estado huésped por el hecho de haber nacido en dicho país, o que un agente diplomático que contrajera matrimonio con un nacional del Estado huésped pudiera verse atribuida la nacionalidad de este Estado. El artículo no afecta sin embargo a los familiares del agente diplomático que contraen matrimonio con un súbdito del Estado huésped, - pues se entiende que al contraer matrimonio dejan de formar parte de la casa de dicho agente diplomático.

La aprobación por la Conferencia de Viena de 1975 de un artículo relativo a la adquisición de la nacionalidad nos parece muy adecuada. Hay que notar que, si se echa en falta un artículo semejante en la Convención sobre las relaciones diplomáticas, con mucha más razón debía incluirse este artículo en una Convención llamada a regir el estatuto de las misiones permanentes. Es de destacar que un Estado es libre de crear o no una misión diplomática, pero no sucede lo mismo respecto a las misiones permanentes puesto que la existencia de las Organizaciones internacionales de carácter universal obliga a los Estados a participar en las actividades de éstas si no quieren verse marginados dentro de la Comunidad internacional. Por esta razón, nos parece sorprendente que el delegado de Suiza en la Conferencia de Viena de 1975 manifestase que su delegación no-

.../...

(35) " Proyecto de artículos ",ACDI,1971, Vol.II, primera parte, p. 351.

.../...

podía aceptar las obligaciones que se desprenden de este artículo (36). - Habría que recordar que cuando un Estado se constituye en huésped de una Organización internacional es porque ha prestado su consentimiento - para ello, y este consentimiento implica que dicho Estado huésped no puede interferir el desarrollo de las actividades de la Organización internacional que alberga ni el de las misiones permanentes acreditadas ante dicha Organización internacional.

F) La libertad de circulación.

En las relaciones diplomáticas entre Estados, la libertad de circulación de los agentes diplomáticos por el territorio del Estado receptor - está considerada como un derecho absolutamente necesario para poder - llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas las misiones diplomáticas. Una de las funciones primordiales del establecimiento de una misión diplomática es la de asegurar a los órganos políticos del Estado acreditante un conocimiento profundo del país receptor sobre el que pueda basarse la política del Estado que envía respecto al Estado receptor. Para poder llegar a adquirir este conocimiento profundo del país receptor no cabe duda que los agentes diplomáticos necesitan tener una total libertad de movimientos dentro del citado país.

La libertad de movimientos de los agentes diplomáticos en el país receptor está garantizada por el artículo 26 de la Convención de Viena - sobre las relaciones diplomáticas. Dicho artículo dice textualmente:

" Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional, el - Estado receptor garantizará a todos los miembros de la misión la libertad de circulación y de tránsito por su territorio ".

Se podría reprochar a este artículo la falta de concreción sobre - la extensión que pueden llegar a tomar las leyes del Estado receptor so-

.../...

(36) Conferencia, Vol.I, p.40.

.../...

bre las zonas de acceso prohibido. Sin embargo, el comentario de la - CDI sobre dicho artículo contiene un criterio interpretativo que puede ser válido. En dicho comentario se afirma que:

" la creación de zonas prohibidas no debe hacerse de modo que - vuelva ilusoria la libertad de tránsito y de circulación "(37).

El hecho de que la Convención de Viena de 1961 garantice a los - agentes diplomáticos la libertad de circulación por el territorio del Esta - do receptor no ha impedido que en determinadas circunstancias algunos - Estados hayan introducido limitaciones a la libertad de movimientos de los agentes diplomáticos contrarias al espíritu y a la letra del artículo 26 de dicha Convención. En este caso, parece lícito afirmar que el Estado a - cuyos agentes diplomáticos se les haya restringido indebidamente la liber - tad de movimientos en el territorio de un Estado receptor puede imponer, en base a la reciprocidad, a los agentes diplomáticos de este Estado acre - ditados ante él las mismas limitaciones. Tengase en cuenta que aunque - la Convención de Viena de 1961 prohíbe la discriminación, el artículo 47 - de la misma dice que:

" no se considerará como discriminatorio:

a) que el Estado receptor aplique un criterio restrictivo cualquier disposición de la presente Convención, porque con tal criterio haya sido aplicada a su misión en el Estado acreditante ".

Si la libertad de movimientos por el país receptor es un privilegio necesario para los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones di - plomáticas, no sucede lo mismo respecto a los agentes diplomáticos per - tenecientes a las misiones especiales. Las misiones especiales son misio - nes enviadas por un Estado para negociar con otro Estado sobre alguna

.../...

(37) Naciones Unidas, Comisión de Derecho Internacional, "Proyecto de - artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958 - Vol. II, p. 104.

.../...

cuestión concreta. Además, las misiones especiales tienen un carácter temporal. Por estas razones, las misiones especiales no necesitan los mismos medios de acción que las misiones diplomáticas, por lo que la Convención sobre las misiones especiales concede a los miembros de éstas la libertad de circulación por el país receptor únicamente " en la medida necesaria para el desempeño de las funciones de la misión especial "(38).

Al tratar de la libertad de movimientos dentro del país huésped de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes, la CDI consideró que, como en otras ocasiones, debía introducir en su proyecto de artículos sobre las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales una regla similar a la del artículo 26 de la Convención sobre las relaciones diplomáticas. En base al mismo razonamiento, la CDI introdujo también entre los artículos dedicados a las delegaciones una norma relativa al personal de éstas semejante al artículo 27 de la Convención sobre las misiones especiales.

En la Conferencia de Viena de 1975 algunas delegaciones manifestaron sus reservas con esta equiparación entre el estatuto de los agentes pertenecientes a las misiones diplomáticas y el de los agentes pertenecientes a las misiones permanentes. El delegado de Suiza manifestó en la Conferencia que:

" su país jamás ha introducido la menor restricción a la libertad de circulación de los miembros de las misiones permanentes en Ginebra... y que no se propone en absoluto hacerlo. Sin embargo, estima que los miembros de las misiones permanentes, al no estar acreditados ante el Estado huésped, no tienen necesidad de poseer un conocimiento global del país y que, para el desempeño de sus funciones puede limitarse a la sede de la Organización y sus alrededores "(39).

(38) Artículo 27 de la Convención sobre las misiones especiales.

(39) Conferencia, Vol.1, p.169.

La argumentación del representante de Suiza era, en cierto modo, correcta. Los miembros de las misiones permanentes no necesitan para el cumplimiento de sus funciones una libertad total de movimientos por el país huésped. Sin embargo la Conferencia consideró válida la propuesta de la CDI que se convirtió en el artículo 26 de la Convención, cuyo texto dice:

"Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional, el Estado huésped garantizará la libertad de circulación y de tránsito por su territorio a todos los miembros de la misión y a los miembros de sus familias que formen parte de sus casas".

De acuerdo con este artículo, el Estado huésped no podría imponer limitaciones a la circulación por su territorio de los miembros de las misiones permanentes. No hay que olvidar, además, que el artículo 83 de la Convención de 1975 prohíbe al Estado huésped una aplicación discriminatoria de la Convención, por lo que el Estado huésped no podría imponer limitaciones a la circulación de los miembros de determinadas misiones permanentes. Por otra parte el artículo 26 no sólo garantiza la libertad de circulación de los miembros de la misión, como hace el mismo artículo de la Convención de 1961, sino también la de los miembros de sus familias.

Creemos que el artículo 26 impone excesivas obligaciones a los Estados huéspedes. Parece por tanto que los Estados huéspedes preferirán que siga vigente el régimen actual basado en los Acuerdos de sede que les permite una mayor defensa en lo que se refiere a la libertad de movimientos de los miembros de las misiones permanentes. Máxime cuando muchos Acuerdos de sede permiten a los Estados huéspedes imponer limitaciones a los miembros de las misiones permanentes de determinados Estados que impongan las mismas limitaciones a los agentes diplomáticos acreditados por el Estado huésped ante dichos Estados.

G. Las inmunidades y privilegios durante el tránsito por el territorio de un tercer Estado.

Para que la libertad y la independencia en el ejercicio de sus funciones sea completa, los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes necesitan que su estatuto privilegiado les sea reconocido, no sólo en el territorio del Estado huésped, sino también en el de los terceros Estados que tengan que atravesar para ir a tomar posesión de sus funciones o reintegrarse a las mismas o para volver a su país.

Si el agente diplomático acreditado ante una Organización del sistema de las Naciones Unidas atraviesa el territorio de un tercer Estado que es miembro de la Organización ante la que dicho agente está acreditado, éste podrá exigir la concesión de un estatuto privilegiado en base al artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas o al artículo similar que existe en todos los instrumentos constitutivos de las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, si el agente diplomático atraviesa el territorio de un Estado que no es miembro de la Organización internacional ante la que dicho agente está acreditado, la exigencia de un estatuto privilegiado tendrá que basarse en la aplicación del derecho consuetudinario.

La Convención ha regulado el " tránsito por el territorio de un tercer Estado " en su artículo 81, que repite respecto a los agentes diplomáticos de las misiones permanentes las mismas normas que el artículo 40 de la Convención de Viena de 1961 aplica a los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones diplomáticas. El artículo 81 de la Convención dice en su párrafo primero:

"1. Si un jefe de misión o un miembro del personal diplomático de la misión... atraviesa el territorio o se encuentra en el territorio de un tercer Estado que le hubiese otorgado el visado del pasaporte, si tal visado fuera necesario, para ir a tomar posesión de sus funciones o rein-

tegrarse a las mismas, o para volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito ".

Como vemos este artículo concede a los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes " la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito ". Cabría interpretar que las inmunidades necesarias para el tránsito por un tercer Estado son la inmunidad de jurisdicción penal, la inviolabilidad de papeles y documentos así como la inviolabilidad de su equipaje personal a no ser que existan razones fundadas para sospechar que éste contiene objetos cuya importación u exportación esté prohibida. Además, las autoridades del tercer Estado están obligadas a tratar al agente diplomático con el respeto y la consideración debida en razón de su calidad de representante de un Estado.

Por último hay que precisar que los agentes diplomáticos pertenecientes a las misiones permanentes sólo tienen derecho al estatuto privilegiado, que regula el artículo 81, cuando atraviesan o se encuentran en el territorio de un tercer Estado si efectivamente dicha presencia se debe a un desplazamiento para ir a tomar posesión o reintegrarse a sus funciones o para volver a su país, pero no en el caso de un viaje privado.

II. El estatuto privilegiado del resto del personal de la misión.

Una vez estudiado el estatuto privilegiado de los miembros del personal diplomático de la misión permanente, nos corresponde estudiar ahora el estatuto privilegiado del resto del personal de la misión. El personal de la misión que no posee carácter de diplomático es el personal administrativo y técnico y el personal al servicio de la misión. También estudiaremos en este apartado el estatuto del personal al servicio privado de los miembros de la misión.

No nos detendremos a realizar el estudio del estatuto del personal de la misión que no posee estatuto diplomático con tanto detalle como el del personal diplomático de la misión. La razón reside en que el estatuto del personal no diplomático de las misiones está regulado por la Convención de Viena de 1975, siguiendo el modelo de la Convención de Viena de 1961, en relación al estatuto del personal diplomático, por lo que bastará indicar las analogías y las diferencias entre una y otra clase de personal.

1. El estatuto del personal administrativo y técnico.

Los Acuerdos de sede no se refieren de forma expresa al personal administrativo y técnico de las misiones permanentes, limitándose a regular el estatuto de los representantes de los Estados, es decir, de los miembros del personal diplomático de las misiones permanentes. Sin embargo siempre se ha considerado que, por aplicación analógica de las reglas vigentes para el personal diplomático, el personal administrativo y técnico de las misiones permanentes debía gozar del mismo estatuto que el personal administrativo y técnico perteneciente a las misiones diplomáticas.

Antes de la conclusión de la Convención de Viena de 1961, el estatuto del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas variaba de unos países a otros, no existiendo norma fija al respecto. En algunos países, dicho personal gozaba únicamente de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, otros Estados concedían, bajo condición de reciprocidad, a dicho personal un estatuto parecido al de los agentes diplomáticos. La Convención de Viena de 1961 vino a ratificar esta segunda tendencia, concediendo al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas un estatuto apenas diferente del de los agentes diplomáticos. Este estatuto se ha hecho aplicable al personal administrativo y técnico de las misiones permanentes, dada la analogía del estatuto del personal de éstas respecto al del personal de las misiones diplomáticas consagrado por los Acuerdos de -

sede. La Convención de Viena de 1975 ha venido a consolidar esta situación, regulando el estatuto del personal administrativo y técnico de las misiones permanentes de forma similar a como lo hace la Convención de Viena de 1961 respecto a dicho personal al servicio de las misiones diplomáticas.

La Convención de Viena de 1975 regula el estatuto del personal administrativo y técnico de las misiones permanentes en su artículo 36 cuyo párrafo segundo dice:

" 2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, así como los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33 y 34, salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 30 no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1, apartado b), del artículo 35, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación ".

De acuerdo con este artículo, el personal administrativo y técnico de las misiones permanentes goza de inviolabilidad y de inmunidad de jurisdicción penal en los mismos términos que el personal diplomático de dichas misiones. Sin embargo su inmunidad de jurisdicción civil y administrativa se reduce únicamente a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Si respecto a la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa el estatuto del personal administrativo y técnico difiere del estatuto del personal diplomático, no sucede lo mismo respecto a la inmunidad de ejecución que es idéntica para una y otra clase de personal. El artícu

lo 36, párrafo segundo de la Convención hace aplicable al personal administrativo y técnico el artículo 30 de la misma Convención; de el hay que deducir que dicho personal goza de una inmunidad de ejecución absoluta, salvo las excepciones contenidas en el mismo artículo 30.

El artículo 36 de la Convención equipara también al personal administrativo y técnico de las misiones permanentes con el personal diplomático de dichas misiones en lo que se refiere a la inmunidad fiscal, a la exención de prestaciones personales y a la exención de la aplicación de la legislación relativa a la seguridad social vigente en el Estado huésped. Sin embargo, la inmunidad aduanera del personal administrativo y técnico se reduce únicamente a la posibilidad de importar con franquicia los objetos importados al efectuar su primera instalación en el país huésped.

Además de las inmunidades y privilegios concedidos por el artículo 36, el personal administrativo y técnico goza también de las inmunidades y privilegios que otros artículos de la Convención conceden a los miembros de las misiones permanentes en general. Así dicho personal goza de los mismos privilegios e inmunidades que el personal diplomático en lo que se refiere a las facilidades de entrada y salida del territorio del Estado huésped(40), las facilidades de residencia(41), exención de la aplicación de la legislación del Estado huésped relativa a la nacionalidad(42) y libertad de circulación por el territorio del Estado huésped(43). Sin embargo, el estatuto del personal administrativo y técnico difiere del estatuto del personal diplomático en lo que se refiere al tránsito por el territorio de un tercer Estado para ir a tomar posesión de sus funciones o reintegrarse a las mismas, o para volver a su país. Mientras que en dicha situación de tránsito el tercer Estado está obliga-

.../...

(40) Artículos 79 y 80.

(41) Artículos 20 y 21.

(42) Artículo 74.

(43) Artículo 26.

.../...

do a conceder al personal diplomático " la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito ", dicho Estado sólo se obliga respecto al personal administrativo y técnico a no dificultar su paso por su territorio.

Podría parecer a primera vista que el estatuto concedido por la Convención de Viena de 1961 y por la de 1975 al personal administrativo y técnico es excesivo, ya que apenas se diferencia del estatuto concedido al personal diplomático. Sin embargo esta apreciación no parece acertada ya que si los privilegios e inmunidades diplomáticos están justificados por el " interés de la función " dicho " interés de la función " justifica la cuasi asimilación del estatuto del personal administrativo y técnico al estatuto del personal diplomático, puesto que las funciones que puede desarrollar el personal administrativo y técnico hace que dicho personal necesite de la misma libertad e independencia que el personal diplomático respecto a las autoridades del Estado receptor o del Estado huésped.

2. El estatuto del personal de servicio.

En el apartado anterior hemos visto cómo las mismas razones que justifican la concesión de un estatuto privilegiado para el personal diplomático perteneciente a las misiones permanentes justifican también la concesión de un estatuto privilegiado para el personal administrativo y técnico perteneciente a dichas misiones, dadas las funciones que suele tener encomendadas dicho personal. Por el contrario, la naturaleza de las funciones del personal de servicio de las misiones permanentes no justifica la concesión de privilegios e inmunidades importantes a este personal, ya que solamente cumple funciones auxiliares en la misión permanente.

De acuerdo con esta idea, la Convención de Viena de 1975 concede al personal de servicio de las misiones permanentes, en su artículo 36, un estatuto privilegiado muy reducido. El artículo 36 de la Conven -

timonio del jefe de misión debería ser determinante(44). El criterio de DENZA tiene la ventaja de ser claro y de fácil aplicación, pero es muy probable que no fuera admitido fácilmente por los tribunales de algunos Estados huéspedes. A falta de un criterio de validez general, parece que la única solución sería la de analizar cada caso y decidir según las circunstancias del mismo.

Además de las inmunidades y privilegios concedidos por el artículo 36, el personal de servicio de la misión, del mismo modo que el personal administrativo y técnico, goza también de las inmunidades y privilegios que otros artículos de la Convención conceden a los miembros de la misión permanente en general. Así, el personal al servicio de la misión goza de los mismos privilegios e inmunidades que el personal diplomático en lo que se refiere a las facilidades de entrada y salida del territorio del Estado huésped(45), las facilidades de residencia(46), exención de la legislación del Estado huésped relativa a la adquisición de la nacionalidad(47) y libertad de circulación por el territorio del Estado huésped(48). Sin embargo en el tránsito por el territorio de un tercer Estado para ir a tomar posesión de sus funciones o reintegrarse a las mismas o para volver a su país, el personal al servicio de la misión permanente no goza de ninguna inmunidad, aunque el tercer Estado está obligado a no dificultar su paso.

3. El estatuto del personal al servicio privado.

Según el artículo primero de la Convención de Viena de 1975, los miembros de la misión permanente son únicamente el jefe de misión así como los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión. El personal al servi-

.../...

(44) DENZA, op. cit., p. 231

(45) Artículos 79 y 80.

(46) Artículos 20 y 21.

(47) Artículo 74.

(48) Artículo 26.

.../...

cio privado de los miembros de la misión es definido por dicho artículo - primero de la siguiente forma :

" 31) se entiende por " personal al servicio privado ", las personas empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la misión".

Al no ser considerados como miembros de la misión el " personal al servicio privado " goza de un estatuto privilegiado muy reducido.

El artículo 36, párrafo cuarto, concede al personal al servicio - privado la exención de los impuestos que graven los salarios que perci - ban por sus servicios y el artículo 32 le concede la exención de la apli - cación de las leyes sobre seguridad social, siempre que dicho personal - no sea nacional del Estado huésped, no tenga en él su residencia perma - nente y además esté protegido por el sistema de seguridad social del Es - tado que envía o el de un tercer Estado.

Al no ser considerado como personal de la misión, el " personal - al servicio privado " no puede gozar de las inmunidades que la Conven - ción concede genericamente a los miembros de la misión. Sin embargo, - creemos que las obligaciones del Estado huésped respecto a la entrada - y salida de su territorio de los miembros de la misión son aplicables tam - bién al " personal al servicio privado ". Asimismo, el Estado huésped no puede hacer aplicables al " personal al servicio privado " las disposicio - nes limitativas sobre la inmigración que puedan estar vigentes en dicho Es - tado.

Por último hay que observar que el personal al servicio privado - es definido por la Convención como " las personas empleadas exclusiva - mente al servicio de los miembros de la misión ", por lo que dicho per - sonal puede estar al servicio tanto del personal diplomático como del per - sonal administrativo y técnico o del personal de servicio de la misión per - manente.

III. El estatuto de los miembros de la misión que sean nacionales del Estado huésped o tengan en él su residencia permanente,

En el marco de las relaciones diplomáticas entre Estados, los Estados en general han sido siempre contrarios a conceder privilegios e inmunidades diplomáticos a sus propios nacionales, pues ello implicaría el - que éstos se sustrajeran a sus competencias. Por esta razón los Estados han puesto siempre dificultades a que sus propios nacionales fueran acreditados como representantes de otro Estado. A esta preocupación responde el artículo 8 de la Convención de Viena de 1961 que prescribe que :

" 2. Los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento de ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento ".

Parecería lógico que, si bien los Estados pueden negarse a que - sus propios nacionales les sean acreditados como representantes de otros Estados, tengan sin embargo que concederles la totalidad de los privilegios e inmunidades diplomáticos. En efecto, si la concesión de los privilegios e inmunidades diplomáticos se considera necesaria para el ejercicio de las funciones que normalmente tienen encomendadas los agentes diplomáticos, no existe razón para que los Estados se nieguen a conceder dichas inmunidades y privilegios a sus propios nacionales cuando éstos, con su consentimiento, sean nombrados representantes de otros Estados. La Convención de Viena de 1961 no ha recogido sin embargo estas ideas, pues concede un estatuto privilegiado reducidísimo a los agentes diplomáticos que son nacionales del Estado receptor. En efecto el artículo 38, párrafo primero de la Convención de Viena de 1961 determina - que el agente diplomático que sea nacional del Estado receptor :

" solo gozará de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los - actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ".

Respecto a los miembros de la misión que no pertenezcan al personal diplomático y que sean nacionales del Estado receptor, la Convención de Viena de 1961 es aún más restrictiva pues su artículo 38, párrafo segundo, dice :

"2. Los otros miembros de la misión y los criados particulares - que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él su residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado. No obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión".

Hay que señalar además que las personas que tengan su residencia permanente en el Estado receptor son asimiladas por el artículo 38 - a los nacionales del mismo Estado.

Respecto a los miembros de las misiones permanentes, los Estados huéspedes han seguido la misma tendencia de negarse a conceder privilegios e inmunidades a los miembros de las misiones permanentes - que posean su nacionalidad.

La mayoría de los Acuerdos de sede prevé que los representantes de los Estados gozarán de los privilegios e inmunidades diplomáticos siempre y cuando no posean la nacionalidad del Estado huésped. La Convención de Viena de 1975 ha confirmado esta tendencia, regulando el nombramiento de los nacionales del Estado huésped como miembros de las misiones permanentes de forma paralela a como regula la Convención de Viena de 1961 el nombramiento de los nacionales del Estado receptor.

El artículo 73 de la Convención de 1975 exige el consentimiento del Estado huésped para el nombramiento de uno de sus nacionales como miembro del personal diplomático de una misión permanente. Por el contrario, y de la misma forma que en la diplomacia entre Estados, el Esta

do que envía tiene libertad para nombrar como miembro del personal administrativo y técnico o del personal de servicio a los nacionales del Estado huésped.

En lo que se refiere al estatuto privilegiado de los miembros de las misiones permanentes que sean nacionales del Estado huésped, el artículo 37 de la Convención de 1975, del mismo modo que el artículo 38 de la Convención de 1961, determina que el agente diplomático que sea nacional del Estado huésped :

" sólo gozará de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ".

Si respecto al personal diplomático el estatuto de los miembros de las misiones permanentes es el mismo que el de las misiones diplomáticas, no existe el mismo paralelismo respecto el estatuto del personal administrativo y técnico y el personal de servicio de ambos tipos de misiones. El artículo 38, párrafo segundo, de la Convención de 1975 establece que el personal administrativo y técnico y el personal de servicio :

" gozarán solamente de inmunidad de jurisdicción por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ".

Esta modificación respecto a la Convención de 1961, que no concede a dicho personal la inmunidad de jurisdicción por los actos oficiales, es absolutamente lógica. Hay que tener en cuenta que los actos realizados por el personal de la misión en el ejercicio de sus funciones son actos sobre los que los tribunales del Estado huésped no son competentes, por estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado que envía.

Por último hay que observar que de la misma forma que la Convención de 1961, la Convención de Viena de 1975 asimila a los residentes en el Estado huésped con los nacionales del mismo Estado.

IV. El estatuto de los miembros de la familia del personal de la misión.

Como vimos en el capítulo segundo, la existencia de los privilegios e inmunidades de los miembros de las misiones permanentes deriva de la obligación del Estado huésped de garantizar la libertad y la independencia de las actividades de los miembros de las misiones permanentes. Por las mismas razones, los miembros de la familia del personal de la misión deben gozar del mismo estatuto privilegiado que éstos, puesto que un miembro de una misión permanente, a pesar de su inviolabilidad y de su inmunidad de jurisdicción, no gozaría de verdadera independencia respecto a las autoridades del Estado huésped si éstas pudieran tomar cualquier medida coercitiva contra los miembros de su familia.

Los Acuerdos de sede no mencionan de forma expresa a los miembros de la familia del personal de las misiones diplomáticas. Sin embargo, siempre se ha considerado que éstos tenían derecho al mismo estatuto que el personal de las misiones (49). La Convención de Viena de 1975 ha venido a llenar esta laguna regulando el estatuto de los miembros de la fa-milia del personal de las misiones permanentes de forma semejante al estatuto de los miembros de la familia del personal de las misiones diplomáticas regulado por el artículo 37 de la Convención de Viena de 1961.

El artículo 36 de la Convención de 1975 dice en su párrafo prime-ro :

" 1. Los miembros de la familia del jefe de misión que formen parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro del personal - diplomático de la misión que formen parte de su casa, siempre que no - sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanen-
.../...

(49) Ver por ejemplo " People v. Von Otter, United States, City Court of New Rochelle, New York. July 30, 1952 " en ILR, Vol. 19, 1952, p. 385.

.../...

te, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34 y en los párrafos 1, apartado b), y 2 del artículo-35".

De acuerdo con este precepto los miembros de la familia del personal diplomático gozan del mismo estatuto privilegiado que los miembros de dicho personal en lo que se refiere a la inviolabilidad, inmunidad de jurisdicción y de ejecución, exención de las leyes vigentes sobre seguridad social, inmunidad fiscal y aduanera y exención de prestaciones personales.

Además de las inmunidades expresamente reseñadas en el artículo 36, los miembros de la familia del personal diplomático gozan del mismo estatuto que dicho personal en lo que se refiere a la entrada y salida en el país huésped (50), exención de la aplicación de las leyes sobre nacionalidad (51) y libertad de circulación por el territorio del Estado huésped (52). Los miembros de la familia del personal diplomático gozan también del mismo estatuto que los agentes diplomáticos en el tránsito por un tercer Estado para dirigirse al país huésped o a su país de origen (53).

La única observación que cabría hacer al artículo 36 es que no concede ningún estatuto privilegiado a los miembros de la familia del personal diplomático cuando sean nacionales del Estado huésped o tengan en él su residencia permanente. De acuerdo con el artículo 36 de la Convención de 1975, un nacional del Estado huésped que contrajera matrimonio con un miembro del personal diplomático de la misión permanente no gozaría de ninguna inmunidad en el caso de que conservase su nacionalidad. Además el artículo 36 ha asimilado la residencia permanente a la nacionalidad en lo que se refiere a la familia del personal diplomático, lo que no

.../...

(50) Artículo 79.

(51) Artículo 74.

(52) Artículo 26.

(53) Artículo 81.

.../...

hace el artículo 37 de la Convención de 1961 respecto a la familia de los miembros del personal diplomático de las misiones diplomáticas. Por esta razón una persona nacional de un tercer Estado que fuera residente - en el Estado huésped y que contrajera matrimonio con un miembro del personal diplomático de una misión permanente no gozaría de ninguna inmunidad independientemente de que mantuviera o no su nacionalidad. Creemos que la Convención de 1975 es, en este punto, muy poco flexible.

De la misma forma que los miembros de la familia del personal diplomático gozan del mismo estatuto que dicho personal, los miembros de la familia del personal administrativo y técnico gozan, según el artículo 36, párrafo segundo, de los mismos privilegios e inmunidades que el personal administrativo y técnico. La única diferencia es que mientras el personal administrativo y técnico goza de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la familia no gozan de ninguna inmunidad de jurisdicción, dado que no pueden tener encomendadas funciones oficiales.

Respecto a los miembros de la familia del personal de servicio de la misión hay que decir que el artículo 37 de la Convención no les concede ningún privilegio o inmunidad. Sin embargo, sí gozan de los mismos privilegios que el personal de la misión en lo que se refiere a la entrada y salida del país huésped (54), libertad de circulación por el país huésped (55) y exención de la aplicación de las leyes sobre nacionalidad vigentes en el Estado huésped (56).

V. Los medios para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático.

Como hemos visto más arriba, los privilegios e inmunidades diplomáticos están basados en reglas de Derecho internacional que se manifiestan en el orden jurídico del Estado huésped como un estatuto privilegiado

.../...

(54) Artículo 79.

(55) Artículo 26.

(56) Artículo 74.

.../...

tanto de las misiones permanentes como del personal perteneciente a las mismas.

La concesión de un estatuto privilegiado a las misiones permanentes y a su personal se justifica por la necesidad de que la actividad de los distintos Estados a través de sus misiones permanentes pueda desarrollarse con la libertad y la independencia necesarias respecto al Estado huésped. Sin embargo, y a pesar de que la existencia del estatuto diplomático no pueda ponerse en duda, la concesión de dicho estatuto a las misiones y a su personal puede dar lugar a difíciles problemas si dicho estatuto es utilizado para fines ajenos de los que justifican su existencia. Por esta razón nos parece necesario, antes de finalizar el estudio de los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes y de su personal, indicar cuáles son los medios que pueden evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático.

En el capítulo primero vimos cómo las distintas convenciones multilaterales sobre Derecho diplomático así como los Acuerdos de sede incluyen siempre alguno de los medios generales de solución de diferencias. - Así, las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades prevén el recurso al TIJ, por medio del dictamen de carácter obligatorio de dicho Tribunal; la Convención sobre las relaciones diplomáticas y la Convención sobre las misiones especiales contienen un protocolo anejo de firma facultativa que prevé la competencia obligatoria del TIJ y, por último, la Convención de Viena de 1975, objeto de nuestro estudio, prevé la creación de una Comisión de conciliación para solucionar los contenciosos que se planteen en la aplicación de dicha Convención.

Si en el capítulo primero estudiamos la utilización de los medios generales de solución de diferencias para resolver los contenciosos relativos a la aplicación de las reglas de Derecho diplomático, en el presente apartado vamos a estudiar cuáles son los medios de que dispone el Es

tado huésped para evitar los abusos a los que puede dar origen el carácter privilegiado del estatuto diplomático.

1. La reclamación por vía diplomática.

El primer medio utilizado para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático es el de la reclamación por vía diplomática.

En la diplomacia entre Estados, la reclamación por vía diplomática suele ser el medio más utilizado para solucionar los problemas que pueden plantearse respecto del estatuto de las misiones diplomáticas. Como el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados da lugar, casi siempre, a la creación recíproca de dos misiones diplomáticas, la reclamación por vía diplomática suele ser un medio suficiente para evitar los problemas a que puede dar lugar la concesión del estatuto diplomático. La existencia de la reciprocidad es, en definitiva, la mejor garantía del cumplimiento de las reglas del Derecho diplomático así como de la prevención de los abusos a los que la concesión de dicho estatuto puede dar lugar.

De la misma forma que en la diplomacia entre Estados, la reclamación por vía diplomática es el medio más utilizado en la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático.

Si bien en la diplomacia entre Estados y Organizaciones internacionales no existe una reciprocidad directa entre el Estado que envía y el Estado huésped, la reclamación por vía diplomática puede ser un medio igualmente útil que en la diplomacia entre Estados, dada la presencia de la Organización que puede fácilmente actuar como amigable componedor entre el Estado que envía y el Estado huésped. Tengase en cuenta que la Organización internacional está interesada, tanto en que el Estado huésped aplique correctamente las normas relativas al estatuto diplomático, co

mo en que las misiones permanentes y su personal no abusen de dichas normas. Por esta razón la reclamación por vía diplomática es el medio de solución de diferencias más eficaz tanto para el Estado huésped como para el Estado que envía.

2. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

Las inmunidades y privilegios que el Estado huésped está obligado a conceder a las misiones permanentes y al personal de las mismas tienen por único objeto que la actuación del Estado que envía a través de las misiones permanentes y del personal de las mismas no estén condicionadas por el Estado huésped. Las inmunidades y privilegios diplomáticos existen, por tanto, para garantizar la libertad y la independencia de la actividad del Estado que envía respecto a la Organización internacional, y no para beneficiar personalmente a los miembros de las misiones permanentes.

Estas ideas sobre la finalidad de los privilegios e inmunidades diplomáticos están perfectamente recogidas en la sección 14 de la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Dicha sección 14 dice :

" Se concederán privilegios e inmunidades a los representantes de Miembros no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con las Naciones Unidas" (57).

La concesión de las inmunidades y privilegios diplomáticos no es, por tanto, un derecho personal de los miembros de las misiones permanentes, sino un derecho del Estado que envía. Por esta razón, nada se opone a que el Estado que envía pueda renunciar a dichas inmunidades y
.../...

(57) Un precepto similar se recoge en la sección 16 de la Convención general sobre privilegios e inmunidades de los Organismos especializados.

.../...

privilegios, en cuyo caso las autoridades del Estado huésped recobran - su potestad de tomar medidas coercitivas respecto a los miembros de las misiones permanentes.

La facultad del Estado que envía de renunciar a las inmunidades - y privilegios de los miembros de las misiones permanentes y de los miembros de sus familias está regulada por el artículo 31 de la Convención de Viena de 1975, cuyo párrafo primero dice :

" 1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión, así como de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 36 ".

Según este artículo solamente el Estado que envía puede renunciar a las inmunidades y privilegios de los miembros de las misiones permanentes, no siendo válida la renuncia que pudiera hacer un miembro de una misión permanente respecto de sus inmunidades si no contase con la autorización del Estado que envía.

La renuncia del Estado que envía a la inmunidad de jurisdicción - de los miembros de la misión permanente ha de ser expresa, según prevé el párrafo segundo del artículo 31 de la Convención. Sin embargo cabe la renuncia tácita en el caso de las acciones reconvencionales. En efecto, el artículo 31 dice en su párrafo tercero :

" 3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 - del presente artículo entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal ".

Cabría pensar que, si solamente el Estado que envía puede renunciar a la inmunidad de los miembros de la misión, los tribunales del Es-

tado huésped no podrían aceptar una demanda entablada por un miembro de una misión pues éste se expondría a perder su inmunidad, sin el consentimiento del Estado que envía, en el caso de que sea dirigida contra él una reconvención. Sin embargo los términos del artículo 31 no obligan a los tribunales del Estado huésped a investigar si el miembro de la misión permanente que entabla una acción procesal cuenta o no con el consentimiento de su Estado. Por esta razón cabe afirmar que, en el caso de las acciones reconvencionales, el comportamiento de un miembro de una misión permanente puede significar una renuncia tácita de su inmunidad de jurisdicción que será válida salvo que el Estado que envía haya manifestado, en tiempo y forma, su oposición a la acción procesal entablada.

Por otra parte hay que señalar que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción de un miembro de una misión permanente no implica la renuncia a la inmunidad de ejecución de la sentencia que pueda dictarse. El artículo 31 enuncia este principio en su párrafo cuarto, cuyo texto dice :

" 4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia ".

Debe notarse que este párrafo se refiere unicamente a la renuncia a la inmunidad civil o administrativa, sin nombrar la inmunidad de jurisdicción penal. Sin embargo parece que respecto a la inmunidad de jurisdicción penal también habría que distinguir entre la renuncia a dicha inmunidad y la renuncia a la inmunidad de ejecución, que en este caso sería la renuncia a la inviolabilidad.

La renuncia a la inmunidad de jurisdicción de los miembros de las misiones diplomáticas, de las misiones especiales y de las misiones permanentes es un acto discrecional del Estado que envía la misión. Este carácter discrecional del acto de renuncia nunca ha sido discutido. Sin embar-

go repetidamente se ha intentado obligar a los Estados a renunciar a la-inmunidad de sus agentes diplomáticos, cuando dicha renuncia no afecte - a los intereses fundamentales del Estado que envía la misión. Así la Convención general sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Uni-das dice en su sección 14 :

" un Miembro no sólo tiene el derecho sino la obligación de renun_ciar a la inmunidad de su representante en cualquier caso en que según-su propio criterio la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuan-do puede ser renunciada sin perjudicar los fines para los cuales la inmu-nidad fué otorgada " (58).

En el mismo sentido la Conferencia de Viena de 1961 aprobó una - resolución en la que se recomienda :

" que el Estado acreditante renuncie a la inmunidad de los miem-bros de su misión diplomática con respecto a las reclamaciones civiles - entabladas por particulares del Estado receptor, cuando pueda hacerlo - sin perjuicio del desempeño de las funciones de la misión y que, cuando no renuncie a esa inmunidad, el Estado acreditante ponga máximo empe-ño en lograr una justa solución de las reclamaciones " (59).

En la Conferencia de Viena de 1975 las delegaciones de Japón, - Nigeria y el Reino Unido presentaron una enmienda que, de haber sido-aprobada, hubiera añadido al artículo 31 de la Convención un párrafo se-mejante a la sección 14, arriba citada, de la Convención sobre los privi-legios e inmunidades de las Naciones Unidas (60). La enmienda no llegó a ser aceptada por la Conferencia que, sin embargo, aprobó el párrafo-quinto del artículo 31 que dice :

(58) Un precepto semejante se contiene en la sección 16 de la Conven-ción general sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos especializados.

(59) Conferencia de Viena de 1961, Vol.II, p. 99.

(60) Conferencia, Vol.II, p. 106 (Documento:A/CONF.67/C.1/L.60).

"5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo con respecto a la acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa de la cuestión".

Como puede verse, este párrafo está redactado de una forma tan difusa que de él no pueden deducirse obligaciones concretas.

Por último habría que resaltar que, si el párrafo 1 del artículo 31 se refiere a la renuncia de la inmunidad de jurisdicción en general, el párrafo cuarto del mismo artículo sólo se refiere a la renuncia a la inmunidad de ejecución respecto a acciones civiles o administrativas. Parece por tanto que los redactores de la Convención de Viena de 1975, como los de la Convención de Viena de 1961, han considerado que es impensable que un Estado pueda renunciar a la inmunidad de ejecución penal o a la inviolabilidad de uno de sus representantes.

Antes de acabar este apartado debemos resaltar que solamente desde un punto de vista teórico puede considerarse la renuncia a la inmunidad como un medio que evita las consecuencias excesivas del estatuto diplomático. Los Estados en general suelen ser muy reacios a renunciar a las inmunidades de sus agentes diplomáticos y sólo de forma excepcional llegan a realizar dicha renuncia.

3. El recurso ante los tribunales del Estado que envía.

En la medida en que los miembros de las misiones permanentes gozan de inmunidad de jurisdicción en el país huésped y que los Estados difícilmente renuncian a la inmunidad, puede decirse que es prácticamente imposible tratar de solucionar por vía judicial o administrativa en dicho país cualquier contencioso en el participe un miembro de una misión permanente.

Si los tribunales del Estado huésped no pueden admitir acciones procesales dirigidas contra los miembros de las misiones permanentes - dado el estatuto privilegiado del que éstos gozan, no sucede lo mismo - con los tribunales del Estado que envía que, sin ningún obstáculo, pueden conocer y decidir respecto a las acciones dirigidas contra los miembros de las misiones permanentes. Esta regla está recogida por el artículo 30 de la Convención de Viena de 1975 cuyo párrafo cuarto dice :

" 4. La inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión en el Estado huésped no les exime de la jurisdicción del Estado que envía ".

Respecto de las cuestiones penales en las que pueda estar involucrado un miembro de una misión permanente, el recurso ante los tribunales del Estado que envía puede ser una solución aceptable, dado que en la mayoría de los Estados se admite la aplicación de las leyes penales a los delitos cometidos por los nacionales en el extranjero. Sin embargo puede suceder que las leyes penales de un Estado solamente se apliquen a los delitos cometidos por los nacionales en el extranjero en el caso de los delitos importantes, excluyendo el castigo de delitos de importancia menor. Además, en muchos casos, y por razones de oportunidad, los Estados pueden no estar dispuestos a juzgar a uno de sus representantes por los posibles delitos que haya cometido en el país huésped.

Respecto a las acciones de naturaleza civil, es posible que se planteen mayores problemas de competencia para los tribunales del Estado que envía que en el caso de las acciones penales, dado que los miembros de las misiones permanentes tienen su domicilio efectivo en el país huésped. Algunas legislaciones solucionan este problema de competencia atribuyendo a los miembros de las misiones permanentes un domicilio ficticio en el territorio del Estado que envía. Así por ejemplo el artículo 40 del Código Civil español dice :

" Pare el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento civil.

El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español ".

A pesar de que no existan problemas de competencia por razón del domicilio, dada la existencia de una regla semejante a la del artículo 40 del Código Civil español, es muy probable que los tribunales de muchos Estados no puedan declararse competentes respecto a las acciones civiles dirigidas contra los miembros de sus misiones permanentes, por el lugar en que han ocurrido los hechos que den lugar a la acción procesal. Por esta razón creemos que el recurso ante los tribunales del Estado que envía es una solución muy problemática en materia civil. Además, y esto es válido también para las acciones de naturaleza penal, el recurso ante los tribunales del Estado que envía es una solución muy costosa en terminos económicos, por lo que creemos que solo excepcionalmente puede ser considerado como un medio para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático.

4. El recurso ante los tribunales del Estado huésped.

Dado que los miembros de las misiones permanentes gozan de privilegios e inmunidades en el Estado huésped por razón del cargo que ocupan, dichas inmunidades y privilegios dejan de existir en el momento en que un miembro de una misión permanente deja de tener la condición de tal. Sin embargo las inmunidades y privilegios no dejan de existir automáticamente en el momento del cese de un miembro de una misión permanente, sino que su existencia se prolonga durante un cierto tiempo para permitirle la salida del país.. Esta regla está recogida por el artículo 38 de

la Convención de 1975, cuyo párrafo segundo dice:

" 2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del territorio o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión ".

Por esta razón el recurso judicial contra un miembro de una misión permanente ante los tribunales del Estado huésped solo puede realizarse una vez que dicho miembro ha salido definitivamente del país huésped. De ello se deduce que el recurso ante los tribunales del Estado huésped solamente puede ser útil en casos excepcionales.

En cualquier caso, y como dice el artículo 38 párrafo segundo, los tribunales del Estado huésped solamente pueden conocer respecto de las acciones procesales dirigidas contra un antiguo miembro de una misión permanente si dichas acciones están relacionadas con sus actos privados y no con sus actos oficiales, respecto de los cuales la inmunidad de jurisdicción subsiste siempre.

5. La expulsión del país huésped.

En el capítulo tercero estudiamos la posibilidad de que el Estado huésped pudiera expulsar de su territorio a los miembros de las misiones permanentes. Como vimos en dicho apartado, el Estado huésped conserva siempre la facultad de expulsar a cualquier miembro de una misión permanente, si bien dicha facultad del Estado huésped es mucho más restringida que la facultad del Estado receptor de declarar " persona non grata " a un miembro de una misión diplomática.

En el presente apartado no volveremos sobre el estudio del derecho de expulsión para evitar repeticiones innecesarias. Sin embargo

parece procedente recordar aquí que la posibilidad de de expulsar a un miembro de una misión permanente es el único medio efectivo del que - dispone el Estado huésped para evitar las consecuencias excesivas del estatuto diplomático. Puede afirmarse de forma general que si la existencia del estatuto diplomático no da lugar a grandes abusos es porque existe el contrapeso necesario del derecho de expulsión. Esta posibilidad, así como la reclamación por vía diplomática, impiden realmente las consecuencias excesivas del estatuto diplomático.

CAPITULO SEXTO: CONCLUSIONES.

El estudio que hemos realizado sobre el estatuto jurídico-internacional de las misiones permanentes puede llevarnos a establecer dos tipos - de conclusiones.

Por un lado, parece necesario que con los datos obtenidos trate - mos de situar la Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 dentro del proceso de codificación y desarrollo progresivo del Derecho internacional realizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A las conclusiones - establecidas desde esta óptica las denominaremos conclusiones generales. Una vez puestas éstas de manifiesto, desarrollaremos las conclusiones - a las que hemos podido llegar en este trabajo, que denominaremos con - clusiones específicas.

I. Conclusiones generales.

La consideración de la Convención de Viena de 1975 como uno de los resultados del proceso codificador realizado a partir de 1945 bajo los auspicios de las NU nos lleva a dos tipos de reflexiones.

En primer lugar debemos plantearnos si la conclusión de una Con vención multilateral sobre el estatuto de las misiones permanentes era ne cesaria. A lo largo de nuestro estudio hemos podido constatar cómo en la Conferencia de Viena de 1975 hubo enfrentamientos profundos y oposi ciones irreductibles respecto a bastantes artículos de la Convención. Ca bría plantearse, por tanto, si no hubiera sido preferible no intentar codi ficar esta parcela del Derecho diplomático que regula el estatuto de las misiones permanentes.

En segundo lugar debemos analizar en qué medida la Convención - de Viena de 1975 supone una " codificación " de las reglas jurídicas exis tentes y en qué medida supone un " desarrollo progresivo " del Derecho internacional sobre la materia.

La determinación de las reglas de la Convención que pueden considerarse fruto de la "codificación" es de gran importancia. En efecto, - en la medida en que las reglas de la Convención de Viena de 1975 puedan considerarse como codificación de las anteriores, dichas reglas son aplicables aunque la Convención no esté en vigor y respecto a todos los Estados. Por el contrario, las reglas de la Convención que supongan un "desarrollo progresivo del Derecho internacional" solamente serán aplicables una vez que la Convención esté en vigor, y únicamente respecto a los Estados que la hayan ratificado o se hayan adherido a ella.

Para tratar de analizar qué reglas de la Convención suponen una "codificación" y qué reglas suponen un "desarrollo progresivo" seguiremos el orden utilizado en los capítulos tercero, cuarto y quinto de este trabajo.

1. La necesidad de la Convención de Viena de 14 de marzo de 1975.

A lo largo de este trabajo hemos podido constatar cómo en la Conferencia de Viena de 1975 no pudo llegarse a un acuerdo en numerosos puntos de importancia. A pesar de esta falta de acuerdo, la Conferencia pudo, gracias al mecanismo de las mayorías, llevar a cabo su trabajo y concluir una Convención sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales de carácter universal. Sin embargo, dicha Convención ha sido considerada por muchos Estados como inaceptable, por lo que no puede afirmarse que el resultado de la Conferencia haya sido un éxito.

El hecho de que un grupo de Estados considere inaceptable una convención multilateral puede no tener excesiva importancia, dado que es prácticamente imposible que en una conferencia diplomática se llegue a conseguir la unanimidad sobre todos los puntos que la conferencia trata. Sin embargo, respecto a la Convención de Viena de 1975, el desacuerdo de determinado grupo de Estados sí es de gran importancia, dado que -

dicho grupo está compuesto fundamentalmente por los Estados huéspedes o de sede de las Organizaciones internacionales más importantes. Señalemos que cuando en la Conferencia de Viena se puso a votación el texto-definitivo de la Convención, las delegaciones de Austria (1), Canadá (2), los Estados Unidos (3), Francia (4), Suiza (5) y el Reino Unido (6) - decidieron abstenerse (7). De todas estas abstenciones parece que puede deducirse que los Estados huéspedes de las Organizaciones internacionales más importantes han considerado que la Convención de Viena de 1975 no defiende debidamente sus intereses.

Cabría preguntarse, dado el resultado de la Conferencia de Viena de 1975, si debería haberse acometido la codificación de las reglas aplicables a las misiones permanentes. Ciertamente que la vigencia de los múltiples Acuerdos de sede había permitido hasta ahora el trabajo eficaz de las misiones permanentes. Sin embargo, dichos Acuerdos contenían numerosas lagunas, por lo que la mayoría de los Estados consideró oportuna la labor de codificación de las normas relativas a las misiones permanentes. Por otra parte, existía la creencia general de que el Derecho diplomático era una de las ramas del Derecho internacional público que mejor y más fácilmente se prestaba a la codificación, por lo que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como diversos Estados de forma aislada manifestaron su apoyo a la idea de codificar las reglas aplicables a las misiones permanentes.

La necesidad de codificar las reglas aplicables a las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales se planteó por primera vez cuando la CDI comenzó el estudio de las "relaciones e in - munidades diplomáticas". La CDI consideró que debía proceder por eta
.../...

(1) Estado huésped del OIEA.

(2) Estado huésped de la OACI.

(3) Estado huésped de la ONU.

(4) Estado huésped de la UNESCO.

(5) Estado huésped de la ONU, OIT, OMS, OMM y UPU.

(6) Estado huésped de la OCMI.

(7) Conferencia, Vol. I, ps. 54 y 55.

.../...

pas y que, en un primer momento, sus trabajos deberían limitarse al estudio de las reglas aplicables a las relaciones diplomáticas entre Estados. Una vez finalizado este proceso, se debería comenzar, según la CDI, la codificación de las reglas aplicables a las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales. La opinión de la CDI fué compartida por varios Estados, que, en sus comentarios al proyecto de la CDI sobre "relaciones e inmunidades diplomáticas", expresaron su deseo de que en el momento oportuno la CDI comenzara el estudio de las "relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales" (8).

La idea de la necesidad de la codificación de las reglas aplicables a las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales, afirmada en un principio solamente por algunos Estados, fué ganando adeptos, dando lugar a la resolución 1289 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su parte dispositiva invitaba a la CDI:

" a llevar adelante el examen de la cuestión de las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales intergubernamentales, en el momento oportuno, una vez que las Naciones Unidas hayan terminado el estudio de las relaciones e inmunidades diplomáticas, de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia ad hoc, y habida cuenta de los resultados de ese estudio, así como de los debates celebrados en la Asamblea General ".

Cumpliendo el mandato de la Asamblea General, la CDI comenzó el estudio de las "relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales" en 1963. Los trabajos se aceleraron en 1968, siendo finalizados en el periodo de sesiones de la CDI correspondiente a 1971. Durante todos estos años la labor de la CDI fué ampliamente discutida por los Estados con ocasión del examen del informe de la CDI por la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además la Sexta Comi
.../...

(8) Ver los Comentarios de los EE.UU., Holanda, y Suiza en : Naciones Unidas, "Observaciones presentadas por los gobiernos al proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su noveno periodo de sesiones, celebrado en 1957", ACDI, 1958, Vol. II, ps. 128, 139 y 145.

.../...

sión, una vez finalizados los trabajos de la CDI, procedió a un examen a fondo del tema (9).

De la lectura de las Actas de la Sexta Comisión, así como de los comentarios al proyecto de la CDI enviados por los Estados (10) se desprende que la generalidad de los Estados estaban de acuerdo sobre la conveniencia de concluir una convención multilateral sobre el estatuto de las misiones permanentes. Ciertamente algunos Estados, como los EE.UU, Francia y el Reino Unido (11), manifestaron numerosas reservas respecto al proyecto de la CDI. Sin embargo el hecho de estar en desacuerdo con algunos puntos de dicho proyecto no impidió que dichos Estados se mostrasen partidarios de que se celebrara una conferencia diplomática para discutir dicho proyecto. El único Estado que se mostró contrario a la idea de una nueva convención fué Australia, cuyo representante afirmó en la Sexta Comisión que :

" su Gobierno, tras estudiar detenidamente el proyecto de artículos, ha llegado a la conclusión de que no es necesario adoptar una convención sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales. Los diversos acuerdos sobre la sede y las convenciones sobre prerrogativas e inmunidades constituyen ya un marco convencional nada despreciable " (12).

Como vemos, antes de la celebración de la Conferencia de Viena de 1975 existía en la Comunidad internacional la creencia generalizada de que una Convención multilateral sobre las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales podía culminar satisfactoriamente el proceso de codificación del Derecho diplomático comenzado en 1952. Desgraciada-
.../...

(9) Ver: Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, 27º periodo de sesiones, Sexta Comisión, Asuntos jurídicos, ps. 185-190, 193-208, 393 y 399-402.

(10) " Observaciones de los Estados miembros ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, ps. 384 a 461.

(11) Naciones Unidas, Documentos oficiales de la Asamblea General, 27º periodo de sesiones, Sexta Comisión, Asuntos jurídicos, ps. 193, 197 y 205.

(12) ibid., p. 185.

.../...

mente la culminación de dicho proceso no ha sido lo satisfactoria que cabía esperar. El equilibrio de intereses logrado por la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas no ha podido ser repetido por la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales de carácter universal.

2. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 como codificación y como desarrollo progresivo del Derecho internacional.

Al comienzo de este capítulo hemos visto la importancia que tiene el determinar en qué medida las disposiciones de un tratado multilateral son la codificación del Derecho vigente o por el contrario suponen un desarrollo progresivo del mismo. La distinción entre lo que es codificación y lo que es desarrollo progresivo del Derecho internacional tiene aún más importancia respecto de tratados multilaterales como la Convención de Viena de 1975 que no están llamados a ser derecho directamente aplicable sino derecho supletorio.

A) Entrando ya en el análisis de las normas concretas de la Convención diremos que respecto a la creación de las misiones permanentes el artículo 5, párrafo primero, de la Convención recoge la normativa actualmente vigente. En efecto el hecho de que los Estados miembros de una Organización internacional creen o no creen misiones permanentes nunca se ha hecho depender del consentimiento del Estado huésped, sino de la necesidad de la creación de dichas misiones expresada por las "reglas de la Organización".

Si las reglas sobre la creación de las misiones permanentes pueden ser consideradas como codificación de las normas actualmente existentes, no podemos decir lo mismo de las reglas sobre la creación de las misiones permanentes de observación, contenidas en el párrafo segundo del artículo quinto. La posibilidad de que los Estados no miembros de una Organización puedan acreditar misiones permanentes ante ésta es, sin duda, un desarrollo progresivo del Derecho internacional actual.

Puede decirse que ningún Estado se ha opuesto a la posibilidad de que los Estados no miembros de una Organización puedan crear misiones permanentes de observación. La disputa respecto a las misiones permanentes de observación no ha versado, por tanto, respecto a la creación de estas misiones, sino respecto a los privilegios e inmunidades a los que dichas misiones tendrían derecho.

B) En lo que se refiere a las normas de la Convención relativas al nombramiento del personal de la misión, no es fácil decir si la Convención ha optado por la vía de la codificación del Derecho existente o por la de su desarrollo progresivo. Como vimos en el capítulo tercero, ni en las relaciones entre Estados ni en las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales, está claro cuáles son las reglas aplicables al nombramiento del personal perteneciente a las misiones diplomáticas y a las misiones permanentes. Ante este problema, la Conferencia de Viena de 1975 decidió aprobar el artículo 9 de la Convención, que repite las reglas contenidas en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1961. De acuerdo con esta similitud, podríamos decir que el artículo 9 de la Convención de 1975 supone la codificación de las reglas actuales, lo que nos llevaría a afirmar que la oposición de los Estados occidentales a la aprobación de dicho artículo suponía un deseo de cambio de la normativa actual.

Probablemente hubiera sido deseable un desarrollo de la normativa actual del nombramiento del personal de las misiones permanentes que pudiera evitar los problemas a los que puede dar lugar. Sin embargo, hay que hacer constar que los Estados del bloque occidental no acertaron a proponer una enmienda que hubiera evitado la posibilidad de abuso por parte del Estado que envía, sin dar por ello al Estado huésped un poder de inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados que envían.

C) Respecto de la posibilidad de expulsión por parte del Estado huésped de un miembro de una misión permanente, creemos que puede afirmarse que el artículo 77 de la Convención codifica las reglas aplicables sobre la materia. En el capítulo tercero vimos de que manera tanto

las Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades como algunos Acuerdos de sede prevén la posibilidad de expulsión de los miembros de las misiones permanentes en caso de abuso de privilegios. En dicho apartado vimos también cómo en los casos en que el Acuerdo de sede respectivo no prevé la posibilidad de expulsión, los Estados huéspedes siempre se han creído con derecho a tomar las medidas necesarias para su seguridad y su protección, entre las que se incluye la posibilidad de expulsar a los miembros de las misiones permanentes.

Si nos atenemos al párrafo segundo del artículo 77 de la Convención, podría decirse que ésta ha tratado de limitar taxativamente la facultad del Estado huésped de expulsar a un miembro de una misión permanente en caso de abuso de privilegios. Sin embargo, el párrafo cuarto del mismo artículo da al Estado huésped un poder residual para que tome "las medidas que sean necesarias para su propia protección". Creemos que, con esta solución, el artículo 77 de la Convención protege debidamente los intereses de los Estados huéspedes.

D) Entrando ya en el tema de los privilegios e inmunidades que la Convención de 1975 concede al personal de las misiones permanentes, diremos que la Convención ha seguido fielmente en este punto el ejemplo dado por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Esta Convención era ya aplicable al personal de las misiones permanentes, dado que los Acuerdos de sede conceden a dicho personal los "privilegios e inmunidades diplomáticas" en general. Por esta razón, no creemos que sea justo afirmar, como ha hecho J.G.FENNESSY, que la Convención de 1975 concede excesivos privilegios a los miembros de las misiones permanentes (13), cuando lo que ha hecho dicha Convención ha sido confirmar normas ya vigentes.

(13) FENNESSY, "The 1975 Vienna Convention on the representation of States in their relations with International Organizations of a universal character", AJIL, Vol. 70, p. 65.

Algunos delegados, como el de Francia, se lamentaron en la Conferencia de Viena de 1975 de que la Convención no hubiera dado soluciones adecuadas para los problemas que pueda plantear al Estado huésped la inviolabilidad de la misión, la inviolabilidad de la valija de la misión y la inmunidad de jurisdicción del personal de las misiones permanentes (14). Ciertamente la inviolabilidad de la misión y de la valija así como la inmunidad de jurisdicción del personal de la misión pueden plantear problemas al Estado huésped. Sin embargo, habría que reconocer que respecto a este punto la Convención de 1975 no hace sino confirmar la normativa vigente. No cabe duda, sin embargo, que respecto a estos problemas hubiera sido deseable un cierto desarrollo de la normativa vigente que, sin menoscabar la libertad de acción de las misiones, evitara las consecuencias indeseables del estatuto diplomático.

Si en lo que se refiere a los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes y del personal de las mismas las reglas de la Convención son la confirmación del Derecho vigente, no sucede lo mismo respecto a las reglas de la Convención que conceden los privilegios e inmunidades diplomáticos a las misiones permanentes de observación y al personal de éstas. Algunos Estados han considerado que dicha extensión no era necesaria (15). Sin embargo creemos que dicho desarrollo progresivo era conveniente, pues la independencia de las actividades de las Organizaciones internacionales exige hoy día que los Estados no miembros de una Organización internacional puedan acreditar misiones ante éstas.

II. Conclusiones específicas.

1. Durante el siglo XIX se produjeron una serie de intentos dirigidos a transformar la estructura de la Sociedad internacional. Las Conferencias...

(14) Conferencia, Vol. I, p. 55.

(15) Ver la opinión del Gobierno de los EE.UU. en "Observaciones de los Estados miembros", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, p. 401.

.../...

ferencias de La Haya, las Comisiones fluviales, las Uniones administrativas y las Oficinas internacionales son ejemplos de dichos intentos. Estos precedentes unidos a la creencia general de que una mejor estructuración de la Sociedad internacional hubiera hecho imposible el comienzo de la primera guerra mundial, cristalizaron en la creación de la Sociedad de Naciones.

El hecho de que la Sociedad de Naciones fuera incapaz de impedir una nueva conflagración general llevó al convencimiento sobre la necesidad de crear un sistema de Organizaciones internacionales universales para salvaguardar la paz y para lograr la cooperación internacional en todos los campos. A esta convicción general respondió la creación del sistema de Organizaciones internacionales de las Naciones Unidas.

Con la creación del sistema de Organizaciones internacionales de las Naciones Unidas se hizo sentir la necesidad de nuevos medios jurídicos que facilitaran y aseguraran la comunicación entre los Estados y dichas Organizaciones internacionales. Entre estos medios jurídicos destacan las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales.

2. La importancia excepcional de los tratados dentro del Derecho internacional actual es aún más acentuada respecto a la parte del Derecho internacional que regula las Organizaciones internacionales. Entre los tratados relativos a las Organizaciones internacionales y que afectan a las misiones permanentes hay que distinguir los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales, las tres Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades y los llamados Acuerdos de sede.

Ni los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales ni las tres Convenciones generales sobre privilegios e inmunidades constituirían una base legal suficiente para el establecimiento de las misiones permanentes. En defecto de éstos, el estatuto de las misiones permanentes se

basó fundamentalmente en los Acuerdos de sede que concedían a los representantes de los Estados en las Organizaciones internacionales los privilegios e inmunidades de los que normalmente gozan los agentes diplomáticos.

3. Si los privilegios e inmunidades de las misiones permanentes se han basado en los Acuerdos de sede, el resto de las normas aplicables a dichas misiones se han establecido gracias a la capacidad de las Organizaciones internacionales de crear su propio orden jurídico. Este orden jurídico propio, o Derecho interno de las Organizaciones internacionales, ha podido llenar el vacío legislativo dejado por los tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales respecto a las misiones permanentes.

4. El hecho de que la generalidad de los Acuerdos de sede hayan equiparado las misiones permanentes a las misiones diplomáticas unido a la práctica constante en el mismo sentido de los distintos Estados huéspedes respecto a éstas permiten afirmar la existencia de reglas consuetudinarias sobre el estatuto de las misiones permanentes acreditadas por los Estados miembros ante las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

5. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 regula de forma general el estatuto de las misiones permanentes acreditadas ante las Organizaciones internacionales universales. Sin embargo dicha Convención se declara inaplicable en caso de contradicción entre ésta y las reglas propias de cada Organización o entre la misma y los tratados vigentes o futuros concluidos por cada Organización.

6. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 hace posible que las Organizaciones internacionales universales puedan ser parte en los tratados multilaterales. Aunque la Convención no prevé que las Organizaciones internacionales puedan ratificar la Convención, ésta no puede ser aplicada a las misiones permanentes acreditadas ante una Organización internacional sin el consentimiento de ésta.

7. De la misma forma que las relaciones diplomáticas entre Estados, las relaciones entre Estados y Organizaciones internacionales tienen tres presupuestos previos que son: la personalidad internacional de ambos, el reconocimiento mutuo y el acuerdo para crear una misión permanente.

8. La personalidad internacional de las Organizaciones internacionales es hoy generalmente admitida, lo que no quiere decir que exista acuerdo sobre el contenido de dicha personalidad. La discusión sobre dicho contenido se ha polarizado entre la teoría recogida por el TIJ y denominada de los " poderes implícitos " y la de los partidarios de la equiparación de la personalidad internacional de las Organizaciones internacionales con la de los Estados. Modernamente parece existir acuerdo en cuanto a la imposibilidad de dar reglas generales sobre el contenido de la personalidad de las Organizaciones, que dependerá de las reglas de cada Organización. Por tanto la capacidad de una Organización internacional de recibir misiones permanentes dependerá de dichas reglas.

9. En las relaciones entre una Organización internacional y los Estados miembros de ésta no cabe hablar ni de reconocimiento de la Organización por parte del Estado, ni de reconocimiento de Estado por parte de la Organización, pues el simple hecho de la pertenencia de un Estado a una Organización supone el reconocimiento mutuo. Sin embargo, cuando existan varios gobiernos que pretendieran ser el único y legítimo de un Estado miembro de una Organización, ésta al admitir a los representantes de uno de ellos realizará un reconocimiento de gobierno. En general las Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas han seguido el principio de la efectividad para el reconocimiento de gobiernos.

10. Si entre una Organización internacional y los Estados miembros de ésta no cabe hablar de reconocimiento de Estado, no puede de

cirse lo mismo en lo que respecta a los Estados no miembros de dicha Organización. Las Organizaciones internacionales pueden reconocer o no reconocer a los Estados no miembros. Igualmente los Estados que no son miembros de una Organización no tienen la obligación de reconocer a una Organización internacional en la que no participan. Las Organizaciones internacionales no tienen, por tanto, personalidad objetiva.

Las formas que puede adoptar el reconocimiento de un Estado por una Organización internacional dependerán de las reglas propias de cada Organización. Sin embargo, el hecho de recibir una misión permanente de observación enviada por un Estado no miembro supondrá el reconocimiento implícito de éste.

11. El derecho de los Estados miembros de una Organización internacional a crear una misión permanente acreditada ante ésta dependerá de las reglas propias de la Organización. Como las Organizaciones internacionales del sistema de las NU están basadas en el principio de la igualdad de los Estados miembros, la posibilidad de que los Estados miembros de una de esas Organizaciones acrediten misiones ante ésta corresponderá igualmente a todos y cada uno de dichos Estados.

12. La posibilidad de que los Estados no miembros de una Organización internacional acrediten ante ésta misiones permanentes de observación dependerá de las reglas propias de cada Organización. Sin embargo, si respecto de los Estados miembros no cabe que las reglas de la Organización hagan discriminaciones entre ellos, no sucede lo mismo respecto a los Estados no miembros, pues respecto a éstos la Organización es libre de aceptar o no el envío de misiones permanentes de observación.

13. El nombramiento del personal de las misiones permanentes entra dentro de la competencia reservada del Estado acreditante, por lo que ni la Organización internacional ni el Estado huésped pueden opo

nerse a los nombramientos que realice dicho Estado. La Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 confirma este derecho de los Estados acreditantes. Sin embargo la Convención no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas a los que pueden dar lugar los nombramientos realizados de mala fé.

14. El Estado huésped de una Organización internacional no tiene capacidad para declarar persona non grata a los miembros de las misiones permanentes. Sin embargo, el Estado huésped puede ordenar la expulsión de un miembro de una misión permanente si éste ha violado de forma grave la legislación penal del Estado huésped, o se ha inmiscuido en sus asuntos internos. Además, el Estado huésped puede expulsar a un miembro de una misión permanente si la presencia de éste sobre su territorio atenta a su seguridad.

15. El estatuto privilegiado que la Convención de Viena de 14 de marzo de 1975 concede a las misiones permanentes y al personal de las mismas es prácticamente idéntico al estatuto del que en la actualidad gozan dichas misiones, y su personal, según los Acuerdos de sede vigentes. No puede decirse lo mismo respecto a las misiones permanentes de observación que no gozan en la actualidad de ningún estatuto privilegiado y que la Convención de Viena de 1975 ha equiparado a las misiones permanentes.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
EN SUS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
DE CARÁCTER UNIVERSAL

Los Estados Partes en la presente Convención,

Reconociendo la función cada vez más importante de la diplomacia multilateral en las relaciones entre los Estados y las responsabilidades de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales de carácter universal dentro de la comunidad internacional,

Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados,

Recordando la obra de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional aplicable a las relaciones bilaterales entre los Estados efectuada por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 y la Convención sobre las misiones especiales de 1969,

Estimando que una convención internacional sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal contribuiría al fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y sociales,

Recordando las disposiciones del Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas,

Reconociendo que el objeto de los privilegios e inmunidades enunciados en la presente Convención no es favorecer a los individuos sino garantizar el desempeño eficaz de sus funciones en relación con las organizaciones y conferencias,

Teniendo en cuenta la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados de 1947, así como otros acuerdos en vigor entre los Estados y entre los Estados y las organizaciones internacionales,

Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continúan rigiendo las cuestiones no reguladas expresamente por las disposiciones de la presente Convención,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 1

Terminología

Para los efectos de la presente Convención:

- 1) se entiende por "organización internacional" una organización intergubernamental;
- 2) se entiende por "organización internacional de carácter universal" las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y cualquier organización similar cuya composición y atribuciones son de alcance mundial;
- 3) se entiende por "Organización" la organización internacional de que se trate;
- 4) se entiende por "órgano":
 - a) cualquier órgano principal o subsidiario de una organización internacional, o
 - b) cualquier comisión, comité o subgrupo de uno de tales órganos, en el que Estados sean miembros;
- 5) se entiende por "conferencia" una conferencia de Estados convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios;
- 6) se entiende por "misión", según el caso, la misión permanente o la misión permanente de observación;
- 7) se entiende por "misión permanente" una misión de índole permanente, que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado miembro de una organización internacional ante la Organización;
- 8) se entiende por "misión permanente de observación" una misión de índole permanente, que tenga carácter representativo del Estado, enviada ante una organización internacional por un Estado no miembro de la Organización;
- 9) se entiende por "delegación", según el caso, la delegación en un órgano o la delegación en una conferencia;
- 10) se entiende por "delegación en un órgano" la delegación enviada por un Estado para participar en su nombre en las deliberaciones del órgano;
- 11) se entiende por "delegación en una conferencia" la delegación enviada por un Estado para participar en su nombre en la conferencia;

- 12) se entiende por "delegación de observación", según el caso, la delegación de observación en un órgano o la delegación de observación en una conferencia;
- 13) se entiende por "delegación de observación en un órgano" la delegación enviada por un Estado para participar en su nombre como observadora en las deliberaciones del órgano;
- 14) se entiende por "delegación de observación en una conferencia" la delegación enviada por un Estado para participar en su nombre como observadora en las deliberaciones de la conferencia;
- 15) se entiende por "Estado huésped" el Estado en cuyo territorio:
 - a) la Organización tiene su sede o una oficina, o
 - b) se celebre la reunión de un órgano o una conferencia;
- 16) se entiende por "Estado que envía" el Estado que envía:
 - a) una misión ante la Organización cerca de la sede o de una oficina de la Organización, o
 - b) una delegación a un órgano o una delegación a una conferencia, o
 - c) una delegación de observación a un órgano o una delegación de observación a una conferencia;
- 17) se entiende por "jefe de misión", según el caso, el representante permanente o el observador permanente;
- 18) se entiende por "representante permanente" la persona encargada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión permanente;
- 19) se entiende por "observador permanente" la persona encargada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión permanente de observación;
- 20) se entiende por "miembros de la misión" el jefe de misión y los miembros del personal;
- 21) se entiende por "jefe de delegación" el delegado encargado por el Estado que envía de actuar con el carácter de tal;
- 22) se entiende por "delegado" cualquier persona designada por un Estado para participar como su representante en las deliberaciones de un órgano o en una conferencia;
- 23) se entiende por "miembros de la delegación" los delegados y los miembros del personal;
- 24) se entiende por "jefe de la delegación de observación" el delegado observador encargado por el Estado que envía de actuar con el carácter de tal;
- 25) se entiende por "delegado observador" cualquier persona designada por un Estado para asistir como observador a las deliberaciones de un órgano o de una conferencia;

- 26) se entiende por "miembros de la delegación de observación" los delegados observadores y los miembros del personal;
- 27) se entiende por "miembros del personal" los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión, la delegación o la delegación de observación;
- 28) se entiende por "miembros del personal diplomático" los miembros del personal de la misión, la delegación o la delegación de observación que gocen de la calidad de diplomático para los fines de la misión, la delegación o la delegación de observación;
- 29) se entiende por "miembros del personal administrativo y técnico" los miembros del personal empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión, la delegación o la delegación de observación;
- 30) se entiende por "miembros del personal de servicio" los miembros del personal empleados por la misión, la delegación o la delegación de observación para atender a los locales o realizar cometidos análogos;
- 31) se entiende por "personal al servicio privado" las personas empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la misión o la delegación;
- 32) se entiende por "locales de la misión" los edificios o partes de edificios y el territorio accesorio a los mismos que, cualquiera que sea su propietario, se utilicen para los fines de la misión, incluida la residencia del jefe de misión;
- 33) se entiende por "locales de la delegación" los edificios o partes de edificios que, cualquiera que sea su propietario, se utilicen exclusivamente como oficinas de la delegación;
- 34) se entiende por "reglas de la Organización" en particular los instrumentos constitutivos de la Organización, sus decisiones y resoluciones pertinentes y su práctica establecida.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo relativas a la terminología empleada en la presente Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esa terminología o del sentido que se le pueda dar en otros instrumentos internacionales o en el derecho interno de cualquier Estado.

Artículo 2

Alcance de la presente Convención

1. La presente Convención se aplica a la representación de los Estados en sus relaciones con cualquier organización internacional de carácter universal y a su representación en conferencias convocadas por tal organización o bajo sus auspicios, cuando la Convención haya sido aceptada por el Estado huésped y la Organización haya completado el procedimiento previsto en el artículo 90.
2. El hecho de que la presente Convención no se aplica a otras organizaciones internacionales se entenderá sin perjuicio de la aplicación a la representación de Estados en sus relaciones con esas otras organizaciones de toda regla enunciada en la Convención que fuere aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención.
3. El hecho de que la presente Convención no se aplica a otras conferencias se entenderá sin perjuicio de la aplicación a la representación de Estados en esas otras conferencias de toda regla enunciada en la Convención que fuere aplicable en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención.
4. Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impedirá la conclusión de acuerdos entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales que tengan por objeto hacer que la Convención sea aplicable en todo o en parte a organizaciones internacionales o conferencias distintas de aquéllas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 3

Relación entre la presente Convención y las reglas pertinentes
de organizaciones internacionales o conferencias

Las disposiciones de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de las reglas pertinentes de la Organización o de las disposiciones pertinentes del reglamento de la conferencia.

Artículo 4.

Relación entre la presente Convención y otros acuerdos internacionales

Las disposiciones de la presente Convención

- a) se entenderán sin perjuicio de otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales de carácter universal, y
- b) no excluirán la celebración de otros acuerdos internacionales concernientes a la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal o a su representación en conferencias convocadas por esas organizaciones o bajo sus auspicios.

PART II

MISIONES ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Artículo 5

Establecimiento de misiones

1. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados miembros podrán establecer misiones permanentes para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 6.
2. Si las reglas de la Organización lo permiten, los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 7.
3. La Organización notificará al Estado huésped la creación de una misión con antelación a su establecimiento.

Artículo 6

Funciones de la misión permanente

Las funciones de la misión permanente son, en particular:

- a) asegurar la representación del Estado que envía ante la Organización;
- b) mantener el enlace entre el Estado que envía y la Organización;
- c) celebrar negociaciones con la Organización y dentro del marco de ella;
- d) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
- e) asegurar la participación del Estado que envía en las actividades de la Organización;
- f) proteger los intereses del Estado que envía ante la Organización;
- g) fomentar la realización de los propósitos y principios de la Organización cooperando con ella y dentro del marco de ella.

Artículo 7

Funciones de la misión permanente de observación

Las funciones de la misión permanente de observación son, en particular:

- a) asegurar la representación del Estado que envía y salvaguardar sus intereses ante la Organización y mantener el enlace con ella;
- b) enterarse de las actividades realizadas en la Organización e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
- c) fomentar la cooperación con la Organización y celebrar negociaciones con ella.

Acreditación o nombramiento múltiples

1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona como jefe de misión ante dos o más organizaciones internacionales o nombrar a un jefe de misión como miembro del personal diplomático de otra de sus misiones.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del personal diplomático de la misión como jefe de misión ante otras organizaciones internacionales o nombrar a un miembro del personal de la misión como miembro del personal de otra de sus misiones.
3. Dos o más Estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de misión ante la misma organización internacional.

Artículo 9

Nombramiento de los miembros de la misión

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 73, el Estado que envía nombrará libremente a los miembros de la misión.

Artículo 10

Credenciales del jefe de misión

Las credenciales del jefe de misión serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización lo permiten, por otra autoridad competente del Estado que envía, y serán transmitidas a la Organización.

Artículo 11

Acreditación ante órganos de la Organización

1. En las credenciales expedidas para su representante permanente un Estado miembro podrá especificar que dicho representante está facultado para actuar como delegado ante uno o varios órganos de la Organización.
2. A menos que un Estado miembro disponga otra cosa, su representante permanente podrá actuar como delegado ante órganos de la Organización para los cuales no haya requisitos especiales concernientes a la representación.
3. En las credenciales expedidas para su observador permanente, un Estado no miembro podrá especificar que dicho observador está facultado para actuar como delegado observado ante uno o varios órganos de la Organización cuando ello esté permitido por las reglas de la Organización o del órgano de que se trate.

Artículo 12

Plenos poderes para la celebración de un tratado con la Organización

1. Para la adopción del texto de un tratado entre su Estado y la Organización, se considerará que el jefe de misión, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, representa a su Estado.
2. Para la firma de un tratado con carácter definitivo o la firma de un tratado ad referendum, entre su Estado y la Organización, no se considerará que el jefe de misión en virtud de sus funciones representa a su Estado, a menos que de la práctica de la Organización o de otras circunstancias se deduzca que la intención de las partes ha sido prescindir de la presentación de plenos poderes.

Artículo 13

Composición de la misión

Además del jefe de misión, la misión podrá comprender personal diplomático, personal administrativo y técnico y personal de servicio.

Artículo 14

Número de miembros de la misión

El número de miembros de la misión no excederá de los límites de lo que sea razonable y normal habida cuenta de las funciones de la Organización, las necesidades de la misión de que se trate y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.

Artículo 15

Notificaciones

1. El Estado que envía notificará a la Organización:
 - a) el nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los miembros de la misión, su llegada, su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión, y los demás cambios concernientes a su condición que puedan ocurrir durante su servicio en la misión;
 - b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a la familia de un miembro de la misión que forme parte de su casa y, cuando proceda, el hecho de que una persona pase a ser o deje de ser tal miembro de la familia;
 - c) la llegada y la salida definitiva de personas empleadas al servicio privado de miembros de la misión y la terminación de su empleo como tales;

- d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes en el Estado huésped como miembros del personal de la misión o personas empleadas al servicio privado;
- e) la situación de los locales de la misión y de las residencias particulares que gozan de inviolabilidad conforme a los artículos 23 y 29, así como cualquier otra información que sea necesaria para identificar tales locales y residencias.

Siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva deberán ser también notifi-
cadas con antelación.

La Organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refieren
párrafos 1 y 2 del presente artículo.

El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped las notificaciones a
se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 16

Jefe de misión interino

Si queda vacante el puesto de jefe de misión, o si el jefe de misión no puede desem-
ñar sus funciones, el Estado que envía podrá nombrar un jefe de misión interino cuyo
nombramiento será notificado a la Organización y por ésta al Estado huésped.

Artículo 17

Precedencia

La precedencia entre los representantes permanentes se determinará por el orden alfa-
bético de los nombres de los Estados utilizado en la Organización.

La precedencia entre los observadores permanentes se determinará por el orden alfa-
bético de los nombres de los Estados utilizado en la Organización.

Artículo 18

Situación de la misión

Las misiones deben establecerse en la localidad donde la Organización tenga su sede.
Sin embargo, si las reglas de la Organización lo permiten y con el consentimiento previo
del Estado huésped, el Estado que envía podrá establecer una misión o una oficina de una
misión en una localidad distinta de aquella en que la Organización tenga su sede.

Artículo 19

Uso de la bandera y del escudo

1. La misión tendrá derecho a colocar en sus locales la bandera y el escudo del Estado que envía. El jefe de misión tendrá el mismo derecho con respecto a su residencia y sus medios de transporte.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado huésped.

Artículo 20

Facilidades en general

1. El Estado huésped dará a la misión todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
2. La Organización ayudará a la misión a obtener esas facilidades y le dará las que dependan de su propia competencia.

Artículo 21

Locales y alojamiento

1. El Estado huésped y la Organización ayudarán al Estado que envía a obtener en condiciones razonables los locales necesarios para la misión en el territorio del Estado huésped. Cuando sea necesario, el Estado huésped facilitará de conformidad con sus leyes la adquisición de esos locales.
2. Cuando sea necesario, el Estado huésped y la Organización ayudarán también a la misión a obtener en condiciones razonables alojamiento adecuado para sus miembros.

Artículo 22

Asistencia por la Organización en materia de privilegios e inmunidades

1. La Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado que envía, a su misión y a los miembros de ésta a asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades previstos en la presente Convención.
2. La Organización ayudará, cuando sea necesario, al Estado huésped a lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado que envía, de su misión y de los miembros de ésta respecto de los privilegios e inmunidades previstos en la presente Convención.

Artículo 23

Inviolabilidad de los locales

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrá penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión.
2. a) El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad;
b) En caso de que se produzca un atentado contra los locales de la misión, el Estado huésped adoptará todas las medidas adecuadas para procesar y castigar a las personas que hayan cometido el atentado.
3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa embargo o medida de ejecución.

Artículo 24

Exención fiscal de los locales

1. Los locales de la misión de que sea propietario o inquilino el Estado que envía o toda persona que actúe en representación de ese Estado estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales excepto los que constituya el pago de servicios determinados prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere el presente artículo no se aplicará a tales impuestos y gravámenes cuando, de conformidad con las disposiciones legales del Estado huésped, estén a cargo del particular que contrate con el Estado que envía o con toda persona que actúe en representación de ese Estado.

Artículo 25

Inviolabilidad de los archivos y documentos

Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables, dondequiera que se hallen.

Artículo 26

Libertad de circulación

Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad nacional, el Estado huésped garantizará la libertad de circulación y de tránsito por su territorio a todos los miembros de la misión y a los miembros de sus familias que formen parte de sus casas.

Artículo 27

Libertad de comunicación

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas permanentes, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales, delegaciones y delegaciones de observación, dondequiera que se encuentren, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, la misión sólo podrá instalar y utilizar una emisora de radio con el consentimiento del Estado huésped.
2. La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Se entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la misión y a sus funciones.
3. La valija de la misión no podrá ser abierta ni retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y sólo podrán contener documentos u objetos destinados al uso oficial de la misión.
5. El correo de la misión, que deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal y el número de bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.
6. El Estado que envía o la misión podrán designar correos ad hoc de la misión. En tales casos se aplicarán también las disposiciones del párrafo 5 del presente artículo, pero las inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando el correo ad hoc haya entregado al destinatario la valija de la misión que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión podrá ser confiada al comandante de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar a un punto de entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como un correo de la misión. Previs acuerdo con las

autoridades competentes del Estado huésped, la misión podrá enviar a uno de sus miembros ; tomar posesión de la valija directa y libremente de manos del comandante del buque o de la aeronave.

Artículo 28

Inviolabilidad personal

La persona del jefe de misión, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión, es inviolable. Ni el jefe de misión ni esos miembros podrán ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, así como para procesar y castigar a las personas que hayan cometido tales atentados.

Artículo 29

Inviolabilidad de la residencia y de los bienes

1. La residencia particular del jefe de misión, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión, gozará de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión.
2. Los documentos, la correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo 30, los bienes del jefe de misión o de los miembros del personal diplomático de la misión gozarán igualmente de inviolabilidad.

Artículo 30

Inmunidad de jurisdicción

1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped, excepto si se trata de:
 - a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión;
 - b) una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;
 - c) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado huésped, fuera de sus funciones oficiales.

2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del presente artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

3. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión no están obligados a testificar.

4. La inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión en el Estado huésped no los exime de la jurisdicción del Estado que envía.

Artículo 31

Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del jefe de misión y de los miembros del personal diplomático de la misión, así como de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 36.

2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.

3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvencción directamente ligada a la demanda principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia.

5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo con respecto a una acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa de la cuestión.

Artículo 32

Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo, el jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión estarán, en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped.

2. La exención prevista en el párrafo 1 del presente artículo se aplicará también al personal al servicio privado exclusivo del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión, a condición de que las personas empleadas:
 - a) no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, y
 - b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.
3. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión que empleen a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 del presente artículo habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad social del Estado huésped impongan a los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado huésped, si tal participación está permitida por ese Estado.
5. Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya celebrados y no impedirán que se celebren en lo sucesivo acuerdos de esa índole.

Artículo 33

Exención de impuestos y gravámenes

El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales o municipales, con excepción de:

- a) los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;
- b) los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía y para los fines de la misión;
- c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 38;
- d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped;
- e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios determinados prestados;
- f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

Artículo 34

Exención de prestaciones personales

El Estado huésped deberá eximir al jefe de misión y a los miembros del personal diplomático de la misión de toda prestación personal, de todo servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

Artículo 35

Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos:

- a) de los objetos destinados al uso oficial de la misión;
- b) de los objetos destinados al uso personal del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión, incluidos los efectos destinados a su instalación.

2. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión estarán exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya motivos fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo u objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tales casos, la inspección sólo podrá efectuarse en presencia de la persona que goza de la exención o de su representante autorizado.

Artículo 36

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas

1. Los miembros de la familia del jefe de misión que formen parte de su casa y los miembros de la familia de un miembro del personal diplomático de la misión que formen parte de su casa, siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34 y en los párrafos 1, apartado b), y 2 del artículo 35.

2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, así como los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 28, 29, 30, 32, 33 y 34, salvo que la inmunidad

e la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 30 no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1, apartado b), el artículo 35, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación.

. Los miembros del personal de servicio de la misión que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente gozarán de inmunidad por los actos realizados en el desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención especificada en el artículo 32.

. El personal al servicio privado de los miembros de la misión estará, siempre que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciba por sus servicios. A otros respecto, sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.

Artículo 37

Nacionales y residentes permanentes del Estado huésped

. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros privilegios e inmunidades, el jefe de misión o todo miembro del personal diplomático de la misión que sea nacional del Estado huésped o tenga en él residencia permanente sólo gozará de inmunidad e jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.

. Los demás miembros de la misión que sean nacionales del Estado huésped o que tengan en él residencia permanente gozarán solamente de inmunidad de jurisdicción por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones. En todo lo demás, esos miembros, así como los miembros del personal al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente, sólo gozarán de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esos miembros y ese personal de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión.

Artículo 38

Duración de los privilegios e inmunidades

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido notificado al Estado huésped por la Organización o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del territorio o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión, los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que puedan salir del territorio.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que forme parte de su casa, dicho Estado permitirá que se saquen del territorio los bienes muebles del fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallen en el Estado huésped por el solo hecho de haber estado presente en ese Estado el causante de la sucesión como miembro de la misión o de la familia de un miembro de la misión.

Artículo 39

Actividades profesionales o comerciales

1. El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión no ejercerán en el Estado huésped ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.
2. Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda tales privilegios e inmunidades, los miembros del personal administrativo y técnico, así como los miembros de sus familias que formen parte de la casa de un miembro de la misión, no gozarán, cuando ejerzan actividades profesionales o comerciales en provecho propio, de ningún privilegio o inmunidad por los actos realizados en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de esas actividades.

Terminación de las funciones

Las funciones del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión terminarán en particular:

- a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización en el sentido de que ha puesto término a esas funciones;
- b) si la misión es retirada temporal o definitivamente.

Artículo 41Protección de locales, bienes y archivos

1. Cuando la misión sea definitiva o temporalmente retirada, el Estado huésped deberá respetar y proteger los locales, bienes y archivos de la misión. El Estado que envía deberá adoptar todas las medidas que sean apropiadas para liberar al Estado huésped de ese deber especial lo antes posible. Podrá confiar la custodia de los locales, bienes y archivos de la misión a la Organización, si ésta así lo decide, o a un tercer Estado aceptable para el Estado huésped.

2. El Estado huésped deberá, si se lo solicita el Estado que envía, dar a éste facilidades para retirar los bienes y los archivos de la misión del territorio del Estado huésped.

PARTE III

DELEGACIONES EN ORGANOS Y EN CONFERENCIAS

Artículo 42

Envío de delegaciones

1. Un Estado podrá enviar una delegación a un órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas de la Organización.
2. Dos o más Estados podrán enviar una misma delegación a un órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas de la Organización.

Artículo 43

Nombramiento de los miembros de la delegación

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46 y 73, el Estado que envía nombrará libremente a los miembros de la delegación.

Artículo 44

Credenciales de los delegados

Las credenciales del jefe de delegación y de los demás delegados serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o, si las reglas de la Organización o el reglamento de la conferencia lo permiten, por otra autoridad competente del Estado que envía. Las credenciales serán transmitidas a la Organización o a la conferencia, según el caso.

Artículo 45

Composición de la delegación

Además del jefe de delegación, la delegación podrá comprender otros delegados, personal diplomático, personal administrativo y técnico y personal de servicio.

Artículo 46

Número de miembros de la delegación

El número de miembros de la delegación no excederá de los límites de lo que sea razonable y normal habida cuenta, según el caso, de las funciones del órgano o del objeto de la conferencia, así como de las necesidades de la delegación de que se trate y de las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.

Artículo 47
Notificaciones

1. El Estado que envía notificará a la Organización o a la conferencia, según el caso:
 - a) la composición de la delegación, incluido el cargo, título y orden de precedencia de los miembros de la delegación, y todo cambio ulterior en la composición de la delegación;
 - b) la llegada y la salida definitiva de los miembros de la delegación y la terminación de sus funciones en la delegación;
 - c) la llegada y la salida definitiva de toda persona que acompañe a un miembro de la delegación;
 - d) el comienzo y la terminación del empleo de personas residentes en el Estado huésped como miembros del personal de la delegación o personas empleadas al servicio privado;
 - e) la situación de los locales de la delegación y de los alojamientos particulares que gozan de inviolabilidad conforme al artículo 59, así como cualquier otra información que sea necesaria para identificar tales locales y alojamientos.
2. Siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva deberán ser también notificadas con antelación.
3. La Organización o la conferencia, según el caso, transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al Estado huésped las notificaciones que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 48
Jefe de delegación interino

1. Si el jefe de delegación se encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, se designará un jefe de delegación interino entre los demás delegados por el jefe de delegación o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por una autoridad competente del Estado que envía. El nombre del jefe de delegación interino será notificado a la Organización o a la conferencia, según el caso.
2. Si una delegación no dispone de otro delegado para desempeñar las funciones de jefe de delegación interino, podrá designarse otra persona a tal efecto. En ese caso, debe expedirse y transmitirse credenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4

Artículo 49

Precedencia

La precedencia entre delegaciones se determinará por el orden alfabético de los nombres de los Estados utilizado en la Organización.

Artículo 50

Estatuto del jefe del Estado y de las personas de rango elevado

1. El jefe de Estado o todo miembro de un órgano colegiado que ejerza las funciones de jefe de Estado de conformidad con la constitución del Estado de que se trate, cuando encabece la delegación gozará en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo que otorga la presente Convención, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado.
2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores o toda persona de rango elevado, cuando encabece la delegación o sea miembro de ella, gozará en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo que otorga la presente Convención, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a esas personas.

Artículo 51

Facilidades en general

1. El Estado huésped dará a la delegación todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus cometidos.
2. La Organización o la conferencia, según el caso, ayudará a la delegación a obtener esas facilidades y le dará las que dependan de su propia competencia.

Artículo 52

Locales y alojamiento

Si se solicita, el Estado huésped y, cuando sea necesario, la Organización o la conferencia ayudarán al Estado que envía a obtener en condiciones razonables los locales necesarios para la delegación y alojamiento adecuado para sus miembros.

Artículo 53

Asistencia en materia de privilegios e inmunidades

Organización o, según el caso, la Organización y la conferencia ayudarán, cuando sario, al Estado que envía, a su delegación y a los miembros de ésta a asegurarse de los privilegios e inmunidades previstos en la presente Convención.

Organización o, según el caso, la Organización y la conferencia ayudarán, cuando sario, al Estado huésped a lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado a, de su delegación y de los miembros de ésta respecto de los privilegios e inmu- previstos en la presente Convención.

Artículo 54

Exención fiscal de los locales

Estado que envía o todo miembro de la delegación que actúe por cuenta de la dele- stará exento de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o muni- sobre los locales de la delegación, excepto los que constituyan el pago de servi- erminados prestados.

exención fiscal a que se refiere el presente artículo no se aplicará a tales s y gravámenes cuando, de conformidad con las disposiciones legales del Estado , estén a cargo de la persona que contrate con el Estado que envía o con un miembro legación.

Artículo 55

Inviolabilidad de los archivos y documentos

s archivos y documentos de la delegación son siempre inviolables, dondequiera hallen.

Artículo 56

Libertad de circulación

n perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido o ntado por razones de seguridad nacional, el Estado huésped garantizará a todos ibros de la delegación la libertad de circulación y de tránsito por su territorio edida necesaria para el desempeño de los cometidos de la delegación.

Artículo 57

Libertad de comunicación

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de la delegación para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con sus misiones diplomáticas permanentes, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación, misiones especiales, otras delegaciones y delegaciones de observación, dondequiera que se encuentren, la delegación podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, la delegación sólo podrá instalar y utilizar una emisora de radio con el consentimiento del Estado huésped.
2. La correspondencia oficial de la delegación es inviolable. Se entiende por correspondencia oficial toda correspondencia concerniente a la delegación y a sus cometidos.
3. Cuando sea factible, la delegación utilizará los medios de comunicación, inclusive la valija y el correo, de la misión diplomática permanente, de una oficina consular, de la misión permanente o de la misión permanente de observación del Estado que envía.
4. La valija de la delegación no podrá ser abierta ni retenida.
5. Los bultos que constituyan la valija de la delegación deberán ir provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y sólo podrán contener documentos u objetos destinados al uso oficial de la delegación.
6. El correo de la delegación, que deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal y el número de bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el desempeño de sus funciones, por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.
7. El Estado que envía o la delegación podrán designar correos ad hoc de la delegación. En tales casos se aplicarán también las disposiciones del párrafo 6 del presente artículo, pero las inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando el correo ad hoc haya entregado al destinatario la valija de la delegación que se le haya encomendado.
8. La valija de la delegación podrá ser confiada al comandante de un buque o de una aeronave comercial que deba llegar a un punto de entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como un correo de la delegación. Previo acuerdo con las autoridades competentes del Estado huésped, la delegación podrá enviar a uno de sus miembros a tomar posesión de la valija directa y libremente de manos del comandante del buque o de la aeronave.

Artículo 58

Inviolabilidad personal

La persona del jefe de delegación y la de los otros delegados, así como la de los miembros del personal diplomático de la delegación, es inviolable. Ni el jefe de delegación ni esos delegados y miembros podrán ser objeto, entre otras cosas, de ninguna forma de detención o arresto. El Estado huésped los tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, así como para procesar y castigar a las personas que hayan cometido tales atentados.

Artículo 59

Inviolabilidad del alojamiento particular y de los bienes

1. El alojamiento particular del jefe de delegación y el de los otros delegados, así como el de los miembros del personal diplomático de la delegación, gozará de inviolabilidad y protección.
2. Los documentos, la correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo 60, los bienes del jefe de delegación, de los otros delegados o de los miembros del personal diplomático de la delegación gozarán igualmente de inviolabilidad.

Artículo 60

Inmunidad de jurisdicción

1. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, gozarán de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped y de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped respecto de todos los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.
2. Dichas personas no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, a menos que ésta pueda adoptarse sin menoscabo de sus derechos conforme a los artículos 58 y 59.
3. Dichas personas no están obligadas a testificar.
4. Nada de lo dispuesto en el presente artículo eximirá a dichas personas de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped en relación con una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo, buque o aeronave utilizado por las personas de que se trate o de su propiedad, siempre que esos daños no puedan ser reparados mediante un seguro.
5. Cualquier inmunidad de jurisdicción de dichas personas en el Estado huésped no las exime de la jurisdicción del Estado que envía.

Artículo 61

Renuncia a la inmunidad

1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción del jefe de delegación, de los otros delegados y de los miembros del personal diplomático de la delegación, así como de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 66.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal.
4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no habrá de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesario una nueva renuncia.
5. Si el Estado que envía no renuncia a la inmunidad de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo con respecto a una acción civil, deberá esforzarse por lograr una solución equitativa de la cuestión.

Artículo 62

Exención de la legislación de seguridad social

1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo, el jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, estarán, en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía, exentos de las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado huésped.
2. La exención prevista en el párrafo 1 del presente artículo se aplicará también al personal al servicio privado exclusivo del jefe de delegación u otro delegado o de un miembro del personal diplomático de la delegación, a condición de que las personas empleadas:
 - a) no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, y
 - b) estén protegidas por las disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer Estado.
3. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, que empleen a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 del presente artículo habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones de seguridad social del Estado huésped impongan a los empleadores.

La exención prevista en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no impedirá la participación voluntaria en el régimen de seguridad social del Estado huésped, si tal participación está permitida por ese Estado.

Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad social ya celebrados y no impedirán que se celebren en lo sucesivo acuerdos de esa índole.

Artículo 63

Exención de impuestos y gravámenes

El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, estarán, en la medida en que sea posible, exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales, regionales o municipales, excepto de:

- a) los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;
- b) los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado huésped, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía y para los fines de la delegación;
- c) los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 68;
- d) los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados que tengan su origen en el Estado huésped y los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales situadas en el Estado huésped;
- e) los impuestos y gravámenes correspondientes a servicios determinados prestados;
- f) los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre relativos a bienes inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 54.

Artículo 64

Exención de prestaciones personales

El Estado huésped deberá eximir al jefe de delegación y a los otros delegados, así como a los miembros del personal diplomático de la delegación, de toda prestación personal, de todo servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas similares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.

Artículo 65

Franquicia aduanera

1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y concederá la exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos:
 - a) de los objetos destinados al uso oficial de la delegación;
 - b) de los objetos destinados al uso personal del jefe de delegación u otro delegado, o de un miembro del personal diplomático de la delegación, importados en su equipaje personal al efectuar su primera entrada en el territorio del Estado huésped para asistir a la reunión del órgano o de la conferencia.
2. El jefe de delegación y los otros delegados, así como los miembros del personal diplomático de la delegación, estarán exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya motivos fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo u objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tales casos, la inspección sólo podrá efectuarse en presencia de la persona que goce de la exención o de su representante autorizado.

Artículo 66

Privilegios e inmunidades de que gozan otras personas

1. Los miembros de la familia del jefe de delegación que le acompañen y los miembros de la familia de todo otro delegado o miembro del personal diplomático de la delegación que le acompañen, siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 58, 59 y 64 y en los párrafos 1, apartado b), y 2 del artículo 65 y estarán exentos de las formalidades de registro de extranjeros.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la delegación que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 58, 59, 60, 62, 63 y 64. Gozará también de los privilegios especificados en el párrafo 1, apartado b), del artículo 65, respecto de los objetos importados en su equipaje personal al efectuar su primera entrada en el territorio del Estado huésped para asistir a la reunión del órgano o de la conferencia. Los miembros de la familia de un miembro del personal administrativo y

nico que le acompañen que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 58, 60 y 64 y en el párrafo 1, apartado b), del artículo 65 en la medida en que se concedan a tal miembro del personal.

Los miembros del personal de servicio de la delegación que no sean nacionales del Estado huésped ni tengan en él residencia permanente gozarán de la misma inmunidad que concede a los miembros del personal administrativo y técnico de la delegación por los actos realizados en el desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención especificada en el artículo 61.

El personal al servicio privado de los miembros de la delegación estará, siempre que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciba por sus servicios. A otros aspectos, sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de los cometidos de la delegación.

Artículo 67

Nacionales y residentes permanentes del Estado huésped

Excepto en la medida en que el Estado huésped conceda otros privilegios e inmunidades, el jefe de delegación o todo otro delegado o miembro del personal diplomático de la delegación que sea nacional del Estado huésped o tenga en él residencia permanente gozará de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.

Los demás miembros del personal de la delegación y el personal al servicio privado que sean nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente sólo gozarán de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita dicho Estado. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre esos miembros y ese personal de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de los cometidos de la delegación.

Artículo 68

Duración de los privilegios e inmunidades

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que entre en el territorio del Estado huésped para asistir a la reunión de un órgano o de una conferencia o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido notificado al Estado huésped por la Organización, por la conferencia o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del territorio o a la expiración de un plazo razonable para hacerlo. Subsistirá, no obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la delegación.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación, los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que puedan salir del territorio.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la delegación que no sea nacional del Estado huésped ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de su familia que le acompañe, dicho Estado permitirá que se saquen del territorio los bienes muebles del fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallen en el Estado huésped por el solo hecho de haber estado presente en ese Estado el causante de la sucesión como miembro de la delegación o de la familia de un miembro de la delegación.

Artículo 69

Terminación de las funciones

Las funciones del jefe de delegación o de otro delegado o miembro del personal diplomático de la delegación terminarán en particular:

- a) por notificación hecha por el Estado que envía a la Organización o a la conferencia en el sentido de que ha puesto término a esas funciones;
- b) al concluir la reunión del órgano o de la conferencia.

Artículo 70

Protección de locales, bienes y archivos

Cuando concluya la reunión de un órgano o de una conferencia, el Estado huésped deberá respetar y proteger los locales de la delegación mientras sean usados por ella, í como sus bienes y archivos. El Estado que envía deberá adoptar todas las medidas e sean apropiadas para liberar al Estado huésped de ese deber especial lo antes posible.

El Estado huésped deberá, si se lo solicita el Estado que envía, dar a éste facilidades para retirar los bienes y los archivos de la delegación del territorio del tado huésped.

PARTE IV

DELEGACIONES DE OBSERVACIÓN EN ÓRGANOS Y EN CONFERENCIAS

Artículo 71

Envío de delegaciones de observación

Un Estado podrá enviar una delegación de observación a un órgano o a una conferencia de conformidad con las reglas de la Organización.

Artículo 72

Disposición general relativa a las delegaciones de observación

Todas las disposiciones de los artículos 43 a 70 de la presente Convención se aplicarán a las delegaciones de observación.

PARTE V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73

Nacionalidad de los miembros de la misión, de la delegación o de la delegación de observación

El jefe de misión y los miembros del personal diplomático de la misión, el jefe de legación, los otros delegados y los miembros del personal diplomático de la delegación, jefe de la delegación de observación, los otros delegados observadores y los miembros del personal diplomático de la delegación de observación habrán de tener en principio la nacionalidad del Estado que envía.

El jefe de la misión y los miembros del personal diplomático de la misión no podrán designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento.

Cuando el jefe de delegación o todo otro delegado o miembro del personal diplomático de la delegación o el jefe de la delegación de observación o todo otro delegado observador o miembro del personal diplomático de la delegación de observación sean designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped, se presumirá el consentimiento de dicho Estado si se le ha notificado tal designación de un nacional del Estado huésped no ha planteado objeciones.

Artículo 74

Legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad

Los miembros de la misión, la delegación o la delegación de observación que no sean nacionales del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas o les acompañen, según el caso, no adquirirán la nacionalidad del Estado huésped por el solo efecto de la legislación de ese Estado.

Artículo 75

Privilegios e inmunidades en caso de multiplicidad de funciones

Cuando miembros de una misión diplomática permanente o de una oficina consular en el Estado huésped sean incluidos en una misión, una delegación o una delegación de observación, conservarán sus privilegios e inmunidades como miembros de su misión diplomática permanente u oficina consular, además de los privilegios e inmunidades concedidos por la presente Convención.

Artículo 76

Cooperación entre los Estados que envían y los Estados huéspedes

Cuando sea necesario y en la medida que sea compatible con el ejercicio independiente de las funciones de su misión, delegación o delegación de observación, el Estado que envía cooperará tan plenamente como sea posible con el Estado huésped en la realización de cualquier investigación o procesamiento que se efectúen conforme a las disposiciones de los artículos 23, 28, 29 y 58.

Artículo 77

Respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped

1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. También estarán obligadas a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado.
2. En caso de infracción grave y manifiesta de la legislación penal del Estado huésped por una persona que goce de inmunidad de jurisdicción, el Estado que envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a la persona de que se trate, pondrá término a las funciones que ejerza en la misión, la delegación o la delegación de observación o asegurará su partida, según proceda. El Estado que envía tomará la misma medida en caso de injerencia grave y manifiesta en los asuntos internos del Estado huésped. Las disposiciones de este párrafo no se aplicarán en el caso de un acto realizado por la persona de que se trate en el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación o de la delegación de observación.
3. Los locales de la misión o la delegación no deberán ser utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las funciones de la misión o el desempeño de los cometidos de la delegación.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se podrá interpretar en el sentido de que impide que el Estado huésped adopte las medidas que sean necesarias para su propia protección. En ese caso, el Estado huésped, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 85, consultará de manera apropiada al Estado que envía para evitar que estas medidas perturben el funcionamiento normal de la misión, la delegación o la delegación de observación.
5. Las medidas previstas en el párrafo 4 del presente artículo se tomarán con la aprobación del ministro de relaciones exteriores o de cualquier otro ministro competente de conformidad con las normas constitucionales del Estado huésped.

Seguro contra daños causados a terceros

Los miembros de la misión, de la delegación o de la delegación de observación deberán cumplir todas las obligaciones que impongan las leyes y reglamentos del Estado huésped relativas al seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros por cualquier vehículo, buque o aeronave utilizado por la persona de que se trate o de su propiedad.

Artículo 79

Entrada en el territorio del Estado huésped

El Estado huésped deberá permitir la entrada en su territorio:

- a) a los miembros de la misión y a los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas,
- b) a los miembros de la delegación y a los miembros de sus familias respectivas que les acompañen, y
- c) a los miembros de la delegación de observación y a los miembros de sus familias respectivas que les acompañen.

Los visados, cuando fueren necesarios, serán concedidos a las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo con la mayor rapidez posible.

Artículo 80

Facilidades para salir del territorio

El Estado huésped deberá, si se le solicita, dar facilidades para que las personas gocen de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado huésped, así como sus miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio.

Artículo 81

Tránsito por el territorio de un tercer Estado

Si un jefe de misión o un miembro del personal diplomático de la misión, un jefe de delegación u otro delegado o un miembro del personal diplomático de la delegación, un jefe de delegación de observación u otro delegado observador o un miembro del personal diplomático de la delegación de observación atraviesa el territorio o se encuentra en el territorio de un tercer Estado que le hubiera otorgado el visado del pasaporte, si tal visado fuere necesario, para ir a tomar posesión de sus funciones o reintegrarse a las mismas, o para volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se aplicarán también en el caso de:

- a) miembros de la familia del jefe de misión o de un miembro del personal diplomático de la misión que formen parte de su casa y gocen de privilegios e inmunidades, tanto si viajan con él como si viajan separadamente para reunirse con él o regresar a su país;
- b) miembros de la familia del jefe de delegación o de otro delegado o de un miembro del personal diplomático de la delegación que le acompañen y gocen de privilegios e inmunidades, tanto si viajan con él como si viajan separadamente para reunirse con él o regresar a su país;
- c) miembros de la familia del jefe de la delegación de observación o de otro delegado observador o de un miembro del personal diplomático de la delegación de observación que le acompañen y gocen de privilegios e inmunidades, tanto si viajan con él como si viajan separadamente para reunirse con él o regresar a su país.

3. En circunstancias análogas a las previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los terceros Estados no habrán de dificultar el paso por su territorio de los miembros del personal administrativo y técnico o de servicio o de los miembros de sus familias.

4. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a las demás comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección que el Estado huésped está obligado a conceder de conformidad con la presente Convención. Concederán a los correos de la misión, de la delegación o de la delegación de observación a quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, así como a las valijas de la misión, la delegación o la delegación de observación en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que el Estado huésped está obligado a concederles de conformidad con la presente Convención.

5. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo serán también aplicables a las personas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la misión, la delegación o la delegación de observación, cuando su presencia en el territorio del tercer Estado sea debida a fuerza mayor.

Artículo 82

No reconocimiento de Estados o de gobiernos o ausencia
de relaciones diplomáticas o consulares

. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del Estado que envía en virtud de la presente Convención no serán afectados ni por el no reconocimiento por uno de esos estados del otro Estado o de su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre ellos.

. El establecimiento o el mantenimiento de una misión, el envío o presencia de una delegación o de una delegación de observación o cualquier acto de aplicación de la presente Convención no entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el Estado que envía el Estado huésped o de su gobierno ni por el Estado huésped del Estado que envía o de su gobierno.

Artículo 83

No discriminación

En la aplicación de la presente Convención no se hará discriminación entre
s Estados.

Artículo 84

Consultas

Si entre dos o más Estados Partes se plantea una controversia relativa a la aplicación o a la interpretación de la presente Convención, se celebrarán consultas entre tales Partes a instancia de cualquiera de ellas. La Organización o la conferencia serán invitadas a asociarse a las consultas a instancia de cualquiera de las partes en controversia.

Artículo 85

Conciliación

Si no se logra poner término a la controversia como resultado de las consultas mencionadas en el artículo 84 en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se hayan iniciado, cualquier Estado que participe en las consultas podrá someter la controversia a la comisión de conciliación constituida de conformidad con las disposiciones del presente artículo mediante comunicación escrita dirigida a la Organización y a cualquiera de los otros Estados que participen en las consultas.

2. Cada comisión de conciliación se compondrá de tres miembros: dos miembros nombrados respectivamente por cada una de las partes en la controversia, y un presidente nombrado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. Todo Estado Parte en la presente Convención nombrará con antelación a una persona para que forme parte de tal comisión. Ese Estado notificará el nombramiento a la Organización, que mantendrá al día un registro de las personas nombradas. Si un Estado Parte no efectúa este nombramiento con antelación, podrá hacerlo durante el procedimiento de conciliación hasta el momento en que la Comisión comience a redactar el informe que debe preparar conforme a lo dispuesto en el párrafo 7 del presente artículo.
3. El Presidente de la Comisión será elegido por los otros dos miembros. Si los otros dos miembros no llegan a un acuerdo en el plazo de un mes a partir de la comunicación prevista en el párrafo 1 del presente artículo o si una de las partes en la controversia no hace uso de su derecho de nombrar a un miembro de la Comisión, el Presidente será nombrado a petición de una de las partes en la controversia por el más alto funcionario administrativo de la Organización. El nombramiento deberá hacerse en el plazo de un mes a partir de tal petición. El más alto funcionario administrativo de la Organización nombrará como presidente a un jurista que reúna las condiciones requeridas y que no sea ni funcionario de la Organización ni nacional de ninguno de los Estados partes en la controversia.
4. Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para un nombramiento inicial.
5. La Comisión iniciará sus actuaciones a partir del momento en que se haya nombrado al Presidente, aunque no se haya completado su composición.
6. La Comisión determinará su propio reglamento y adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de votos. Podrá recomendar a la Organización, siempre que la Carta de las Naciones Unidas la autorice a ello, que solicite una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa a la aplicación o interpretación de la presente Convención.
7. Si la Comisión no logra que las partes en la controversia lleguen a un acuerdo sobre una solución de la controversia dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de su Presidente, preparará tan pronto como sea posible un informe sobre sus deliberaciones y lo transmitirá a las partes en la controversia. El informe incluirá las conclusiones de la Comisión en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones que haya presentado a las partes en la controversia con objeto de facilitar una solución de la controversia. El plazo límite de dos meses podrá ser ampliado por decisión de la propia Comisión. Si las recomendaciones del informe de la Comisión no son aceptadas por todas las partes en la controversia, no serán obligatorias para ellas. No obstante, cualquier parte en la controversia tendrá la facultad de declarar unilateralmente que aceptará las recomendaciones del informe en lo que a ella respecta.

Las disposiciones enunciadas en los párrafos precedentes del presente artículo se entenderán sin perjuicio del establecimiento de cualquier otro procedimiento apropiado a la solución de las controversias que se planteen en la aplicación o interpretación de presente Convención o de la celebración de todo acuerdo a que puedan llegar las partes la controversia para someterla a un procedimiento establecido en la Organización o a cualquier otro procedimiento.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en acuerdos internacionales en vigor entre Estados entre Estados y organizaciones internacionales.

PARTE VI

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 86

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 30 de septiembre de 1975 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Republica de Austria y después, hasta el 30 de marzo de 1976, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 87

Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 88

Adhesión

La presente Convencion quedará abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 89

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 90

Aplicación por las organizaciones

Después de la entrada en vigor de la presente Convención, el órgano competente de una organización internacional de carácter universal podrá decidir aplicar las disposiciones pertinentes de la Convención. La Organización notificará la decisión al Estado huésped y al depositario de la Convención.

Artículo 91

Notificaciones por el depositario

Como depositario de la presente Convención, el Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados de:

- a) las firmas de la Convención y el depósito de instrumentos de ratificación o adhesión, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88;
- b) la fecha en que la Convención entre en vigor, de conformidad con el artículo 89;
- c) cualquier decisión notificada de conformidad con el artículo 90.

El Secretario General de las Naciones Unidas informará asimismo a todos los Estados, de proceda, de los demás actos, notificaciones o comunicaciones relativas a la presente Convención.

Artículo 92

Textos auténticos

El original de la presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias certificadas conformes del mismo a todos los Estados.

TESTIMONIO DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

HA EN VIENA, el día catorce de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

INDICE DE ABREVIATURAS

ADPIL	Annual Digest and Reports of Public International Law Cases; desde 1950 : International Law Reports.
ACDI	Anuario de la Comisión de Derecho Internacional.
AFDI	Annuaire Francais de Droit International.
AG	Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
AJIL	American Journal of International Law.
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
BOE	Boletin Oficial del Estado.
BYBIL	British Yearbook of International Law.
CDI	Comisión de Derecho Internacional.
CEE	Comunidad Económica Europea.
CEPE	Comisión Económica para Europa.
CIJ	Corte Internacional de Justicia.
CPJI	Corte Permanente de Justicia Internacional
CS	Consejo de Seguridad.
FAO	Food and Agriculture Organization.
FMI	Fondo Monetario Internacional.
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade.
ICITO	Interin Commission for International Trade Organization.
IJIL	Indian Journal of International Law.
ILR	International Law Reports.
NU	Naciones Unidas.
OACI	Organización de la Aviación Civil Internacional.
OEA	Organización de Estados Americanos.

OIEA	Organismo Internacional de Energia Atómica.
OIT	Organización Internacional del Trabajo.
OMCI	Organización Marítima Consultiva Internacional.
OMM	Organización Meteorológica Mundial.
OMS	Organización Mundial de la Salud.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
OUA	Organización de la Unidad Africana.
RAU	República Árabe Unida.
RCADI	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye.
Recueil	Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances del TIJ
REDI	Revista Española de Derecho Internacional.
RGDIP	Revue Générale de Droit International Public.
RTNU	Recueil des Traités des Nations Unies.
RTSdN	Recueil des Traités de la Société des Nations.
SdN	Sociedad de Naciones.
SG	Secretario General de las Naciones Unidas.
TIJ	Tribunal Internacional de Justicia.
TPJI	Tribunal Permanente de Justicia Internacional.
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones.
UN	United Nations.
UNCIO	United Nations Conference on International Organization (Conferencia de San Francisco).
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
UPU	Unión Postal Universal.

BIBLIOGRAFIA

I. FUENTES

1. Documentos de las Naciones Unidas.

A) Tratados Multilaterales.

- Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.
- Convención de Viena sobre la representación de los Estados de sus relaciones con las Organizaciones internacionales de caracter universal

B) Documentos de Conferencias diplomáticas.

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades diplomáticas. Documentos oficiales. Volumen I: Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria. Volumen II: Anexos, Acta final, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, Protocolos facultativos, Resoluciones.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones internacionales. Documentos oficiales. Volumen I: Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria. Volumen II: Documentos de la Conferencia.

C) Documentos de la Comisión de Derecho Internacional.

- "Diplomatic Intercourse and Immunities, Rapport présenté par M.A.E. SANSDTROM, rapporteur spécial", ACDI, 1955, Vol. II, ps. 9-17.
- "Proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1957, Vol. II, ps. 143-154.
- "Proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas", ACDI, 1958, Vol. II, ps. 96-113.

- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales (tema 6 del programa)", ACDI, 1963, Vol.I, ps. 311-322; ACDI, 1964, Vol.I, ps. 215-233; ACDI, 1968, Vol.I, ps. 3-59, 60-89, 102-109, 112-114, 165-180, 184-200, 202-206, 236-266 y 269-279; ACDI, 1969, Vol.I, ps. 4-54, 126-165, 167-246 y 247-254; ACDI, 1970, Vol.I, ps. 5-17, 22-129, 143-147, 170-176 y 194-208; ACDI, 1971, Vol.I, ps. 4-277, 287-359 y 364-370.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, Primer informe del Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial", ACDI, 1963, Vol.II, ps. 184-217.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, Segundo informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, por Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial", ACDI, 1967, Vol.II, ps. 137-158.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, Tercer informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones intergubernamentales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial", ACDI, 1968, Vol.II, ps. 115-157.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, Cuarto informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial", ACDI, 1969, Vol. II, ps. 1-22.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, Quinto informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial", ACDI, 1970, Vol. II, ps. 1-22.

cial ", ACDI, 1970, Vol. II, ps. 1-25.

- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, - Sexto informe sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial ", ACDI, 1971, primera parte, ps. 1-152.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, - Examen por la Comisión de la cuestión de los posibles efectos de situaciones excepcionales-tales como ausencia de reconocimiento, ausencia o ruptura de relaciones diplomáticas y consulares o conflicto armado-sobre la representación de los Estados ante Organizaciones internacionales: - documento de trabajo preparado por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial ", ACDI, 1971, Vol. II, segunda parte, ps. 105-109.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, - Cuestión de la inclusión en el artículo 50 de una disposición sobre la solución de controversias: documento de trabajo preparado por el Sr. Abdullah EL-ERIAN, Relator Especial ", ACDI, 1971, Vol. II, segunda parte, ps. 109-110.
- "Relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales, Informes del Grupo de Trabajo sobre las relaciones entre los Estados y las Organizaciones internacionales ", ACDI, 1971, Vol. II, segunda parte, ps. 111-114.
- "Proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con Organizaciones internacionales ", ACDI, 1971, Vol. II, primera parte, ps. 307-361.

- " Derecho de los Tratados, Tercer informe sobre el Derecho de los Tratados, por Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial ", - ACDI, 1964, Vol. II, ps. 3-63.
- " Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre dos o más Organizaciones internacionales, Tercer informe sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre dos o más Organizaciones internacionales, por el Sr. Paul REUTER, Relator Especial ", ACDI, 1974, Vol. II, primera parte, ps. 135-152.

D) Opiniones jurídicas de la Secretaría de las Naciones Unidas.

- " Medida en que una conferencia diplomática puede imponer al Secretario General o a otros órganos de las Naciones Unidas deberes y obligaciones respecto de la aplicación de cualquier instrumento que adopte ", Anuario Jurídico, 1972, p. 188.
- " Privilegios e inmunidades de las Misiones permanentes con respecto a sus cuentas bancarias ", Anuario Jurídico, 1963, p. 179.
- " Privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas que sean nacionales o residentes del Estado local ", Anuario Jurídico, 1972, p. 194.

E) Otros documentos de las Naciones Unidas.

- " Canje de cartas que constituyen un acuerdo entre las Naciones Unidas y Bélgica relativo a la liquidación de reclamaciones contra las Naciones Unidas en el Congo por nacionales belgas, Nueva York, 20 de febrero de 1965 ", Anuario Jurídico, 1965, p. 41.

- "Canje de cartas que constituyen un acuerdo entre las Naciones Unidas y Grecia relativo a la liquidación de reclamaciones de nacionales-griegos contra las Naciones Unidas en el Congo, Nueva York, 20 de junio de 1966", Anuario Jurídico, 1966, p. 41.
- Documents of the United Nations Conference on International Organization (Conferencia de San Francisco), 22 Vols.
- "Relaciones e inmunidades diplomáticas, Memoria presentada por la Secretaría", ACDI, 1956, Vol.II, ps. 129-170.
- Missions auprès des Nations Unies à Genève et organes principaux des Nations Unies, Ginebra, 1975.
- "Observaciones de los Estados miembros, Suiza y las Secretarías de las Naciones Unidas, los Organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica acerca del proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las Organizaciones internacionales, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en sus 20º, 21º y 22º períodos de sesiones", ACDI, 1971, Vol.II, ps. 384-461.
- "Observaciones presentadas por los gobiernos al proyecto de artículos relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su noveno período de sesiones, celebrado en 1957", ACDI, 1958, Vol.II, ps. 120-150.
- "Práctica seguida por las Naciones Unidas, los Organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con su condición jurídica, privilegios e inmunidades: estudio preparado por la Secretaría", ACDI, 1967, Vol.II, ps. 159-341.

- " Precedencia de los representantes ante las Naciones Unidas: Nota del Secretario General ", ACDI, 1968, Vol.II, ps. 158-159.
- Rapport de la Commission Preparatoire des Nations Unies.
- Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire Général exerce les fonctions de dépositaire, Etat, au 31 décembre 1976, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
- United Nations legislative series, Laws and regulations regarding diplomatic and consular privileges and immunities.
- United Nations legislative series, Legislative texts and treaty provisions concerning the legal status, privileges and immunities of International Organizations, dos volúmenes.

2. Jurisprudencia.

A) Jurisprudencia del TPJI y del TIJ.

- CPJI, Recueil des Avis consultatifs, Compétence de l'OIT pour régler le travail personnel du patron, Serie B, nº 13.
- Admission d' un Etat aux Nations Unies (Charte, art.4), Avis consultatif: CIJ, Recueil, 1948.
- Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif: CIJ, Recueil, 1949.
- CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Mémoires, plaidoiries et documents, 1949.
- Status international du Sud-Ouest africain, Avis consultatif: CIJ, Recueil, 1950.
- Compétence de l' Assemblée pour l'admission aux Nations Unies, Avis consultatif: CIJ, Recueil, 1950.

- Effet de jugements du tribunal administratif des NU accordant indemnité, Avis consultatif du 13 juillet 1954 : CIJ, Recueil, 1954.
- Plateau continental de la Mer du Nord, arrêt: CIJ, Recueil, 1969.
- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) non obstant la - résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, Avis consultatif: CIJ, Recueil, 1971.

B) Jurisprudencia de otros tribunales.

- " Branno v. Ministry of war. Italy, Court of Cassation, 14-6-54 "; ILR, Vol. 22, 1955, p. 276.
- " Chemidlin v. International Bureau of Weights and Measures. Tribunal Civil of Versailles, 27-6-45 "; ADPIL, Vol. 12, 1943-45, ps. - 281-2.
- " Curran v. City of New York et Al "; ADPIL, Vol. 14, 1947, p.155.
- " EE.UU. Ex relatione Roberto Santiesteban Casanova vs. Walter- W. Fitzpatrick, Fallo del 16-1-63 "; Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963, p. 214.
- " Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court. October 30, 1962 "; ILR, Vol. 38, 1969, p. 162.
- " In re Banque de l'Union Franco-Chinoise. France. Conseil d'Etat, 17-6-31 "; ADPIL, Vol. 6, 1931-32, p. 34.
- " In re Dame Adrien and Others. France, Conseil d'Etat, 17-6-31 "; ADPIL, Vol. 6, 1931-32, p. 33.
- " International Institute of Agriculture v. Profili. Court of Cassation, 26-2-31 "; ADPIL, Vol. 5, 1929-30, p. 413-15.

- " Knocklong Corp. v. Kingdon of Afghanistan et United States. State New York, Nassau County Court. March 27, 1957 "; ILR, Vol. 24 1957, p. 202.
- " Manzanti v. H.A.F.S.E. and Ministry of Defense. Italy, Tribunal of Florence, 2-1-54 "; ILR, Vol. 22, 1955, p. 758.
- " Martell et Admin des Domaines v. Diez del Corral. France, Court of Appeal of Paris. June 9, 1950 "; ILR, Vol. 18, 1951, p. 347.
- " People v. Von Otter. United States, City Court of New Rochelle, - New York, July 30, 1952, p. 385.
- " The amazone. England, High Court. Probate division (Langton, J). - May 8, 1939. Court of Appeal "; ADPIL, Vol. 9, 1938-40, p. 417.
- " United States v. Melekh et Al. "; ILR, Vol. 32, 1966, p. 320.
- " Westcher County on complaint of Donnelly v. Ranollo "; ADPIL, Vol. 13, 1946, p. 168.

3. Otros documentos.

- Annuaire de l'Institut de Droit International, 1895-96, 1924 y 1929.
- Convención de La Habana de 20 de febrero de 1928 relativa a los funcionarios diplomáticos, RTSdN, Vol. 155, p. 260.
- " Declaración de los Estados miembros del Consejo de la Sociedad de Naciones sobre el Estado de Mandchoukouo ", AJIL, Vol. XXVI, - 1932, p. 343.
- " Declaración del Secretario de Estado de los EE.UU. Henri L. - Stimson sobre el Estado "de Mandchoukouo ", AJIL, Vol. XXVI, p. 342.
- Decreto 919/75. Boletín Oficial del Estado del 6-5-75.
- Dictionnaire de la terminologie du Droit international, Paris, Sirey, 1968.

- Estados Unidos de América, Ley de enmienda al título 18 del United States Code con el fin de ampliar la protección de los funcionarios extranjeros y con otros fines ; Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972, p. 3.
- MILLER, The drafting of the Covenant, Nueva York, J.P. Putmans & Sons, 1928, dos volúmenes.
- REUTER y GROSS, Traité et documents diplomatiques, Paris, - PUF, 1970, tercera edición.

II. MANUALES,

- ANZILOTTI, Corso di Diritto internazionale, Roma, Athenaeum, - 1928.
- AKEHURST, Introducción al Derecho internacional, traducción española con notas de M.MEDINA, Madrid, Alianza Editorial, 1972.
- CAHIER, Derecho diplomático contemporáneo, traducción española de J.TORRENTE, M.OREJA y J.GONZALEZ CAMPOS, Madrid, Rialp, 1965.
- BROWNLEE, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, segunda edición, 1973.
- CAHIER, Derecho diplomático contemporáneo, traducción española de J.TORRENTE, M.OREJA y J.GONZALEZ CAMPOS, Madrid, Rialp, 1965.
- DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional, Madrid, Tecnos, tercera edición, 1976, 1977, dos tomos.

- FAVRE, Principes de Droit des gens, Friburgo, Librairie de Droit et de Jurisprudence, 1974.
- GUGGENHEIN, Traité de Droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université, Georg&Cie, 1953, dos volúmenes.
- O'CONNELL, International Law, Londres, Stevens&Sons, 1970, - segunda edición, dos volúmenes.
- OPPENHEIM-LAUTERPACHT, International Law.A. Treatise, - Londres, Longmans, Green and Co., séptima edición, 1953, dos volúmenes.
- PRADIER FODERE, Cours de Droit diplomatique, Paris, A. Pedone, 1899, dos volúmenes.
- REUTER, Droit international public, Paris, PUF, 4ª edición, 1973.
- ROUSSEAU, Derecho internacional público, traducción española - de F. GIMENEZ, Barcelona, Ariel, 1966.
- SCHWARZENBERGER, Manual of International Law, Londres, - Stevens&Sons, 1967.
- SERENI, Diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1956-1965, cuatro volúmenes.
- SIBERT, Traité de Droit international public, Paris, Dalloz, 1951, dos volúmenes.
- VERDOSS, Derecho internacional público, traducción española - con adiciones y bibliografías complementarias de A. TRUYOL Y SERA con la colaboración de M. MEDINA, Madrid, Aguilar, Sexta edición, 1976.

III. OBRAS.

- BEST, Diplomacy in the United Nations, Ann Arbor (Michigan), - University microfilms, 1962.
- BINDSCHEDLER, R., "La délimitation des compétences des Nations Unies", RCADI, Vol. 108, 1963 (I), ps. 307-423.
- BOWETT, The Law of International Institutions, Londres, Stevens & Sons, tercera edición, 1975.
- CAHIER, Etude des Accords de siège conclus entre les Organisations internationales et les Etats où elles resident, Milan, Giuffrè, - 1959, dos volúmenes.
- CAHIER, "Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers", RCADI, Vol. 143, 1974 (III), ps. 589-735.
- CONSTANZA, Il diritto di legazione delle Organizzazioni internazionali, Palermo, Celup S.r.l., 1973.
- DENZA, Diplomatic Law, Londres, The British Institute of International and Comparative Law, 1976.
- DETTER, Law making by International Organization, Estocolmo, Norsted & Somers Forlay.
- DO NASCIMENTO E SILVA, Diplomacy in International Law, Leiden, Sijthof, 1972.
- DUPUY, "Le droit des relations entre les Organisations internationales", RCADI, Vol. 100, 1960 (II), ps. 457-589.
- GIULIANO, "Les relations et immunités diplomatiques", RCADI, Vol. 100, 1960 (II), ps. 75-202.

- HAMMARSKJOLD, "Les immunités des personnes investies de fonctions internationales", RCADI, Vol. 56, 1936 (II), ps. 107-211.
- HARDY, Modern Diplomatic Law, Manchester, Manchester University Press, 1968.
- HARRIS, Cases and materials of International Law, Londres, Sweet & Maxwell, 1973.
- JENKS, International Immunities, Londres, Stevens & Sons, 1961.
- JENKS, The headquarters of International Institutions, Londres, The Royal Institute of International Affairs, 1945.
- JENKS, The proper Law of International Organizations, Londres, Stevens & Sons Limited, 1962.
- KASME, La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités, Paris, Librairie de Droit et de Jurisprudence, 1960.
- KELSEN, The Law of United Nations, Londres, The London Institute of World Affairs 1951.
- LALIVE, J.F., "L'immunité de juridiction des Etats et des Organisations internationales", RCADI, Vol. 84, 1953 (III), ps. 205-395.
- MANESCA, La missione diplomatica, Milan, Giuffrè, 1964.
- MEDINA, La Organización de las Naciones Unidas, Madrid, Tecnos, segunda edición, 1974.
- MICHAELS, International privileges and Immunities, La Haya, Martinus-Nijhoff, 1971.
- NKAMBO MUGERWA, "Sujetos de Derecho internacional" en SORESEN, Manual de Derecho internacional, traducción española a cargo de la Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, revisión y adiciones a

- la edición en español de B. SEPULVEDA, México, FCE, 1973, ps. 260-315.
- NUSSBAUM, Historia del Derecho internacional, traducción española de F.J. OSSET con adiciones de L. GARCIA ARIAS, Madrid, Revista de Derecho privado, s/f.
- PERRENOUD, Régimes des privilèges et immunités des Missions diplomatiques étrangères et des Organisations internationales en Suisse, Lausana, Librairie de l'Université F. Rouge & Cie, 1949.
- PILOTTI, "Les Unions d'Etats", RCADI, Vol. 24, 1928 (IV), ps. 445-545.
- POTTER, Permanent delegations to the League of Nations, Ginebra, - League of Nations Association of the United States, 1930.
- REICHLING, Le droit de légation des Communautés Européennes, Heule, Editions UGA, 1964.
- REUTER, Institutions internationales, Paris, PUF, 7ª edición, 1972.
- RUSTOM, Les conditions d'admission aux privilèges et immunités diplomatiques, Ginebra, Université de Genève, 1957.
- SALMON, La reconnaissance d'Etat, Paris, Armand Colin, 1971.
- SCHERMERS, International Institutional Law, Leiden, Sijthoff, 1972, tres volúmenes.
- SHARP, Non recognition as a legal obligation, Tesis presentada en la - Universidad de Ginebra, Lieja, 1934.
- SHARP y GODCHOT, L'administration nationale dans ses relations - avec les Organisations internationales, Conclusions d'une enquête effectuée dans quatorze pays, Bruselas, UNESCO e Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, 1951.

- SIOTTO-PINTOR, "Les sujets du Droit international autres que les Etats ", RCADI, Vol. 41, 1932 (III), ps. 251-361.
- SØRENSEN, "Principes du Droit international", RCADI, Vol. 101, 1960 (III), ps. 1-251.
- THE AMERICAN ASSEMBLY, The representations of the United States abroad, Nueva York, Graduate School of Business, Columbia University, 1956.
- VERHOEVEN, La reconnaissance internationale dans la rati ue contemporaine, Paris, A. Pedone, 1975.
- VIRALLY, GERBET y otros, Les missions permanentes auprès des Organisations internationales, Obra realizada bajo los auspicios de la Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Bruselas, Bruylant, - 1971, 1973, 1975 y 1976, cuatro volúmenes.
- VIRALLY, L'Organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972.
- WEISSBERG, The international status of the United Nations, Londres, Stevens & Sons, 1961.

IV. ARTICULOS.

- BERTRAND, "La situation des membres inactifs de l'OMS", AFDI, Vol. II, 1956, ps. 602-615.
- CAHIER, "La Convention de Vienne de 1975 sur la représentation - des Etats dans leurs relations avec les Organisations internationales" de caractère universel", Symbolae Garcia Arias, Temis, Vols. 33-36., 1973-74, ps. 447-473.
- CAHIER, "Le droit interne des Organisations internationales", Extrait de la RGDIP, juillet-septembre 1963, No. 3.
- CIOBANU, "Credentials of delegations and representation of member

- States at the United Nations", The International and Comparative Law Quarterly Vol. 25, 1976, ps. 351-381.
- EL-ERIAN, "La Conférence et la Convention sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations internationales: Analyse générale", AFDI, Vol. XXI, 1975, ps. 445-470.
 - FENNESSY, "The 1975 Vienna Convention on the representation of States in their relations with International Organizations of a universal character", AJIL, Vol. 70, 1976, ps. 62-72.
 - GROSS, "Immunities and privileges of delegations to the United Nations", International Organization, Vol. 16, 1962, ps. 483-520.
 - HAMBRO, "Permanent representatives to International Organizations", The Year Book of World Affairs, Vol. 30, ps. 30-41.
 - JENKS, "The legal personality of International Organizations", BYBIL Vol. 22, 1945, ps. 267-275.
 - KUNZ, "Privileges and Immunities of International Organizations", AJIL, Vol. XLI, 1947, ps. 828-862.
 - LAZARUS, "Le statut des mouvements de libération nationale à l'Organisation des Nations Unies", AFDI, Vol. XX, 1974, ps. 173-200.
 - LERICHE, "Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies", Revue de Droit international, de sciences diplomatiques et politiques, Vol. XXXI, 1953, ps. 406-411.
 - NIZARD, "Le retrait de l'Indonésie des Nations Unies", AFDI, Vol. XI, 1965, ps. 498-528.

- NGUYEN QUOC DINH, " Les privilèges et immunités des Organismes internationaux d'après les jurisprudences nationales depuis 1945", AFDI, Vol. III, 1957, ps. 262-304.
- O'KEEFE, "Privileges and immunities of the diplomatic family", The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 25, 1976, ps. 329-350
- PASTOR RIDRUEJO, "La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la codificación del Derecho internacional", - REDI, Vol. XV, 1962, ps. 177-186.
- PASTOR RIDRUEJO, "Los efectos de los acuerdos internacionales respecto a los terceros", REDI, Vol. XIII, 1960, ps. 387-411.
- PEDERSEN, "National representation in the United Nations", International Organization, Vol. XV, 1961, ps. 256-266.
- PREUSS, "Diplomatic privileges and immunities of agents invested of an international interest", AJIL, Vol. XXV, 1931, ps. 694-710.
- RICHARDSON, "The United States Mission to the United Nations", International Organization, Vol. VII, 1953, ps. 22-34.
- RITTER, "La Conférence et la Convention sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations internationales: Quelques questions particulières", AFDI, Vol. XXI, 1975, ps. 471-482.
- SALMON, "Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI, 1965, ps. 468-497.
- SECRETAN, "The independence granted to agents of the International Community in their relations with national public authorities", - BYBIL, Vol. 16, 1935, ps. 56-78.

- SEYERSTED, "International personality of Intergovernmental Organizations. Do their capacities depend upon their constitutions?", IJIL, Vol. 4, 1964, ps. 1-74.
- SEYERSTED, "Is the international personality of Intergovernmental Organizations valid vis-a-vis Non Members?", IJIL, Vol. 4, 1964, ps. 233-268.
- TAVERNIER, "L'année des Nations Unies. Questions juridiques", AFDI, Vol. XII, 1966, ps. 259-290.
- TAVERNIER, "L'année des Nations Unies-Questions juridiques", - AFDI, Vol. XVII, 1971, ps. 552-582.
- TOBIN, "The problem of permanent representation at the League of Nations", Political Science Quarterly, Vol. XLVIII, 1933, ps. 481-512.
- VILARIÑO, "A propósito de los sucesos de septiembre de 1975 en los locales de la Misión diplomática y Consulado general de España - en Lisboa", FEDI, Vol. XXIX, ps. 71-84.
- WOOD, "The Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents", The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 23, 1974, ps. 791-817.